

¿Adiós neoliberalismo, bienvenido fascismo?

*De la redistribución material a la batalla
ideológica en la Ciudad de México*

René Ramírez Gallegos
(Coordinador)



**COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN
LA CIUDAD DE MÉXICO**

PRESIDENCIA

Héctor Díaz-Polanco

SECRETARÍA GENERAL

Alicia Barrientos Pantoja

SECRETARÍA DE FINANZAS

Benita Ramírez Orduña

SECRETARÍA DE MUJERES

Fanny Zapp Estrada

SECRETARÍA DE DIVERSIDAD SEXUAL

Irma Vázquez Blacio

**SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y
PROPAGANDA**

Areli Castilla Macedo

SECRETARÍA DE CIENCIA, ARTE Y CULTURA

Martín Rosales Romero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN POLÍTICA**

Francisco Muñoz Trejo

**SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y
CAMPEÑINOS**

Ricardo Salgado Vázquez

SECRETARÍA TÉCNICA

Vladimir Ríos García

**CORREO ELECTRÓNICO DE
CONTACTO:**

cee.cdmx@morena.si

MORENA

Presidenta: Luisa María Alcalde

Secretaría general: Carolina Rangel

Secretario de organización:

Andrés Manuel López Beltrán

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
POLÍTICA

Presidente: Rafael Barajas Durán

Coordinador general: Óscar Lemus

Editor: Raúl Aníbal Sánchez

Arte y Diseño editorial: Itzel Martínez

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los titulares de los derechos.

Prohibida su venta.

Distribución gratuita.

Creative Commons Atribución-

No Comercial-SinDerivadas 4.0

Internacional.

Para ver una copia de esta licencia,

visite [https://creativecommons.org/](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[licenses/by-nc-nd/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Hecho en México / Made in Mexico

Coordinación

René Ramírez Gallegos (investigador principal)

Equipo de investigación y redacción

René Ramírez Gallegos (capítulos I–IV, V y VI; introducción y conclusiones);

Juan Guijarro (capítulo I y conclusiones);

Sebastián Irigoyen Ibarra (capítulo II);

Jorge Zaruma (capítulo III);

Melina Vásquez (capítulo IV);

Carolina Spataro (capítulo IV);

Sandra Hoffman (capítulo VI).

Nota: Entre paréntesis se indica el capítulo de responsabilidad principal.

Diseño de la encuesta

René Ramírez Gallegos,

Leonardo Magalhães Firmino (IPSE) y

Jorge Zaruma

Levantamiento de encuesta

Leonardo Magalhães Firmino (IPSE) y

René Ramírez Gallegos.

Muestreo, programación y análisis estadístico

Lucía Pedraza,

René Ramírez Gallegos y

Sebastián Irigoyen.

Edición

René Ramírez Gallegos y Juan Guijarro

CONTENIDO

Parte 1

La brújula de la investigación	13
Introducción: ¿Qué redistribución y para qué ideología?	15
1. Justificación de la investigación	19
2. Objetivos de la investigación	21
3. Planteamiento y delimitación del problema	23
4. Metodología: Diseño del estudio y levantamiento de información	25
5. Familias ideológicas (tipologías)	32

Parte 2

Marco teórico-analítico e hipótesis de investigación	37
--	----

Capítulo I

Marco teórico-analítico e hipótesis de investigación (Mapear para no perder la base: desplazamientos ideológico-materiales en la CDMX)	39
1. Introducción	39
2. Melodrama latinoamericano: gobiernos progresistas que incuban su oposición	44
3. Estampas mexicanas: hegemonía de cambio, grietas y recomposición	47
4. Vectores ideológico-materiales con tres anclajes: voto, autoubicación, posiciones	52
5. Las familias ideológico-materiales	63
6. Entre la lealtad, la distancia y la disputa: cartografías de intensidades	109
7. Sobre las hipótesis de investigación	115

Parte 3

Sobre las pruebas empíricas de las hipótesis	121
--	-----

Capítulo II

La paradoja del bienestar objetivo/malestar subjetivo y el síndrome de Estocolmo en la Ciudad de México	123
1. Introducción	123
2. Revisión de la literatura	127
3. Estrategia metodológica	136
4. Resultados	140
5. Conclusiones y reflexiones finales	155

Capítulo III

Escuela e ideología: entre la fábrica de derechas y la posibilidad de lo común	159
1. Introducción	159
2. Aproximación teórica: ideología y escuela	162
3. Triple privatización del espacio escolar en Ciudad de México	168
4. Metodología	173
5. Resultados y discusión: clivaje público-privado, privatizaciones múltiples y horizonte político de la escuela	174
6. Modelos probabilísticos: Educación, seguridad e ideología	184
7. Reconstruir lo público como experiencia y lo común como horizonte	188
8. Conclusiones	191

Capítulo IV

Las agendas feministas en CDMX: entre la masificación y la diversificación	193
1. Introducción	193
2. Primera parte. Resultados e interpretaciones de las preguntas sobre feminismos	195
3. Segunda Parte. Modelo Ideológico	218
4. Conclusiones generales y guía para la militancia	224
Anexo	228

Capítulo V

Tiempo y espacio: entre la alienación (del tiempo perdido) y la ideología	231
1. Introducción	231
2. Ideología y alienación temporal: una aproximación teórica	232
3. Metodología: medición de la alienación desde una perspectiva temporal	235
4. La distribución del tiempo en la vida cotidiana en la Ciudad de México	237
5. La alienación temporal en CDMX: entre el tiempo impuesto y el tiempo deseado	245
6. Desigualdades territoriales en la distribución del tiempo cotidiano	251
7. Efectos de la alienación temporal en la probabilidad de voto.	256
8. Conclusiones: redimir el tiempo, politizar la espera	265
Anexo	267

Capítulo VI

Malestar psicosocial, deseo e ideología en la Ciudad de México	269
1. Introducción	269
2. Salud mental como síntoma de un orden desigual	271

3. Metodología	278
4. Resultados: mapas del malestar y sus traducciones políticas	281
5. Tiempo, soledad, vínculos sexoafectivos y clase: determinantes estructurales del malestar psicosocial	285
6. Relaciones simultáneas entre malestar psicosocial e ideología de derecha autodeclarada	288
7. Malestar psicosocial y crisis estructural: disputas por el tiempo, el futuro y la democracia	294
A manera de cierre	
Disputar el mapa: dilemas para el proyecto de transformación	299
1. Agenda pendiente: redistribución, orden y tiempo	299
2. Lecciones para la militancia	303
3. Nueva agenda de investigación: lo que ese estudio habilita	305
Referencias	
Introducción	311
Capítulo II	311
Capítulo III	316
Capítulo IV	318
Capítulo V	321
Capítulo VI	321

Parte I

La brújula de la investigación



Introducción: ¿Qué redistribución y para qué ideología?

Este libro se escribe en una coyuntura en que las certezas se han quedado sin futuro. No porque falten diagnósticos —sobran—, sino porque aquello que durante décadas funcionó como brújula dejó de orientar: el crecimiento ya no promete bienestar, la democracia ya no garantiza estabilidad, la globalización ya no entrega seguridad, y la vida cotidiana se volvió un terreno de cansancio, miedo y disputa. Lo que se abre ante nosotros no es solo un ciclo político desfavorable ni un episodio pasajero de polarización: estamos dentro de una crisis del capitalismo que se expresa, al mismo tiempo, como recesión de ondas largas, como inestabilidad de ciclos cortos y como disputa por la hegemonía global.

Dicho en términos menos técnicos: la economía mundial no atraviesa únicamente un “mal momento”; atraviesa un cambio de época. A la desaceleración estructural de la acumulación se suma la incapacidad del orden internacional para estabilizar expectativas, proveer bienes públicos y sostener un horizonte de prosperidad compartida. Por eso la política deja de ser administración y vuelve a ser —sin metáforas— combate por el sentido: combate por quién paga los costos, quién merece protección, quién tiene derecho a la ciudad, y qué vidas serán consideradas vivibles.

Crisis epocal: se parece a entreguerras, pero sin las mismas salidas

Hay un parentesco inquietante con el período de entreguerras. En aquel entonces, la recesión de ondas largas y la Gran Depresión de los años treinta coincidieron con un desplazamiento hegemónico: el agotamiento del liderazgo británico y el ascenso —todavía incompleto— de Estados Unidos. El resultado fue un interregno: proliferación de nacionalismos agresivos, autoritarismos, guerra cultural y una disputa feroz por el orden social. Cuando el mundo pierde un centro, se multiplican los centros pequeños; cuando la economía no ofrece futuro, la política promete identidad; cuando la vida se precariza, el miedo se organiza.

Aquella crisis no se “resolvió” por una iluminación tecnocrática, sino por una combinación histórica: keynesianismo, más Estado, regulación financiera, políticas de empleo y bienestar, y un nuevo andamiaje institucional. Ese giro pudo apoyarse en condiciones que hoy no están garantizadas: un ciclo de crecimiento industrial con fuerte expansión de productividad (fordismo), una arquitectura monetaria relativamente estable al pasar del patrón oro a un sistema centrado en el dólar, inflaciones contenidas por pactos sociales y una institucionalidad internacional que cristalizó en Bretton Woods.

Hoy, la ecuación es más áspera. La financiarización, la desigualdad global, la fragmentación geopolítica y la inestabilidad monetaria reducen los márgenes para un “nuevo New Deal” automático. Y, sobre todo, la crisis ya no es solamente material: es civilizatoria. La frontera ecológica —clima, agua, biodiversidad, energía— impone límites duros y convierte cualquier proyecto de bienestar en un problema socioecológico. Más Estado y más redistribución siguen siendo indispensables, pero en las condiciones actuales no bastan: sin transición productiva, sin justicia ambiental y sin reordenamiento del tiempo social, la promesa igualitaria se vuelve frágil. Y cuando esa promesa se agrieta, el resentimiento encuentra empresarios políticos dispuestos a venderlo como “orden”.

Aquí aparece un punto crucial: las nuevas derechas no llegan solo con un programa económico. Llegan con una tecnología política: capturan malestares —cansancio, miedo, pérdida de control, sensación de estancamiento— y los traducen en narrativas de autoridad, castigo y jerarquía. En contextos así, la disputa ya no es únicamente por ingresos o por políticas públicas: es por la forma misma de la experiencia social, por cómo se vive el tiempo, por qué se teme, por qué se desea, por qué se odia.

La 4T en un tiempo adverso

En este marco, la Cuarta Transformación rompió la alternancia sin alternativas: interrumpió el automatismo neoliberal, reabrió la pregunta por lo público y reinsertó la igualdad en el vocabulario gubernamental. Y lo hizo en un escenario internacional menos favorable que el que acompañó a la primera ola progresista: crecimiento mundial más débil, cadenas globales tensas, presiones inflacionarias intermitentes, economías criminales territorializadas y, además, una derecha transnacional articulada sobre plataformas, desinformación y guerra cultural.

El triunfo contundente de Claudia Sheinbaum abre un “segundo tiempo” del ciclo, comparable —por nivel de apoyo y por expectativa social— a momentos de cúspide vívidos por otros gobiernos progresistas de la región: el proceso boliviano con Evo Morales en años de expansión y legitimidad, la Revolución Ciudadana en su punto alto, o el ciclo argentino en torno a Néstor y Cristina Kirchner, por poner tres ejemplos. Experiencias que, en general, redujeron

pobreza y desigualdad, ampliaron derechos y reconstruyeron capacidades estatales; pero no lograron impedir que, con el tiempo, se impusieran derechas neoliberales y autoritarias —en ocasiones con rasgos protofascistas—: Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, y el avance persistente de candidaturas como la de Kast en Chile, entre otros casos.

La lección regional es incómoda, pero precisamente por eso hay que mirarla de frente: los avances redistributivos no garantizan, por sí solos, la sostenibilidad electoral. La historia reciente muestra algo más duro: incluso cuando mejora la materialidad, pueden crecer el malestar, la desafección y el corrimiento conservador. ¿Por qué? Porque la política no se juega solo en el bolsillo; se juega en la comparación social, en la experiencia del reconocimiento, en los miedos urbanos, en la manera en que se siente el futuro. En la fase actual, las nuevas derechas desplazan la disputa hacia la cultura y la producción ideológica: reordenan el sentido común sobre seguridad, mérito, género, migración, trabajo, “libertad” y autoridad; y convierten malestares cotidianos en adhesión política. Dicho sin rodeos: el conflicto no se juega únicamente en el ingreso; se juega en el tiempo, en el miedo, en la soledad, en el desgaste emocional, en la expectativa de futuro, y en la capacidad —o incapacidad— de los proyectos transformadores para traducir esas experiencias en lenguaje político y en promesas creíbles.

El punto de partida de esta investigación

Esta historia —la crisis epocal, el giro regional a la derecha y el desafío de sostener proyectos de igualdad en contextos adversos— es el punto de partida del presente libro. La pregunta no es si la 4T “ganó”; la pregunta es qué condiciones de existencia están produciendo, ya desde ahora, grietas por donde puede colarse una contraofensiva conservadora en el corazón mismo de un territorio progresista.

De ahí el propósito de este libro: advertir, a tiempo, si en la Ciudad de México ya se observan indicios de la secuencia que vimos repetirse en la región: gobiernos que redistribuyeron, ampliaron derechos y mejoraron condiciones materiales, pero perdieron respaldo político cuando ciertos malestares —no siempre atendidos, no siempre politizados— fueron reapropiados por la derecha como “sentido común”. No se trata de anunciar una derrota como destino; se trata de evitar que la transformación administre, sin quererlo, la preparación de su propia derrota.

Para responder, el libro propone una cartografía ideológica que no abandona el eje izquierda–derecha, pero se niega a tratarlo como destino. Mapea contradicciones: entre voto, autoubicación y posiciones frente a conflictos programáticos contemporáneos. El objetivo no es académico en el sentido estrecho; es eminentemente político: consolidar el apoyo duro, impedir que el apoyo blando se deslice, comprender por qué se fue una parte y qué tendría que pasar para

recuperarla; y, sobre todo, entender qué condiciones serían necesarias para interpelar a quienes nunca han estado: los desencantados, los abstencionistas persistentes y quienes viven la política como un ruido distante.

Ciudad de México: laboratorio y frente estratégico

La Ciudad de México es un laboratorio privilegiado por su historia progresista, pero también porque —en América Latina— las capitales han sido el campo de batalla predilecto para capturar sentido común. Allí se concentran élites mediáticas, circuitos culturales, universidades, burocracias, economías de servicios y, al mismo tiempo, desigualdades urbanas intensas. Las capitales condensan lo mejor y lo peor del orden social: oportunidades y frustraciones, derechos y violencias, libertades y vigilancia, cosmopolitismo y segregación.

En ese tablero, además, la batalla se juega a escala subnacional: alcaldías, territorios y microhegemonías urbanas donde la derecha aprende a gobernar, a administrar seguridad, a disputar educación, a moldear agenda mediática, y a producir un tipo de normalidad donde “progreso” puede significar castigo y “libertad” puede significar jerarquía. Por eso entender la CDMX no es un asunto local: es una pregunta estratégica para el futuro de la 4T.

De ahí la pertinencia de preguntar qué está pasando en la producción ideológica del ciudadano capitalino: qué tensiones atraviesan al bloque progresista, qué malestares sedimentan distancia política y qué nudos conflictivos —seguridad, educación, feminismo, tiempo de vida, salud psicosocial, ecología— están siendo explotados por una oposición que entiende la política como guerra cultural. Y aquí conviene subrayar una última idea: no basta con medir adhesiones. Hay que medir trayectorias, zonas grises, contradicciones. Porque en contextos de crisis epocal, las identidades políticas se vuelven más móviles: una parte puede seguir votando por el proyecto transformador, pero hacerlo con dudas; otra puede conservar valores igualitarios, pero moverse hacia opciones de orden; otra puede quedar suspendida en la antipolítica; y otra puede haberse ido sin haber cambiado del todo su idea de justicia. En esas tensiones —más que en las certezas— suele incubarse el giro.

Con este telón de fondo, las secciones siguientes presentan la metodología del estudio y el dispositivo empírico que lo sostiene —la Encuesta sobre Bienestar, Educación y Orientación Ideológica (EBEOI) Ciudad de México 2025—, para luego formular cinco hipótesis estructurales que orientan la lectura de los capítulos analíticos. La apuesta es clara: si la política también es una lucha por el sentido común, entonces medirlo, cartografiarlo y comprender su mutación no es un ejercicio descriptivo. Es una condición para disputar el futuro.

1. Justificación de la investigación

La presente investigación se justifica por la necesidad de comprender transformaciones recientes en las formas de malestar social, subjetivo e ideológico que no pueden explicarse exclusivamente a partir de indicadores tradicionales de ingreso, empleo o crecimiento económico. En contextos donde se han producido mejoras materiales objetivas y ampliaciones de derechos sociales, comienzan a emerger tensiones políticas y culturales que desafían las interpretaciones clásicas del comportamiento electoral, la estabilidad democrática y la adhesión a proyectos de transformación social.

En particular, el estudio se centra en la Ciudad de México como un laboratorio político y social estratégico, dado que en este territorio han coexistido, durante los últimos años, políticas redistributivas, expansión de programas sociales y avances en derechos, junto con expresiones crecientes de malestar subjetivo, desgaste psicosocial, ansiedad urbana y reconfiguración de valores políticos. Analizar esta aparente paradoja resulta fundamental para el rubro de investigación socioeconómica y política, en tanto permite identificar nuevas materialidades del conflicto social vinculadas al tiempo, la seguridad, la vida cotidiana, la experiencia urbana y las expectativas de futuro.

La relevancia del estudio para el rubro de gasto reportado radica en que aporta evidencia empírica original, basada en una encuesta propia y en un diseño analítico comparativo, que permite diagnosticar riesgos políticos, tensiones ideológicas y posibles desplazamientos en las bases sociales de apoyo a la democracia y a los proyectos progresistas. Este diagnóstico es clave para la elaboración de propuestas de política pública orientadas no solo a la redistribución económica, sino también a la recomposición del bienestar subjetivo, la cohesión social y la legitimidad democrática.

Asimismo, la investigación contribuye de manera directa a la comprensión de fenómenos de alcance nacional y regional, tales como el avance de discursos autoritarios, punitivos o antiigualitarios en contextos de mejora material, fenómeno observado previamente en otros países de América Latina. En este sentido, el estudio no solo tiene relevancia local, sino que dialoga con debates comparados sobre democracia, desigualdad, bienestar y autoritarismo en la región.

Desde el punto de vista académico, la investigación ofrece aportes teóricos y metodológicos relevantes al proponer un enfoque que integra variables socioeconómicas, ideológicas, emocionales y de uso del tiempo, ampliando los mar-

cos tradicionales de análisis del bienestar y del comportamiento político. Este enfoque permite identificar dimensiones del malestar que permanecen invisibles en diagnósticos centrados exclusivamente en el ingreso o el empleo, y abre nuevas líneas de investigación en el campo de las ciencias sociales.

Finalmente, la importancia de esta investigación radica en su potencial para orientar propuestas de solución concretas, basadas en evidencia, que contribuyan a fortalecer la democracia, prevenir derivas autoritarias y diseñar políticas públicas más integrales, sensibles a las condiciones materiales, temporales y subjetivas de la vida cotidiana de la población. En este sentido, el estudio responde plenamente a los objetivos del rubro de investigación socioeconómica y política, al articular diagnóstico, análisis crítico y generación de insumos para la acción pública.

2. Objetivos de la investigación

Los objetivos de la presente investigación orientan el desarrollo del estudio y delimitan con claridad su alcance analítico, con el fin de evitar desviaciones en el proceso de investigación y asegurar la coherencia entre el problema planteado, la metodología empleada y los resultados obtenidos.

Objetivo general

Analizar en qué medida las mejoras en las condiciones materiales de vida no se traducen necesariamente en mayores niveles de bienestar subjetivo, cohesión social y adhesión democrática, y cómo esta brecha contribuye a la reconfiguración de valores ideológicos, actitudes políticas y disposiciones frente a la democracia en la población de la Ciudad de México.

Objetivos específicos

1. Identificar los niveles y formas de malestar subjetivo, emocional y psicosocial presentes en distintos grupos socioeconómicos de la Ciudad de México, más allá de su situación objetiva de ingresos y acceso a bienes materiales.
2. Analizar la relación entre condiciones materiales de vida, uso del tiempo, experiencias cotidianas de seguridad, movilidad y cuidado, y la percepción de bienestar individual y colectivo.
3. Examinar la asociación entre malestar subjetivo, valores ideológicos y actitudes frente a la democracia, el autoritarismo, la redistribución y los derechos sociales.
4. Caracterizar las trayectorias electorales recientes y su vínculo con las transformaciones en la autoidentificación ideológica y los sistemas de valores de la población estudiada.
5. Evaluar la existencia de paradojas entre bienestar objetivo y malestar subjetivo, y su posible impacto en el apoyo a proyectos políticos progresistas y en la legitimidad democrática.
6. Generar evidencia empírica que permita anticipar riesgos políticos e ideológicos asociados al desgaste del bienestar subjetivo, aun en contextos de mejora material, con miras a la formulación de políticas públicas más integrales.

7. Contribuir al debate académico y de política pública mediante un enfoque analítico que incorpore dimensiones económicas, temporales, emocionales e ideológicas en el estudio del bienestar y la democracia.

3. Planteamiento y delimitación del problema

En los últimos años, la Ciudad de México ha experimentado transformaciones socioeconómicas relevantes asociadas a políticas de redistribución del ingreso, ampliación de derechos sociales y fortalecimiento de programas de protección social. No obstante, estos avances materiales no han estado acompañados de manera uniforme por una mejora equivalente en los niveles de bienestar subjetivo, percepción de seguridad, estabilidad emocional y expectativas de futuro de la población. Esta disociación plantea un problema de investigación central para el análisis socioeconómico y político contemporáneo.

El problema de investigación se formula a partir de la siguiente pregunta general:

¿En qué medida las mejoras en las condiciones materiales de vida de la población de la Ciudad de México no se traducen necesariamente en mayores niveles de bienestar subjetivo y cohesión social, y cómo esta brecha incide en la reconfiguración de valores ideológicos, actitudes frente a la democracia y preferencias políticas?

A partir de esta pregunta general, se derivan las siguientes preguntas específicas:

1. ¿Qué niveles de malestar subjetivo, emocional y psicosocial se observan en distintos grupos socioeconómicos, incluso entre aquellos que presentan condiciones materiales relativamente favorables?
2. ¿Cómo se distribuyen el tiempo cotidiano, las cargas de trabajo, el cuidado, la movilidad urbana y el ocio, y de qué manera estas dimensiones inciden en la percepción de bienestar y calidad de vida?
3. ¿Existe una asociación entre el malestar subjetivo y la adhesión a valores autoritarios, punitivos o antiigualitarios, aun en sectores beneficiados por políticas redistributivas?
4. ¿De qué forma las trayectorias electorales recientes se vinculan con cambios en la autoidentificación ideológica y en los sistemas de valores políticos de la población?
5. ¿Qué dimensiones del malestar permanecen invisibles en los diagnósticos tradicionales centrados exclusivamente en el ingreso o el empleo?

El enfoque del problema permite la realización de pruebas empíricas mediante un diseño cuantitativo basado en la recolección y análisis de datos de encuesta, complementado con análisis comparativos entre grupos sociales, ideológicos y territoriales. El estudio se orienta a identificar relaciones y asociaciones, sin pretender establecer causalidades estrictas de tipo experimental.

En cuanto a la delimitación del problema, la investigación se circunscribe a la población adulta residente en la Ciudad de México, considerando variables socioeconómicas, ideológicas, emocionales y de uso del tiempo. El análisis se focaliza en el período reciente, particularmente en la comparación de percepciones actuales con la situación previa a la pandemia, así como en las trayectorias electorales comprendidas entre 2018 y 2024.

Quedan fuera del alcance de este estudio el análisis longitudinal de largo plazo, la evaluación de impacto causal de políticas públicas específicas, así como el estudio de dinámicas rurales o de otras entidades federativas. Asimismo, no se abordan fenómenos macroeconómicos agregados, salvo en la medida en que sirven como contexto general para la interpretación de los resultados.

Esta delimitación permite un abordaje riguroso, empíricamente sustentado y conceptualmente acotado del problema de investigación, garantizando la coherencia entre los objetivos planteados, la metodología empleada y los resultados esperados.

4. Metodología: Diseño del estudio y levantamiento de información

El análisis del presente libro se basa en una encuesta aplicada en línea durante noviembre del 2025 a población residente en la Ciudad de México. El instrumento fue administrado mediante plataforma digital y recoge información detallada sobre ideología política, valores sociales, bienestar subjetivo, salud mental, uso del tiempo, condiciones socioeconómicas y comportamiento electoral. Previo al levantamiento principal, se aplicó una prueba piloto del cuestionario a una submuestra de participantes con características sociodemográficas similares a la población objetivo. Este ejercicio permitió evaluar la claridad de las preguntas, así como estimar la consistencia interna de los bloques temáticos mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados mostraron niveles aceptables de confiabilidad interna ($\alpha > 0.84$) en la mayoría de las escalas, lo que respalda la coherencia de los ítems utilizados en el instrumento.

El cuestionario completo se adjunta como anexo y se reproduce de manera literal en lo referente a las preguntas utilizadas para la construcción de las variables del presente estudio y de los índices sintéticos ideológicos que lo acompañan. La representatividad estadística se asegura mediante un procedimiento de levantamiento de información aleatoria con un muestreo post-estratificación, descrito en el siguiente apartado.

El cuestionario está constituido de 73 preguntas organizado en 5 bloques, a saber:

- Bloque A (Valores políticos y sociales): A1–A17 → 17 preguntas
- Bloque B (Ideología y bienestar): B1–B7 → 7 preguntas
- Bloque C (Salud psicosocial y uso del tiempo): C1–C35 → 35 preguntas
- Bloque D (Comportamiento electoral y seguridad): D1–D6 → 6 preguntas
- Bloque E (Sociodemografía): E1–E8 → 8 preguntas.

El cuestionario contó con una pregunta cualitativa abierta para el estudio del bienestar emocional.

La muestra final está compuesta por 1.557 casos válidos, una vez depurados los registros incompletos en las variables utilizadas como objetivos de calibración.

Post-estratificación y ponderación muestral

El muestreo en el presente estudio aplicó un algoritmo de post-estratificación por calibración (raking) con el objetivo de corregir desbalances entre la muestra observada y la estructura real de la población (Deville et al.,1993). A cada observación se le asignó un peso estadístico, de modo que los promedios ponderados reproduzcan los márgenes poblacionales conocidos a partir de fuentes oficiales.

La calibración se realizó utilizando el método truncated del procedimiento de calibración generalizada, garantizando que los pesos se mantengan en un rango acotado y evitando problemas de varianza excesiva. Este enfoque sigue la literatura clásica sobre estimadores calibrados y raking en encuestas sociales (Deville et al.,1992).

Las variables objetivo (targets) utilizadas para la post-estratificación fueron:

- Edad (15–29, 30–44, 45–59, 60 y más), según Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI).
- Género (hombre, mujer), según Censo 2020.
- Voto presidencial 2024, con cuatro categorías: Claudia Sheinbaum (Morena/PT/PVEM), Xóchitl Gálvez (PAN/PRI/PRD), Otro candidato y Sin voto (incluye abstención, voto nulo/blanco y no recuerdo), a partir de resultados oficiales del INE.
- Estrato de ingreso, construido a partir de deciles de ingreso (INEGI), agrupados en Bajo (deciles 1–3), Medio (4–7) y Alto (8–10).

Los datos a continuación presentan el nivel de ajuste alcanzado luego de aplicar los pesos. Como puede observarse, las distribuciones ponderadas reproducen con alta precisión los valores reales de la población, con diferencias mínimas en todos los casos.

A) Grupo de edad		
	Muestra ponderada	Realidad
15–29	(%)	(%)
30–44	27.8	28.1
45–59	24.3	24.1
60 y más	20.2	19.8

B) Género

	Muestra ponderada	Realidad
	(%)	(%)
Mujer	51.8	52.0
Hombre	48.2	48.0

C) Opción de voto elecciones 2024 (Presidenciales)

	Muestra ponderada	Realidad
	(%)	(%)
Sheinbaum	46.3	46.4
Gálvez	29.6	29.3
Otro	7.1	7.2
Sin voto	17.0	17.2

D) Estratos de ingreso

	Muestra ponderada	Realidad
	(%)	(%)
Estrato		
Bajo	30.0	30.0
Medio	40.1	40.0
Alto	29.9	30.0

Nota: La post-estratificación reproduce con alta precisión la estructura poblacional en todas las variables objetivo, con diferencias marginales entre la distribución ponderada y los valores reales.

Estas variables constituyen las variables de convergencia, en tanto garantizan que la estructura básica de la muestra ajustada sea consistente con la realidad poblacional observada.

Para esta encuesta, representativa de la población residente en la Ciudad de México, con un tamaño muestral de $N = 1,557$ casos, el margen de error máximo es de ± 2.5 puntos porcentuales. Considerando la post-estratificación aplicada y el incremento deliberado de la muestra en estratos clave para mejorar la representatividad, el margen de error efectivo se redujo a ± 1.4 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. Este margen se ajustó considerando el efecto del diseño (design effect), estimado a partir de la relación entre la varianza ponderada y no ponderada. Lo anterior garantiza que las inferencias reflejen adecuadamente la estructura de la población objetivo.

Todos los análisis estadísticos realizados en el estudio incorporan los pesos muestrales ajustados por post-estratificación, asegurando que las estimaciones obtenidas —incluidas las regresiones, medias e intervalos de confianza— sean representativas de la población objetivo y reflejen adecuadamente la estructura demográfica y socioeconómica de la Ciudad de México. Para manejar los datos faltantes, se aplicaron técnicas de imputación estadística múltiples, lo que permitió conservar el tamaño muestral y reducir posibles sesgos asociados a la omisión de casos.

Conceptualización y medición de la ideología

La variable central del estudio es la ideología, concebida de manera multidimensional y no reducida a la dicotomía izquierda–derecha. En este trabajo, la ideología se operacionaliza a partir de tres aristas complementarias:

1. Ideología electoral: basada en el comportamiento de voto efectivo en distintas elecciones (2018 (Presidencial), 2021 (Cámara de diputados) y 2024 (Federales, alcaldía y jefatura de gobierno CDMX)), sintetizada mediante un Score Morena, que contabiliza la cantidad de veces que la persona votó por candidaturas de Morena en cinco elecciones relevantes desde el 2018 hasta el 2024.
2. Ideología autoidentificada: medida mediante una escala directa de 1 a 10, donde 1 representa “muy de izquierda” y 10 “muy de derecha”.
3. Ideología valórica: construida a partir de un conjunto de preguntas que capturan posicionamientos frente a agendas centrales de los movimientos sociales contemporáneos. El detalle se explica en el siguiente apartado.

En los capítulos, las variables ideológicas —autoidentificadas y valóricas— valores más altos indican mayor cercanía a posiciones conservadoras, tradicionales o neoliberales, salvo indicación expresa en sentido contrario.

Construcción del score de ideología valórica

La ideología valórica se operacionaliza mediante un índice sintético que integra respuestas a preguntas formuladas en escala Likert (de “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”), agrupadas en cinco dimensiones:

- Democracia y autoritarismo
 - “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático.”
 - “El país necesita un líder fuerte que no tenga que preocuparse por elecciones parlamentos.”
- Migración
 - “Las personas extranjeras quitan oportunidades laborales a los nacionales.”
 - “Los inmigrantes aumentan la inseguridad en la ciudad.”
 - “Los inmigrantes son los responsables de la subida de precios de los alquileres.”
 - “Los migrantes no deberían tener acceso a los mismos servicios de salud y educación que los mexicanos.”
- Feminismo y derechos de las mujeres
 - “El feminismo es una ideología que busca someter a los hombres.”
 - “Es justo que existan políticas de cuotas para mujeres y no para hombres.” (invertida)
 - “Los hombres y las mujeres deben compartir por igual las tareas domésticas y de cuidado.” (invertida)
 - “Las mujeres tienen derecho a decidir libremente sobre su propio cuerpo y maternidad.” (invertida)
 - “La legalización del aborto es necesaria para garantizar la igualdad de derechos.” (invertida)
 - “Los feminicidios son un problema grave que requiere políticas específicas para ser enfrentado.” (invertida)
- Redistribución
 - “Los gobiernos deberían cobrar más impuestos a las personas ricas y menos impuestos a las personas pobres para reducir la desigualdad.” (invertida)
 - “Debería existir un impuesto a las herencias de los más ricos.” (invertida)
- Medio ambiente
 - “Debemos proteger el medio ambiente aunque eso frene el crecimiento económico.” (invertida)

Las respuestas fueron recodificadas de modo que valores más altos indiquen posiciones más conservadoras. Posteriormente, se construyó un score agregado mediante suma simple de los ítems normalizados, opción elegida (para el análisis descriptivo) tras comprobar que no emerge una única dimensión dominante mediante análisis factorial.

La selección de las cinco aristas no obedece a una preferencia normativa abstracta —un “*checklist*” de lo que debiera ser “progresista”— sino a la identificación de los conflictos que, en la experiencia latinoamericana reciente, han reorganizado efectivamente el campo político.

En las últimas dos décadas, las derechas regionales aprendieron a disputar el sentido común no sólo en el terreno clásico de los impuestos o el gasto social, sino precisamente en torno a estos clivajes: democracia/autoritarismo bajo la gramática de la seguridad, migración, feminismos y derechos de las mujeres, redistribución de la riqueza y conflicto socioecológico.

Allí donde los gobiernos progresistas avanzaron en inclusión material, estos temas se convirtieron en los principales puntos de ataque, rearticulando malestares difusos en proyectos de restauración conservadora.

El eje “democracia-autoritarismo” condensa ese giro. Desde las campañas de “mano dura” en Centroamérica y el Caribe hasta la “seguridad democrática” en Colombia y las políticas de militarización interna en los Andes y el Cono Sur, la promesa de orden ha sido el vehículo privilegiado para legitimar recortes de derechos y concentración de poder en líderes fuertes.

Lo que está en juego no es sólo una preferencia abstracta por la democracia o el autoritarismo, sino la disposición a aceptar estados de excepción permanentes, tolerar la violencia estatal selectiva y sacrificar libertades en nombre del combate al crimen o la corrupción. Medir este vector permite observar hasta qué punto, incluso en núcleos progresistas como la Ciudad de México, se normaliza la idea de que “un gobierno autoritario puede ser preferible” si ofrece seguridad, y qué tan disponible está la opinión pública para una deriva a la Bukele o a la Bolsonaro.

Algo similar ocurre con la “migración” y el “feminismo”, que han funcionado como laboratorios de la “guerra cultural” de las derechas. La llegada masiva de población venezolana, haitiana, centroamericana o caribeña a distintos países de la región ha sido utilizada para asociar migración con delito, deterioro de servicios y amenaza identitaria, aun cuando la evidencia empírica no lo sustente.

Al mismo tiempo, el avance de las luchas feministas —desde el ciclo de Ni Una Menos hasta las mareas verdes por el derecho al aborto y las legislaciones de paridad y violencia de género— se ha enfrentado a campañas coordinadas contra la “ideología de género”, impulsadas por alianzas entre jerarquías religiosas,

medios conservadores y partidos de derecha. Incluir estos dos ejes en el índice valórico permite captar si los avances feministas y las experiencias cotidianas de convivencia con personas migrantes se traducen en orientaciones igualitarias más sólidas o, por el contrario, si se están sedimentando reacciones defensivas que pueden ser capitalizadas por proyectos reaccionarios.

“Redistribución” y “medio ambiente” completan el índice porque sintetizan, en clave material y ecológica, los dilemas del progresismo de gobierno. En varios países, las políticas de transferencias, subsidios y ampliación de derechos sociales convivieron con estructuras tributarias regresivas y con modelos extractivistas que profundizaron conflictos por el territorio, el agua y la energía. Mientras las derechas denunciaban a los gobiernos igualitaristas como “gastadores irresponsables” y “enemigos de la clase media”, los mismos gobiernos justificaban proyectos mineros, petroleros o de infraestructura a gran escala en nombre del desarrollo y la inclusión.

En ese doble frente, la disputa dejó de ser solo por cuánto se redistribuye y pasó a ser también por quién paga, qué se considera riqueza legítima, qué se sacrifica en términos ambientales y quién decide el uso de los bienes comunes. Al medir conjuntamente actitudes frente a impuestos progresivos, herencias, protección ambiental y límites al crecimiento, el índice captura hasta qué punto se consolidan posiciones igualitarias sustentables o, en cambio, se afianza un sentido común que prioriza el crecimiento a cualquier costo y protege la riqueza acumulada.

En síntesis, estos cinco ejes concentran las principales fracturas ideológico-materiales que han marcado las derrotas y resistencias de los progresismos latinoamericanos: la tensión entre seguridad y democracia, entre apertura y cierre frente al otro migrante, entre igualdad sustantiva y privilegios de clase y género, entre bienestar y frontera ecológica.

No son temas escogidos “desde afuera” de la experiencia regional, sino condensaciones de batallas efectivamente libradas en las calles, los parlamentos, los tribunales y los medios. Por eso resultan adecuados para construir un índice valórico que no sólo mida posiciones abstractas, sino que permita leer, al interior de la Ciudad de México, qué sectores están más expuestos a una contraofensiva conservadora que ya demostró, en otros países, su capacidad para desfondar proyectos de transformación incluso después de importantes avances redistributivos.

5. Familias ideológicas (tipologías)

A partir de la articulación entre el comportamiento electoral efectivo, la ideología autoidentificada y la ideología valórica, se construyó una tipología de nueve configuraciones ideológicas que permite capturar alineamientos, tensiones y contradicciones internas más allá del eje dicotómico izquierda–derecha.

En primer lugar, se distingue un grupo de no votantes persistentes, conformado por personas que se abstuvieron, anularon o no votaron tanto en 2018 como en 2024. Entre quienes sí presentan comportamiento electoral definido, se identifican cuatro configuraciones asociadas al voto presidencial por Morena: votantes de Morena con valores progresistas y autoidentificación de izquierda o centro-izquierda; votantes de Morena con valores progresistas pero autoidentificación ideológica de derecha; votantes de Morena con valores conservadores que, no obstante, se ubican ideológicamente a la izquierda o centro-izquierda; y, finalmente, votantes de Morena con valores conservadores y autoidentificación de derecha.

De manera simétrica, se construyen cuatro perfiles entre quienes no votaron por Morena en las elecciones presidenciales consideradas: sujetos con valores conservadores y autoidentificación de derecha; conservadores con autoidentificación de izquierda; individuos con valores progresistas que se ubican ideológicamente a la derecha; y, por último, no morenistas con valores progresistas y autoidentificación de izquierda o centro-izquierda. Esta tipología permite analizar la ideología no como una posición unidimensional, sino como un campo de combinaciones y desajustes entre prácticas electorales, identidades políticas y sistemas de valores.

En síntesis, esta tipología permite identificar, entre otros, perfiles ideológicamente coherentes, votantes pragmáticos, combinaciones de voto progresista con valores conservadores, y posiciones de distancia o ambivalencia frente al proyecto político dominante. A continuación, se presenta una tabla que resume las familias ideológicas que conforman cada tipología.

Tabla 1: Combinaciones vectoriales (V, A, P) de las familias ideológicas

Segmento	Voto (2018 y 2024)	Autode- finición	Posiciones (5 vectores)	Descripción clara del perfil
Antipolítica	No vota	No se define / Ninguna	Mixtos o indiferentes	Abstencionistas o profunda- mente desencantados con la política.
Morenista conver- gente	Morena	Izquierda	Progresistas	Perfil convergente: vota Morena, se siente de iz- quierda y tiene posiciones progresistas.
Morenista diver- gente en autoiden- tificación	Morena	Derecha	Progresistas	Vota Morena y es progresista en temas, pero no se siente de izquierda.
Morenista divergente en valores	Morena	Izquierda	Conservadores	Se siente de izquierda y vota Morena, pero en temas concretos tiene posturas conservadoras.
Morenista divergente en ambos	Morena	Derecha	Conservadores	Vota Morena por pragmatismo, anti-PRI/AN o costum- bre, sin afinidad ideológica de izquierda.
Anti- morenista conver- gente	An- ti-More- na	Derecha	Conservadores	Perfil convergente de derecha tradicional: rechaza Morena en todos los planos.
Anti- morenista divergente en au- toidentifi- cación	Anti- Morena	Izquier- da	Conservadores	Se siente de izquierda pero rechaza Morena (izquierda crítica, “anti-AMLO” o “iz- quierda moral”).
Anti- morenista divergente en valores	Anti -Morena	Derecha	Progresistas	Tiene posiciones progresistas pero vota en contra de More- na (progresistas “liberales”, “fifis” o de oposición).
Anti- morenista divergente en ambos	Anti- Morena	Izquierda	Progresistas	Izquierda “pura” o histórica que rechaza a Morena (ex PRD, PT original, izquierda independiente, etc.).

Nota: La tipología ideológica se construyó a partir de la combinación entre el voto presidencial, la ideología autoidentificada y el índice de valores progresistas (IVP). El grupo (0) corresponde a personas que no votaron, se abstuvieron o anularon su voto tanto en 2018 como en 2024 y que, además, declaran no tener ideología o se abstienen de responder. Los grupos (1) a (4) agrupan a quienes votaron por Morena en la elección presidencial, diferenciando según posiciones valóricas progresistas o conservadoras (IVP por debajo o por encima de la media) y autoidentificación ideológica de izquierda/centro-izquierda (≤ 5) o derecha (> 5). Los grupos (5) a (8) corresponden a personas que no votaron por Morena, clasificadas de manera análoga según su perfil valórico y su autoubicación ideológica. En todos los casos, valores más altos en la escala ideológica y en el IVP indican posiciones más conservadoras.

Sobre las zonas geográficas (Ciudad de México)

Para el análisis territorial, las 16 alcaldías de la Ciudad de México fueron agrupadas en cuatro macrozonas mutuamente excluyentes. La zona Norte incluye Gustavo A. Madero y Azcapotzalco; la zona Oriente comprende Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco; la zona Sur agrupa Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan; y la zona Poniente/Centro-Poniente incluye Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Esta clasificación cubre la totalidad de las alcaldías y permite captar diferencias socioespaciales relevantes para el análisis. Adicionalmente, para capturar población flotante se incorporó una categoría residual correspondiente al conurbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, que agrupa a personas residentes fuera de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Nota metodológica final

El capítulo 1 constituye el marco teórico-analítico general del libro y las hipótesis que guiarán la presente investigación. En él se desarrollan las principales categorías conceptuales que orientan la investigación y se establece el andamiaje interpretativo común a todo el trabajo. No obstante, dada la especificidad de los problemas abordados, cada capítulo incorpora submarcos teóricos y revisiones de la literatura propias, acordes con las hipótesis y los objetivos analíticos que en cada caso se formulan.

Los capítulos analíticos (2 al 6) describen en detalle los procedimientos metodológicos específicos de los modelos probabilísticos y de las estimaciones multivariadas utilizados en cada análisis. Sin embargo, es importante señalar que las variables ideológicas —electoral, autoidentificada y valórica— se mantienen constantes en su definición y construcción a lo largo de todo el libro, lo que garantiza la comparabilidad interna entre modelos y capítulos.

Claves para leer este libro

Este libro no propone una lectura lineal del presente ni una extrapolación mecánica del pasado. Su apuesta es distinta: poner en diálogo tiempos históricos para advertir riesgos que, en América Latina, ya han sido recorridos.

Leído desde esta clave, el análisis de la Ciudad de México funciona como una ventana privilegiada para observar procesos que, en otros países de la región, se manifestaron primero como malestar difuso, luego como reordenamiento cultural y, finalmente, como apertura política a proyectos de derecha autoritaria o protofascista. En ese sentido, el pasado latinoamericano opera aquí como una suerte de futuro anticipado, no para ser reproducido, sino para ser comprendido a tiempo.

La comparación implícita que atraviesa el libro no busca establecer equivalencias simples ni anunciar desenlaces inevitables. Busca, más bien, identificar regularidades históricas: momentos en los que gobiernos progresistas con altos niveles de legitimidad y avances redistributivos subestimaron la densidad del malestar cotidiano, la fatiga social y la erosión del horizonte de expectativas. En esos contextos, la frustración no se tradujo en demandas de profundización democrática, sino en desplazamientos culturales que habilitaron discursos de orden, castigo y exclusión.

Leer este libro exige, por tanto, resistir dos tentaciones. La primera es la del excepcionalismo: creer que la experiencia mexicana está inmunizada frente a dinámicas que atravesaron a otros procesos de transformación en la región. La segunda es la del determinismo: asumir que esos desenlaces son inevitables. El análisis que aquí se presenta se sitúa deliberadamente en un punto intermedio: la advertencia informada.

Desde esta perspectiva, los datos, tipologías y modelos que se despliegan a lo largo del libro no buscan clausurar el debate, sino abrirlo estratégicamente. La pregunta que recorre estas páginas no es si el pasado volverá, sino qué dimensiones del presente deben ser atendidas para que no lo haga. En ese sentido, el libro no mira hacia atrás por nostalgia ni hacia adelante por fatalismo, sino al presente como campo de decisión.



Parte II

Marco teórico-analítico e hipótesis de investigación



Capítulo I

Marco teórico-analítico e hipótesis de investigación (Mapear para no perder la base: desplazamientos ideológico-materiales en la CDMX)

1. Introducción

Este libro nace de una preocupación muy simple y muy urgente: en América Latina, una y otra vez, la derecha se rearma “dentro” de los ciclos de gobierno de izquierda. No aparece de golpe, ni viene solo después, cuando los progresismos pierden el poder. Se va incubando en la vida cotidiana bajo administraciones que prometen cambio, redistribución, derechos, seguridad... y que, por límites estructurales o por decisiones políticas, dejan abiertas brechas por donde se cuelan el miedo, el hartazgo y el resentimiento.

Argentina pasó de un ciclo largo de kirchnerismo al shock ultraliberal de Milei; Chile saltó de una revuelta masiva y un proceso constituyente a una derecha que tiene a Pinochet como referencia; Brasil vivió el bolsonarismo después de años de lulismo y “milagro” exportador; Ecuador saltó de la revolución ciudadana al punitivismo más obscuro; en Bolivia la lucha fratricida dentro del MAS permitió el retorno de la derecha. En todos esos casos hay historias locales, pero el patrón se repite: la base que hizo posible a la izquierda también puede alimentar, más tarde, a su antagonista.

México y la Ciudad de México no son una excepción al margen de la región. La irrupción de Morena en 2018 reorganizó buena parte del tablero: antiguos votantes del PRI y del PAN, abstencionistas crónicos, sectores populares desencantados, fracciones de clase media urbana, se alinearon detrás de un mandato de cambio. Se abrió una ventana histórica para subir el piso de derechos, disputar la política fiscal, frenar el despojo. Pero el tiempo corre, y el tablero se mueve: inseguridad persistente, conflictos con grandes capitales que se niegan a pagar impuestos, ofensiva mediática, recomposición de la derecha en alcaldías clave, irrupción de narrativas antipolíticas dirigidas a la juventud.

En este escenario, limitarse a decir “la gente se derechizó” o “la izquierda se moderó” no sirve. Es demasiado tosco, demasiado moralista y, sobre todo, políticamente inútil. La pregunta que interesa a la militancia es otra: ¿cómo se están moviendo, concretamente, las ideologías que sostienen (o erosionan) la fuerza social de la izquierda en la Ciudad de México?

Este trabajo parte de una decisión teórica y política: no vamos a repartir carnés de identidad “progresista”, ni a clasificar a la población en buenas y malas conciencias. Lo que nos interesa es reconstruir políticamente los desplazamientos ideológicos, no presuponer identidades fijas.

No hay “una izquierda”: hay vectores ideológico-materiales

Hablar de desplazamientos no es un capricho técnico ni una metáfora alusiva. Es una necesidad política. Las categorías que solemos usar para orientarnos —“clase media”, “jóvenes”, “el pueblo”, “progresistas”— siempre llegan tarde: describen un estado, pero no capturan el desplazamiento. Son fotografías fijadas donde debería haber trayectorias.

En los últimos veinte años, América Latina ha demostrado que las identidades políticas no son estables. Lo que parecía la “base dura” del progresismo en un ciclo terminó votando por ultraderechas punitivas o retirándose en masa de la política. Lo que parecía “clase media conservadora” se alineó en momentos decisivos con proyectos de expansión de derechos. Y lo que se nombraba como “pueblo” se fracturó una y otra vez según el territorio, el trabajo, la deuda, la inseguridad o la disponibilidad de tiempo para vivir.

Ahí está la clave: las “identidades” fallan porque intentan congelar algo que está en movimiento. Por eso para capturar los desplazamientos preferimos referirnos a “vectores ideológico-materiales”.

Cada vector tiene tres propiedades fundamentales:

1. Dirección: hacia dónde se orienta una persona o un grupo en términos de voto, autoubicación política y posición frente a conflictos específicos (impuestos, feminismo, migración, ecología, democracia).
2. Intensidad: qué tan fuerte es ese conjunto de disposiciones, qué tan coherentes o tensas son entre sí.
3. Condiciones materiales de las que emerge: tipo de trabajo, ingreso, tiempo disponible, experiencias de inseguridad, cargas de cuidado, frustraciones educativas, deudas, expectativas.

Con identidades, solo vemos el casillero final; con vectores, vemos el recorrido posible.

Las identidades no explican por qué una persona que vota izquierda exige “mano dura”; los vectores sí.

Las identidades no explican por qué una juventud con altos niveles de educación cae en la antipolítica; los vectores sí.

Las identidades no explican por qué una capa media progresista migra al discurso de eficiencia empresarial; los vectores sí.

Y, sobre todo, las identidades no permiten anticipar desplazamientos; los vectores sí.

Por eso nuestro análisis no se construye sobre etiquetas fijas, sino sobre coordenadas que se mueven:

- Voto (que puede cambiar),
- Autoubicación (que puede desplazarse o romperse),
- Posiciones en conflictos (que pueden radicalizarse, endurecerse o diluirse).

Cuando estas coordenadas se cruzan con la vida material —tiempo, trabajo, seguridad, cuidados— aparecen “familias de vectores”. Son nudos donde se agrupa gente que comparte tensiones, coincide en convicciones, afectos y decisiones. No son esencias; son tramos de trayectoria.

Esa es la diferencia política decisiva:

Las identidades sirven para administrar el presente (campanas, segmentación, discursos prefabricados).

Los vectores sirven para anticipar el futuro (posibles giros autoritarios, nuevas radicalidades, erosiones silenciosas, oportunidades de organización).

Por eso la militancia necesita vectores, no fotografías; porque la lucha política, en crisis, no se juega entre bloques fijos, sino entre trayectorias que pueden torcerse.

Por qué importa el mapa de familias vectoriales

La izquierda suele cometer dos errores simétricos. El primero es idealista: creer que la identidad política es algo así como una esencia moral (“el pueblo es bueno”, “la clase media es traicionera”, “la juventud es naturalmente progresista”). El segundo es técnico: suponer que hay un “centro” estable, ubicado en la “distribución normal” de la población —que se conoce en estadística como la campana de Gauss—, y que la tarea consiste en entibiar la agenda y el discurso para conquistar una supuesta mayoría moderada.

Ambas miradas dejan por fuera lo que más importa: la relación inestable entre experiencia material y disposición ideológica. En América Latina, los últimos veinte años muestran con claridad que:

Hay sectores de ingresos medios que se alinean con proyectos de izquierda cuando sienten amenazado su trabajo, su escuela pública o su sistema de sa-

lud... y que después migran a la extrema derecha cuando la inseguridad, la corrupción o el agotamiento se desbordan;

Hay mundos juveniles precarizados que pueden volcarse a la organización feminista, sindical, climática... o a la antipolítica cínica, a la abstención presuntuosa, a la burla sistemática de toda forma de institución;

Hay franjas populares que sostienen redistribución, programas sociales y derechos, pero al mismo tiempo claman por mano dura, líderes fuertes y modelos de orden que la derecha regional ha aprendido a explotar hasta el límite.

Sin un mapa fino de esos vectores ideológico-materiales, la izquierda gobierna a ciegas. Apela a “la gente” como si fuera un bloque homogéneo, y confunde su propia base con su electorado coyuntural. Se defiende contra la ofensiva reaccionaria sin entender en qué fracturas concretas se está metiendo la cuña: en la seguridad de los barrios, en el tiempo cotidiano roto, en el miedo a perder lo poco conquistado, en la fatiga de quienes se sienten usados como base de maniobra, pero no escuchados como aliados políticos.

Este texto busca algo más ambicioso y más sencillo a la vez: proveer a la militancia de un mapa de posiciones y de posibles desplazamientos, construido con datos, pero pensado para la estrategia, no para una academia encerrada en sí misma.

No se trata de anticipar quién ganará la próxima elección; se trata de leer desde dónde puede incubarse el próximo Milei, el próximo Kast, el próximo Bukele... o la próxima oleada de transformación desde abajo.

Cómo leer este capítulo en el marco del libro

Este capítulo no se queda en el diagnóstico general: abre el camino teórico-conceptual para los capítulos que siguen y que organizan el argumento de fondo.

Comienza por situar el problema en el tiempo largo de la región: muestra cómo, en distintos países, los ciclos de gobierno de izquierda reordenaron las bases sociales y, al mismo tiempo, abrieron grietas por donde se coló la nueva derecha. Ahí se sitúa el caso México-CDMX dentro de una secuencia continental, no como excepción local (sección 1).

Expone la ruptura teórico-metodológica central: abandonamos la idea de identidades políticas fijas y definimos los vectores ideológico-materiales a partir de tres coordenadas: voto, autoubicación en la escala izquierda-derecha y perfil de posiciones frente a un conjunto de conflictos programáticos clave (2).

Reconstruye las nueve combinaciones que surgen del cruce de esas coordenadas. No como “tipos de gente”, sino como nudos donde se alinean o se tensan

voto, nombre político y posiciones en conflicto. Aquí se dibuja el tablero completo: quién sostiene al gobierno, quién se le opone, quién se ha retirado (3).

Introduce luego una dimensión específica del caso mexicano: la intensidad del vínculo con Morena a lo largo del período 2018–2024. Bajo los ejes de la lealtad, la distancia y la disputa, se cartografían los distintos grados de compromiso, desgaste y conflictividad dentro del propio campo morenista, mostrando que el apoyo al proyecto no es homogéneo ni estable, sino atravesado por tensiones internas y trayectorias divergentes (sección 4).

Con estas secciones, la introducción deja de ser un preámbulo y se convierte en el plano general de una investigación pensada para algo muy concreto —que la izquierda sepa en qué suelo pisa, qué vectores está moviendo y cómo evitar administrar, sin quererlo, la preparación de su propia derrota.

2. Melodrama latinoamericano: gobiernos progresistas que incuban su oposición

Toda la región latinoamericana ha vivido una paradoja que pocas izquierdas han querido mirar de frente: la derecha contemporánea no se cultiva sobre una hegemonía conservadora previa, sino que nace, crece y se organiza dentro de los propios ciclos progresistas. No aparece después de la izquierda, sino durante su estancia en el poder; no surge desde fuera, sino en las grietas internas que se abren cuando el Estado progresista no logra reorganizar las relaciones sociales que prometió transformar.

El problema es más profundo que la “desilusión”. Tiene que ver con vectores ideológico-materiales que se reacomodan bajo crisis, inseguridad, desgaste económico y expectativas incumplidas. Lo que se descompone no es la moral de la gente, sino la forma en que sectores concretos —por ubicación social, por territorio, por tiempo de vida, por experiencias de violencia— reorientan sus trayectorias políticas.

La región es, por tanto, un laboratorio inmenso donde observar cómo se mueven esos vectores; y México-CDMX no se sustrae a esta historia.

2.1. Desplazamientos hacia la derecha bajo gobiernos de izquierda

Argentina condensa la escena: un período largo de conquistas —salarios, empleo, derechos sociales— convive con una inflación persistente que corroe el tiempo social (nadie sabe cuánto vale su sueldo mañana), presiona a las capas medias endeudadas y agota a los sectores populares en la supervivencia cotidiana. En ese barro material emergen dos vectores decisivos: (a) un “igualitarismo exhausto” que, sin romper con la redistribución, reclama orden inmediato; (b) un vector de “clase media endeudada” que migra de la abstención al voto de shock ante la promesa de eficiencia.

El resultado no es un rayo en cielo sereno: es Milei como producto tardío del propio ciclo, alimentado por grietas que el progresismo administró pero no reorganizó. El mensaje estratégico: cuando el tiempo social se rompe (inflación, deuda, horizonte incierto), el orden se vuelve más verosímil que la igualdad. Chile ofrece otro laboratorio. La revuelta de 2019 abre un horizonte igualitarista y feminista; el plebiscito lo consagra; la Convención para redactar una nueva Constitución intenta darle forma. Pero bajo esa oleada conviven tres trayec-

torias: un vector juvenil-popular que quiere saltar de la indignación a la institución; un vector antipolítico (agotamiento de promesas, deudas, precariedad) que exige soluciones inmediatas; y un vector de clase media temerosa de caer otro peldaño.

Cuando el proceso constituyente se emparenta, la derecha no gana por superioridad moral, sino porque administra el miedo: reencuadra seguridad, autoridad y continuidad. El corrimiento no es ideológico “puro”: es material (deuda, empleo, cuidados) que se traduce en una demanda de orden.

Brasil repite el patrón con componentes propios: movilidad ascendente real bajo el lulismo, pero también un vector evangélico-conservador que brinda comunidad, moral y red; un vector de clase media profesional precarizada que percibe a la expansión de derechos como amenaza relativa a su estatus; y periferias atravesadas por violencias múltiples (policiales, narco, paramilitares) que convierten a la “seguridad total” en gramática política. El bolsonarismo no surge de la nada: se cocina adentro, en el hueco entre conquistas y expectativas, entre promesas de inclusión y sensación de desorden cotidiano.

Ecuador muestra la fase punitiva del ciclo. Tras una década de correísmo que elevó pisos materiales, emergen: juventudes urbanas precarizadas que no se reconocen en la maquinaria estatal; capas medias que temen perder patrimonio; y sectores populares sitiados por el crimen organizado. Resultado: punitivismo como solución total, estados de excepción como regla y una derecha que gobierna desde el miedo. Allí la redistribución sin reordenamiento de las estructuras de violencia incubó un vector autoritario transversal.

Bolivia añade la dimensión regional-territorial. El MAS reorganiza la sociedad desde abajo, pero allí mismo coexisten: un vector indígena-popular que exige más autonomía y profundidad democrática; un vector urbano de clase media que valora movilidad y servicios pero rechaza la politicidad plebeya; y un vector empresarial-regional que capitaliza identidades antiestado.

Cuando estalla la crisis de 2019, esos vectores se recolocan a toda velocidad; ni el interregno posterior ni el retorno del MAS se entienden sin esa cartografía previa. Lección: incluso con redistribución, si no se repolitiza el conflicto territorial y la autoridad democrática, los vectores de orden (regionalista, empresarial, moral) ganan tracción.

El hilo rojo que une los casos es claro: no hay “giro a la derecha” como acto súbito; hay reacomodos de vectores bajo la fricción entre promesas de igualdad y experiencias de desorden (económico, vital, territorial). Cuando la izquierda resigna la dirección del conflicto (impuestos a las grandes fortunas, reforma policial y judicial, cuidados y tiempo, transición productiva real) y se repliega a la gestión de lo existente, la derecha ocupa el lugar performativo de la eficacia: orden, castigo, anticorrupción, “anticasta” desde arriba. La derrota se incubó adentro.

2.2. A la inversa: desplazamientos hacia la izquierda bajo gobiernos de derecha

Un relato pesimista dice que “la gente” se desplaza, casi naturalmente, hacia el orden cada vez que la izquierda gobierna. Es falso y, además, desarma. En el mismo período en que una parte de las bases progresistas se desliza hacia proyectos reaccionarios o conservadores, otra parte muta en sentido inverso: abandona derechas cansadas —o “centros” sin contenido— y apuesta por candidaturas de izquierda cuando esas candidaturas logran convertir la crisis en conflicto productivo y no en simple administración.

Colombia es un hito reciente: el voto a Petro provino, sí, de periferias castigadas, pero también de clases medias urbanas que, tras dos décadas de uribismo, constataron que el “orden” se había convertido en estancamiento y que la promesa de movilidad dependía de una reforma social visible —sistema de salud, educación, trabajo—. La novedad no fue moral; fue pragmática: la izquierda apareció como el único actor con proyecto de Estado capaz de redistribuir poder y riqueza sin romper la convivencia básica.

Brasil reeditó esa bisagra con la derrota de Bolsonaro: el frente antiautoritario articuló mundo del trabajo y capas empresariales moderadas que prefirieron previsibilidad democrática a la aventura negacionista. Aquí hay una lección táctica nítida: cuando la izquierda logra separar “orden democrático” de “orden autoritario”, una fracción de electores históricamente refractaria puede migrar hacia ella sin renunciar a su demanda de estabilidad. .

Chile dejó ver otro cauce: parte del electorado “moderado” que había preferido candidaturas de centro-derecha se inclinó, en el balotaje, por Boric, no por conversión ideológica súbita, sino por miedo racional a un maximalismo reaccionario y por la percepción de que la agenda feminista-igualitaria no era un salto al vacío, sino una modernización de derechos compatible con la vida cotidiana. Incluso Bolivia mostró el retorno de sectores que se habían alejado del MAS en 2019: el interregno conservador evidenció que la “normalidad” prometida significaba recorte social y restauración oligárquica. El regreso se explicó menos por identidad y más por comparación de horizontes: ¿quién puede sostener ingresos, servicios y representación?

Apunte estratégico: los vectores electorales no son unidireccionales. Cambian de carril cuando perciben 1) que la izquierda ofrece gobernabilidad con igualdad (no igualdad sin gobierno), 2) que la derecha ofrece orden sin mejoras (y a menudo sin legalidad). Donde la izquierda consigue trenzar seguridad democrática, servicios que funcionan y fiscalidad a los grandes capitales, hay tránsito de derecha a izquierda; donde renuncia a esa trenza, el tránsito se invierte.

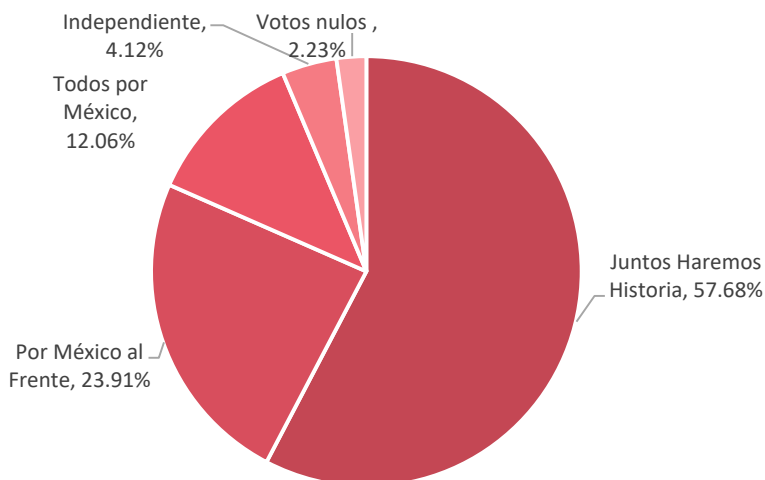
3. Estampas mexicanas: hegemonía de cambio, grietas

Si miramos la Ciudad de México sólo como “bastión histórico de la izquierda”, la imagen engaña. Lo que muestran los resultados electorales de 2018 y 2024 es algo más complejo: una izquierda que sigue siendo hegemónica, pero que ya no arrasa; una derecha que se recompone y se concentra; y un tercer polo incipiente que recoge voto de fuga y malestar difuso. Es la versión local de la estructura tripolar: bloque transformador, bloque de oposición, bloque “ni-ni” que juega a la antipolítica o al gestor eficiente.

En la elección presidencial de 2018, el peso del bloque morenista fue abrumador. La coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) obtuvo en Ciudad de México el 57,68% de los votos válidos (3 182 982 sufragios). El segundo lugar, la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), se quedó en 23,91 % (1 319 437 votos); el PRI y sus aliados (Todos por México) lograron un 12,06 % (665 513); el candidato independiente sumó un 4,12% (227 356).

Si agrupamos, el panorama es claro: alrededor de seis de cada diez votantes en CDMX apostaron por un proyecto que se presenta como ruptura con el viejo régimen; casi cuatro de cada diez se repartieron entre una derecha reciclada, un centro agotado y una candidatura independiente.

Gráfico 1. Elección presidencial 2018

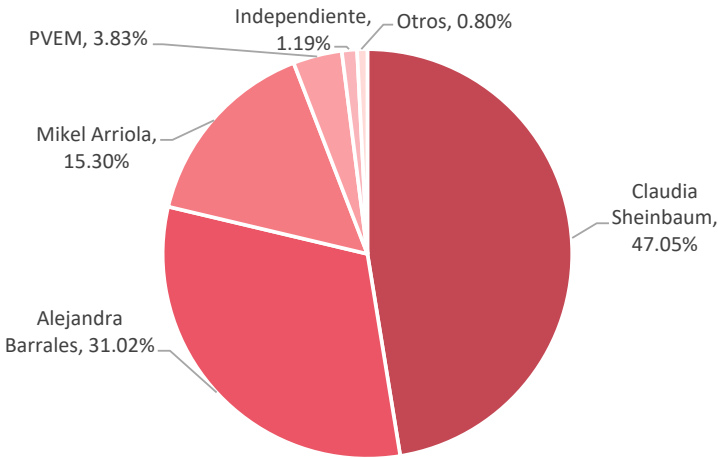


En la elección de jefatura de gobierno del mismo año, la situación fue algo más ajustada, pero la estructura se repite . Claudia Sheinbaum, con Juntos Haremos Historia, obtuvo el 47,05% de los votos (2 537 454). Alejandra Barrales, al frente de Por la CDMX al Frente (PAN-PRD-MC), alcanzó el 31,02% (1 673 015) . El PRI, con Mikel Arriola, sumó un 15,30% (691 772) . El resto se lo repartieron el PVEM (3,83%), una candidatura independiente (1,19%) y el Humanista y Nueva Alianza (menos del 1% cada uno).

Aquí ya aparece más nítido un patrón tripolar:

- Un bloque morenista que roza la mitad del electorado;
- Un bloque de oposición en torno a un tercio;
- Y un resto de partidos que expresan la descomposición del viejo sistema (PRI, PVEM, minipartidos) y la búsqueda de salidas por la vía independiente.

Gráfico 2. Elección Jefa de Gobierno CDMX 2018



Seis años más tarde, en la elección de jefatura de gobierno de 2024, la estructura cambia de forma reveladora. Clara Brugada, encabezando Sigamos Haciendo Historia en la CDMX (Morena-PT-PVEM-NA), alcanza el 51,90% de los votos (2 888 097). Santiago Taboada, con la coalición Va por la CDMX (PAN-PRI-PRD), sube al 38,85% (2 161 591) . Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, capta un 7,37% (410 024).

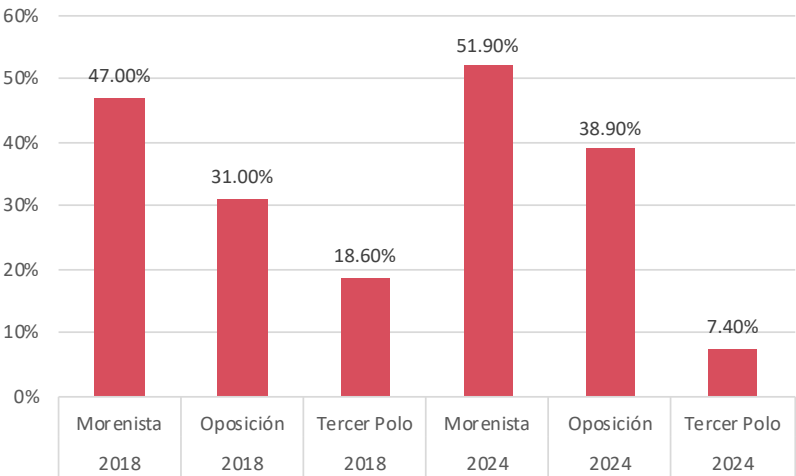
Entre 2018 y 2024, la izquierda de gobierno gana casi cinco puntos en jefatura (de 47,05% a 51,90%); hay un avance evidente. Pero al mismo tiempo, la coalición de derecha y centro histórico crece casi ocho puntos (de 31,02% a 38,85%), y el viejo PRI deja de ir solo para fundirse en ese bloque . Lo que se desploma no es tanto la oposición, sino la fragmentación: los residuos que antes se des-

perdigaban entre PRI en solitario, PVEM, independientes y minipartidos, se concentran ahora en dos polos claros (izquierda y derecha), mientras un tercer actor, MC, se consolida como recipiente de voto inconforme o “ni de los unos ni de los otros”.

Si miramos sólo la suma de izquierda frente a “todo lo demás”, el balance podría parecer tranquilizador: el bloque de gobierno pasa de 47,05% a 51,90 % y el resto baja de 52,95% a 48,10%. Pero políticamente lo importante es otro asunto:

- En 2018 la oposición estaba partida en tres o cuatro pedazos;
- En 2024, casi cuatro de cada diez votantes se alinean ya detrás de una coalición unificada que agrupa a la derecha y al viejo centro, y uno de cada trece opta por un tercer actor que juega fuera de la polarización principal.

Gráfico 3. Desplazamientos ideológicos en CDMX 2018-2024



Es decir: el morenismo sube, pero menos que la oposición, que se concentra, y el tercer polo se reduce y reconfigura. La conclusión mediata es que ha aumentado la concentración y la nitidez del conflicto, no solo la presencia del morenismo. La ciudad ya no es un escenario de “aplanadora” progresista frente a una oposición dispersa: es un espacio donde dos bloques se miran de frente y un tercero se ofrece como salida individualista, técnica o “ni-ni”. Dicho en términos del marco antes explicado: la estructura tripolar está más definida que en 2018, y dentro de esa estructura la izquierda gobierna en una posición fuerte pero asediada.

Ese movimiento importa porque se cruza con lo que la encuesta EBEOI muestra en el plano de los valores. El mismo electorado que entrega el 51,9% a la coalición de izquierda es, al mismo tiempo, un electorado donde el 66,9% se inclina por la mano dura en seguridad, donde casi tres de cada diez aceptan la

idea de un “líder fuerte” por encima del Congreso y donde las actitudes hacia migración o meritocracia están divididas.

Es decir: la hegemonía electoral de Morena se sostiene sobre vectores ideológico-materiales muy heterogéneos, algunos de los cuales pueden correrse hacia la derecha si el ciclo de gobierno no modifica en serio las condiciones materiales que los generaron.

Por eso es crucial no leer las cifras de 2018 y 2024 como simple confirmación de que “la capital es morenista”, sino como lo que son: la foto de un momento de fuerza progresista en un tablero que ya contiene, inscrito en los porcentajes, el esquema tripolar que conocemos de otros países. La pregunta que viene después —y que abordaremos con los datos de encuesta— es quién está en cada bloque, qué combinación de valores sostiene su voto y qué trayectorias de vector pueden transformar el 51,9% de hoy en una estabilidad igualitaria... o en el preludio de un giro conservador bajo el mismo techo institucional.

En suma: la capital encaja en el tablero regional con rasgos propios. 2018 fue un parteaguas: en la presidencial y en la disputa por la Jefatura de Gobierno de CDMX, Juntos Haremos Historia ganó con una ventaja holgada. Ese año se produjo un alineamiento plural hacia el cambio: ex-PRI, ex-PAN, abstencionistas crónicos, juventudes precarizadas, funcionariado de base y capas medias progresistas confluyeron en un mandato doble: redistribuir y ordenar la vida pública desde abajo.

El ciclo posterior mostró, sin embargo, la dinámica tripolar que recorre la región. 2021 abrió un primer aviso: avance opositor en varias alcaldías del poniente y suroeste (núcleos de clase media con fuerte demanda de seguridad urbana, servicios y movilidad), al tiempo que el oriente y periferias continuaron firmes con la izquierda.

2024 consolidó la estructura: la izquierda retuvo la jefatura de gobierno con mayoría (51,90 % en la elección), la oposición unificada concentró un caudal grande (38,85 %) y Movimiento Ciudadano capturó una franja ni-ni (7,37 %) asociada sobre todo a voto joven y urbano. La ciudad quedó, así, organizada en tres polos: izquierda gobernante, oposición concentrada, y un tercer actor que capitaliza desencanto sin pacto con el viejo orden.

Esta coyuntura agrega capas que importan para la lectura electoral:

Seguridad y orden urbano: la percepción de delito y conflicto barrial creció como eje de discurso. Allí la derecha recompuso lenguaje (“eficiencia”, “cero tolerancia”, “ciudad limpia”) y la izquierda quedó dividida entre defender logros sociales y responder con seguridad democrática. Cada vez que esta respuesta se volvió difusa, creció el voto opositor en enclaves de clase media y en colonias con conflicto territorial intenso.

Fiscalidad y grandes capitales: la disputa por impuestos progresivos se volvió cultural: campañas empresariales y mediáticas tradujeron la reforma fiscal en “castigo al esfuerzo”. El caso de magnates en pulso abierto con el Estado reordenó percepciones en capas medias: si la izquierda no aparece como administradora competente de esa disputa —cobrar arriba, simplificar abajo—, una parte del electorado concluye que “quien puede cobrar, no cobra; quien puede ordenar, no ordena”.

Giro generacional y “Gen Z urbana”: marchas creativas, lenguajes irónicos, politización feminista-ecológica y, simultáneamente, cansancio antipolítico frente a instituciones que se perciben lentas, opacas o moralistas. Ese electorado no es “de derecha”, pero no firma cheques en blanco: premia soluciones palpables (tiempo de traslado, vivienda, seguridad barrial) y castiga la propaganda vacía. En 2024 parte de ese malestar migró a MC; otra parte se abstuvo. Recomposición opositora: la unificación PAN-PRI-PRD en la ciudad funcionó como vehículo único para agrupar punitivismo barrial, “eficiencia” administrativa y defensa del patrimonio. No ofreció un proyecto distributivo nuevo, pero sí una promesa ordenadora dirigida a segmentos específicos: colonias con comercio establecido, propietarios temerosos de pérdida de valor inmobiliario, profesionales atados a la movilidad en auto y a horarios extensos.

Continuidad social de la 4T: al mismo tiempo, el anclaje popular de la izquierda siguió siendo mayoritario: transferencias, salario, obras de infraestructura y una agenda de derechos (feminismo, diversidad, programas comunitarios) mantuvieron un piso de legitimidad robusto. La cuestión no es el piso, sino el techo móvil: en qué medida la combinatoria redistribución-orden consigue sumar capas medias que piden previsibilidad sin abandonar la igualdad.

Esta secuencia electoral y de coyuntura sugiere un patrón: la hegemonía de 2018 fue simultáneamente material y moral; cuando cualquiera de esos dos pilares se agrieta, la competencia deja de ser “izquierda vs derecha” y pasa a ser igualdad eficaz vs orden reactivo. Así se explica el tránsito de votos entre polos, la emergencia de un tercer bloque, y la persistencia de una base plebeya que, si no encuentra seguridad con derechos y tiempo de vida liberado (transporte, cuidados, trámites), puede desengancharse o exigir mano dura sin renunciar a la redistribución.

En definitiva, la CDMX exhibe un tablero tripolar donde la izquierda conserva mayoría pero no por inercia; la oposición avanza si monopoliza la gramática del orden; y un tercer actor canaliza frustración cívica y estética política juvenil. Esta “foto en movimiento” prepara el terreno de la siguiente sección: pasar de la aritmética electoral a la cartografía de vectores —voto, autoubicación y posiciones en conflictos— para detectar por dónde se puede perder base, por dónde se puede sumar, y qué oferta programática puede convertir otra vez la crisis en conflicto transformador.

4. Vectores ideológico-materiales con tres anclajes: voto, autoubicación, posiciones

El atajo idealista consiste en bautizar a la sociedad con etiquetas morales: progresista, conservadora, moderada. Sirve para hacer campaña, pero no para organizar. Nuestra salida es materialista y simple: en lugar de perseguir esencias, preguntamos tres cuestiones verificables y las cruzamos en cada caso:

¿Cómo votó efectivamente la persona (o si se abstuvo)?

¿Dónde se autoubica en una escala izquierda-derecha?

¿Qué posición asume en conflictos concretos —impuestos a los ricos, aborto, migración, ecología, controles democráticos del poder—?

Con esas tres respuestas no nace una “identidad”, nace un vector: una dirección, una intensidad y un anclaje en la experiencia. Los vectores se mueven; las identidades fijas, no. La política real ocurre en ese movimiento.

4.1. La ideología no funciona como etiqueta fija

Las etiquetas fijas provocan espejismos. Promedian lo que en la calle se contradice, homogenizan lo que en los barrios se tensa, confunden sosiego estadístico con estabilidad política. Tres espejismos ordenan —y entorpecen— la mirada.

El primero es la fe en “el centro”. El centro es un artefacto de gabinete: una media aritmética que borra el conflicto. Quien defiende impuestos duros a grandes patrimonios y al mismo tiempo exige mano dura frente a una colonia tomada por robos, ¿es “centro”? ¿Y quien milita en el ecologismo, pero desconfia de los impuestos progresivos? ¿O quien se pronuncia por el crecimiento a costa del medio ambiente?

En la vida real estas personas no convergen en un punto medio; se alinean en trayectorias distintas según cómo vivan el tiempo, el salario, la deuda, el miedo. Cuando la izquierda decide “ir al centro”, deja de hablar con personas situadas y empieza a hablar con fantasmas estadísticos. En América Latina, cada vez que la izquierda se obsesionó con esos fantasmas, la derecha ocupó el hueco con una gramática de orden y eficacia.

El segundo espejismo es la supuesta moderación estable de la “clase media”. En la Ciudad de México, ese rótulo abarca mundos que no se parecen: empleo público intermedio con alquiler asfixiante; trabajadores por cuenta propia que sobreviven a punta de facturas y apps; profesionistas con hipoteca y dos horas diarias de traslado; comerciantes con tres empleos familiares; freelancers que encadenan plataformas bajo la consigna del “autoemprendedor”.

Esa pluralidad se contrae o se expande alrededor de dos bisagras materiales: previsibilidad de ingresos y sensación de orden. Cuando la izquierda garantiza igualdad eficaz —servicios que funcionan, fiscalidad arriba, seguridad con derechos—, esas capas se le acercan sin trauma. Cuando perciben desorden o parálisis —aunque haya redistribución—, se abren a ofertas de “eficiencia” y castigo. No hay moderación ontológica: hay condiciones específicas. Ignorarlas es regalar a la derecha su cantera favorita.

El tercer espejismo es la idea piadosa de que “los pobres son naturalmente progresistas”. En la base popular conviven igualitarismo, religiosidades, feminismos de barrio, antipolítica cansada, solidaridad y también punitivismo como estrategia de supervivencia. De ahí nacen combinaciones que desconciertan a los moralistas pero que son normales en contextos de violencia y precariedad: apoyo a programas y a subir impuestos arriba, junto con demanda de líder fuerte y policía que proteja; defensa del derecho a decidir y, a la vez, recelo hacia la protesta que bloquea el tianguis; sensibilidad ambiental profunda y, a la vez, rechazo a la migración cuando el alquiler sube y el empleo escasea.

Si la izquierda responde a esas mezclas con sermones sobre “coherencia”, pierde. Si responde resolviendo los cuellos de botella cotidianos —seguridad democrática, justicia vecinal, tiempo de vida liberado—, convierte tensiones en lealtad.

Todo esto no es teoría en el aire: se ve en la encuesta y se toca en la ciudad. Y se entiende mejor con casos que la militancia reconoce.

Pensemos en el asalariado con hipoteca en Iztapalapa que vota Morena, defiende una reforma fiscal que de verdad cobre arriba y al mismo tiempo se nombra “centro”. No es un tibio: es alguien que no puede perder dos horas más de vida por trámites y caos vial. Si la política pública no le devuelve tiempo y orden democrático, ese vector puede estirarse hacia una oferta de derecha “eficiente” sin renunciar a su impulso igualitario.

Miremos a la trabajadora de servicios que se autodefine izquierda, usa programas sociales y sostiene la escuela pública, pero rechaza el aborto por convicción religiosa. No es “conservadora disfrazada”: es una tensión ideológica real. Se disputa con cuidados, con salud sexual accesible, con seguridad para las mujeres en el barrio; no con inquisiciones.

Observemos al estudiante de universidad pública que comparte el paquete igualitario (impuestos, feminismo, ecología), pero vota contra Morena por la percepción de captura inmobiliaria en su colonia y por el maltrato burocrático en cada trámite. Ese vector no se está “derechizando”; está rompiendo con la política tal como la vive. Si no se abren canales de cogobierno del espacio público y de los servicios, ese joven terminará en abstención o en terceras opciones que prometen limpieza sin tocar privilegios.

Los tres casos ilustran la tesis: las identidades fijas no explican la política; los vectores sí. Un vector tiene dirección (hacia qué bloque se orienta), intensidad (cuánto pesan sus disposiciones y cuánto se tensan entre sí) y anclaje material (de qué experiencias se alimenta: salario, deuda, inseguridad, cuidados, vivienda, transporte). Cuando la izquierda olvida cualquiera de esas tres dimensiones, administra; cuando las trabaja juntas, organiza.

De aquí se derivan dos consecuencias estratégicas. La primera: prohibido promediar o matizar el promedio. No vamos a aplastar estas tensiones en modas o medianas. Lo que viene no es una nota de “pureza ideológica”, sino un mapa de combinaciones.

La segunda: prohibido profetizar. No prometemos un modelo que adivine el voto del futuro a partir de intenciones idealizadas. Hacemos análisis denso para cartografiar posiciones y anticipar corrimientos plausibles: por dónde puede deslizarse un morenismo ansioso hacia el punitivismo; por dónde puede regresar un voto anti-Morena si la izquierda demuestra capacidad de seguridad democrática y de cobrar arriba y distribuir debajo; por dónde puede la anti-política transformarse en organización si se le ofrece poder material real.

Con este piso conceptual, el paso siguiente es cruzar las tres preguntas y mirar qué combinaciones aparecen en la Ciudad de México hoy. No para bautizarlas con etiquetas morales, sino para decidir política militante: cómo sostener lo que ya es mayoría, cómo recuperar lo que se alejó, cómo convencer a aquel que nunca votó por Morena pero es demócrata y defiende la justicia social; y, cómo impedir que la crisis se convierta —otra vez— en incubadora del orden reaccionario.

Esa es la tarea de la sección 2.2: caracterizar conflictos decisivos que en América Latina y México permiten diferenciar posiciones políticas. Luego, en la sección 2.3, explicitaremos las nueve familias vectoriales que surgen de los cruces de las tres preguntas, así como la metodología de la encuesta y por qué abordamos los conflictos políticos como un conjunto de hipótesis programáticas a contrastar —trabajo, educación, feminismo, democracia— en el resto del libro.

4.2. Posiciones frente a conflictos clave

Aquí planteamos cinco conflictos clave no como un manual de ideología, sino que nacen de la historia reciente latinoamericana y de la coyuntura mexicana: en estas tomas de posición se han partido y rearmado mayorías; ahí se incuban las derechas o se recomponen las izquierdas.

Por eso trabajamos conflictos políticos reales —no “valores” abstractos— y preguntamos de qué lado se coloca cada quien. El resultado no es una etiqueta fija, sino cinco coordenadas que, juntas, forman vectores. No sumamos todo en un número único: preservamos las cinco piezas del conflicto para ver cómo se alinean o se tensan después, cuando crucemos con voto y autoubicación¹.

Redistribución

Conflicto: se deben o no aumentar los impuestos a los más ricos.

En toda la región, los ciclos progresistas chocaron con el mismo muro: recaudar arriba o resignarse a administrar con migajas. Cada vez que se intentó tocar grandes patrimonios, aparecieron campañas que tradujeron la reforma en “castigo al esfuerzo” y amenazas de fuga de capital. México no es excepción: la disputa fiscal con grandes grupos, los litigios, la presión por sostener programas y servicios ponen la fiscalidad de élites en el centro del tablero. No es una “opinión moral”: es quién paga la cuenta.

Qué capta en CDMX: Capta si el malestar por precios, rentas y servicios busca igualar por arriba (cobrar a grandes patrimonios, combatir privilegios fiscales) o si se resigna a no tocar a los de arriba y pide “eficiencia” recortando abajo. Cuando este reactivo sube, hay materia para una coalición distributiva; cuando baja, crece la oferta “orden sin tocar a los poderosos”.

Codificación (0-100): acuerdo más alto = 100 (polo igualitario); desacuerdo total = 0.

Migración

Conflicto: las personas migrantes deben ser incluidas o excluidas.

El desplazamiento regional convirtió la migración en palanca de la derecha: empleos escasos, rentas al alza, servicios saturados y un chivo expiatorio a la mano. Quien gobierna debe decidir si organiza la solidaridad (trabajo, ciudad, servicios) o si culpa al de abajo. La pregunta captura ese punto exacto.

¹ Cada conflicto tiene varias preguntas en la encuesta; para el detalle ver el Anexo.

Qué capta en CDMX: Capta si la precariedad laboral se procesa como derecho a ciudad (política pública de empleo, vivienda, regularización) o como cierre (culpa al migrante). Donde el puntaje inclusivo es alto, hay base para una agenda de trabajo y ciudad; donde es bajo, crece el vector de seguridad contra el otro.

Codificación (0-100, invertida): acuerdo total = 0 (cierre); desacuerdo total = 100 (inclusión).

Democracia

Conflicto: México necesita un líder fuerte que no esté atado por el Congreso ni las elecciones.

Tras inseguridad y crisis, reaparece el atajo: concentrar poder a cambio de eficacia. La región conoce esa puerta: quien la abre en nombre de la gente termina gobernando contra la gente. Este reactivo mide si la salida buscada es más autoridad sin controles o Estado con contrapesos. No es un matiz: define si el “orden” es democrático o autoritarismo por dentro.

Qué capta en CDMX: Capta si la demanda de seguridad y “que las cosas funcionen” deriva hacia autoritarismo (entregar el control a un “salvador”) o si se quiere eficacia con reglas. Es crucial donde hay mezcla de “mano dura” con apoyo a programas: si la izquierda renuncia a la bandera de orden con legalidad, ese vector puede moverse a ofertas reaccionarias sin abandonar del todo la redistribución.

Codificación (0-100, invertida): acuerdo total = 0 (polo autoritario); desacuerdo total = 100 (polo democrático).

Ecología

Conflicto: hay que proteger el medio ambiente aunque eso limite el crecimiento económico.

La crisis climática y los conflictos extractivos partieron coaliciones en toda América Latina. Cada vez que la izquierda evitó este punto, la derecha capturó el sentido común con “progreso” y “empleo” a corto plazo; cada vez que lo abordó mal, perdió a quienes no pueden vivir con agua cara, aire sucio y territorio privatizado. El conflicto no es naturaleza vs. empleo, sino quién paga los costos del modelo.

Qué capta en CDMX: Capta la disposición a poner límites cuando los costos sociales y ecológicos se disparan: agua, calidad del aire, calor extremo, obra urbana, gentrificación y renta. Si este puntaje sube mientras baja la confianza en el gobierno, crece una izquierda sin vehículo: igualitarista en ecología, pero crítica del aparato si éste apenas gestiona obras.

Codificación (0-100): acuerdo más alto = 100; desacuerdo total = 0.

Feminismo

Conflicto: las mujeres deben tener iguales derechos que los hombres, y además derecho a decidir si interrumpen o no su embarazo.

Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México vivieron olas feministas que no fueron moda, sino política pública en salud, tiempo y autonomía. Esas olas reordenaron alianzas (incluida la religiosidad popular) y también desataron la contraofensiva conservadora. Medir esta posición permite ver si la idea de igualdad incorpora derechos de las mujeres como piso civilizatorio, o si se sacrifica en nombre del orden moral.

Qué capta en CDMX: Capta si el pacto de ciudad —cuidados, seguridad para las mujeres, acceso a salud— está siendo reconocido o empuja hacia restricción. Donde este puntaje es alto y convive con malestar por la inseguridad, surge el dilema táctico: seguridad democrática que cuide a las mujeres o punitivismo que se vuelve contra ellas.

Codificación (0-100): acuerdo más alto = 100; desacuerdo total = 0.

* * *

Cómo se usan estas cinco coordenadas (sin convertirlas en dogma):

1. Cada persona queda descrita por cinco números (0-100). Eso ya es un vector: muestra hacia dónde apunta cada conflicto en su experiencia.
2. Cada familia (que veremos después) se resume con los vectores en conflicto: así se ve qué sostiene a un bloque y dónde están las tensiones.
3. Nada se colapsa en un “índice bueno/malo”. La experiencia latinoamericana demostró que, en crisis, los vectores se recombinan: igualitarismo fiscal con punitivismo, feminismo con desconfianza estatal, ecologismo con voto opositor, inclusión migrante con demanda de orden. Justo por eso no apagamos las diferencias en un único indicador.

La clave para la militancia es que estos cinco vectores de conflicto son llaves para abrir organización, no para cerrar filas. Cuando “redistribución” sube y “democracia” cae (aparece el “líder fuerte”), hay que disputar orden democrático sin ceder la fiscalidad. Cuando “feminismo” y “ecología” suben, pero baja la confianza en la gestión, hay que aproximar el gobierno a la gente (cogestión de servicios, justicia vecinal, tiempo de vida) para que ese igualitarismo no se vaya a la abstención. Cuando “migración inclusiva” sube en colonias con presión laboral, hay que organizar trabajo y ciudad para que la solidaridad no sea sólo consigna.

Hasta aquí, los conflictos y su sentido. En la sección 2.3 mostraremos cómo se cruzan estas cinco coordenadas con voto y autoubicación, y cómo de ese cruce salen nueve posiciones útiles para anticipar corrimientos y decidir dónde intervenir primero.

4.3. Nueve familias vectoriales

La metodología que vamos a proponer parte de una convicción útil para la militancia: la ideología no es una esencia que se manifiesta, sino un conjunto de tomas de posición que se verifican.

Por eso la encuesta EBEOI-CDMX² pregunta tres cosas observables —el voto (si se mantuvo la adhesión partidaria entre 2018 y 2024), la autoubicación (cómo se posiciona cada uno en la escala 1-10, donde 1 es la extrema izquierda) y las posiciones frente a cinco conflictos reales— y no las aplasta en una etiqueta moral.

Esta elección no es técnica, es política y está aprendida de la experiencia latino-americana reciente: allí donde la izquierda se conformó con identidades genéricas (“pueblo”, “clase media”, “jóvenes”), no vio a tiempo cómo se recombinaban los vectores en torno a fiscalidad, derechos de las mujeres, límites ecológicos, calidad democrática y migración; y allí perdió el terreno del “orden” a manos de derechas que enlazan seguridad con privilegios.

En la Ciudad de México, además, las mismas fracturas se juegan todos los días en barrio, transporte, renta y cuidados. De ese cruce —historia regional y coyuntura capitalina— sale la arquitectura metodológica.

El cuestionario recoge, para cada persona, cinco posicionamientos en escala Likert (de “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”) ante los conflictos ya señalados: subir fuertemente impuestos a los más ricos (fiscalidad), igualdad de derechos para las mujeres (feminismo), proteger el ambiente aun si limita el crecimiento (ecología), rechazo a la figura del “líder fuerte” por fuera de controles (democracia) y desacuerdo con la exclusión de las personas migrantes (migración). Estos vectores surgen del conflicto y de las principales agendas de movimientos sociales que en sus luchas han buscado defender la arremetida conservadora neoliberal.

Cada respuesta se estandariza en 0-100 en la dirección del polo que nos interesa observar —igualdad fiscal, derechos, límites ecológicos, controles democráticos e inclusión—; en democracia y migración la codificación se invierte porque el acuerdo con las frases indica cierre/autoritarismo. El resultado es un vector de cinco coordenadas por sujeto [R, F, E, D, M] que preserva tensiones reales

² Ver Apéndice.

(por ejemplo, igualitarismo fiscal con punitivismo), exactamente lo que en la región se ignoró cuando se promediaron conflictos y se predijo “moderación” donde había choques.

Con ese vector en la mano, la clasificación se hace con reglas simples —y por eso discutibles, verificables y ajustables—. Primer eje: Voto. Codificamos 1 cuando el electorado votó Morena (consistente 2018-2024) y 0 cuando no lo hizo (oposición, tercera opción o ruptura reciente).

Segundo eje: Autoubicación. Reagrupamos la escala 0-10 en dos campos operativos: izquierda (1-5 $\rightarrow$ 1) y derecha (6-10 $\rightarrow$ 0).

Tercer eje: Posiciones por conflicto. En lugar de un “valor” abstracto, calculamos el promedio simple de cada uno de los cinco vectores [R, F, E, D, M] y fijamos un umbral operativo de 50/100 para distinguir un vector igualitario alto (1) de uno no alto (0). Probamos ventanas 55-65 para verificar que los hallazgos sustantivos no dependieran de un corte caprichoso; el mapa agregado se mantuvo.

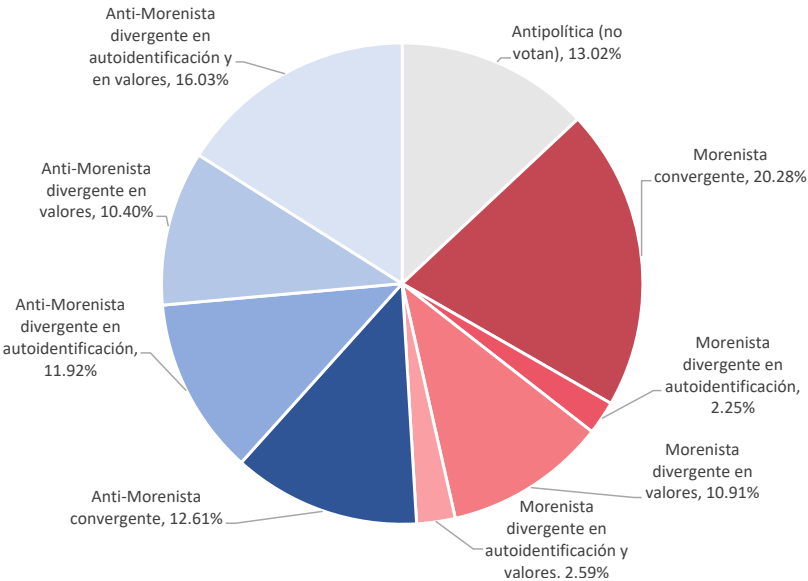
Con esos tres componentes (V, A, P) surgen ocho combinaciones, a las que añadimos una novena para la antipolítica (abstención persistente), porque en América Latina —y en México— no votar ya no es apatía: es una posición con efectos (Tabla 1).

Tabla 1: Combinaciones vectoriales (V, A, P)

Segmento	Voto (2018 y 2024)	Autode- finición	Posiciones (5 vectores)	Descripción clara del perfil
Antipolítica	No vota	No se define / Ninguna	Mixtos o indiferentes	Abstencionistas o profundamente desencantados con la política.
Morenista conver- gente	Morena	Izquierda	Progresistas	Perfil convergente: vota Morena, se siente de izquierda y tiene posiciones progresistas.
Morenista diver- gente en autoiden- tificación	Morena	Derecha	Progresistas	Vota Morena y es progresista en temas, pero no se siente de izquierda.
Morenista divergente en valores	Morena	Izquierda	Conservadores	Se siente de izquierda y vota Morena, pero en temas concretos tiene posturas conservadoras.
Morenista divergente en ambos	Morena	Derecha	Conservadores	Vota Morena por pragmatismo, anti-PRI/AN o costumbre, sin afinidad ideológica de izquierda.
Anti- morenista conver- gente	Anti- Morena	Derecha	Conservadores	Perfil convergente de derecha tradicional: rechaza Morena en todos los planos.
Anti- morenista divergente en au- toidentifi- cación	Anti- Morena	Izquierda	Conservadores	Se siente de izquierda pero rechaza Morena (izquierda crítica, “anti-AMLO” o “izquierda moral”).
Anti- morenista divergente en valores	Anti- Morena	Derecha	Progresistas	Tiene posiciones progresistas pero vota en contra de Morena (progresistas “liberales”, “fífis” o de oposición).
Anti- morenista divergente en ambos	An- ti-More- na	Izquierda	Progresistas	Izquierda “pura” o histórica que rechaza a Morena (ex PRD, PT original, izquierda independiente, etc.).

El resultado es un mapa de nueve familias vectoriales que, lejos de moralizar, organiza el terreno de disputa (Gráfico 4). En la base del gobierno está el morenismo convergente ($V=1, A=1, P=1$), que reúne una quinta parte de la muestra (20,28 %): se nombra izquierda, respalda posiciones progresistas en los cinco conflictos y ha votado por la 4T; es el corazón duro de la mayoría, ese que en 2018 hizo de la ciudad un laboratorio de cambio y continúa impulsado el “segundo piso de la transformación”.

Gráfico 4: Familias vectoriales en CDMX 2025



En su periferia inmediata aparecen dos zonas de tensión: el morenismo divergente en posiciones ($V=1, A=1, P=0$), 10,91 %, que mantiene el voto y el nombre de izquierda pero cede en uno o más conflictos —típicamente seguridad (mano dura) o migración (cierre)—, y el morenismo divergente doble ($V=1, A=0, P=0$), 2,59 %, que sostiene el voto pero se nombra derecha y discrepa en los conflictos; aquí es donde la promesa de “eficiencia” derechista puede entrar si la izquierda no encarna orden democrático y cobro a los de arriba al mismo tiempo.

Entre ambos, una cuña promisorio: el morenismo divergente en autoubicación ($V=1, A=0, P=1$), 2,25 %, que coincide con el paquete igualitario pero no se nombra izquierda; le habla a la experiencia latinoamericana de “centros” que volvieron a la izquierda cuando ésta mostró igualdad eficaz sin sermón.

Frente a ellos, el antimorenismo convergente ($V=0, A=0, P=0$), 12,61 %, funciona como polo estable de orden con privilegios: se nombra derecha, rechaza la fiscalidad de élites, prefiere líderes fuertes y cierre; aquí el aprendizaje re-

gional es claro: no se lo “convierte” con campañas blandas, se lo contiene con eficacia estatal y contrapoder social que le reste verosimilitud.

Mucho más interesante para ampliar mayoría son dos familias heterodoxas. La antimorenista divergente en posiciones ($V=0$, $A=0$, $P=1$), 10,40 %, que no vota a la 4T y se nombra derecha, pero coincide en los cinco conflictos igualitarios: es el caso latinoamericano del votante cansado de corrupción/ineficacia derechista que migra si ve seguridad con derechos y una fiscalidad que de verdad cobra arriba.

Y la antimorenista divergente doble ($V=0$, $A=1$, $P=1$), 16,03 %, la llamada “izquierda sin Morena”: se nombra izquierda, sostiene las cinco posiciones y, sin embargo, no vota al gobierno. Es el reservorio “crítico” que, si no encuentra canales de cogobierno (barrio, servicios, justicia vecinal, tiempo) y pruebas de eficacia distributiva, se queda afuera alimentando la antipolítica o terceras opciones.

Completa el cuadro la antipolítica (abstención persistente), 13,02 %: en América Latina ya aprendimos que este vector, si no se le ofrece poder material —tiempo recuperado, trámites resueltos, seguridad cotidiana, participación reforzada—, se convierte en combustible para el orden reaccionario.

El mapa de familias vectoriales como clave estratégica

Porque traduce en mapa operable lo que la experiencia regional ya enseñó: que los desplazamientos no son “de la gente” a una idea, sino de vectores que se mueven cuando la izquierda gestiona sin conflicto (pierde el orden) o promete sin eficacia (pierde la igualdad tangible).

En CDMX, ese movimiento se ve en tiempo real: allí donde el morenismo convergente convive con divergencias en seguridad o migración, la derecha gana verosimilitud si monopoliza la palabra eficiencia; allí donde el antimorenismo igualitarista no confía en la gestión, vuelve si hay seguridad democrática y cobro arriba; allí donde la “izquierda sin Morena” no encuentra institucionalidad porosa, se refugia en la crítica o en la abstención.

La virtud de esta metodología —tres aristas ideológicas, cinco conflictos materiales, nueve familias— es que no profetiza; cartografía. Y al cartografiar, abre rutas: a quién hablarle, en qué conflicto intervenir, qué promesa volver material, qué miedo desactivar y dónde construir organización que dure más que un ciclo electoral. Esta es, en última instancia, la diferencia entre administrar el presente y volver a organizar mayoría duradera.

5. Las familias ideológico-materiales

Hasta aquí hemos construido el mapa general: vimos cómo, en la Ciudad de México, los vectores ideológico-materiales se organizan en nueve familias según voto, autoubicación y posiciones frente a cinco conflictos clave; y mostramos por qué ese mapa importa para no administrar a ciegas la recomposición tripolar entre izquierda de gobierno, derecha concentrada y antipolítica.

El siguiente paso no es añadir otra etiqueta, sino abrir cada familia como si fuera un pequeño laboratorio. En lugar de quedarnos con el rótulo (“morenismo convergente”, “izquierda sin Morena”, “antipolítica”, etc.), vamos a desarmar dos capas al interior de cada una:

Primero, el perfil ideológico fino, es decir, cómo se ubican en los cinco conflictos que definen hoy las grandes disputas programáticas en México y en la región (redistribución, feminismo, ecología, democracia, migración);

Después, los anclajes desde los que esas posiciones se vuelven verosímiles: qué ingresos, qué clase social autorreportada, qué tramo de edad, qué nivel educativo, qué distribución territorial sostienen (o tensan) cada vector. .

Para que esta lectura no quede en jerga, vamos a trabajar con dos tipos de imágenes muy sencillas, pensadas para que cualquier militante, cuadro de base o investigador pueda leerlas sin recurrir a manuales técnicos:

1. Un gráfico de radar por familia, donde cada eje corresponde a uno de los cinco conflictos. El valor medio de la familia en cada eje se codifica de 0 a 100 en la dirección igualitaria-democrática que ya definimos. El resultado es una “figura” característica: habrá familias con un pentágono casi lleno (alto consenso igualitario en todos los ejes), otras con puntas muy marcadas (por ejemplo, fuerte redistribución y ecología, pero baja democracia, es decir, apertura al “líder fuerte”), y otras con figuras quebradas, tensas, que muestran combinaciones que la militancia reconoce en carne propia: apoyo a impuestos arriba, pero desconfianza ante la migración; feminismo robusto, pero demanda de mano dura, etc.
2. Un gráfico de barras apiladas para los anclajes materiales, también por familia. Cada barra corresponde a un eje material (género, edad, clase social, ingreso, estudios, zona de residencia) y se descompone en los porcentajes de sus subcategorías. Así veremos, por ejemplo, si un cierto vector igualitario está sobrerrepresentado en mujeres jóvenes con es-

tudios superiores y zonas céntricas, o si un morenismo ansioso por el orden se asienta en varones de mediana edad, con ingresos medios y zonas periféricas golpeadas por la inseguridad.

El procedimiento de examen será siempre el mismo, precisamente para que pueda compararse de un vistazo:

Primero, la forma del vector: leeremos el radar como si fuera la huella digital ideológica de la familia. ¿Dónde está el consenso fuerte? ¿Dónde aparecen fisuras? ¿En qué conflictos una familia que vota a la izquierda se acerca peligrosamente a posiciones de orden reaccionario, y en cuáles, por el contrario, una familia que hoy vota contra Morena coincide con los contenidos igualitarios que la izquierda dice defender?

Luego, el suelo material: bajaremos de la figura abstracta al quién concreto. ¿Qué mezcla de clase, ingreso y territorio sostiene ese perfil ideológico? ¿Qué edades concentran el punitivismo? ¿Quiénes encarnan el “igualitarismo extendido” que ya vimos en la región? ¿Dónde se acumula esa “izquierda sin Morena” que piensa como bloque igualitario pero no encuentra vehículo político?

Esta doble lectura —vectores en los conflictos y anclajes materiales— no es un capricho metodológico; es el corazón estratégico de la sección. Para la militancia, importa por al menos tres razones:

1. Permite dejar de hablarle a un promedio inexistente. En lugar de “la juventud”, “la clase media” o “el pueblo”, veremos qué combinaciones de conflicto y condiciones materiales se repiten dentro de cada familia. Eso permite diseñar campañas, agendas de barrio y pedagogías políticas dirigidas a trayectorias reales: jóvenes igualitaristas pero hartos del aparato; capas medias que piden seguridad sin renunciar a la fiscalidad de élites; sectores populares que sostienen programas sociales y, al mismo tiempo, exigen orden inmediato.
2. Ayuda a localizar los puntos de fuga y de anclaje. Allí donde el radar muestre un bache en democracia o migración dentro de familias que por lo demás son igualitarias, hay riesgo de corrimiento hacia derechas punitivas si la izquierda no ofrece seguridad democrática y ciudad incluyente. Donde, en cambio, los anclajes indiquen altas cargas de trabajo, tiempos rotos o territorios sitiados, habrá que leer las posiciones no como “contradicciones morales”, sino como síntomas de cuellos de botella concretos que la política pública debe resolver si quiere estabilizar el vector.
3. Abre rutas para recomponer mayoría sin moralismo. Las familias anti-morenistas igualitarias, o la “izquierda sin Morena”, no se convencerán con sermones sobre lo que “deberían ser”; se rearticulan cuando se les

ofrece un modo de vivir: igualdad con eficacia, seguridad y tiempo. Ver su radar y sus anclajes permitirá identificar por dónde tender puentes (conflictos compartidos, demandas materiales convergentes) y dónde aceptar, con realismo, que ciertas posiciones funcionan hoy como núcleo duro del bloque de orden con privilegios.

En resumen: esta sección no añade etiquetas, sino radiografías familiares. Para cada una de las nueve, veremos primero la figura ideológica en los cinco conflictos, luego su composición material, y cerraremos con una lectura táctica: qué sostiene esa familia, en qué sentidos puede desplazarse, qué riesgos entraña para la izquierda si se descuida y qué oportunidades abre si se toma en serio su experiencia cotidiana.

Solo así el mapa de vectores deja de ser una metáfora elegante y se convierte en herramienta de organización: ayuda a decidir a quién hablarle, desde qué conflicto entrar y qué mejora material tiene que acompañar el discurso para que la ciudad no repita, bajo otras siglas, el melodrama latinoamericano de izquierdas que incuban su propia derrota.

5.1. Las familias morenistas

El recorrido por las nueve familias no empieza en el vacío ni desde la mirada del adversario. Empieza donde hoy se condensa el campo de gobierno: las familias morenistas. Ahí es donde se cruzan, con todas sus tensiones, tres cuestiones a la vez: la experiencia directa de un gobierno de izquierda en el poder, las expectativas depositadas en él y las primeras formas de desencanto, reacomodo o defensa.

Si la hipótesis del texto es que los desplazamientos no son un “giro cultural” abstracto, sino movimientos de vectores ideológico-materiales, el primer paso lógico es mirar qué está ocurriendo dentro del propio bloque que sostiene —o sostuvo— a la 4T.

Además, empezar por las familias morenistas permite desmontar dos ilusiones simétricas. De un lado, la idea complaciente de que “la base” es homogénea, fiel y automáticamente progresista. Del otro, la lectura derrotista que ya sólo ve desgaste, apatía y punitivismo en todos los rincones.

Lo que muestran los datos es otra cosa: un núcleo convergente muy coherente en voto, autodefinición y posiciones, y a su alrededor varias franjas divergentes (en autoubicación, en valores o en ambas cosas) donde se combinan apoyo, dudas, malestares y desplazamientos posibles hacia la derecha o hacia la abstención.

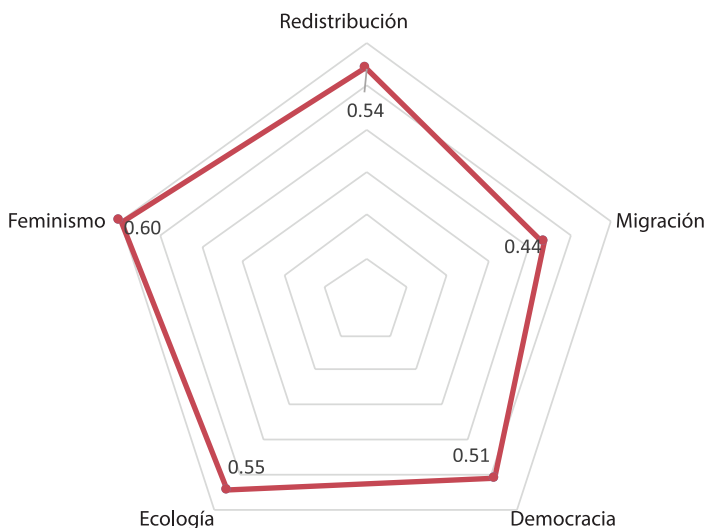
Por eso la anatomía empieza aquí: porque la estrategia militante no puede reducir “el morenismo” a una sola voz, ni dar por sentado que todas esas franjas se moverán juntas.

5.1.1. Familia morenista convergente

La familia 1 es el corazón ideológico del morenismo convergente: un segmento que combina identificación con el gobierno y una orientación programática claramente progresista en casi todos los conflictos.

Si miramos el radar global, se perfila una constelación muy coherente: el puntaje más alto se concentra en redistribución (0,64), seguido muy de cerca por democracia y feminismo (0,63 en ambos casos), luego ecología (0,58) y, algo más atrás, migración (0,52).

Gráfico 5: Radar de la familia morenista convergente



Es decir: se trata de un núcleo firmemente igualitarista, democrático y feminista, con una sensibilidad ecológica por encima de la media general, y una posición más matizada —aunque en conjunto aún inclinada hacia el polo inclusivo— en materia migratoria.

Si descomponemos estos índices, el rasgo dominante es la solidez del bloque redistributivo. En casi todas las preguntas asociadas a este eje, la familia 1 se ubica del lado que afirma que el Estado debe intervenir activamente para corregir desigualdades, gravar con más fuerza a los sectores de mayores ingresos y priorizar políticas que favorezcan a quienes están abajo en la estructura social. No aparece aquí el discurso de la “igualdad de oportunidades” como coartada para desentenderse de la desigualdad de resultados; al contrario, la familia 1 se reconoce explícitamente en una idea de justicia material que exige redistribución efectiva y no solo promesas meritocráticas. Esto la sitúa, dentro del espectro mexicano, en una franja nítidamente antineoliberal.

En democracia, la coherencia es semejante. La familia 1 rechaza con claridad las salidas autoritarias: no valida la figura del “líder fuerte” por encima de las instituciones, ni legitima el recorte de derechos políticos en nombre del orden o de la eficacia. Más bien se decanta por criterios garantistas: respeto a las reglas del juego, defensa de libertades civiles, valoración del voto como mecanismo central de resolución de conflictos y, de forma particularmente importante, reconocimiento de la protesta social como herramienta legítima.

No estamos ante un apoyo acrítico al gobierno “porque es nuestro”, sino ante una sensibilidad democrática que tiende a medir también al propio campo morenista con criterios de participación, rendición de cuentas y ampliación de derechos.

En el eje feminismo, el nivel de adhesión (0,63) indica que no se trata de un simple acompañamiento retórico, sino de un bloque que respalda los puntos gruesos de la agenda de igualdad de género. Las respuestas de esta familia se alinean mayoritariamente con la ampliación de derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, con su presencia paritaria en espacios de decisión y con la crítica a roles tradicionales que subordinan el trabajo y la autonomía femeninas.

De nuevo, no es una convergencia puramente identitaria: el feminismo aparece aquí entrelazado con la redistribución —la idea de que la desigualdad económica y la desigualdad de género se refuerzan mutuamente— y con la democracia —la necesidad de que las mujeres participen en condiciones de igualdad en la definición de lo público—.

El eje ecología (0,58) muestra una sensibilidad ambiental ya claramente inclinada hacia la regulación del mercado y la protección de bienes comunes, aunque algo menos intensa que en redistribución, democracia o feminismo. La familia 1 tiende a aceptar que deben ponerse límites a ciertos proyectos extractivos, admitir regulaciones que encarezcan actividades contaminantes y reconocer que hay costos económicos que vale la pena asumir para evitar daños ecológicos irreversibles.

No obstante, el hecho de que el índice sea levemente menor sugiere una tensión todavía abierta: una parte del segmento sigue sopesando el argumento de empleo e inversión frente a la protección de territorios, lo que marcará un punto de trabajo fino para la militancia en contextos donde el gobierno se vea presionado por proyectos de infraestructura o energía.

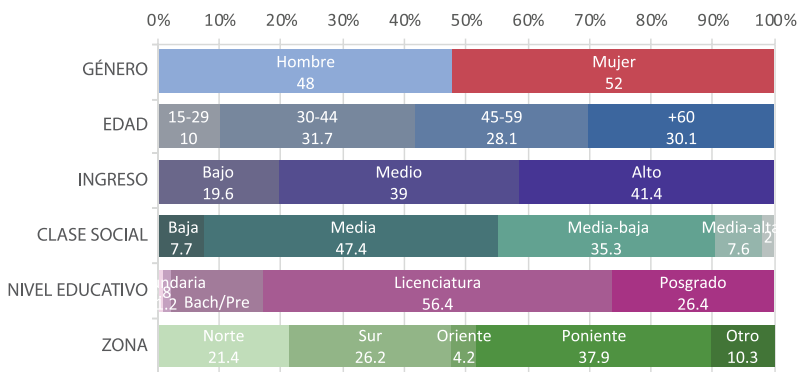
Donde la coherencia se vuelve más frágil es en migración (0,52). Aquí el promedio sigue inclinado hacia posiciones inclusivas, pero mucho más cerca del centro. La familia 1 no es abiertamente xenófoba ni securitaria: tiende a rechazar la idea de que las personas migrantes sean “culpables” del desempleo o de la inseguridad, y muestra cierta apertura a políticas de regularización y acogida. Sin embargo, en varias preguntas aparece un sustrato de preocupación por la

“capacidad” del Estado para absorber flujos migratorios o una predisposición a aceptar controles más duros en frontera si se los envuelve en el lenguaje de la seguridad. Esta ambivalencia es crucial: un núcleo morenista muy sólido en redistribución y derechos puede volverse permeable, en coyunturas críticas, a marcos discursivos que vinculan migración con amenaza o desorden.

En síntesis, la fotografía programática de la familia 1 es la de un bloque articulador: firme en redistribución, democracia y feminismo, razonablemente ecológico, y solo parcialmente resuelto en migración. Es el segmento donde la izquierda tiene más terreno ganado, pero también donde las tensiones entre igualdad interna y fronteras externas se hacen visibles.

En el plano de los anclajes, esta familia aparece como el núcleo típico de la “clase media progresista urbana” que ha sostenido al morenismo, pero con matices que conviene subrayar (Gráfico 6).

Gráfico 6: Anclajes de la familia morenista convergente



Los datos muestran una ligera mayoría de mujeres (52 %) frente a hombres (48 %), una distribución etaria que concentra a la familia en edades adultas (más de tres cuartas partes por encima de los 30 años), una fuerte sobrerrepresentación de ingresos medios y altos, una autopercepción mayoritaria de clase media, niveles educativos muy elevados y una territorialización que se inclina hacia el Poniente y el Sur de la ciudad, sin perder presencia en el Norte.

En género, el equilibrio 48/52 a favor de las mujeres no es una anécdota. Ayuda a entender por qué el componente feminista del índice es tan robusto: esta familia no solo “simpatiza” con las demandas de igualdad, sino que está compuesta en buena medida por mujeres con trayectoria educativa y laboral propia, menos sujetas a la moral conservadora tradicional.

Para la militancia, esto significa que hay una base femenina que no solo apoya, sino que puede empujar a que el proyecto de izquierda no ceda terreno frente a las campañas antifeministas.

En edad, solo el 10 % pertenece al grupo 15-29; el resto se reparte entre 30-44 (31,7 %), 45-59 (28,1 %) y mayores de 60 (30,1 %). Es una familia marcadamente adulta y con un peso muy significativo de personas de 60 y más.

Este envejecimiento relativo del núcleo convergente señala dos cuestiones: por un lado, que el apoyo progresista al proyecto morenista no es patrimonio exclusivo de juventudes precarizadas, sino también de generaciones que vivieron de primera mano el ciclo neoliberal y encuentran en la redistribución un piso de reparación histórica; por otro, que hay un desafío serio de relevo generacional, porque el segmento joven es minoritario y puede ser disputado por otras ofertas si se percibe al morenismo como demasiado institucionalizado.

Los datos de ingreso refuerzan la imagen de una familia ubicada en la parte media y alta de la estructura económica: alrededor de un 19,6 % se ubica en ingresos bajos, frente a un 39 % en ingresos medios y un 41,4 % en ingresos altos. Es decir, más de cuatro de cada cinco integrantes de esta familia viven en hogares que se autoubican por encima del estrato bajo.

Esto encaja con la combinación de redistribución fuerte y democracia liberal: es una franja que, sin ser rica en sentido patrimonial, sí dispone de recursos suficientes para valorar tanto las políticas sociales redistributivas como los equilibrios institucionales que les ofrecen estabilidad y derechos. Desde el punto de vista de la militancia, son aliados indispensables para blindar la progresividad fiscal y el gasto social frente al discurso de “castigar a los exitosos”; pero también un grupo que puede ser tentado por soluciones más moderadas si siente amenazado su estatus.

En clase social autodeclarada, casi la mitad se define como clase media (47,4 %), seguida de un 35,3 % de clase media-baja. La clase baja estricta representa apenas el 7,7 %, la clase media-alta otro 7,6 %, y la clase alta llega apenas a un par de puntos. Esta autopercepción es clave: incluso aquellos que objetivamente podrían estar en posiciones más frágiles tienden a verse a sí mismos como “clase media”, con las aspiraciones y miedos que eso conlleva.

La familia 1, por tanto, no solo demanda redistribución; también quiere que la igualdad se compatibilice con cierto horizonte de movilidad y con la defensa de un estilo de vida propio (consumo cultural, seguridad barrial, servicios urbanos). De ahí la importancia de un discurso de izquierda que vincule fiscalidad progresiva con provisión de bienes públicos de calidad, y no solo con transferencias.

En educación, la foto es contundente: más de la mitad tiene licenciatura (56,4 %) y más de una cuarta parte posgrado (26,4 %); alrededor de un 15,2 % cuenta con preparatoria/bachillerato, mientras que la primaria, la secundaria y la ausencia de estudios formales suman menos de un 3 % en total. Es la familia más escolarizada del mapa, y eso se ve reflejado en su sensibilidad feminista, democrática y ecológica.

Pero la alta escolaridad también explica cierta incomodidad con discursos demasiado antiinstitucionales o puramente plebeyos: una parte de este segmento se reconoce en la retórica del “experto progresista” y puede desconfiar de formas de organización popular que perciba como caóticas. Para la militancia, el reto es aprovechar su capital técnico sin dejar que se traduzca en una tecnocratización del proyecto.

Finalmente, la zona de residencia termina de dibujar el mapa. La familia 1 se concentra sobre todo en el Poniente (37,9 %) y el Sur (26,2 %), con una presencia importante en el Norte (21,4 %), un peso reducido en el Oriente (4,2 %) y un 10,3 % en “otro”³. En términos de Ciudad de México, esto significa que gran parte de este núcleo morenista convergente habita en áreas con mejor infraestructura urbana, mayor acceso a servicios y una densidad más alta de empleos formales y actividades profesionales.

Es decir, no son los márgenes más precarizados los que sostienen esta familia, sino segmentos urbanos relativamente consolidados que han reorientado sus lealtades hacia un proyecto de izquierda nacional-popular.

Lectura política

Desde una perspectiva de estrategia política, la familia 1 es la pieza clave para sostener y profundizar un proyecto de izquierda transformadora. Por un lado, funciona como pivote programático: su combinación de redistribución fuerte, feminismo, democracia y ecología le otorga autoridad simbólica para impulsar desplazamientos progresivos en otras familias más ambiguas.

Si esta familia se moviliza y toma la palabra en el espacio público, puede actuar como “puente” entre sectores populares que demandan justicia material y sectores medios que exigen garantías institucionales y ampliación de derechos. Por otro lado, sus anclajes la convierten en una fuerza organizativa estratégica. La alta escolaridad y la concentración en zonas urbanas con recursos hacen de esta familia un reservorio de cuadros potenciales para sindicatos del sector público, organizaciones feministas, colectivos ambientales, observatorios ciudadanos y dispositivos de comunicación política.

No es un sujeto espontáneamente radicalizado, pero sí uno con capacidad de articular narrativas complejas, traducir demandas populares al lenguaje jurídico institucional y disputar sentidos comunes en medios, redes y espacios académicos.

El riesgo, sin embargo, es doble. Primero, que parte de este segmento se desplace hacia opciones “centro-progresistas” si percibe que el morenismo se

³ Por otro se entenderá, periferias de la CDMX.

vuelve demasiado confrontativo con las clases medias urbanas o descuida la dimensión institucional de la democracia.

Segundo, que su relativa ambivalencia en migración y, en menor medida, en ecología sea aprovechada por la derecha para introducir fisuras internas, jugando con los miedos a la inseguridad, al “desorden” o a la pérdida de confort urbano. La tarea de la militancia no es solo reafirmar la identidad morenista de esta familia, sino radicalizarla en clave solidaria, hilando la redistribución hacia adentro con la solidaridad hacia quienes hoy son tratados como sobrantes o extranjeros.

En resumen, la familia morenista convergente (familia 1) es al mismo tiempo el núcleo duro y el laboratorio avanzado del proyecto: allí donde ya existe una base sólida para la igualdad y los derechos, y donde se pueden ensayar, con respaldo social real, las formas de un nuevo sentido común de izquierda que no tema hablar de impuestos a los ricos, paridad feminista, transición ecológica y hospitalidad frente a la migración.

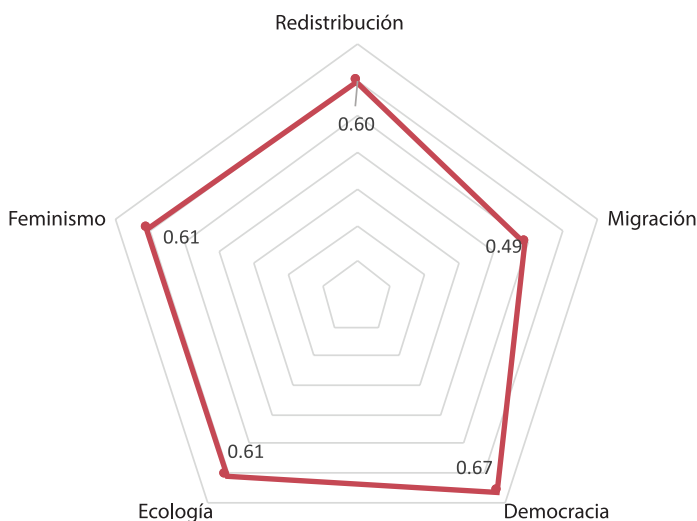
La consistencia y la profundidad de su apoyo serán decisivas para que ese sentido común no sea un paréntesis, sino una transformación duradera del horizonte político mexicano.

5.1.2. Familia morenista divergente en autoidentificación

La segunda familia morenista es, en cierto sentido, el reverso social de la primera. Si la convergente agrupaba al “núcleo duro” de clases medias profesionales que se reconocen de izquierda, la familia 2 reúne a quienes comparten casi todo el paquete programático de la 4T, pero lo hacen desde posiciones sociales más precarias y con una autoidentificación menos nítidamente progresista.

Es un morenismo popular que combina alta sensibilidad democrática y ecológica con un trasfondo material todavía marcado por el ingreso bajo y la vulnerabilidad, y que mantiene reservas en el terreno migratorio (Gráfico 7).

Gráfico 7: Radar de la familia morenista divergente en autoidentificación



En el radar se observa un perfil muy compacto: democracia es el eje más alto, con 0,67; feminismo y ecología se sitúan en torno a 0,61; redistribución llega a 0,60. El único flanco realmente debilitado es migración, que cae a 0,49. Es decir, la mayor parte de la familia se sitúa por encima del punto medio de la escala en casi todos los conflictos, y de manera especialmente marcada en todo lo que tiene que ver con instituciones democráticas, derechos de las mujeres y protección ambiental.

No se trata de un apoyo tibio: la forma del radar indica una apuesta consistente por limitar el poder de las élites, ampliar derechos y frenar el deterioro ecológico, mientras que la distancia en migración sugiere el punto donde el sentido común popular conservador sigue pesando.

El eje más robusto es el democrático. Un promedio de 0,67 implica que, frente a las preguntas que componen este índice (límites al poder presidencial, importancia del voto, relevancia de la división de poderes, valoración de la protesta y las instancias de participación), la familia 2 suele colocarse de manera insistente del lado de la ampliación de controles, de la participación y de la rendición de cuentas.

Comparada con otros segmentos del electorado, esta familia combina un fuerte apoyo al gobierno con una disposición muy poco autoritaria: no concibe la 4T como un cheque en blanco, sino como un proceso que debe seguir siendo vigilado por “la gente de abajo”. Ahí hay un dato clave para la militancia: esta base social no está pidiendo tutela, sino mecanismos efectivos para seguir interviniendo en las decisiones.

En feminismo y ecología, los promedios en torno a 0,61 muestran una adhesión clara —aunque no tan alta como la democrática— a un horizonte de derechos ampliados. En la batería feminista, ello se traduce en una aceptación mayoritaria de la autonomía de las mujeres (incluidos los derechos reproductivos), en el reconocimiento de las violencias específicas que ellas sufren y en una percepción relativamente favorable a las políticas de igualdad sustantiva y de reparto del trabajo doméstico y de cuidados.

No es un feminismo militante, pero sí un feminismo “normalizado”: la idea de que el Estado debe proteger a las mujeres y que las instituciones tienen que corregir desigualdades de género ya forma parte del sentido común de esta familia.

La dimensión ecológica, con un índice prácticamente idéntico al feminista, indica sensibilidades convergentes: preocupación por el agua, por la contaminación, por el deterioro de los territorios, así como apertura hacia regulaciones más estrictas a empresas contaminantes y a proyectos extractivos percibidos como dañinos.

Lo importante aquí es el cruce con la posición material del grupo: no son sectores acomodados que “pueden permitirse” el ecologismo, sino tejidos populares que viven en zonas donde el deterioro ambiental y la precariedad urbana se sienten como problemas cotidianos. El apoyo a la protección ambiental, en este caso, se ancla en experiencias directas de mala calidad del aire, desabasto, inundaciones o falta de áreas verdes.

En redistribución, con un 0,60, la familia 2 se sitúa claramente en el cuadrante igualitarista: hay apoyo a elevar impuestos a los más ricos, a sostener programas sociales universales o al menos amplios, a priorizar el gasto en salud, educación y vivienda, y a considerar legítimo que el Estado intervenga para corregir desigualdades extremas.

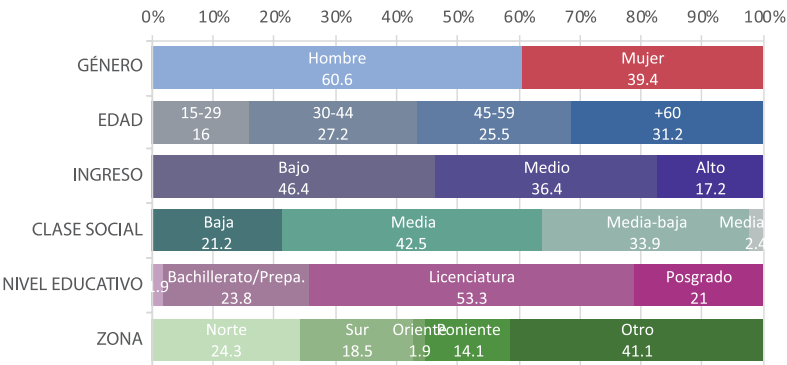
El valor es apenas un poco más bajo que el democrático, pero la coherencia es similar: el imaginario que aparece es el de un Estado fuerte que cobra a los de arriba, protege a los de abajo y amplía servicios públicos. Esto será importante cuando se cruce con sus anclajes de ingreso y clase.

El punto débil aparece en migración, donde el índice baja a 0,49. No se trata de xenofobia abierta, pero sí de una serie de reservas y miedos: desconfianza ante la llegada de migrantes en grandes flujos, temor a la competencia por empleos precarios y servicios saturados, demandas de controles más estrictos en frontera y de criterios de “orden” en el tránsito por el país y la ciudad. La familia 2 se ubica en ese espacio intermedio: no reivindica un cierre total, pero tampoco abraza la posición más garantista; oscila entre cierta simpatía humanitaria y una preocupación fuerte por la seguridad, el empleo y la capacidad de las instituciones locales.

Para la militancia, el mensaje es claro: el conflicto migratorio es el terreno donde más trabajo pedagógico y político hace falta si se quiere evitar que estos sectores sean capturados por discursos punitivos o abiertamente racistas.

Si se mira ahora la estructura social de esta familia, se entiende por qué el perfil ideológico tiene esos matices (Gráfico 8).

Gráfico 8: Anclajes de la familia morenista divergente en autoubicación



En términos demográficos, la familia 2 está más masculinizada que la 1: cerca de 60,6 % hombres frente a 39,4 % mujeres. La edad se desplaza hacia cohortes mayores: solo 16 % se sitúa entre 15 y 29 años, mientras que 27,2 % está en 30-44, 25,5 % en 45-59 y un 31,2 % tiene más de 60 años. Es un morenismo adulto y envejecido, con considerable presencia de personas mayores, que suelen valorar mucho la estabilidad institucional y la previsibilidad de los programas sociales.

Este perfil etario ayuda a entender la altísima valoración de la democracia como “orden con derechos” y también las dudas en migración: quienes han vivido varias crisis y escenarios de violencia tienden a priorizar control y seguridad frente a la “irrupción” de nuevos actores percibidos como potencial amenaza.

En ingreso, la familia 2 se ancla claramente en los estratos bajos. Casi la mitad (46,4 %) se ubica en ingreso bajo, 36,4 % en ingreso medio y solo 17,2 % en ingreso alto. Es, por lo tanto, una familia donde la redistribución no es un principio abstracto, sino una necesidad concreta: acceso a apoyos, programas sociales, subsidios y servicios públicos de calidad para quienes viven al límite mes con mes. La combinación de ingreso bajo con altos índices de apoyo redistributivo y democrático muestra una intuición muy clara: la mejora en las condiciones de vida se percibe como inseparable del fortalecimiento de las instituciones públicas y de la acción del Estado.

Sin embargo, esta precariedad económica no se traduce en baja escolaridad. Al contrario: el nivel educativo está fuertemente “inflado” hacia arriba. Solo un porcentaje muy pequeño permanece en primaria o menos; alrededor de 23,8 % tiene bachillerato o preparatoria, 53,3 % cuenta con licenciatura y 21 % con posgrado. Es un dato crucial: la familia 2 combina ingresos bajos o medios con un capital educativo alto.

Se trata de empleados precarios con estudios, profesionistas mal pagados, trabajadores del sector público y privado que “tienen carrera” pero no necesariamente ingreso alto. Esta tensión entre títulos y bolsillos explica buena parte de la sensibilidad redistributiva y democrática: hay conciencia de derechos, familiaridad con discursos de igualdad y, al mismo tiempo, experiencia directa de las limitaciones estructurales del mercado laboral.

La autoidentificación de clase reproduce esa ambivalencia. Aproximadamente 21,2 % se declara clase baja; 42,5 % se ubica en clase media; 33,9 % en media-baja y apenas un pequeño porcentaje en media-alta. Es la familia que vive la promesa de ascenso social como horizonte abierto pero todavía no realizado. De ahí que mantenga una fuerte adhesión al proyecto redistributivo de la 4T, pero sin discurso explícito de izquierda: nombrarse “clase media” o “media-baja” supone, en parte, conservar una identidad aspiracional, incluso cuando el ingreso es bajo.

Territorialmente, la familia 2 se concentra en espacios periféricos y de borde. En torno a 24,3 % reside en el Norte de la ciudad, 18,5 % en el Sur, 14,1 % en el Poniente y un porcentaje mínimo (1,9 %) en Oriente, mientras que la categoría “Otro” —colonias o municipios periféricos y zonas que no encajan en la cuadrícula clásica— concentra un 41,1 %.

Esto sugiere asentamientos alejados de los centros de poder económico y político, con problemas de movilidad, servicios irregulares y una relación cotidiana con la informalidad y con dinámicas de violencia que atraviesan barrios y transporte. No es casual que justo en este segmento aparezcan más reservas hacia la migración: allí donde los recursos urbanos son estrechos, la llegada de nuevos grupos se vive, muchas veces, como presión adicional sobre servicios ya saturados.

Lectura política

La lectura en clave militante permite ver a la familia 2 como un espacio estratégico. Por un lado, es un núcleo firmemente morenista en términos de conflictos sustantivos: apoya la redistribución, la ampliación de derechos feministas y ecológicos y la profundización democrática.

Por otro lado, su autoidentificación es menos claramente de izquierda y su situación material está marcada por la vulnerabilidad y la experiencia de haber “hecho todo bien” (estudiar, trabajar) sin obtener a cambio estabilidad. Es un

terreno fértil para un discurso de justicia social que conecte la crítica al neoliberalismo con la memoria de las trayectorias trucas y la promesa de completar, por fin, el ascenso social.

Al mismo tiempo, esta familia pide una pedagogía paciente en materia migratoria. No se trata de “reemplazar” sus preocupaciones, sino de articularlas con un enfoque de derechos: mostrar cómo la precariedad y la violencia que viven no son consecuencia de la presencia migrante, sino de decisiones estructurales sobre mercado laboral, seguridad y modelos de ciudad; visibilizar alianzas posibles entre trabajadores locales y migrantes frente a patrones, narco y Estado punitivo; vincular la experiencia cotidiana de discriminación de clase con la discriminación racial y nacional que sufren otros.

Si ese trabajo no se hace, los miedos migratorios pueden convertirse en la cuña por la que penetren discursos de derecha dura.

En suma, la familia morenista divergente en autoidentificación es un bloque popular ilustrado, mayoritariamente masculino y envejecido, con alta formación educativa pero ingresos limitados, asentado en periferias urbanas. Apoya de manera consistente la redistribución, la democracia, el feminismo y la ecología, pero mantiene reservas en migración.

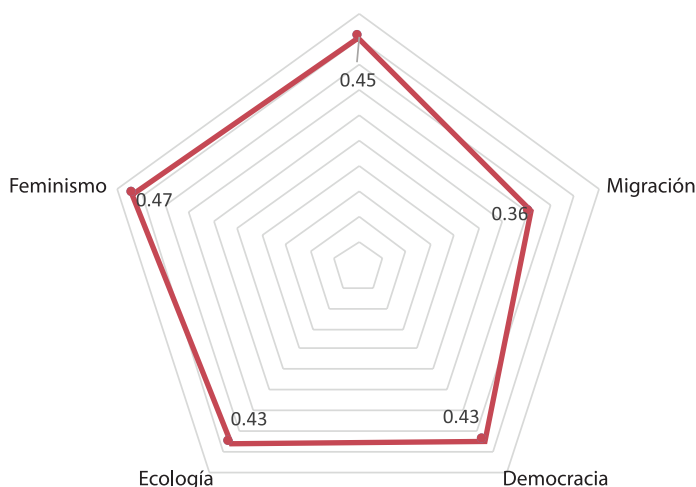
Para la militancia, es un aliado clave y, al mismo tiempo, un laboratorio: allí se juega la posibilidad de traducir la experiencia de la precariedad ilustrada en un compromiso duradero con un proyecto de izquierda que sea, a la vez, profundamente democrático, igualitario y solidario con quienes cruzan fronteras.

5.1.3. Familia morenista divergente en valores

En la arquitectura del bloque morenista, la familia 3 es la primera en la que el mapa de valores empieza a distanciarse de manera nítida del “núcleo duro” progresista descrito en la familia 1. Siguen siendo electoralmente morenistas, pero lo son desde un universo valorativo mucho más tibio y fragmentado.

El pentágono de índices se encoge: todos los puntajes caen respecto de las familias 1 y 2 y ninguno alcanza los niveles de entusiasmo redistributivo, ecológico o feminista que veíamos allí (Gráfico 9).

Gráfico 9: Radar de la familia morenista divergente en valores



Dentro de este conjunto más apagado, los mayores acuerdos relativos se concentran en feminismo (0,47) y redistribución (0,45), mientras que democracia y ecología se sitúan en torno a 0,43 y el punto de mayor distancia con el núcleo progresista es migración, con apenas 0,36.

Si se recorre el radar empezando por redistribución, lo que aparece es una adhesión moderada a la agenda igualitaria. El índice sintetiza las baterías de preguntas sobre impuestos progresivos, gasto social y papel del Estado frente al mercado. En esta familia, el promedio de respuestas respalda la idea de que el gobierno debe intervenir para reducir desigualdades y garantizar derechos básicos, pero sin llegar al entusiasmo redistributivo de las familias 1 y 2.

Dicho de otro modo: hay acuerdo con que “los de arriba” paguen más y con que el presupuesto se oriente a políticas sociales, pero convive con reservas frente a medidas más radicales de control estatal o de confrontación abierta con el gran capital. Es una redistribución “negociada”: suficiente para marcar distancia con el programa abiertamente neoliberal, pero no lo bastante contundente como para sostener reformas estructurales fuertes si se les presentaran como conflictivas.

En migración se encuentra el verdadero punto crítico de esta familia. El índice de 0,36 es el más bajo de los cinco y dibuja una brecha clara respecto de las familias morenistas convergentes. En las baterías de preguntas sobre personas migrantes —derecho a permanecer, acceso a servicios, responsabilidad del Estado frente a la movilidad regional, vínculo entre migración y violencia— tienen a pesar más los argumentos de orden, control y “prioridad nacional” que los de solidaridad y derechos humanos.

No estamos ante un rechazo frontal a toda forma de acogida, pero sí ante un conjunto que se muestra permeable a los discursos que asocian migración con inseguridad o con competencia desleal en el mercado laboral. Para un proyecto que quiera articular una política migratoria garantista, esta es una zona de fricción evidente dentro de su propio campo.

En democracia, el puntaje en torno a 0,43 refleja una posición ambivalente. En las baterías sobre elecciones, división de poderes, controles al Ejecutivo y límites al uso discrecional de la fuerza pública, la familia 3 no se ubica ni en el autoritarismo abierto ni en la defensa entusiasta de las garantías.

Valoran que el gobierno sea elegido en las urnas y reconocen la importancia de ciertos contrapesos, pero son más indulgentes que la familia 1 frente a salidas “de fuerza” o a la concentración de poder si esta se justifica en nombre de la eficacia o de la seguridad. Es, por así decirlo, una democracia instrumental: la apoyan cuando sirve para estabilizar y proteger, más que como un fin normativo en sí mismo.

La ecología se sitúa en un nivel similar. El índice en torno a 0,43 indica que, en los reactivos sobre protección ambiental, límites a megaproyectos extractivos o transición energética, los acuerdos son más fríos que en las familias morenistas convergentes. Hay reconocimiento de que el cambio climático es un problema y de que el Estado debe intervenir para proteger territorios y recursos, pero la disposición a aceptar restricciones fuertes al crecimiento, a la infraestructura o al consumo es limitada.

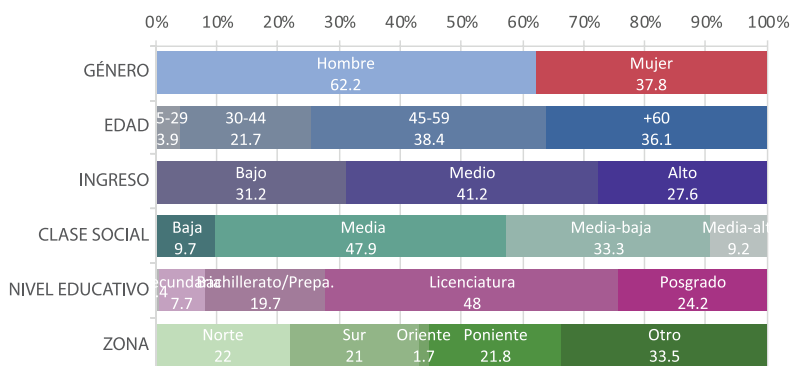
En contextos de conflicto entre empleo inmediato y preservación ambiental tenderán a inclinarse por la primera opción, lo que vuelve más inestable cualquier coalición ecológica que busque apoyarse en este segmento.

El área donde la familia 3 mantiene una posición relativamente más avanzada es feminismo. Con 0,47, el índice sigue siendo más bajo que en las familias 1 y 2, pero destaca dentro del propio pentágono. En las baterías de género aparecen niveles razonables de acuerdo con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a la violencia de género y el reconocimiento de que el trabajo doméstico y de cuidados debe redistribuirse.

Al mismo tiempo, se detectan más reservas frente a cuestiones como la despenalización del aborto, el cuestionamiento de los roles tradicionales o el reconocimiento pleno de derechos sexuales y reproductivos. De nuevo, se trata de un feminismo “moderado”: asume el lenguaje de la igualdad y de la lucha contra la violencia, pero se incomoda ante la agenda más transformadora.

Cuando se cruzan estos perfiles valorativos con los anclajes, la familia 3 adquiere contornos sociológicos muy nítidos. Es, ante todo, un segmento envejecido y fuertemente masculinizado: 62,2 % de hombres y solo 37,8 % de mujeres (Gráfico 10).

Gráfico 10: Anclajes de la familia morenista divergente en valores



La juventud prácticamente desaparece: el tramo de 15 a 29 años aporta apenas el 3,9 % de los casos, mientras que la mayoría se concentra entre los 45 y 59 años (38,4 %) y los mayores de 60 (36,1 %).

No estamos, por tanto, ante la “nueva generación” morenista, sino frente a una franja de votantes mayores, socializados en otros ciclos políticos y que llegan al campo de la izquierda gubernamental con un equipaje de valores más conservadores.

En términos de ingresos, la familia 3 se distribuye entre los estratos bajos (31,2 %), medios (41,2 %) y altos (27,6 %), con un peso relevante de la franja media. Esa estructura se acompaña de una autoidentificación de clase que concentra casi la mitad de los casos en la “clase media” (47,9 %), seguida por la “clase media-baja” (33,3 %) y solo un 9,7 % de “clase baja”.

Es decir, se trata de una familia que se percibe a sí misma como estabilizada, con ciertos recursos, incluso cuando objetivamente una parte importante proviene de ingresos bajos. Esa experiencia de “haber llegado” o de estar en riesgo de descender explica en buena medida la combinación de preferencias: apoyan la redistribución, pero vigilan celosamente cualquier cosa que pueda interpretarse como amenaza a su movilidad lograda.

El nivel educativo refuerza esta lectura. Casi la mitad de la familia 3 cuenta con licenciatura (48 %) y una cuarta parte adicional tiene estudios de posgrado (24,2 %). Solo el 7,7 % se queda en secundaria y un 19,7 % en bachillerato o preparatoria. Es, por tanto, un segmento altamente escolarizado, distinto tanto del votante popular con primaria/secundaria de los cinturones urbanos como de las élites económicas más ricas.

La elevada formación escolar convive, sin embargo, con valores más conservadores en migración y ecología; es un recordatorio de que educación superior

no equivale automáticamente a posiciones progresistas en todos los ejes. Geográficamente, la familia 3 está muy repartida, pero con dos rasgos claros.

Por un lado, el peso del “Otro” (33,5 %) indica una presencia importante en zonas no capturadas por las categorías Norte-Sur-Oriente-Poniente de la ciudad, municipios conurbados o espacios periurbanos donde se mezclan nuevas urbanizaciones, corredores de servicios y barrios antiguos.

Por otro lado, dentro de la ciudad propiamente dicha, el Norte (22 %), el Sur (21 %) y el Poniente (21,8 %) aparecen relativamente equilibrados, mientras que el Oriente apenas aporta un 1,7 %. Es, en suma, una familia más asentada en zonas consolidadas y periurbanas que en los territorios históricamente más populares y precarizados del Oriente.

Esta combinación —hombres de mediana y avanzada edad, educación universitaria, autoidentificados como clases medias, dispersos entre zonas consolidadas y periferias metropolitanas— da sentido al patrón de valores que vimos en el radar. Son sectores que se beneficiaron, en alguna medida, de etapas previas de crecimiento y escolarización, que han encontrado en Morena una respuesta a la crisis del viejo sistema de partidos, pero que no se reconocen plenamente en la agenda transformadora más profunda.

Votan al gobierno porque estabiliza, redistribuye en cierto grado y les ofrece protección frente al retorno del neoliberalismo abierto, pero se inquietan ante cualquier discurso que parezca desbordar demasiado los marcos del orden conocido: migración garantista, ecologismo que toca intereses empresariales, feminismo radical o mecanismos fuertes de participación democrática.

Lectura política

Para la militancia, la tarea con esta familia es doble. Por un lado, es un segmento que ya está “adentro” del bloque morenista y que difícilmente se irá en masa si se le habla con claridad, siempre que no se le presente la transformación como salto al vacío. Son aliados pragmáticos, sensibles a argumentos de estabilidad, seguridad social y reconocimiento de méritos; conviene mostrarles que las reformas redistributivas, ecológicas o feministas no son una amenaza a lo que han conseguido, sino la condición para que sus hijas e hijos no vivan peor. Por otro lado, es también un reservorio donde la derecha puede pescar si logra instalar la idea de que las agendas de derechos y de transición ecológica son un exceso “ideológico” que pone en riesgo la seguridad y la economía.

La clave, entonces, está en politizar los miedos sin descalificar a quienes los sienten. En migración, articular con esta familia un discurso que enlace seguridad con regularización, derechos laborales y política regional, y no con militarización; en ecología, mostrar que la defensa del territorio y del agua protege precisamente las inversiones y patrimonios de estos sectores frente a la depredación especulativa; en feminismo, enfatizar cómo la redistribución del

tiempo de cuidados y la lucha contra la violencia mejoran la vida cotidiana de sus hogares.

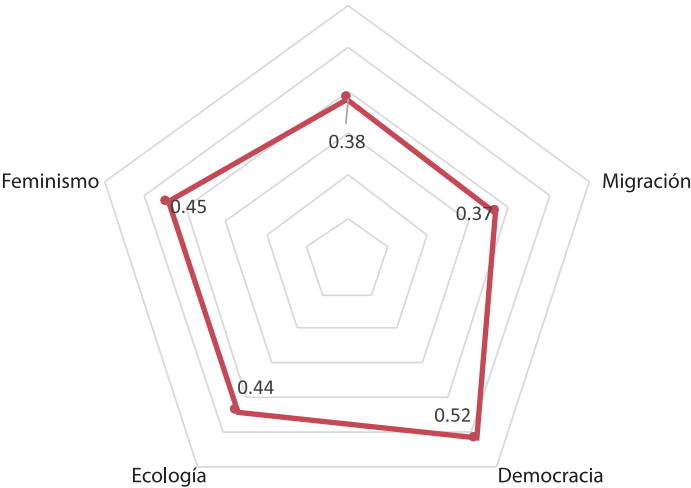
La familia 3 no es un núcleo militante, pero puede ser una base estable si se le ofrece un horizonte de transformación que hable a su experiencia concreta de clases medias envejecidas, educadas y vulnerables a la precarización.

5.1.4. Familia morenista divergente en autoubicación y valores

En la cuarta familia morenista encontramos un electorado que ya no solo se desmarca en la autoubicación ideológica, sino también en parte del repertorio de valores. Es un grupo que sigue anclado en el campo oficialista, pero que combina un apego relativamente fuerte a la idea de “orden democrático” con reservas claras frente a la redistribución económica y frente a la apertura migratoria.

Es, por decirlo de modo esquemático, un morenismo más preocupado por la estabilidad institucional que por la radicalización igualitaria, y con reflejos defensivos en materia de fronteras y jerarquías sociales (Gráfico 10).

Gráfico 10: Radar de la familia morenista divergente en autoubicación y valores



El radar muestra con nitidez esa combinación. El puntaje más alto aparece en democracia (0,52), por encima de todas las demás dimensiones.

En los reactivos que miden preferencias entre liderazgo fuerte y reglas democráticas, respaldo a la participación y a los contrapesos institucionales, esta familia se sitúa claramente del lado democrático. No es un apoyo entusi-

asta ni maximalista, pero sí un umbral sólido: frente a dilemas entre eficacia autoritaria y procedimiento, tiende a elegir el procedimiento.

En segundo plano aparecen feminismo (0,45) y ecología (0,44). En las preguntas sobre igualdad de género, derechos de las mujeres, reparto del trabajo de cuidados o reconocimiento de violencias específicas, la familia 4 se inclina ligeramente hacia posiciones igualitarias: no abraza el feminismo radical, pero tampoco se alinea con el machismo abierto; el promedio se ubica en un feminismo moderado, dispuesto a aceptar reformas siempre que no se presenten como ruptura frontal con los papeles tradicionales.

Algo similar ocurre en ecología: los ítems sobre reconocimiento de la crisis climática, regulación de actividades contaminantes y defensa de bienes comunes ambientales reciben aquí un apoyo intermedio-alto. Hay conciencia de problema y disposición a cierta intervención estatal, aunque sin llegar a un ecologismo de choque con el modelo de desarrollo.

Donde la familia 4 se desmarca más nítidamente del corazón de la base morenista es en redistribución y migración. El índice de redistribución cae a 0,38, por debajo de los valores registrados en las familias convergentes y en la familia 3.

En las preguntas sobre subir impuestos a los más ricos, expansión del gasto social, prioridad del Estado frente al mercado o legitimidad de políticas de transferencia, la respuesta promedio es tibia: se acepta una cierta corrección de las desigualdades, pero se marca distancia frente a medidas fuertes de reparto. Es un igualitarismo contenido, preocupado por no “castigar” demasiado a quienes “se han esforzado”, y temeroso de que la redistribución se traduzca en ineficiencia o clientelismo.

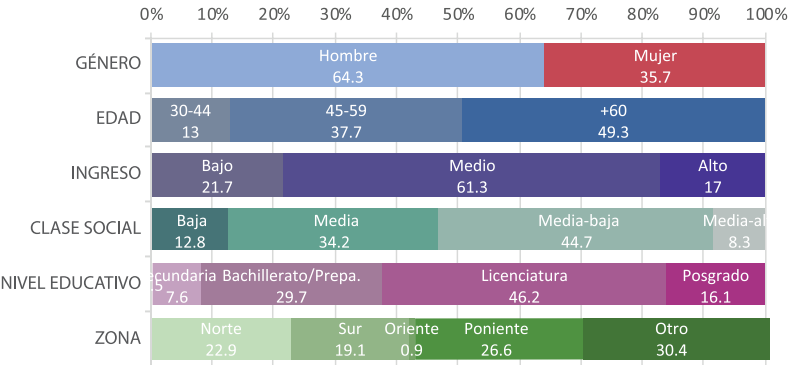
En migración, el índice desciende todavía más, a 0,37. En los ítems que confrontan la idea de las personas migrantes como aportes o como amenaza, la apertura de derechos o el cierre de fronteras, esta familia se inclina claramente hacia posiciones restrictivas: admite que debe evitarse la discriminación abierta, pero prioriza el control y la protección del “adentro” frente a los de fuera.

s una pieza clave para entender cómo la derecha consigue que la agenda migratoria funcione como vector de derechización incluso dentro del electorado gubernamental.

En suma, ideológicamente la familia 4 combina un compromiso democrático relativamente firme con un horizonte material y civilizatorio más conservador: algo de igualdad, algo de derechos de las mujeres y del ambiente, pero sin tocar demasiado el orden social ni abrir demasiado las fronteras.

Pasando a los anclajes, el retrato se vuelve más nítido (Gráfico 11).

Gráfico 11: Anclajes de la familia morenista divergente en autoubicación y valores



En términos de género, la familia 4 es marcadamente masculina: 64,3 % hombres frente a 35,7 % mujeres. Esto ya sugiere una primera clave: se trata de un segmento atravesado por experiencias y miedos típicamente masculinos frente a la redistribución (temor a perder estatus de proveedor) y frente a la migración (percepción de competencia y amenaza).

La estructura etaria refuerza esta lectura: casi la mitad de la familia tiene 60 años o más (49,3 %), y otro 37,7 % se ubica entre 45 y 59 años; solo un 13 % se concentra en el tramo de 30 a 44, y prácticamente no hay juventud. Estamos frente a un morenismo envejecido, compuesto por generaciones socializadas en el viejo PRI tardío, que vivieron la crisis de los ochenta y noventa, y que se aproximan a la Cuarta Transformación más como promesa de estabilidad ordenada que como revolución social.

En el eje de ingreso, la familia se concentra en los estratos medios: 61,3 % declara ingreso medio, 21,7 % bajo y apenas 17 % alto. Es decir, no son los más pobres, pero tampoco las élites acomodadas: son hogares que sienten que “tienen algo que perder” si se radicaliza la redistribución, y que por eso prefieren políticas graduales, subsidios acotados y seguridades antes que confrontaciones abiertas con los sectores de mayor renta.

La autoidentificación de clase es coherente con esta estructura: la categoría más numerosa es la “media-baja” (44,7 %), seguida por la media (34,2 %) y, muy por debajo, la clase baja (12,8 %) y la media-alta (8,3 %). Se trata de una franja liminal: por ingresos y condiciones materiales se parece mucho a los sectores populares, pero subjetivamente se piensa “clase media”, justamente la combinación que suele producir anticuerpos frente a políticas redistributivas demasiado visibles.

El perfil educativo introduce otro matiz relevante. Solo 7,6 % tienen secundaria como máximo, mientras que 29,7 % cuentan con bachillerato o preparatoria, 46,2 % con licenciatura y 16,1 % con posgrado. Es decir, más de seis de cada diez integrantes de la familia 4 tienen educación universitaria o superior.

Este capital educativo ayuda a explicar el apego relativamente alto a los principios democráticos y a cierto feminismo moderado, pero también alimenta un ethos meritocrático que relativiza la necesidad de redistribución fuerte: si “uno salió adelante estudiando”, la desigualdad se percibe más como problema de esfuerzo individual que como estructura. La combinación de clase media-baja objetiva con autopercepción meritocrática es uno de los núcleos duros de esta familia.

En el mapa territorial, la distribución también es sugerente. El 22,9 % reside en el Norte de la ciudad, 19,1 % en el Sur, 26,6 % en el Poniente y 30,4 % en la categoría “Otro”; el Oriente casi no tiene representación, con apenas 0,9 %. Es decir, la familia 4 se concentra en las zonas históricamente menos precarizadas de la Ciudad de México —poniente y parte del norte— y prácticamente no pisa las alcaldías más populares del oriente.

Eso no significa riqueza, pero sí mayor acceso a infraestructura urbana, servicios y redes profesionales. La territorialidad acompaña así el patrón de clase media envejecida y relativamente escolarizada.

Si se cruzan estos anclajes con el perfil ideológico, la familia 4 aparece como un eslabón clave en la cadena de desplazamientos posibles hacia la derecha. No estamos ante un núcleo duro opositor: su identificación morenista y su compromiso democrático los sitúan aún en el campo de la transformación.

Pero su escepticismo frente a la redistribución intensa, su incomodidad con la movilidad migrante y su localización en fracciones medias envejecidas y masculinizadas los vuelven especialmente sensibles a narrativas de “orden responsable”: discursos que prometen mantener programas sociales pero “sin excesos”, endurecer fronteras “para proteger a los de aquí”, o moderar la agenda feminista y ecológica para no “dividir a la sociedad”.

Lectura política

Para la militancia, esta familia plantea un desafío delicado. No se trata de convencerla de la legitimidad de la democracia o de la igualdad de género —allí ya hay un piso compartido—, sino de mostrar que sin redistribución más ambiciosa y sin políticas migratorias y ambientales realmente garantistas, esos mismos valores democráticos se vacían.

La tarea consiste en ligar, en el lenguaje de esta clase media-baja envejecida, la defensa de su seguridad material a la solidaridad con quienes están peor: expli-

car que los programas sociales y la progresividad fiscal no son castigo al mérito, sino condición para que sus hijas e hijos no terminen compitiendo a la baja en un mercado precarizado.

En el terreno migratorio, el reto es dismantlar la ficción de que el cierre de fronteras protege salarios y servicios, y mostrar cómo la explotación de personas migrantes presiona a la baja las condiciones de toda la clase trabajadora.

En suma, la familia 4 condensa una parte importante de las tensiones internas del campo morenista: una base que respalda la democracia y acepta ciertos avances feministas y ecológicos, pero que puede girar hacia proyectos de “orden moderado” si la izquierda no logra traducir la redistribución, la hospitalidad y la protección de los comunes en garantías concretas para su propio bienestar.

Comprender esta familia en detalle es clave para evitar que una parte de la clase media popular que hoy vota a la 4T se convierta mañana en sostén de una restauración conservadora.

5.2. Las familias antimorenistas

Hasta aquí miramos el riesgo clásico: cómo sectores que hoy sostienen a Morena pueden deslizarse hacia vectores de orden, mano dura y antipolítica. La pregunta estratégica que falta es la inversa: ¿qué pasa con quienes hoy están del lado antimorenista? ¿Hay algo ahí que pueda moverse, fracturarse, recombinarse?

¿O estamos frente a un bloque compacto, impermeable?

Las cuatro familias antimorenistas (5 a 8 en nuestra tipología) son la cara invertida de las morenistas: no solo porque no votan a Morena en 2018-2024, sino porque organizan de otro modo la autoubicación ideológica y las posiciones frente a los cinco conflictos que definimos (feminismo, migración, ecología, redistribución, democracia).

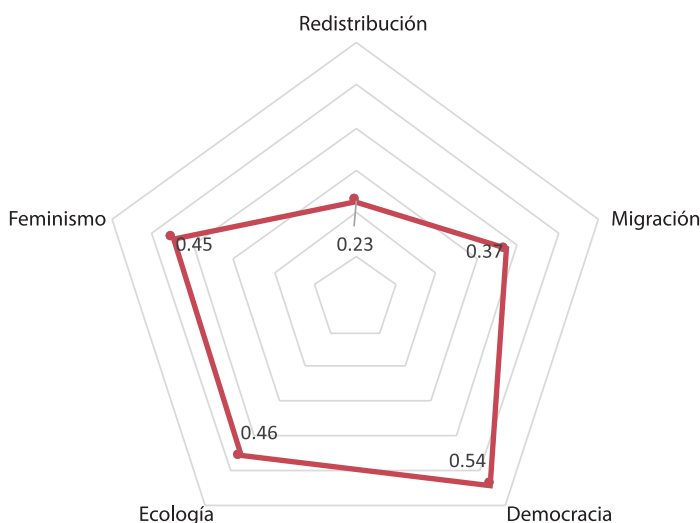
Lo crucial, para la militancia, es dejar de pensar el “antimorenismo” como una sola masa indiferenciada de “enemigos”: también aquí hay vectores ideológico-materiales distintos, con diferentes grados de cierre conservador y diferentes posibilidades de corrimiento hacia la izquierda.

5.2.1. Familia antimorenista convergente

La primera familia claramente antimorenista, pero internamente coherente, es la 5. Aquí la autoidentificación ideológica, la distancia afectiva respecto a Morena y el comportamiento electoral apuntan en la misma dirección: se trata de una derecha urbana, educada y relativamente acomodada que no es “trumpista” ni abiertamente reaccionaria en todos los ejes, pero que sí bloquea de manera sistemática cualquier agenda de redistribución robusta.

Su lugar en el mapa es nítido: en el plano económico se sitúa firmemente a la derecha; en democracia y en parte de la agenda ecológica y feminista se mueve en un liberalismo moderado; en migración mantiene reticencias importantes. Es, por decirlo rápido, la derecha ilustrada que se siente moralmente superior al obradorismo y a la vez incómoda con las expresiones más autoritarias del bloque opositor (Gráfico 12).

Gráfico 12: Radar de la familia antimorenista convergente



Si se miran los valores del radar, el dato más contundente es el índice de redistribución: 0,23. Es, con diferencia, el pilar más conservador del perfil. Debido a cómo está construido el índice, esto supone un rechazo bastante consistente de las medidas que implican gravar fuertemente a los más ricos, ampliar el gasto social financiado con impuestos progresivos o cuestionar la idea de que “cada quien llega adonde llega por su propio esfuerzo”.

En las preguntas de detalle se expresa como oposición a que el Estado intervenga en la propiedad para corregir desigualdades, hostilidad a impuestos extraordinarios sobre grandes patrimonios y una inclinación a culpar a las personas pobres de su situación antes que a estructuras de clase o a la historia.

La familia 5 no quiere un Estado mínimo en abstracto —porque valora ciertos servicios—, pero sí un Estado que no distorsione lo que percibe como un orden “meritocrático”: quien se esforzó, estudió y ahorró siente que merece conservar sus activos sin ser obligado a sostener a “otros”.

El segundo flanco problemático para la izquierda es el de migración, con un índice de 0,37. No es el radicalismo xenófobo de otros segmentos, pero sí un

consenso en torno a la idea de que las personas migrantes compiten por empleos, presionan los servicios públicos y pueden asociarse con problemas de seguridad.

En las preguntas específicas esto se traduce en una predisposición a aceptar controles estrictos en frontera, a cuestionar la regularización amplia o el acceso pleno a derechos políticos de quienes llegan, y en una empatía condicionada: se reconoce el drama humanitario, pero se insiste en que “primero está la gente de aquí”. Es una sensibilidad que combina cosmopolitismo retórico (les incomoda verse a sí mismos como racistas) con un cálculo muy material sobre el mercado laboral y la estabilidad de su propio entorno urbano.

En cambio, en democracia la familia 5 se sitúa claramente por encima de la media con un 0,54, el valor más alto del radar. Es un electorado que valora la alternancia, la división de poderes, los contrapesos y las reglas procedimentales. Tiende a rechazar abiertamente la idea de un “líder fuerte” que se salte el Congreso, es muy refractario a justificar golpes militares aun en escenarios de crisis, y concede importancia a instituciones autónomas, tribunales constitucionales y organismos electorales profesionales.

Hay, sin embargo, una tensión importante: esa defensa de la institucionalidad democrática se vuelve selectiva cuando las instituciones son percibidas como capturadas por Morena; ahí se abre la puerta a normalizar recursos de “resistencia” que bordean la desobediencia elitista, pero incluso en esos casos la justificación se formula en nombre de la Constitución y no contra ella. Políticamente, esta familia encarna la subjetividad que permite a la derecha revestirse de protectora de la democracia frente a un gobierno que identifica como populista.

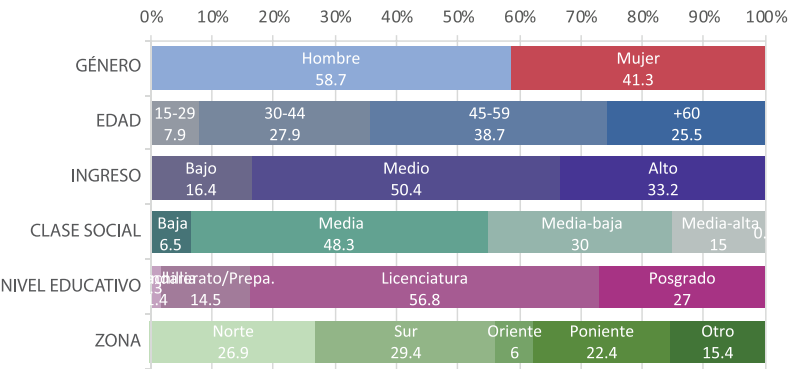
Los índices de ecología (0,46) y feminismo (0,45) completan el cuadro. En materia ecológica el valor indica una sensibilidad real frente al deterioro ambiental y el cambio climático, pero filtrada por criterios de costo y eficiencia. Las personas de esta familia suelen aceptar la necesidad de regulaciones ambientales, medidas de protección de áreas naturales y transición energética, pero rechazan frontalmente todo lo que parezca amenazar su estilo de vida urbano —automóvil, vuelos, consumo de clase media— o cargar el peso de la transición sobre las empresas locales mientras las grandes corporaciones globales negocian excepciones. Aparecen con fuerza formulaciones del tipo “sí al medio ambiente, pero sin frenar el crecimiento” o “primero hay que ordenar al Estado para que no desperdicie recursos antes de subir impuestos verdes”.

En el eje feminista el 0,45 describe una postura de derechos parcialmente asumidos y parcialmente bloqueados. La familia 5 se muestra mayoritaria a favor de la igualdad salarial, el reparto más equitativo de los cuidados, la penalización de la violencia de género y la presencia de mujeres en cargos de poder.

Al mismo tiempo, el apoyo al derecho al aborto, a una educación sexual integral no tutelada por la familia o al reconocimiento pleno de orientaciones e identidades disidentes es mucho menos robusto. En las respuestas detalladas se ve una frontera clara: se acepta una agenda de igualdad “respetable” que no altere en exceso el núcleo familiar tradicional ni cuestione la centralidad del trabajo remunerado como criterio de ciudadanía plena. El resultado es un feminismo liberal moderado, que sirve tanto para desmarcarse del conservadurismo abiertamente reaccionario como para marcar distancia respecto del feminismo popular y radical que acompaña al obradorismo en otros segmentos.

Si pasamos a los anclajes, la familia 5 revela una estructura social muy coherente con este perfil de derecha liberal (Gráfico 13).

Gráfico 13: Anclajes de la familia antimorenista convergente



En términos de género, hay una mayoría masculina clara: 58,7 % de hombres frente a 41,3 % de mujeres. No es una brecha abismal, pero sí suficiente para sugerir que las experiencias masculinas de competencia en el mercado de trabajo, ascenso profesional y propiedad pesan un poco más que las trayectorias feminizadas de precariedad y cuidados.

Matiza, sin embargo, el hecho de que más de cuatro de cada diez integrantes son mujeres: no estamos ante una derecha exclusivamente masculina, sino ante un campo mixto donde sectores de mujeres urbanas y educadas comparten el rechazo a la redistribución y se identifican más con una agenda de autonomía individual que con una de justicia social.

La estructura por edades está fuertemente concentrada en las cohortes centrales. Apenas el 7,9 % tiene entre 15 y 29 años, mientras que el bloque de 30 a 44 representa ya el 27,9 %, el de 45 a 59 alcanza el 38,7 % y el grupo de 60 años o más suma otro 25,5 %. Es decir, casi dos tercios son personas de 30 a 59 años en plena vida laboral, y un cuarto son mayores que miran el sistema desde la perspectiva de lo acumulado.

La escasez de juventud es consistente con un universo donde la apuesta por la meritocracia ya fue relativamente exitosa —quienes no lograron insertarse bien tienden a migrar a otras familias— y donde el miedo a perder lo conseguido pesa más que el deseo de transformar el orden existente.

Los datos de ingreso confirman esta lectura. Solo el 16,4 % se ubica en ingreso bajo, mientras que la mitad (50,4 %) declara ingreso medio y un 33,2 % se ubica en ingreso alto. En otras palabras, más de ocho de cada diez pertenecen a sectores que, en la escala económica de la ciudad, pueden considerarse medios y altos.

Cuando se cruzan estos datos con la autopercepción de clase, la imagen se hace aún más nítida: 48,3 % se define como clase media, 30 % como clase media-baja y 15 % como clase media-alta; la clase baja apenas suma 6,5 %. No es una derecha oligárquica de gran empresariado, sino la derecha típica de clases medias consolidadas que sienten que pagan demasiado por un Estado poco eficiente y perciben que el obradorismo se inclina a favor de quienes “no aportan”.

El nivel educativo es uno de los anclajes más contundentes. La proporción de personas con licenciatura alcanza el 56,8 %, y el posgrado suma otro 27 %. Entre ambas categorías, más de ocho de cada diez cuentan con educación superior completa. El bachillerato o preparatoria se queda en torno al 14,5 %, la secundaria apenas aparece y la ausencia de estudios formales es residual.

Esta sobrerrepresentación de titulados universitarios y de posgrado es clave para entender su subjetividad política: se trata de grupos que se reconocen a sí mismos como “formados”, habituados a decidir en entornos profesionales, con capital cultural para consumir medios y discursos sofisticados, y que tienden a leer la intervención igualadora del Estado como una amenaza a las recompensas del esfuerzo educativo. De ahí que el rechazo a la redistribución se formule muchas veces en términos morales: defender los recursos propios aparece como defender la justicia del esfuerzo.

Territorialmente, la familia 5 está distribuida en la ciudad, pero con un sesgo relativamente claro. El Norte concentra el 26,9 %, el Sur el 29,4 %, el Poniente el 22,4 % y el Oriente apenas el 6 %, mientras que la categoría “Otro” —que reúne zonas periféricas o difíciles de encasillar— suma un 15,4 %. La infrarrepresentación del Oriente es importante: se trata, justamente, de la zona más popular y precarizada de la Ciudad de México.

En cambio, el peso relativo del Sur, el Norte y el Poniente sugiere una fuerte presencia en delegaciones de clase media consolidada y sectores profesionales: zonas con servicios urbanos relativamente estables, oferta educativa privada y acceso a empleo formal. No es casual que desde ahí se organicen muchos de los circuitos ciudadanos que protestan contra Morena en nombre de la defensa de la ciudad o de las instituciones.

Lectura política

Desde el punto de vista de la militancia, esta familia es probablemente el núcleo duro de la derecha liberal-antimorenista. No es el enemigo “fascista” en el sentido clásico, pero sí un adversario estratégico porque posee recursos, redes y legitimidad social para fijar sentido común.

De aquí salen muchos cuadros medios de organizaciones civiles, académicos críticos, líderes vecinales y profesionales que ocupan el espacio público con un discurso de “responsabilidad fiscal”, “defensa de la democracia” y “modernidad cosmopolita” que puede resultar atractivo para sectores indecisos.

Con un índice de redistribución tan bajo, es poco realista pensar en convertirla en base social de un proyecto de izquierda redistributiva; cualquier intento de hacerlo a través de concesiones programáticas puede terminar diluyendo la orientación igualitaria del propio proyecto.

Sin embargo, eso no significa que la izquierda deba renunciar a disputarles todos los ejes. En democracia, ecología y, en parte, feminismo, hay terreno para mostrar que son justamente las políticas redistributivas y de ampliación de derechos las que permiten que la democracia no quede capturada por las elites, que la transición ecológica no recaiga solo sobre los de abajo y que las mujeres populares no paguen el costo de la igualdad de otras.

El desafío consiste en desarmar la narrativa meritocrática que sostiene su rechazo a la redistribución, mostrando que el trayecto educativo y profesional de muchos integrantes de esta familia ha sido posible gracias a bienes públicos contruidos colectivamente, y que el mantenimiento de esos bienes exige contribuir más desde quienes más tienen.

Al mismo tiempo, es crucial evitar que esta familia monopolice el lenguaje de la “defensa de la democracia”: si la 4T cede ese terreno, esta derecha ilustrada aparecerá como única garante de las libertades, aun cuando su proyecto económico profundice desigualdades.

En síntesis, la familia 5 encarna un antimorenismo convergente y estable, anclado en clases medias y altas educadas, con posiciones económicas claramente regresivas y con un liberalismo selectivo en derechos. Para la militancia, más que un campo prioritario de conversión, es un bloque que hay que conocer bien para neutralizar su capacidad de imponer agenda y para evitar caer en su trampa: aceptar una democracia recortada al tamaño de sus privilegios.

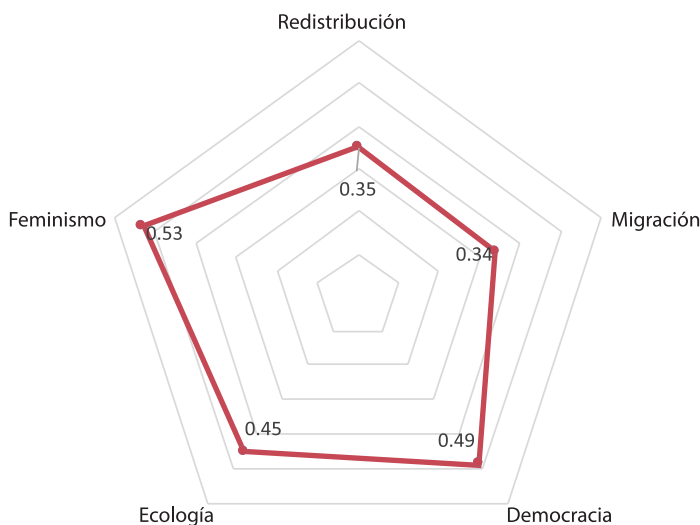
5.2.2. Familia antimorenista divergente en autoubicación

La sexta familia de la tipología es, junto con la quinta, parte del bloque abiertamente antimorenista, pero con un matiz decisivo: aquí el rechazo a Morena co-

existe con una autoubicación ideológica que no se reconoce como “de derecha pura”, sino más bien como centro con componentes progresistas, sobre todo en torno a los temas de género.

Es una familia atravesada por una tensión entre un voto o alineamiento opositor muy claro y un repertorio de valores que no calza del todo con el polo conservador clásico. Por eso la llamamos “antimorenista divergente en autoubicación”: su comportamiento político se sitúa en un extremo, mientras que su autoimagen se quiere algo más moderada o incluso parcialmente progresista (Gráfico 14).

Gráfico 14: Radar de la familia antimorenista divergente en autoubicación



En términos de los cinco conflictos, el rasgo más distintivo es el feminismo. Con un índice de 0,53, esta familia mantiene una posición relativamente elevada para un espacio opositor: hay un nivel apreciable de acuerdo con la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con el reconocimiento de la violencia machista y con la ampliación de libertades en materia de vida íntima y sexual. No estamos ante un núcleo militante de la ola feminista, pero sí ante un segmento donde las consignas de igualdad, autonomía y derechos de las mujeres no generan rechazo de entrada y, en buena medida, son sentido común compartido.

El segundo eje fuerte, aunque algo por debajo, es el ecológico, que alcanza 0,45. La preocupación por el cuidado ambiental, la regulación de las empresas contaminantes y la defensa de bienes comunes como el agua o el territorio tiene un peso real, pero menos articulado políticamente. Se reconoce el problema, se asume que hay que hacer algo, pero sin que ello se convierta en criterio central de posicionamiento frente a los gobiernos.

La democracia se sitúa en 0,49, un valor intermedio: esta familia expresa un apoyo razonable a las reglas del juego democrático, a las libertades civiles y a la necesidad de controles al poder, pero deja la puerta abierta a discursos antipolíticos cuando se trata de criticar la “corrupción” o la “ineficiencia” del gobierno en turno . No es un grupo abiertamente autoritario, pero tampoco un núcleo fuertemente garantista.

En contraste, las posiciones más débiles se concentran en redistribución (0,35) y migración (0,34). El bajo puntaje redistributivo indica una fuerte desconfianza hacia la expansión del Estado social: hay poca adhesión a impuestos más altos para los más ricos, a la idea de que el gobierno deba intervenir de forma activa para reducir desigualdades o a políticas robustas de transferencias.

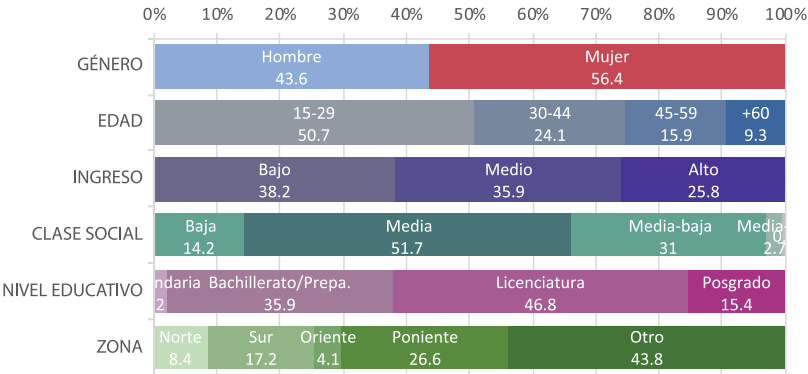
La clave aquí no es tanto una defensa doctrinaria del mercado, sino una mezcla de escepticismo y temor: se percibe que los recursos públicos se desperdician, que los programas sociales son clientelares o que “mantienen” a quienes no trabajan.

En migración, el índice bajo expresa una clara preferencia por controles estrictos a la entrada de personas extranjeras, la prioridad absoluta al empleo y la seguridad de “los de aquí” y una fuerte sensibilidad frente a discursos que asocian migración con crimen o desorden. En esta familia, la solidaridad tiende a detenerse en las fronteras nacionales.

En síntesis, la silueta general del radar combina un feminismo relativamente robusto con una ecología moderada, un compromiso democrático ambivalente y una clara resistencia tanto a la redistribución económica como a la apertura migratoria. Es un antiformalismo de izquierda en género combinado con un sentido común de derecha en economía y fronteras.

Pasemos ahora a los anclajes que sostienen este perfil (Gráfico 15).

Gráfico 15: Anclajes de la familia antimorenista divergente en autoubicación



Sociodemográficamente, la familia 6 está claramente feminizada: alrededor del 56 % son mujeres frente a un 44 % de hombres. Este sesgo de género ayuda a explicar el nivel relativamente alto del índice feminista: no estamos ante un antimorenismo exclusivamente masculino ni machista “duro”, sino ante un espacio donde muchas mujeres jóvenes y adultas, que han experimentado de forma directa la precariedad, la violencia o la sobrecarga del trabajo de cuidados, son hostiles a Morena pero al mismo tiempo reivindican con fuerza el lenguaje de los derechos y de la igualdad de género.

El rasgo más contundente, sin embargo, es la estructura etaria. Más de la mitad de la familia se concentra en el tramo de 15 a 29 años (algo más del 50 %), y otro cuarto largo se ubica entre 30 y 44 años; los mayores de 60 apenas superan el 9 %. Es, en rigor, la familia más joven del bloque antimorenista.

Este dato es crucial: estamos frente a una juventud opositoramente politizada, atravesada por la cultura digital, por la expansión de discursos feministas y ecológicos, pero también por la inseguridad, la precariedad laboral y el descrédito de la política institucional. Que combine feminismo alto con redistribución baja no es una contradicción: expresa una subjetividad juvenil liberal-igualitaria en derechos, pero con poca confianza en que el Estado sea la palanca para mejorar materialmente la vida.

En términos de ingreso, la familia se distribuye entre estratos bajos y medios, sin hegemonía de los más acomodados: aproximadamente el 38 % se declara de ingreso bajo, el 36 % en ingreso medio y el 26 % en ingreso alto. Esto la diferencia de la élite abiertamente conservadora: aquí hay mucha gente que no vive en la abundancia, que conoce la inflación y la inestabilidad, pero que no ve en las políticas redistributivas del gobierno una solución eficaz.

La autopercepción de clase va en la misma línea: una mayoría se reconoce como clase media (alrededor de 52 %), mientras que una proporción importante se ubica en la clase media-baja y solo una fracción menor en la clase baja. Es una juventud que se piensa “de clase media” aun cuando muchos de sus ingresos son frágiles, y que defiende esa posición intermedia más por miedo al descenso que por confianza en el ascenso colectivo.

El nivel educativo refuerza este perfil aspiracional. Aunque todavía hay un segmento con escolaridad máxima en bachillerato, el bloque central se compone de personas con licenciatura (casi la mitad) y un contingente significativo con estudios de posgrado. Es decir, una juventud mayoritariamente universitaria o en tránsito hacia ello, con expectativas laborales altas, habituada a consumir medios digitales e ideologías globalizadas, y que sin embargo no ve en el proyecto morenista una oferta creíble para su futuro profesional.

El desfase entre su capital educativo y la precariedad del mercado de trabajo urbano es un caldo de cultivo perfecto para un feminismo crítico de las violencias

cotidianas, pero también para un resentimiento hacia políticas que identifican como “para otros” (beneficiarios de programas, grupos vulnerables, migrantes) y no para quienes “se esforzaron” en estudiar.

Territorialmente, la familia 6 se concentra en zonas urbanas de clase media y en espacios residenciales relativamente consolidados. La categoría “Otro” absorbe cerca de la mitad del grupo, seguida por el Poniente y en menor medida el Sur de la ciudad, mientras que el Norte y el Oriente tienen pesos reducidos.

Esto sugiere una implantación fuerte en colonias y municipios con cierta infraestructura, acceso a servicios y un mercado de trabajo más diversificado, pero también con altos niveles de segregación y miedo al “desorden” asociado a la expansión periférica y a la pobreza. Desde esos enclaves, la retórica de “orden”, “mérito” y “seguridad” resulta especialmente atractiva cuando se formula contra un gobierno percibido como caótico o indulgente con la delincuencia.

Lectura política

La lectura política para la militancia es exigente. Esta familia no es un bloque homogéneo de derecha dura que pueda darse por perdido. Por un lado, su feminismo relativamente robusto y su sensibilidad ecológica abren vetas evidentes para la interpelación desde una izquierda que articule con claridad derechos, cuidados y justicia climática. Hay un espacio real para disputar el sentido común de muchas mujeres jóvenes que rechazan a Morena pero reivindican la autonomía sobre su cuerpo, repudian la violencia patriarcal y quieren vivir en ciudades menos hostiles y contaminadas.

Por otro lado, su rechazo a la redistribución y su dureza frente a la migración están anclados en experiencias muy concretas de precariedad y miedo: temor a perder lo poco logrado, a ver saturados los servicios públicos, a que la criminalidad desborde sus barrios.

La tarea, entonces, no es moralizar ni descartar, sino construir puentes entre sus demandas legítimas y un horizonte de izquierda que no renuncie a la igualdad. Eso implica, por ejemplo, mostrar que el combate a la violencia machista exige financiamiento y políticas públicas robustas, que la transición ecológica solo será posible con redistribución de poder y riqueza, y que la seguridad cotidiana no se garantiza con xenofobia ni con cárceles, sino con trabajo digno, tejido comunitario y control democrático de las fuerzas armadas.

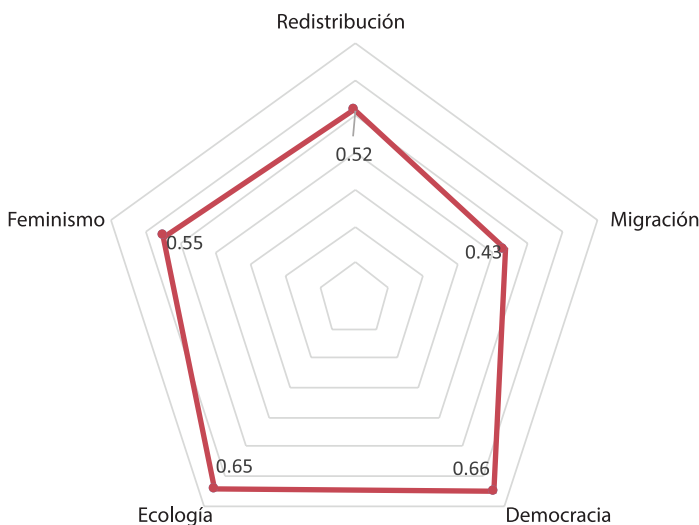
Si la izquierda logra hablar ese idioma –el de una juventud femenina, urbana y formada que quiere seguridad sin autoritarismo, igualdad sin clientelismo y futuro sin destrucción ambiental–, la familia 6 puede dejar de ser simplemente antimorenista y convertirse en un terreno en disputa para un proyecto emancipador más amplio que Morena.

5.2.3. Familia antimorenista divergente en valores

La familia 7 es quizá la más paradójica del bloque antimorenista. Se trata de un segmento que se define y vota contra Morena, pero que en casi todos los conflictos de valores aparece alineado con posiciones progresistas o, al menos, claramente democráticas y ecologistas.

No es el corazón duro de la derecha mexicana, sino un antimorenismo “de principios”: una fracción urbana, relativamente educada, que rechaza al gobierno pero defiende un horizonte normativo muy parecido al que Morena dice encarnar. Esta tensión entre identidad política y valores sustantivos es el rasgo estratégico de la familia 7 (Gráfico 16).

Gráfico 16: Radar de la familia antimorenista divergente en valores



En el radar destacan en primer lugar democracia y ecología, con puntajes muy altos, en el entorno de 0,66 y 0,65. Esto significa que, ante las distintas preguntas sobre pluralismo, división de poderes, derechos de la oposición, libertades civiles o rechazo a salidas autoritarias, esta familia se sitúa claramente del lado garantista.

De manera consistente, esta familia tiende a priorizar controles al poder ejecutivo, defensa de la prensa crítica y respeto a reglas del juego incluso cuando “ganan los otros”. Es un antimorenismo que no busca sustituir un personal gobernante por otro sin tocar las reglas, sino reforzar los candados democráticos frente a cualquier mayoría.

Ese énfasis se refuerza con la sensibilidad ecológica: el índice de ecología indica que una amplia mayoría prefiere regulaciones ambientales estrictas aunque

encarezcan ciertos productos, limita el extractivismo urbano y periurbano, y valora la protección de áreas verdes y cuerpos de agua por encima de la lógica del “desarrollo a toda costa”. En otras palabras, la familia 7 combina un constitucionalismo fuerte con una crítica a la devastación ecológica que ha acompañado los proyectos urbanos y de infraestructura, tanto de gobiernos anteriores como del obradorismo.

El tercer punto fuerte es feminismo, con un valor alrededor de 0,55. Aquí no se trata de un núcleo vanguardista, pero sí de un bloque nítidamente más igualitarista que la media nacional: hay apoyo mayoritario a la igualdad de género en el trabajo y en la política, rechazo a los roles rígidos “la mujer en la casa, el hombre proveedor” y mayor tolerancia hacia las diversidades sexuales.

Donde las resistencias persisten es en los temas donde, en todo el país, se acumulan más tensiones: interrupción voluntaria del embarazo, educación sexual en escuelas o reconocimiento pleno de familias no heterosexuales. La familia 7 tiende a dividirse en estos puntos, pero sin retroceder a posiciones abiertamente reaccionarias; más bien oscila entre un feminismo liberal de derechos y una incomodidad respecto a los cambios más acelerados en los códigos culturales.

En redistribución el índice ronda 0,52: ligeramente por encima del umbral neutro, pero lejos de la radicalidad igualitaria de las familias morenistas 1 y 2. Esta posición expresa una sensibilidad socialdemócrata templada: se acepta que el Estado intervenga para reducir desigualdades y financiar servicios públicos, se ve con buenos ojos que quienes más tienen paguen más impuestos, pero se mantiene una desconfianza fuerte hacia el gasto público “sin controles”, los programas clientelares o los monopolios estatales.

Dicho de otro modo, la familia 7 no apuesta por un Estado mínimo, pero sí por un Estado acotado, regulado y transparente, más parecido al imaginario de un “buen gobierno” tecnocrático que al discurso plebeyo del obradorismo.

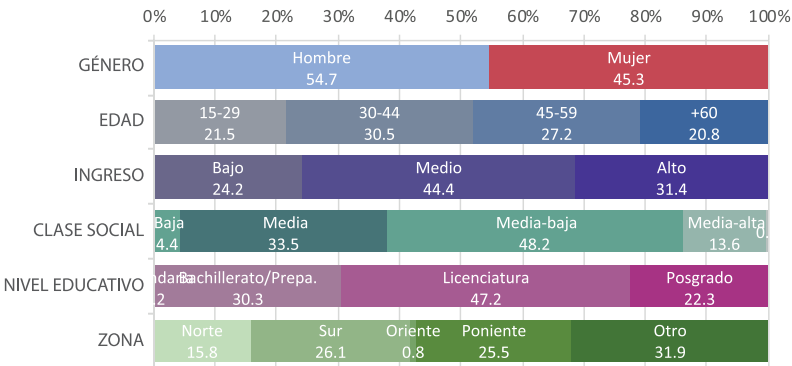
La verdadera fisura aparece en migración, donde el índice desciende hacia 0,43. Sin llegar a los niveles duros de rechazo de las familias claramente derechistas, aquí se detecta un giro restrictivo: crece la preocupación por la inseguridad asociada (equivocadamente) a las personas migrantes, se pide mayor control fronterizo y se valora que “primero se atienda a los mexicanos” antes que a quienes cruzan el país.

No es un rechazo absoluto ni abiertamente xenófobo, pero sí un punto donde aflora un nacionalismo defensivo y cierta fatiga frente a la crisis migratoria permanente que atraviesa México. Para la militancia, esta será la esquina más delicada si se busca disputar políticamente a esta familia.

En conjunto, entonces, la familia 7 dibuja un perfil de antimorenismo democrático-ecologista, con sensibilidad feminista moderada, redistribución templada y un punto débil en la agenda migratoria.

Los anclajes acentúan esta lectura (Gráfico 17).

Gráfico 17: Anclajes de la familia antimorenista divergente en valores



En términos de género, la familia está ligeramente masculinizada: 54,7 % de hombres frente a 45,3 % de mujeres. No estamos ante un bastión exclusivamente masculino, pero sí ante un segmento donde la experiencia de la “clase media trabajadora” masculina, muchas veces precarizada pero profesionalizada, pesa un poco más.

Por edades, el grupo es intergeneracional pero con clara concentración en los tramos adultos: 21,5 % tiene entre 15 y 29 años, 30,5 % entre 30 y 44, 27,2 % entre 45 y 59 y 20,8 % supera los 60 años. Es decir, predominan las generaciones que han vivido tanto el ciclo neoliberal de los noventa como el giro obradorista, y comparan críticamente ambos momentos.

El eje de ingreso confirma el lugar de esta familia en el mapa de clases urbanas: 24,2 % se ubica en ingreso bajo, 44,4 % en medio y 31,4 % en alto. La masa principal está en el centro de la distribución, pero con una cola alta importante: casi un tercio se sitúa en los estratos superiores.

Cuando se cruza con la autopercepción de clase, aparece un patrón afinado: solo 4,4 % se define como “clase baja”, mientras 48,2 % se ubica en “clase media-baja”, 33,5 % en “clase media” y 13,6 % en “clase media-alta”. Este autodiagnóstico es coherente con una experiencia de movilidad: familias que, aunque provienen de orígenes populares, han logrado cierta estabilidad, y que justamente por eso desconfían de políticas que perciben como “desordenadas” o “improvisadas”, pero también recelan de la derecha oligárquica tradicional.

El nivel educativo es uno de los rasgos más marcados de la familia 7. La secundaria apenas reúne una fracción mínima; el bachillerato concentra alrededor del 30 %, la licenciatura llega a 47,2 % y el posgrado a 22,3 %. Sumar licenciatura y posgrado implica que cerca de siete de cada diez personas de esta familia cuentan con educación superior.

No es solo “clase media” en términos de ingreso: es, sobre todo, una franja fuertemente escolarizada, con capital cultural elevado, acostumbrada a consumir información, debatir y evaluar críticamente la gestión gubernamental. Este dato ayuda a entender por qué la agenda democrática y ecológica tiene tanto peso: son sectores que han internalizado el lenguaje de los derechos, del cambio climático, del urbanismo sustentable y de la igualdad de género, aunque no necesariamente lo articulen con una adhesión al proyecto morenista.

Territorialmente, la familia 7 se distribuye de manera bastante homogénea en el espacio urbano, pero con algunos matices importantes. El Norte y el Sur concentran 15,8 % y 26,1 % respectivamente; el Poniente agrupa 25,5 %, mientras que la categoría “Otro” llega a 31,9 %, signo de trayectorias residenciales más móviles o zonas menos típicas en la polarización clásica norte-sur de la ciudad. El Oriente, en cambio, es casi inexistente (0,8 %).

Esto confirma que la familia 7 no está anclada en los territorios populares del oriente capitalino —donde la base morenista es más densa— sino en zonas mixtas y en barrios de clase media consolidada, muchos de ellos hoy afectados por procesos de encarecimiento, gentrificación o conflictos ambientales.

Lectura política

Desde el punto de vista estratégico, la familia 7 es uno de los terrenos más fértiles para una política de izquierda que quiera salir de la lógica “amigo-enemigo” polarizada. Su antimorenismo no nace de un rechazo a la redistribución ni de una nostalgia por el viejo régimen priísta-panista, sino de la percepción de que el obradorismo ha administrado mal la promesa democrática, ha tolerado o reproducido prácticas clientelares y ha descuidado ciertos equilibrios institucionales.

Al mismo tiempo, sus valores en feminismo, ecología y democracia están mucho más cerca del horizonte de una izquierda renovada que de la agenda de las derechas empresariales y conservadoras.

La tarea de la militancia no es “convertirlos” a Morena, sino mostrar que es posible un proyecto de transformación que combine redistribución más decidida, radicalización democrática, justicia de género y transición socioecológica, sin caer ni en el cinismo tecnocrático ni en el personalismo plebiscitario.

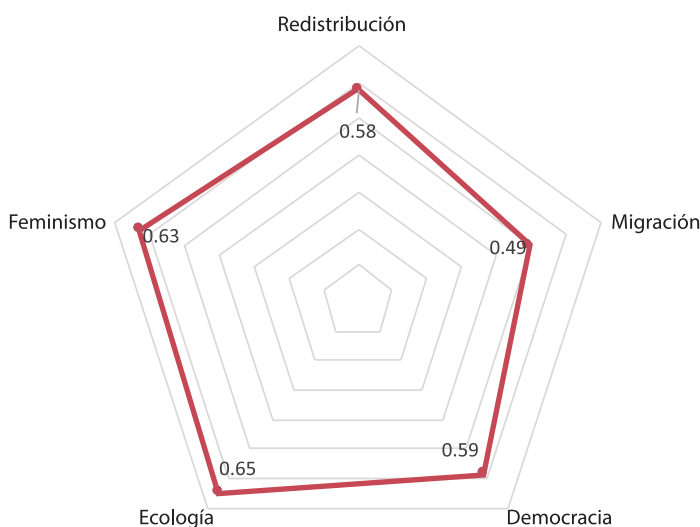
Eso implica, primero, disputar las narrativas sobre corrupción, autoritarismo y opacidad que hoy alimentan su rechazo al gobierno; y además, hacerse cargo de su preocupación por las reglas del juego, la rendición de cuentas y los impactos territoriales de grandes proyectos.

Si se logran construir espacios donde esta familia pueda reconocerse como parte de un “bloque democrático-ecológico de izquierda” —y no solo como oposición coyuntural a Morena— se abre una ventana para recomponer mayorías progresistas más amplias que las actuales.

5.2.4. Familia antimorenista divergente en autoubicación y valores

En la familia 8 nos encontramos, de nuevo, con una paradoja central del bloque antimorenista. En el radar, esta familia aparece como una de las más progresistas en términos de valores sustantivos, pero al mismo tiempo se sitúa con nitidez en la franja opositora (Gráfico 18).

Gráfico 18: Radar de la familia antimorenista divergente en autoubicación y valores



Las puntuaciones son altas en casi todos los ejes: ecología es el punto más fuerte (0,65), seguida muy de cerca por feminismo (0,63) y democracia (0,59); redistribución también está por encima de la media (0,58), mientras que migración se queda algo más atrás (0,49), aunque sin caer en posiciones abiertamente xenófobas.

Se trata, en suma, de un antimorenismo “verde-feminista” y democrático, con reservas sobre la política redistributiva del gobierno y, sobre todo, con ambivalencias en el terreno migratorio.

Si se mira eje por eje, lo más llamativo es la combinación de ecologismo y feminismo. En el componente ecológico, la familia 8 apoya de manera clara la regulación fuerte de las actividades contaminantes, la priorización de la protección ambiental frente a la lógica del “crecimiento a cualquier costo” y una visión de largo plazo sobre el uso del territorio y de los recursos.

No es solo una sensibilidad climática abstracta: las respuestas indican disposición a aceptar restricciones a empresas, proyectos inmobiliarios o infraestructuras cuando ponen en riesgo agua, aire o suelo. Esa disposición a limitar al capital en nombre de la vida buena sitúa a este segmento muy cerca de la izquierda programática, aunque su voto y autoubicación vayan en sentido contrario.

En el eje feminista la consistencia es similar. La familia 8 respalda la ampliación de derechos para las mujeres y disidencias, apoya políticas activas contra la violencia de género, ve con buenos ojos la paridad y las cuotas en representación política y adopta posiciones relativamente avanzadas en materia de autonomía sexual y reproductiva.

El feminismo, aquí, no es un adorno identitario sino un criterio para evaluar políticas públicas y actores: se premia a quienes encarnan discursos de igualdad efectiva y se castiga a quienes son percibidos como machistas, conservadores o indiferentes.

Democracia aparece también en la banda alta del radar (0,59). Hay una preocupación clara por el equilibrio de poderes, por los contrapesos institucionales y por la protección de libertades civiles (expresión, protesta, prensa). Este segmento es especialmente sensible al uso discrecional de la fuerza, a la concentración de poder en la figura presidencial y a cualquier señal de captura partidaria de órganos autónomos.

No es un rechazo genérico a la política, sino un recelo específico a lo que se interpreta como tentación hegemónica o autoritaria, que se traduce en una lectura muy crítica del estilo de gobierno de Morena y del obradorismo.

La redistribución, aunque algo por debajo de ecología y feminismo, mantiene un perfil progresivo. La familia 8 acepta impuestos más altos a los sectores de mayores ingresos, ve con buenos ojos los programas sociales y considera legítimo que el Estado intervenga para reducir desigualdades.

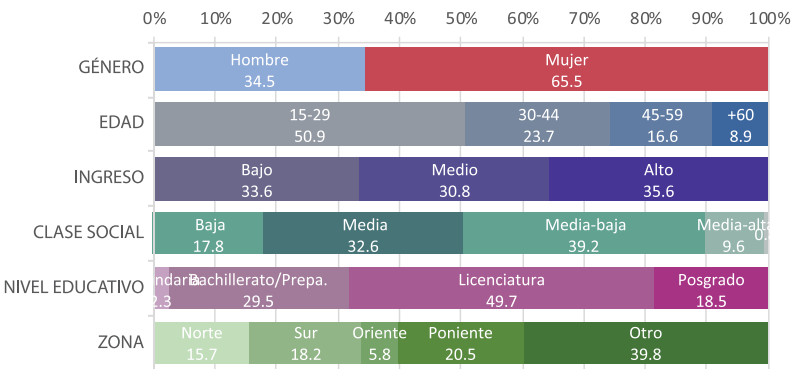
Sin embargo, aparece una demanda insistente de transparencia, eficiencia y focalización: la crítica al gobierno se formula menos como oposición al gasto social en sí y más como sospecha sobre clientelismo, uso electoral de los programas o falta de calidad en los servicios públicos. Es una redistribución “condicionada”: se tolera e incluso se exige, pero solo si va acompañada de reglas claras, profesionalismo y rendición de cuentas.

Migración es el punto relativamente más bajo del perfil. Con 0,49, este eje concentra posiciones más ambivalentes: si bien no domina un discurso abiertamente expulsivo, sí se detectan temores en torno a la competencia por empleos, la presión sobre servicios públicos o la relación entre migración y (in)seguridad.

Muchos de estos temores no se traducen en un rechazo frontal a los derechos de las personas migrantes, pero sí en la demanda de “orden”, controles y criterios de prioridad hacia “los nacionales”. Es, de nuevo, una clave para comprender la tensión interna de esta familia: muy abierta en términos de igualdad de género y derechos ecológicos, pero menos permeable a una visión universalista de la movilidad humana.

En los anclajes, la familia 8 presenta un perfil muy nítido. Dos tercios de sus integrantes son mujeres (65,5 % frente a 34,5 % de hombres), lo que explica en buena medida la centralidad del eje feminista (Gráfico 19).

Gráfico 19: Anclajes de la familia antimorenista divergente en autoubicación y valores



Es uno de los segmentos más feminizados de todo el bloque antimorenista, y esa sobrerrepresentación femenina se combina con una estructura generacional muy joven: algo más de la mitad tiene entre 15 y 29 años (50,9 %), y otro 23,7 % se ubica entre los 30 y 44. Es decir, casi tres cuartas partes del grupo está por debajo de los 45 años.

No se trata, por tanto, de un antimorenismo de retiro, sino de mujeres jóvenes y adultas jóvenes que viven el conflicto político en plena etapa de inserción laboral, cuidado de hijos pequeños o búsqueda de autonomía económica.

Desde el punto de vista de clase, el ingreso se distribuye de manera relativamente equilibrada entre los tres tramos: 33,6 % en nivel bajo, 30,8 % medio y 35,6 % alto. Sin embargo, cuando se mira la autopercepción de clase, la concentración se desplaza hacia las franjas intermedias: 39,2 % se declara clase

media-baja y 32,6 % clase media, mientras que solo 17,8 % se reconoce como clase baja y una fracción muy pequeña como media-alta.

La combinación de ingresos mixtos con una fuerte autoidentificación como “media” o “media-baja” sugiere trayectorias de movilidad reciente o frustrada: hogares que se han escolarizado más que sus padres, que han accedido a empleos formales o semiformales, pero que viven bajo la presión del encarecimiento urbano, la precariedad y la deuda.

La estructura educativa confirma esta lectura. Casi la mitad de la familia 8 tiene estudios de licenciatura (49,7 %) y cerca de una quinta parte ha cursado posgrado (18,5 %). Es, por tanto, un segmento con nivel de escolaridad muy alto, en el que la secundaria apenas aparece (2,3 %) y la preparatoria concentra alrededor de un tercio (29,5 %). No hablamos de élites patrimoniales, pero sí de capas profesionales, técnicas y administrativas, muchas veces ligadas a sectores de servicios, cultura, educación, salud o economía verde.

En estas características se ancla tanto el perfil ecológico-feminista como el énfasis en la calidad institucional y la crítica a la corrupción: se trata de grupos que han invertido muchos años en formación, que sienten que “hicieron todo lo correcto” y que exigen un Estado eficiente y una política a la altura de sus credenciales.

En términos territoriales, la familia 8 está fuertemente dispersa, con un peso notable de la categoría “Otro” (39,8 %), que probablemente recoge periferias urbanas extendidas, municipios conurbados o zonas de la metrópoli que no encajan en el esquema clásico Norte-Sur-Oriente-Poniente.

El Poniente agrupa un 20,5 %, el Sur un 18,2 %, el Norte 15,7 % y el Oriente apenas 5,8 %. Esto sugiere una implantación importante en áreas de clase media y media-baja relativamente consolidadas, pero también en periferias en expansión, donde la tensión entre proyectos inmobiliarios, movilidad cotidiana y degradación ambiental se experimenta con mucha intensidad. No es casual que justamente ahí se articulen con fuerza demandas ecológicas y feministas.

El cruce entre estos anclajes y el perfil de valores permite entender mejor la divergencia política. Mujeres jóvenes, altamente escolarizadas, que se perciben como clases medias o medias-bajas precarizadas, que viven en zonas afectadas por la crisis ambiental urbana y por formas de violencia de género muy visibles, encuentran en la agenda de derechos, ecología y democracia un horizonte de sentido.

Sin embargo, esa agenda no se traduce automáticamente en apoyo al obradismo ni a Morena. La decepción respecto a la gestión gubernamental de temas como la violencia contra las mujeres, los conflictos socioambientales, la militarización de la seguridad o la relación con organizaciones feministas y ambientales pesa mucho.

A ello se suma la experiencia cotidiana con burocracias ineficientes y con servicios públicos de mala calidad, que refuerza la idea de que el Estado social defendido por la izquierda no termina de materializarse en su vida diaria.

Lectura política

Desde la perspectiva de la militancia, la familia 8 es un terreno estratégico y delicado a la vez. Estratégico, porque sus valores “objetivos” están muy cerca de un programa de izquierda ecosocial y feminista: apoyan la redistribución, defienden derechos, quieren más regulación ambiental y se preocupan por la calidad democrática.

Delicado, porque se trata de un segmento que ya ha roto afectivamente con Morena y que puede ser capturado por proyectos liberal-progresistas o “verdes de mercado” que prometen derechos y clima sin tocar seriamente la estructura de la desigualdad.

El desafío consiste en reconectar esa sensibilidad feminista-ecológica con una crítica materialista de la ciudad, del trabajo y del cuidado, mostrando que sin redistribución profunda y sin freno al capital inmobiliario-financiero no hay política climática ni de género que resista.

En términos prácticos, la intervención política con esta familia exige, primero, dejar de dar por supuesto que “los valores progresistas” se traducen automáticamente en voto de izquierdas; segundo, construir espacios donde sus experiencias de precariedad, violencia y agotamiento urbano se articulen con luchas populares menos escolarizadas; y tercero, abordar de frente la cuestión migratoria, evitando tanto el moralismo abstracto como la capitulación ante los discursos securitarios, y mostrando cómo las políticas de cuidado, vivienda y trabajo digno pueden desactivar la competencia entre pobres que alimenta la desconfianza hacia las personas migrantes.

Solo así este antimorenismo verde-feminista podrá convertirse en aliado, en lugar de culminar en un progresismo elitizado que legitime, por la vía de los derechos, una nueva fase de mercantilización desigual.

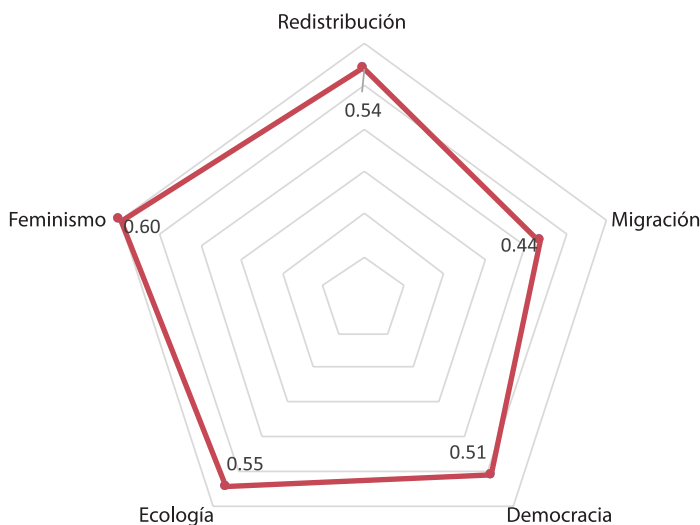
5.3. Familia antipolítica

En esta cartografía dejamos para el final a la familia 0 porque desborda el eje principal del conflicto “morenismo / antimorenismo”. Es la familia antipolítica: personas que no se reconocen ni en el oficialismo ni en la oposición, que rehúyen la autoidentificación ideológica y se sitúan en un registro de distancia o rechazo global hacia “la política”.

Justamente por eso su lectura es estratégica: una parte importante del futuro equilibrio de fuerzas en la ciudad va a decidirse en este terreno de desafección politizada.

A primera vista, el radar de la familia 0 muestra que la antipolítica no es sinónimo de conservadurismo duro. El pentágono se abre de forma relativamente homogénea hacia el polo progresista, aunque sin llegar a los niveles de las familias morenistas más nítidas (Gráfico 20).

Gráfico 20: Radar de la familia antipolítica



Los índices más altos se concentran en feminismo (0,60), ecología (0,55) y redistribución (0,54); democracia se mantiene ligeramente por encima de la zona media (0,51), mientras que el punto más bajo aparece en migración (0,44), por debajo del umbral de 0,5 que separa el campo progresista del restrictivo.

En feminismo, el valor de 0,60 indica mayor afinidad con enunciados que amplían derechos y cuestionan jerarquías de género que con afirmaciones regresivas. No se trata de un núcleo militante, pero sí de un sentido común que acepta la igualdad formal, la condena de la violencia machista y la idea de autonomía de las mujeres en decisiones sobre su cuerpo o su vida laboral.

En términos de disputa cultural, la antipolítica no está perdida para el feminismo: más bien encarna un feminismo “de baja intensidad”, muy extendido entre las mujeres jóvenes urbanas, que convive con desconfianza hacia la política institucional que se dice hablar en su nombre.

La dimensión ecológica, con 0,55, dibuja una sensibilidad ambiental moderadamente robusta. El índice sintetiza respuestas sobre regulación de actividades contaminantes, prioridad de la salud y el ambiente por sobre la ganancia privada y disposición a aceptar restricciones al consumo o a ciertas formas de movilidad si se justifican en clave ecológica.

La familia antipolítica se sitúa del lado de la protección ambiental, pero sin traducirlo en una agenda explícitamente climática o antiextractiva; se parece más a una demanda de “cuidado del entorno” en la vida cotidiana que a un programa ecosocial articulado.

En redistribución (0,54) aparece una apuesta similarmente templada por políticas de justicia social. Hay más acuerdo que desacuerdo con medidas de impuestos progresivos, expansión de programas sociales y cierta corrección de desigualdades de ingreso, pero sin llegar al entusiasmo de las familias morenistas convergentes. La antipolítica acepta la idea de Estado social, pero sospecha de su gestión concreta: quiere apoyos, pero no confía en quienes los administran.

El área de democracia (0,51) se mantiene apenas por encima de la neutralidad. Esto sugiere una combinación de adhesión de principio a las libertades civiles, las elecciones competitivas y ciertos controles al poder, con una fuerte percepción de que “las instituciones no funcionan”.

Es una democracia de baja credibilidad: se defiende la idea, pero se da por hecho que la práctica está capturada por élites corruptas o distantes. Desde el punto de vista de la militancia, esta ambivalencia es ambigua: protege frente a salidas abiertamente autoritarias, pero alimenta un escepticismo que puede volverse cinismo.

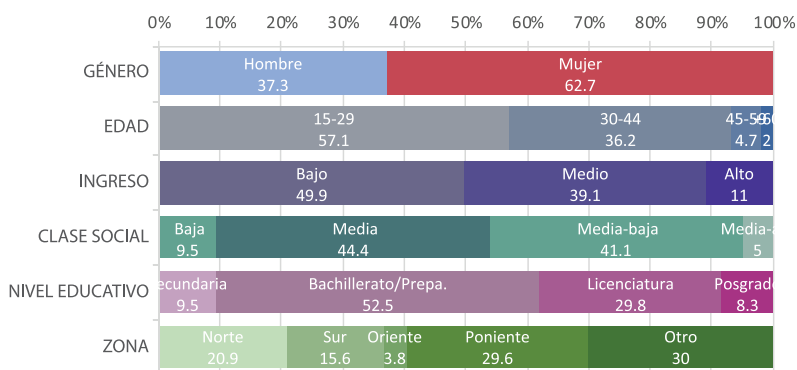
Migración es la dimensión más frágil, con 0,44. Aquí la familia antipolítica se aproxima al centro del espacio metropolitano e incluso se desliza hacia posiciones más restrictivas: menos apertura a la llegada de personas migrantes, más peso de argumentos de orden, seguridad o “capacidad limitada” de la ciudad.

No se trata necesariamente de xenofobia militante, pero sí de una reserva que puede ser activada por discursos punitivos o nacionalistas si no existe una contranarrativa de solidaridad materialmente creíble.

En suma, la antipolítica no es un bloque de valores reaccionarios: se ubica en un progresismo moderado en igualdad, ecología y redistribución, con dudas en democracia y un flanco conservador en migración. Es una base de sentido común potencialmente aliada, cruzada por un fuerte descreimiento hacia todo lo que se presente como “político”.

El perfil sociodemográfico de la familia 0 corrobora esta lectura. La antipolítica está fuertemente feminizada: casi dos tercios de quienes la integran son mujeres (62,7 %), frente a un 37,3 % de hombres. Este rasgo, combinado con el alto índice feminista, sugiere una población donde la experiencia de desigualdad de género, violencia y sobrecarga de cuidados alimenta demandas de justicia, pero no encuentra en los actores partidarios un canal de traducción confiable (Gráfico 21).

Gráfico 21: Anclajes de la familia antipolítica



El rasgo más contundente es generacional: 57,1 % tiene entre 15 y 29 años y otro 36,2 % entre 30 y 44; los mayores de 45 son residuales (alrededor de 7 % en total). Es, en esencia, una familia joven y joven adulta. No es la memoria del viejo régimen la que estructura su visión, sino la experiencia de una transición eterna donde cambian los gobiernos pero no se resuelven la precariedad laboral, la inseguridad y el encarecimiento de la ciudad.

n términos de ingreso objetivo, la familia 0 se concentra en los estratos bajos y medios: casi la mitad se ubica en ingreso bajo (49,9 %) y cerca de 39,1 % en ingreso medio; solo 11 % declara ingreso alto. Sin embargo, la autoidentificación de clase matiza esa precariedad: 44,4 % se percibe como “clase media” y 41,1 % como “clase media-baja”, mientras que la clase baja estricta apenas llega a 9,5 % y la media-alta ronda el 5 %.

La antipolítica se vive a sí misma como “clase media empobrecida” más que como proletariado clásico: sectores que sienten que hicieron lo que se les pedía (estudiar, trabajar, “salir adelante”) y, sin embargo, no logran consolidar una vida estable.

El nivel educativo asienta este diagnóstico. Más de la mitad tiene bachillerato o preparatoria completa (52,5 %), casi un tercio llegó a licenciatura (29,8 %) y un 8,3 % incluso alcanzó posgrado; solo 9,5 % se quedó en secundaria.

Es, por tanto, una antipolítica más bien escolarizada, con expectativas de movilidad ascendente frustradas por la estructura del mercado laboral. No estamos ante un “pueblo ignorante que rechaza la política”, sino ante jóvenes relativamente formados que perciben un hiato entre los discursos meritocráticos y su realidad.

Territorialmente, la familia 0 está distribuida, pero con algunos énfasis claros. La categoría “Otro” concentra alrededor del 30 %, seguida del Poniente con

29,6 %. Norte y Sur suman en conjunto algo más de un tercio (20,9 % y 15,6 %, respectivamente), mientras que el Oriente está claramente subrepresentado, con apenas 3,8 %.

Se trata, en buena medida, de espacios intermedios y periferias donde conviven urbanizaciones populares y segmentos de clase media precarizada, lejos tanto de los enclaves tradicionales de la izquierda popular como de los bastiones clásicos de la derecha acomodada.

En conjunto, los anclajes dibujan una antipolítica joven, feminizada, relativamente educada, de ingresos bajos y medios, que se percibe como clase media o media-baja y que habita territorios de transición urbana. Es un perfil muy distinto al del abstencionismo conservador tradicional.

Lectura política

Desde el punto de vista estratégico, la familia antipolítica es quizá el terreno más delicado y decisivo. Sus valores no son el enemigo: en feminismo, ecología y redistribución se mueve en coordenadas compatibles con una agenda de izquierda democrática. Lo que está roto no es tanto el mapa ideológico como el vínculo de representación.

Lo que expresa esta familia es que buena parte de las mujeres y jóvenes precarizados de la ciudad creen en la igualdad, en el cuidado del entorno y en ciertos derechos, pero no creen que la política institucional sea capaz de garantizar nada de eso.

Eso tiene dos implicaciones. La primera es defensiva: si la izquierda abandona este segmento, la derecha puede intentar capturarlo desde un discurso antipolítico propio, basado en el hartazgo, la denuncia de la corrupción, el punitivismo y las promesas de orden rápido. El flanco más vulnerable es la migración: ahí el índice más bajo indica que, en contextos de miedo e inseguridad, pueden calar fácilmente narrativas que asocian migración con delito y deterioro de servicios públicos.

La segunda implicación es ofensiva: si la izquierda logra articular una práctica que se parezca a la justicia cotidiana (transporte, alquiler, violencia de género, acceso a servicios) más que a la administración de cargos, esta familia es un reservorio enorme de activación progresista.

La tarea política no pasa solo por “convencer” en el plano discursivo, sino por construir dispositivos de mediación donde estas jóvenes mujeres de clase media empobrecida puedan experimentar que la organización colectiva tiene efectos reales sobre su vida: redes de cuidados, defensas territoriales frente a megaproyectos, espacios culturales y educativos autogestionados, campañas contra la violencia machista en barrios concretos.

Allí donde la política se experimente como práctica compartida y no como promesa televisiva, la antipolítica puede reorientarse hacia una militancia renovada.

En síntesis, la familia 0 muestra que la desafección no es un vacío ideológico, sino una posición situada: jóvenes mayoritariamente mujeres, con valores moderadamente progresistas, que se sienten fuera del reparto de beneficios del ciclo político reciente.

Si la izquierda quiere mantener la iniciativa histórica, tendrá que disputar este espacio no solo con argumentos, sino con instituciones y prácticas que hagan verosímil que la política puede ser otra cosa que lo que hoy detestan.

6. Entre la lealtad, la distancia y la disputa: cartografías de intensidades

Una tipología política pierde espesor explicativo si solo distingue entre quienes “son” o “no son” afines a un proyecto. Esa dicotomía —cómoda para el análisis superficial y funcional a los discursos de polarización— oscurece un punto decisivo: en qué medida, durante cuánto tiempo y con qué intermitencias las personas han acompañado (o no) a ese proyecto. Para entender las tensiones, ambivalencias y límites de un ciclo político como el que abrió Morena desde 2018, no basta con clasificar identidades; es imprescindible reconstruir trayectorias. Es decir, atender no solo a los lugares donde los sujetos “se ubican”, sino a los recorridos que transitaron durante un sexenio marcado por disputas estructurales, promesas de transformación y resistencias organizadas.

En este marco, resulta analíticamente relevante examinar la intensidad del apoyo electoral a Morena en la Ciudad de México entre las cinco elecciones que configuraron el ciclo político reciente:

1. Presidencia 2018;
2. Diputaciones federales 2021;
3. Jefatura de Gobierno 2024;
4. Alcaldías 2024;
5. Presidenciales 2024.

Las trayectorias de voto se construyen a partir de declaraciones retrospectivas autoinformadas. Si bien este enfoque permite reconstruir secuencias electorales, debe considerarse la posibilidad de sesgos de recuerdo o racionalización ex post. Para mitigar este riesgo, los análisis se realizaron sobre casos válidos y se aplicaron ponderaciones calibradas.

La inclusión de estas cinco elecciones —Presidencia 2018, Diputaciones Federales 2021, Jefatura de Gobierno 2024, Alcaldía 2024 y Presidencia 2024— responde a una lógica tanto temporal como territorial que permite reconstruir trayectorias político electorales en el ciclo 2018–2024. Las elecciones de 2018 y 2024 ofrecen dos momentos presidenciales de alto valor estructurante, que permiten observar el inicio y desenlace de un proyecto político. Las elecciones locales de 2024 (alcaldías y Jefatura de Gobierno) añaden una dimensión territorial clave para el análisis de reconfiguraciones en la Ciudad de México. Por su parte, las elecciones de 2021 se sitúan en la mitad del ciclo político, lo que las convierte en un punto de observación intermedio ideal para captar cambios, consolidaciones o fracturas en el apoyo electoral sin la influencia directa de

una elección presidencial. Al no coincidir con una contienda ejecutiva, esta elección permite evaluar la solidez del respaldo partidario en condiciones más neutras. Con estas cinco elecciones es posible trazar trayectorias significativas del voto a lo largo del sexenio, equilibrando momentos nacionales y territoriales sin introducir redundancia analítica por elecciones simultáneas.

Estas cinco instancias condensan tanto decisiones de largo aliento como momentos de desgaste, disputa y reconfiguración del sentido común político. No se trata únicamente de registrar un “sí” o un “no” a Morena, sino de reconstruir la secuencia completa de apoyos, distancias y rupturas que distintos sectores sociales expresaron en las urnas.

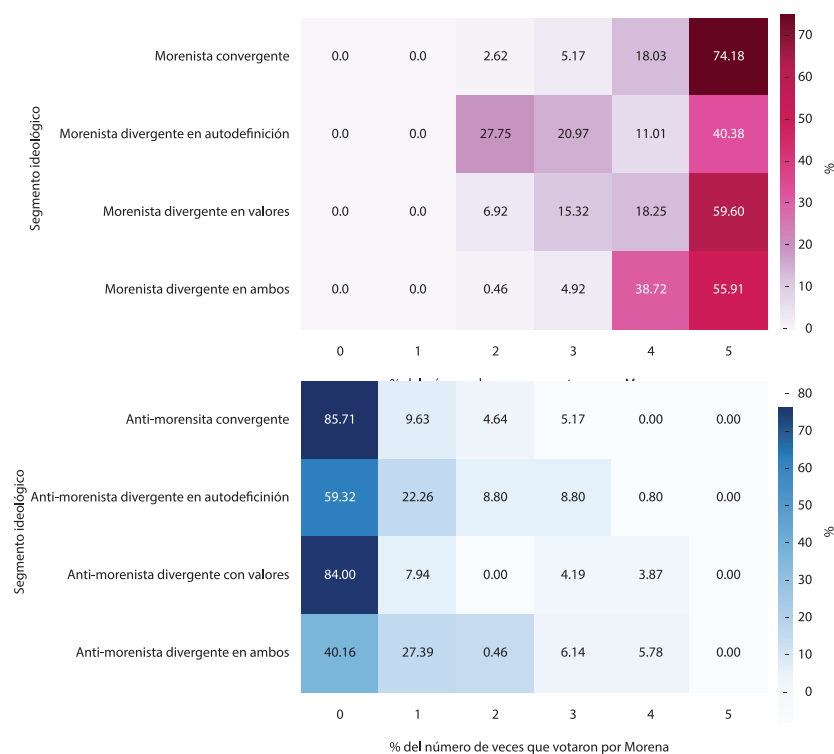
La tipología construida en las secciones previas —categorías que combinan voto, autodefinición ideológica y posiciones en cinco vectores valorativos— utilizó, por razones analíticas y políticas, la comparación crítica entre las elecciones presidenciales de 2018 y 2024 como eje estructurante. Esa comparación es la que define la pertenencia a los grupos morenistas, antimorenistas o antipolíticos. Sin embargo, la disputa electoral no se reduce a dos momentos presidenciales, ni su significado puede comprenderse sin mapear la continuidad o la intermitencia del apoyo durante el sexenio. Por ello, en esta sección se incorpora la secuencia completa de las cinco elecciones, con el objetivo de observar cómo se sedimenta, se erosiona o se fractura el vínculo electoral con Morena.

Esta mirada permite tres operaciones críticas: a) Romper la lectura binaria entre “ser” o “no ser” morenista; b) Visibilizar las contradicciones internas del campo progresista, donde convergencias y divergencias no implican necesariamente ruptura; y, c) Comprender los desafíos estructurales de cualquier proyecto transformador, que debe convivir con apoyos intermitentes, disidencias internas y oposiciones duras cuya lógica no es homogénea.

6.1. La huella temporal del apoyo

Para captar la evolución del vínculo electoral con Morena a lo largo de cinco elecciones presidenciales y legislativas, se ha construido un mapa de calor que permite visualizar la intensidad acumulada del voto por cada tipología ideológica. La métrica empleada no representa el tamaño poblacional de los grupos, sino la frecuencia con la que votaron por Morena en una escala de 0 (nunca) a 5 (siempre). Esta decisión metodológica es clave: al evitar que el color refleje peso demográfico y concentrarse exclusivamente en la profundidad del vínculo electoral, se evita distorsionar el análisis. En lugar de oscurecer a los segmentos grandes que nunca votan por Morena —como suele ocurrir en mapas basados en volumen—, se ilumina la lealtad política persistente y se revela el patrón estructural de intermitencias y rechazos (Figura 1).

Figura 1. Heatmap de intensidad morenista (2018–2024).



Nota: La intensidad del color en los gráficos representa el porcentaje del número de veces que cada tipología ideológica ha votado por Morena, en una escala de 0 a 5: a) En el caso de los segmentos morenistas, los tonos vino tinto más oscuros indican una mayor frecuencia de apoyo electoral a Morena, mientras que los tonos claros reflejan menor afinidad; b) En los segmentos antimorenistas, los tonos azules oscuros representan una mayor concentración en el rechazo a Morena (puntuajes bajos), y los tonos claros una apertura relativa. La escala de votación (0 a 5) capta la intensidad del voto, donde 0 equivale a nunca votar por Morena, y 5 a votar siempre. Cada celda indica el porcentaje de personas dentro de un segmento que seleccionaron ese nivel.

El resultado es un mapa de trayectorias, no de magnitudes. A través de él se distinguen tres grandes zonas: el núcleo morenista, compuesto por votantes fieles y consistentes; los espacios grises, donde el apoyo es intermitente; y los segmentos de rechazo sistemático, donde Morena no ha logrado enraizarse electoralmente.

En el primer bloque se encuentra el núcleo duro del proyecto: los morenistas convergentes y divergentes. Los primeros, especialmente el segmento morenista convergente, expresan una lealtad casi absoluta: más del 92% ha votado por

Morena en al menos cuatro de las cinco elecciones, y tres de cada cuatro lo han hecho siempre. Son votantes que no solo comparten afinidad ideológica, sino que también traducen esa identificación en un comportamiento electoral sistemático.

En contraste, los morenistas divergentes —aquellos que no se identifican plenamente con la izquierda o no comparten los valores dominantes de la coalición— muestran una fidelidad pragmática. En ellos, el voto por Morena no se fundamenta tanto en la ideología como en otras variables: identificación negativa con los partidos tradicionales, apoyo a figuras específicas, o incluso adhesión a un proyecto de transformación sin compromiso doctrinario. A pesar de sus diferencias en valores y autodefinición, más del 90% ha votado por Morena al menos tres veces. Esto confirma que la coalición ha sabido atraer y retener a votantes fuera de su marco ideológico inicial, extendiendo así su base sin comprometer la intensidad del respaldo.

El segundo bloque está compuesto por los segmentos antimorenistas, donde el rechazo electoral es notoriamente más fuerte. El caso más contundente es el del antimorenismo convergente, cuyos integrantes prácticamente nunca han votado por Morena. Más del 85% ha evitado hacerlo en todas las elecciones, y ninguno supera el score 2. Esta actitud expresa un rechazo estructural y sostenido, coherente con su autodefinición ideológica y con valores opuestos al proyecto de transformación.

Sin embargo, el mapa también revela fisuras y matices dentro del bloque opositor. Por ejemplo, los antimorenistas divergentes en ambos —que no comparten ni los valores ni la autodefinición del oficialismo, pero tampoco se alinean con la derecha clásica— muestran una mayor volatilidad. Aunque el 40% nunca ha votado por Morena, más del 20% lo ha hecho una o dos veces, y cerca del 12% en tres o más ocasiones. Estos datos sugieren que, en segmentos donde las identidades políticas están menos cristalizadas, existen oportunidades de competencia real.

De este análisis emergen tres hallazgos clave. Primero, la polarización relativa es evidente, con núcleos electorales bien definidos en ambos extremos del espectro, pero que no abarcan la totalidad del electorado. Segundo, el voto a Morena no siempre sigue a la ideología: existen votantes consistentes que no se identifican con los postulados tradicionales del movimiento, lo cual revela un fenómeno de lealtad sin afinidad. Y tercero, el campo intermedio no es homogéneo: hay intermitencias, trayectorias mixtas y aperturas que podrían ser aprovechadas o perderse según el desempeño futuro del partido.

En suma, esta tabla no solo cuantifica votos; revela trayectorias políticas, muestra vínculos sostenidos o rotos, y permite pensar a Morena no como un bloque homogéneo de votantes, sino como una coalición de lealtades asimétricas que ha sabido —hasta ahora— combinar disciplina electoral con pluralismo ideológico.

6.2. Una lectura de magnitudes estructurales de la votación por Morena

Más allá de las trayectorias diferenciadas por tipologías ideológicas, la distribución del voto a Morena en las últimas cinco elecciones permite trazar líneas de magnitud estructural que ayudan a entender los límites y potenciales del proyecto político. Los datos disponibles permiten una lectura crítica de la base electoral real, su profundidad y su capacidad de expansión.

El primer dato crucial es que el 24% del electorado representa el llamado “voto duro” de Morena: personas que han votado por el partido en todas las elecciones presidenciales y legislativas analizadas, de 2015 a 2024. Esta cifra, aunque significativa, pone en perspectiva el discurso hegemónico de mayoría social: tres de cada cuatro votantes no han sido plenamente consistentes con el proyecto, lo cual sugiere que la hegemonía electoral de Morena no descansa en una base sólida e ideológicamente homogénea, sino en una combinación de lealtades fuertes, intermitencias pragmáticas y rechazos fragmentados.

El segundo hallazgo revela una fisura interesante dentro del bloque opositor. Un 18% de quienes se identifican como antimorenistas — y que no votaron por el partido en las elecciones de 2018 ni en 2024 — han votado por Morena al menos una vez. Esto abre una pregunta crucial: ¿qué explica este tránsito? No se trata de error o confusión, sino de una elasticidad del voto que desafía las segmentaciones clásicas. Es probable que estas decisiones hayan estado mediadas por liderazgos locales, coyunturas específicas, o por la ausencia de opciones competitivas, pero también podrían reflejar zonas de ambigüedad ideológica o de frustración con la oposición. Lo cierto es que incluso en los territorios de resistencia, Morena ha logrado infiltrar intermitencias.

Finalmente, un dato de enorme potencia interpretativa: el 54% del electorado ha votado por Morena al menos una vez en las cinco elecciones. Esto implica que más de la mitad de la población con participación electoral ha tenido, en algún momento, una afinidad electoral mínima con el proyecto. Esta cifra no debe confundirse con una mayoría estructural o ideológica. Más bien, expresa el techo relativo de la coalición: su capacidad de convocar a un bloque mayoritario ocasional, pero también su dependencia de votantes no necesariamente leales. Este 54% es el espacio donde se juega la batalla política del presente. No es una base, sino un campo móvil de alianzas electorales. Morena ha logrado articular una mayoría en la medida en que ha sido capaz de seducir a sectores fluctuantes, sin necesariamente convertirlos en leales. Y esa diferencia entre captación y conversión es estratégica: una cosa es ganar elecciones, otra es construir hegemonía.

En suma, el mapa de magnitudes revela que Morena no es una mayoría social estructural, sino una mayoría electoral contingente, construida sobre un voto duro no menor de casi un cuarto de la población electoral, un voto intermitente

amplio y una oposición fragmentada. El reto del oficialismo no es solo sostener el bloque que vota “siempre”, sino evitar que los segmentos intermitentes — que ya han votado por Morena pero no están arraigados— se conviertan en opositores definitivos. En sentido inverso, la oposición necesita más que rechazo: debe conquistar con convicción a ese 54% que alguna vez votó por Morena y que aún no ha sellado un contrato de fidelidad.

6.3. El voto como trayectoria

Este doble análisis —intensidad acumulada y ausencia total de apoyo— permite cuestionar las narrativas simplificadoras sobre la base social de Morena. La disputa en la Ciudad de México no es un conflicto entre “morenistas” y “antimorenistas”: es una geometría más compleja, donde la transformación convive con lealtades firmes, apoyos condicionados, expectativas defraudadas y segmentos que permanecen impermeables al proyecto.

Lo que emerge del análisis no es una línea divisoria, sino un campo de tensiones:

- Un núcleo que ha sostenido el proyecto incluso en momentos de desgaste.
- Unos bordes progresistas que apoyan, divergen, regresan y se distancian, dependiendo de los conflictos valorativos y materiales del periodo.
- Una oposición estructural cuya trayectoria es estable.
- Y un sector que se sitúa fuera del tablero político.

Estas capas permiten entender por qué la construcción de un proyecto transformador no puede reducirse a administrar apoyos, sino que debe abordar las tensiones internas que lo atraviesan: contradicciones valorativas, disputas por el sentido de la igualdad, conflictos territoriales, expectativas incumplidas y procesos de subjetivación que exceden la economía política tradicional.

La intensidad del voto, y no solo el voto en un momento específico, muestra que toda transformación profunda es también un proceso de disputa temporal, donde se sedimentan apoyos y rechazos, se acumulan frustraciones o esperanzas y se construyen —o erosionan— identificaciones políticas a lo largo del tiempo.

7. Sobre las hipótesis de investigación

Luego de examinar la morfología del voto y las configuraciones ideológicas que lo sostienen (capítulo I), el libro requiere dar un giro hacia la arquitectura profunda que produce subjetividades políticas en la Ciudad de México. Si, como enseñaron Marx y Echeverría, las ideas dominantes son siempre el eco material de un modo de vida históricamente situado, y si —como recordaron Benjamin y Gramsci— toda disposición política está atravesada por formas de experiencia, temporalidad y afectividad sedimentadas en la vida cotidiana, entonces la disputa electoral solo puede comprenderse adecuadamente al interior de los conflictos estructurales que moldean el sentido común y sus fracturas.

La emergencia de nuevas clases medias, la erosión de las seguridades públicas, la reorganización del tiempo social por el capitalismo de plataformas, la irrupción feminista, las mutaciones generacionales del deseo y el malestar, y la creciente soledad urbana no son fenómenos externos al comportamiento político: son su material constitutivo. Los capítulos del II al VI examinan estas tensiones como procesos de producción de subjetividad, es decir, como luchas por definir qué vidas son posibles, qué esperanzas son creíbles y qué horizontes de transformación resultan imaginables. Se trata, así, de pasar de una lectura del voto como acto individual a una lectura del voto como síntoma de un modo de vida estructurado, donde se condensan contradicciones materiales, aspiraciones colectivas, violencias históricas y redes de sociabilidad erosionadas.

En coherencia con ello, esta sección presenta un conjunto de cinco hipótesis estructurales que buscan interpretar la mutación del sentido común en la CDMX. No se limita a explicar “por qué la gente vota como vota”, sino que interroga qué condiciones de existencia permiten que determinadas narrativas —progresistas o conservadoras— ganen densidad social y capacidad de arrastre. Estas hipótesis se inscriben en una tradición materialista latinoamericana que entiende la ideología no como engaño o manipulación, sino como forma de vida, como estructura afectiva y simbólica producida por regímenes temporales, distribuciones materiales y experiencias urbanas diferenciadas. En esa clave, la Ciudad de México aparece como un laboratorio privilegiado para observar la reconfiguración del capitalismo urbano y sus subjetividades.

Hipótesis 1 — La paradoja del bienestar y el malestar subjetivo como fractura del bloque histórico (capítulo II)

El primer conflicto estructural involucra a sectores medios y altos que, aun beneficiándose objetivamente de procesos redistributivos, experimentan un

malestar subjetivo creciente: la paradoja del bienestar y el malestar, fenómeno recurrente en experiencias progresistas y nacional-populares de la región durante la denominada “primera ola”. Este malestar, lejos de ser una reacción irracional, expresa la tensión entre procesos de democratización material y pérdidas simbólicas percibidas por quienes construyeron su identidad sobre distinciones sociales que el igualitarismo erosiona cuando no se preocupa la pregunta “¿qué igualdad?”.

Siguiendo una intuición benjaminiana, podríamos decir que se trata de una incomodidad producida por la irrupción del otro en espacios antes exclusivos. El resultado es una suerte de “síndrome de Estocolmo invertido”: sectores que ganan con la redistribución de gobiernos de progresistas pueden retirar su apoyo político cuando sienten que su posición relativa pierde estabilidad. Este capítulo analiza cómo las políticas de distribución primaria y secundaria del ingreso han reconfigurado apoyos, tensiones y desafecciones dentro del proyecto transformador capitalino y en qué medida se puede ya observar indicios de que tal fenómeno sucede en la Ciudad de México.

Hipótesis 2 — Educación y seguridad como aparatos ideológicos en disputa: lo público asediado (Capítulo III)

La segunda hipótesis plantea que el campo educativo, en articulación creciente con la cuestión de la seguridad, constituye hoy uno de los principales aparatos ideológicos en disputa en la Ciudad de México. Aun cuando la capital mantiene una tradición robusta de educación pública y de ampliación de derechos sociales, se postula que dicho legado convive —y entra en tensión— con procesos de privatización de facto, segmentación territorial, expansión sostenida de instituciones educativas privadas y un clima persistente de inseguridad material y simbólica.

La hipótesis sostiene que, bajo esta combinación de privatización, miedo cotidiano y aspiraciones meritocráticas, la escuela tendería a convertirse en un productor central de subjetividades políticas, reconfigurando la manera en que distintos sectores sociales interpretan lo público, el mérito, la protección y la responsabilidad individual. En términos gramscianos, se plantea que estas transformaciones podrían estar contribuyendo a una reorganización del sentido común, capaz de desplazar orientaciones progresistas hacia imaginarios conservadores, incluso en territorios gobernados por la izquierda durante largos períodos.

En este marco, el capítulo se propone evaluar en qué medida las trayectorias educativas, el tipo de institución (pública o privada) y las percepciones de inseguridad se asocian con variaciones en la orientación ideológica, el posicionamiento valórico y las preferencias políticas en la Ciudad de México, y hasta qué punto estos procesos inciden en la configuración contemporánea del mapa político capitalino.

Hipótesis 3 — Feminismos, igualdad y la disputa por el sentido transformador (Capítulo IV)

La tercera hipótesis parte de la premisa de que la expansión de las luchas feministas en la Ciudad de México podría estar reconfigurando el campo de sentidos en torno a la igualdad, la justicia y el cuidado, sin hacerlo de manera homogénea ni lineal. Se plantea que el feminismo no operaría únicamente como una fuerza de ampliación democrática, sino también como un eje de diferenciación ideológica capaz de introducir tensiones internas en el campo progresista.

La hipótesis sostiene que estas tensiones podrían expresarse de manera ambivalente: mientras algunos sectores tenderían a incorporar las demandas feministas como núcleo de una subjetividad emancipadora y de un proyecto de transformación ampliado, otros podrían percibir las como una amenaza a identidades políticas previas o como un terreno de disputa moral y cultural. En este sentido, el feminismo sería simultáneamente un principio de alineamiento y un factor potencial de distanciamiento político.

Desde esta perspectiva, el capítulo se propone poner a prueba si —y en qué medida— las posiciones frente a la agenda feminista se asocian diferencialmente con la orientación ideológica, el perfil valórico y el grado de apoyo —o distancia— respecto del proyecto de transformación en la Ciudad de México.

Hipótesis 4 — Alienación, precariedad temporal y disputa política (Capítulo V)

La cuarta hipótesis plantea que las condiciones de organización del tiempo cotidiano —trabajo, movilidad, descanso, cuidado y ocio— podrían constituir un eje central de diferenciación ideológica y política en la Ciudad de México. Se postula que la precarización del tiempo de vida y la percepción de falta de control sobre el propio tiempo podrían incidir en la manera en que distintos sectores sociales evalúan el presente y proyectan expectativas de futuro.

La hipótesis sostiene que los desajustes entre el tiempo efectivamente vivido y el tiempo deseado (alienación temporal) podrían asociarse de manera no lineal con disposiciones políticas divergentes: desde el distanciamiento y la desafección, hasta la adhesión a discursos de orden, eficiencia o soluciones de corto plazo. En este marco, el conflicto político no se expresaría únicamente en términos de ingreso o valores, sino como una disputa por el derecho al tiempo y a una vida vivible, con especial intensidad entre las generaciones más jóvenes. El capítulo se propone poner a prueba si —y en qué medida— las brechas entre tiempo real e ideal se asocian con la orientación ideológica, el apoyo político y las trayectorias de desplazamiento identificadas en los capítulos previos.

Hipótesis 5 — Malestares psicosociales, soledad estructural e ideología (Capítulo VI)

Finalmente, la quinta hipótesis interroga la relación entre malestares psicosociales estructurales —soledad no deseada, estrés crónico, insomnio, desesperanza, ansiedad— y la producción de ideologías defensivas que erosionan la identificación con proyectos transformadores. Lejos de atribuir estos procesos a la tecnología como causa primaria, el capítulo indaga cómo las plataformas digitales intensifican y administran malestares cuya raíz es material: precarización del tiempo, debilitamiento comunitario, inseguridad y sobrecarga urbana.

Este capítulo sostiene como hipótesis que los avances de estos malestares en la CDMX están afectando la orientación política de sectores antes progresistas, orientándolos hacia respuestas conservadoras o autoritarias.

En conjunto, estas cinco hipótesis parten de una premisa común: la producción ideológica es inseparable de la producción social de la vida. La disputa política contemporánea no puede reducirse a un clivaje binario entre izquierda y derecha ni a un enfrentamiento de narrativas abstractas, sino que exige complejizar ese eje, mapear sus contradicciones internas y comprender cómo se reconfiguran las identidades políticas en contextos de transformación material profunda. Las tensiones que atraviesan al progresismo capitalino — y que este libro busca identificar— no remiten a incoherencias individuales, sino a desajustes estructurales entre modos de vida, expectativas sociales y horizontes políticos disponibles.

Desde esta perspectiva, la ideología no aparece como un simple sistema de ideas, sino como una forma de experiencia históricamente situada, producida en el marco de una crisis del capitalismo que tiene un carácter epocal. La reorganización del tiempo social, la precarización de la vida cotidiana, la aceleración productiva, el debilitamiento de los vínculos comunitarios y la expansión de nuevas formas de malestar configuran un quiebre en los sentidos temporales a partir de los cuales los sujetos evalúan el presente y proyectan el futuro. Estas mutaciones no son externas a la política: constituyen el suelo material sobre el cual se redefine el sentido común.

En este contexto, la Ciudad de México se presenta como un laboratorio privilegiado donde estos procesos se potencian y se condensan. Tal como ocurrió en otros gobiernos progresistas de la región, procesos redistributivos que mejoraron de manera objetiva las condiciones materiales de amplios sectores pueden coexistir con pérdidas de respaldo político cuando las transformaciones del modo de vida —del tiempo, del cuidado, de la seguridad y del reconocimiento— no encuentran traducción política. El análisis empírico que sigue, basado en la encuesta representativa aplicada en la Ciudad de México, busca

precisamente dar cuenta de estas tensiones, mostrando cómo la mutación del sentido común capitalino se articula con las transformaciones del capitalismo urbano, sus violencias estructurales y las condiciones —aún abiertas— de una rearticulación emancipatoria.

Finalmente, conviene aclarar desde el inicio el sentido en que se utiliza el término fascismo en el título de este libro. No se trata de una afirmación histórica literal ni de la caracterización de un régimen político existente. Su uso es deliberadamente alegórico y busca subrayar la exacerbación de una contradicción histórica que ya atraviesa a América Latina. Durante décadas, el neoliberalismo fue el principal contradictor de los proyectos progresistas en la región. Hoy, sin embargo, ese antagonismo convive con —y en algunos casos es desplazado por— la emergencia de formas políticas autoritarias, punitivas y antiigualitarias que no se presentan únicamente como programas económicos alternativos, sino como propuestas de orden moral y cultural que buscan anclaje y respaldo social. El uso del término fascismo en este contexto no apunta a equiparar mecánicamente situaciones históricas, sino a nombrar una amenaza política específica del presente: aquella en la que el malestar social, lejos de traducirse en demandas de justicia material, se reorganiza en torno a valores culturales conservadores, demandas de mano dura sin respetar los derechos humanos, rechazo a la igualdad y moralización de la vida pública. En este sentido, el título del libro opera como una advertencia, no como una sentencia.

Parte III

Sobre las pruebas empíricas de las hipótesis



Capítulo II

La paradoja del bienestar objetivo/malestar subjetivo y el síndrome de Estocolmo en la Ciudad de México

1. Introducción

En América Latina, las orientaciones ideológicas de los gobiernos han influido decisivamente en la distribución del bienestar material: en promedio, las administraciones de izquierda redujeron la desigualdad, mientras que las de derecha tendieron a incrementarla (Ramírez, 2024). Sin embargo, la experiencia regional reciente advierte que esos logros materiales no siempre se traducen en lealtad política hacia los proyectos progresistas. Durante el último ciclo político (2015–2025), varios países experimentaron giros pendulares hacia la derecha a pesar de reducciones notables de pobreza bajo gobiernos de izquierda (Brasil, Ecuador, Argentina, entre otros), revelando la fragilidad del consenso redistributivo (Junge et al., 2023; Montero, 2024). La literatura ha identificado dos fenómenos relacionados en este proceso, especialmente entre sectores medios: primero, que la mejora del bienestar objetivo no siempre se refleja en un mayor bienestar subjetivo (la “paradoja del bienestar objetivo y malestar subjetivo”, ver Ramírez, 2017); y segundo, que una fracción significativa de la población beneficiada por gobiernos nacional-populares puede migrar hacia opciones de derecha, en lo que se ha descrito metafóricamente como un “síndrome de Estocolmo ideológico-electoral” (Ramírez, 2024). En otras palabras, segmentos de clase media que ascendieron socialmente gracias a políticas redistributivas desarrollan afinidad con fuerzas conservadoras que representan los intereses de antiguas élites, apoyándolas incluso en contra de su aparente interés material.

Casos como el de Brasil ilustran esta paradoja: pese a la masiva reducción de la pobreza y la emergencia de una “nueva clase media”, amplios sectores favorecidos terminaron votando por Jair Bolsonaro, evidenciando un quiebre subjetivo en el bloque progresista (Junge et al., 2023).

México ofrece un escenario singular dentro de este contexto. Bajo el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) liderado por Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), el país experimentó una mejora material histórica en numerosos indicadores sociales. Por ejemplo, entre 2018 y 2024 la tasa de pobreza multidimensional nacional cayó de 41.9% a 29.6% de la población, lo que equivale a más de 13 millones de personas que dejaron de ser pobres, y la pobreza extrema

descendió de 7.0% a 5.3% (INEGI, 2025). Al mismo tiempo, la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini se redujo al nivel más bajo registrado y el estrato clasificado oficialmente como “no pobre y no vulnerable” aumentó de 29.3 a 42.3 millones de personas, redefiniendo la estructura social del país (INEGI, 2025). En la Ciudad de México, epicentro político de este proceso, estos avances obedecieron a dos motores complementarios: por un lado, una redistribución secundaria vía transferencias monetarias y programas sociales de gran escala (e. g., la pensión universal para adultos mayores, las becas Jóvenes Construyendo el Futuro), que multiplicaron los ingresos de sectores vulnerables; y por otro lado, una redistribución primaria vía el mercado laboral (incrementos sustanciales al salario mínimo, recuperación del poder adquisitivo y disminución de la informalidad), que mejoró la capacidad de compra de los hogares trabajadores (CONEVAL, 2024; INEGI, 2025). El resultado conjunto ha sido una reducción drástica de la pobreza y una movilidad social ascendente de sectores populares hacia la condición de clase media emergente.

Paradójicamente, cabe preguntarse si el apoyo político al proyecto de la 4T aumentó proporcionalmente, es decir, de forma lineal con estos logros materiales. Esto con el fundamento y motivo de comprender qué tipo de subjetividad se construye en el actual panorama distributivo del gobierno progresista en México. En este sentido, tomando en cuenta los hechos recientes de la región (vuelcos hacia la derecha, e incluso extrema derecha), como conflicto empírico latente, motiva este estudio entender en profundidad la paradoja entre bienestar objetivo y malestar subjetivo concentrada en segmentos medios y altos de la sociedad capitalina. Cabe preguntarse si esas personas que han mejorado sus condiciones de vida siguen la trayectoria de sentirse peor que antes, y con ello estudiar si a dicho desencanto se le acompañan actitudes políticas más conservadoras de lo esperado. Es claro, este malestar no proviene de la carencia extrema, sino de percepciones relativas: son individuos que comparan su situación actual con la de años previos o con la de otros grupos, y experimentan amenaza de estatus ante la democratización del bienestar. Distintos estudios comparados muestran que el comportamiento político no responde únicamente al nivel de ingresos absoluto, sino a las percepciones de jerarquía social y al temor a perder posición (Gidron & Hall, 2017; Mutz, 2018). En economías con movilidad reciente, el ascenso de sectores populares puede ser leído por sectores medios como una pérdida relativa de privilegios, aunque en términos absolutos todos mejoren (Kurer, 2020). Desde una perspectiva simbólica, este proceso activa una paradoja adicional: a medida que ciertos sectores se aproximan aspiracionalmente a la élite económica, se intensifica la frustración derivada de no alcanzar los niveles de consumo y estilo de vida que dicha élite encarna. En este sentido, la proximidad simbólica no reduce la distancia social, sino que la vuelve más visible y, por ello, más dolorosa: la cercanía produce lejanía. La redistribución puede así simultáneamente reducir la pobreza y detonar resistencias morales al igualitarismo (Bénabou & Tirole, 2006; Mijis, 2021). Tales resistencias suelen manifestarse como oposición a las transferencias del Estado, apelando a narrativas meritocráticas de esfuerzo individual y “juego limpio” que justifican las desigualdades preexistentes (Cavallé & Trump, 2015).

Este trabajo conceptualiza el patrón contraintuitivo descrito como un “síndrome de Estocolmo político”. Se trata de una categoría analítica que describe la respuesta ambivalente de grupos objetivamente favorecidos por la expansión de derechos y bienestar, los cuales terminan alineándose con proyectos políticos que históricamente restringieron esos beneficios. En otras palabras, el “rehén” —la clase media beneficiada— desarrolla afinidad hacia el “captor” —las élites o partidos conservadores—, defendiéndolo incluso contra su propio interés material (Ramírez, 2017; García Linera, 2025). El mecanismo central detrás de esta paradoja no es una pérdida material tangible, sino el reordenamiento simbólico del estatus: la redistribución eleva el umbral de pertenencia social democratizando el consumo, el acceso educativo y la visibilidad pública, con lo cual erosiona antiguos monopolios de distinción (Bourdieu, 1984; Lamont, 1992). Siguiendo una intuición de Walter Benjamin, podría decirse que genera “incomodidad por la irrupción del otro” en espacios antes exclusivos, activando reacciones defensivas de quienes construyeron su identidad sobre desigualdades que ahora se acortan. Así, el éxito igualitario engendra una ansiedad de estatus en ciertos sectores medios, quienes sienten desestabilizada su posición relativa y pueden retirar su apoyo político al proyecto que impulsó su ascenso. El presente estudio analiza cómo estos procesos de redistribución en la Ciudad de México han reconfigurado apoyos, tensiones y desafecciones dentro del bloque transformador, y qué factores explican la fractura ideológica al interior de la clase media.

Los objetivos centrales de la investigación son (i) dilucidar los determinantes socioeconómicos y subjetivos de la ideología política en la Ciudad de México, y (ii) examinar empíricamente la “paradoja del bienestar y malestar” identificando su impacto en las preferencias político-ideológicas. En concreto, este trabajo se propone poner a prueba la hipótesis central de que una fracción de la clase media capitalina —materialmente beneficiada por el proyecto de la Cuarta Transformación— experimenta un malestar subjetivo persistente que la distancia del imaginario progresista y la aproxima a visiones conservadoras. El foco analítico se sitúa en una paradoja específica: en qué medida sectores medios y altos que han visto satisfechas, e incluso mejoradas, sus condiciones materiales de vida durante la 4T, se perciben a sí mismos como “peor” en términos subjetivos. La pregunta que guía el análisis es si este desajuste entre bienestar objetivo y malestar subjetivo está incidiendo —y de qué manera— en el respaldo político al proyecto de la 4T y en la configuración de nuevas orientaciones ideológicas. Esta hipótesis general se desglosa en varias hipótesis específicas al final de cada subsección de la sección 2, a partir de la revisión de la literatura. Metodológicamente, el estudio se apoya en una encuesta original aplicada en 2025 y en modelos cuantitativos multivariados para contrastar dichas hipótesis en el contexto de la Ciudad de México. El aporte es tanto empírico como teórico: los hallazgos permiten entender mejor la relación compleja entre las políticas públicas redistributivas que conducen la movilidad social, las subjetividades de estatus e ideología política, con implicaciones para la economía política crítica de las transformaciones sociales. La estructura del capítulo es la siguiente. En la

Sección 2 se presenta la revisión de la literatura relevante, abarcando (2.1) los determinantes clásicos de la ideología en términos socioeconómicos y educativos, (2.2) los límites de la redistribución y la paradoja bienestar-malestar, (2.3) las dinámicas contemporáneas de precariedad laboral y su efecto ideológico, y (2.4) la noción de “síndrome de Estocolmo político” y la fractura simbólica del bloque progresista. Al final de cada subsección se formulan hipótesis derivadas de la literatura para ser probadas empíricamente. La Sección 3 describe la estrategia metodológica. En la Sección 4 se reportan los resultados del análisis estadístico, incluyendo los efectos de la paradoja del bienestar en la autoubicación ideológica (4.1), en el voto (4.2) y en los valores políticos (4.3) y de los factores ideológicos asociados al malestar subjetivo (4.4). Finalmente, la Sección 5 discute las conclusiones y reflexiones finales, integrando los hallazgos empíricos con la discusión teórica y proponiendo recomendaciones de acción para consolidar el bloque redistributivo incorporando la dimensión subjetiva y cultural, no solo el material.

2. Revisión de la literatura

En esta sección se revisa la literatura existente sobre la relación paradójica entre la mejora material, las percepciones subjetivas de bienestar y la ideología política. El presente estudio se inscribe en la economía política de la ideología, partiendo de evidencia que muestra cómo las ideas y valores influyen en la configuración de políticas públicas y, a su vez, en la distribución del bienestar (Piketty, 2019; Bonomi et al., 2021). Resulta pertinente examinar las condiciones objetivas y subjetivas que explican tanto la demanda de redistribución como la paradoja que surge cuando la mejora en bienestar lleva a una clase media emergente a alinearse con opciones conservadoras contrarias a políticas redistributivas (Ramírez, 2024).

En este marco, resulta pertinente examinar las condiciones objetivas y subjetivas que explican tanto la demanda de redistribución como la paradoja que emerge cuando la mejora en el bienestar material se acompaña de malestar subjetivo y reconfiguraciones ideológicas. La revisión se organiza en dos grandes líneas de investigación: (i) los determinantes materiales y perceptuales de la ideología —incluyendo clase social objetiva y subjetiva, educación y socialización institucional—, y (ii) el papel de la precariedad laboral y de mecanismos de identificación simbólica, como el síndrome de Estocolmo político, en la configuración de las preferencias políticas. A partir de esta revisión se derivan las hipótesis que orientan el análisis empírico posterior.

2.1 Determinantes ideológicos: ideología subjetiva, votación e ideología valorativa

2.1.1. Ideología subjetiva

La ideología subjetiva —esto es, la autoidentificación del individuo en el eje izquierda-derecha— se encuentra fuertemente condicionada por factores socioeconómicos y demográficos. Estudios comparativos en América Latina muestran patrones relativamente consistentes: las personas de mayor edad, con mayor religiosidad y mayor satisfacción con su situación económica tienden a ubicarse hacia la derecha del espectro político, mientras que quienes poseen niveles más altos de educación y residen en contextos urbanos suelen declararse de izquierda (Madalozzo & Chebib, 2017; Irigoyen, 2024).

A escala global, esta asociación ha sido interpretada como parte de una transformación de los clivajes ideológicos tradicionales: en muchas democracias contemporáneas, la educación superior se ha convertido en un eje central de

diferenciación política, dando lugar a un patrón en el que sectores altamente educados se alinean con la izquierda, mientras que grupos de altos ingresos se orientan hacia la derecha (Gethin et al., 2022). No obstante, la evidencia para América Latina matiza esta interpretación. Investigaciones recientes muestran que la educación superior no conduce de manera automática a posiciones progresistas, y que, en determinados contextos, puede incluso asociarse con la adopción de visiones ideológicas conservadoras, especialmente cuando la formación se produce en instituciones educativas de privada (Ramírez, Irigoyen & Zaruma, 2025).

En este sentido, la autoidentificación ideológica no constituye una expresión puramente identitaria ni arbitraria, sino que refleja la posición social del individuo y su trayectoria de socialización. Mientras jóvenes urbanos con mayor nivel educativo y capital cultural tienden a declararse de izquierda, grupos de mayor edad o más estrechamente vinculados a instituciones tradicionales —como sectores socioeconómicos acomodados o personas formadas en educación privada— exhiben con mayor frecuencia una autoidentificación derechista (Ramírez & Irigoyen, en prensa). Estas diferencias plantean la necesidad de indagar en qué medida la ideología subjetiva se traduce efectivamente en comportamiento electoral y cómo se articula con los valores políticos subyacentes.

2.1.2. Ideología objetiva (votación)

La ideología objetiva, expresada a través del comportamiento electoral, también se estructura a partir de clivajes sociales relevantes, aunque en transformación. La literatura comparada en América Latina indica que el voto por opciones de izquierda o derecha no responde de manera mecánica a la dicotomía clásica entre clases trabajadoras y élites económicas, sino que se configura mediante combinaciones más complejas de educación, ingreso, estatus ocupacional y socialización institucional (Barrera et al., 2021; Gethin et al., 2022).

En términos generales, los individuos con mayores niveles educativos presentan una mayor propensión a apoyar opciones progresistas, mientras que los sectores de altos ingresos tienden a alinearse con fuerzas conservadoras. Este patrón ha dado lugar a una reconfiguración de las coaliciones electorales, en la que la izquierda articula alianzas heterogéneas entre sectores populares, clases medias educadas y élites intelectuales, mientras que la derecha conserva el respaldo predominante de las élites económicas tradicionales y de grupos con valores sociales conservadores (Piketty, 2019; Barrera et al., 2021).

Esta transformación implica un desplazamiento respecto de los esquemas clásicos de la política de clases. El voto ya no puede explicarse únicamente por la posición en la estructura productiva, sino que incorpora dimensiones simbólicas y culturales asociadas a la educación, la percepción del estatus y la identificación con determinados estilos de vida. En este marco, el comportamiento

electoral expresa no solo intereses materiales inmediatos, sino también orientaciones normativas y aspiracionales que median la relación entre la posición social objetiva y la elección política.

2.1.3. Ideología valorativa

Más allá de los indicadores sociales y electorales, la ideología valorativa remite a los principios normativos que estructuran las diferencias entre izquierda y derecha. Diversos estudios muestran que quienes se ubican en uno u otro polo del espectro ideológico sostienen visiones divergentes sobre cuestiones económicas, sociales y morales. En América Latina, las personas identificadas con la izquierda tienden a atribuir la desigualdad a causas estructurales o decisiones políticas y a respaldar un rol activo del Estado en la economía, mientras que quienes se sitúan a la derecha suelen enfatizar el esfuerzo individual y privilegiar soluciones de mercado (Wiesehomeier & Doyle, 2012).

Asimismo, los valores vinculados a la autoridad, la religión y la moral pública se distribuyen de manera diferencial: la derecha tiende a priorizar el orden, la disciplina y las tradiciones, mientras que la izquierda enfatiza la igualdad, el laicismo y el cambio social negociado (Evans & Neundorf, 2020; Wiesehomeier & Doyle, 2012). Estos determinantes valóricos muestran una notable estabilidad temporal y ejercen una influencia estructurante sobre la identificación partidista y el comportamiento político, más que a la inversa (Evans & Neundorf, 2020).

La literatura reciente también destaca el papel de la educación en la formación de estos valores. Si bien la experiencia universitaria suele asociarse con actitudes más universalistas y una menor aceptación del autoritarismo tradicional (Bročić & Miles, 2021), este efecto no es homogéneo. En contextos educativos de élite, la socialización de clase puede reforzar valores economicistas e individualistas, como una mayor legitimación de la acumulación de riqueza entre estudiantes de origen acomodado (Mendelberg et al., 2017).

En conjunto, estos hallazgos indican que la división izquierda-derecha no constituye un significativo vacío, sino que se nutre de diferencias sustantivas en principios y valores que atraviesan la percepción de la injusticia social, la preferencia por la autoridad o la libertad, la tradición o el cambio, y el individualismo o la solidaridad. Estos componentes ideacionales proporcionan el hilo conductor que vincula la ideología subjetiva con el comportamiento electoral, y permiten comprender por qué los factores materiales —clase, educación e ingreso— configuran coaliciones político-ideológicas específicas (Piketty, 2019).

Al mismo tiempo, estos valores median la forma en que los individuos interpretan su propia trayectoria social y experimentan subjetivamente el bienestar o el malestar, abriendo el camino para el análisis de la paradoja entre mejora material y desafección política.

Hipótesis 1

A mayor posición socioeconómica y socialización en instituciones educativas privadas, mayor será la probabilidad de que los individuos se autoidentifiquen ideológicamente a la derecha y apoyen opciones políticas conservadoras o antirredistributivas. Por el contrario, la educación pública y un estatus socioeconómico más modesto tenderán a atenuar dicha orientación.

2.2. Límites de la redistribución: paradoja del bienestar objetivo y malestar subjetivo

Los procesos recientes de movilidad socioeconómica en América Latina han puesto de relieve una paradoja recurrente: mejoras sustantivas en el bienestar material de determinados sectores no se traducen necesariamente en un mayor apoyo político a proyectos redistributivos (Ramírez, 2017; Ramírez & Minteguiga, 2020). En esta misma línea, un estudio empírico reciente sobre México, basado en la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2022 (EN-CPD), evidencia tensiones persistentes entre bienestar —tanto objetivo como subjetivo— e ideología política. En particular, se observa que un mecanismo clásico de ascenso social, como la formación universitaria —especialmente cuando se realiza en instituciones privadas—, ha empezado un ciclo de correlacionarse de manera significativa con posturas ideológicas de derecha. Este patrón es especialmente visible en sectores medios que, pese a haber mejorado sus condiciones de vida, respaldan opciones políticas que históricamente han limitado su propio bienestar material (Ramírez & Irigoyen, en prensa)..

La literatura contemporánea coincide crecientemente en que la relación entre posición económica objetiva e inclinación ideológica se encuentra mediada por factores simbólicos, perceptuales y relacionales complejos (Gidron & Hall, 2017; Mutz, 2018). Durante los gobiernos de izquierda en América Latina se produjo, en este sentido, un verdadero experimento natural: tras significativas mejoras materiales, emergieron malestares de estatus vinculados a la percepción de pérdida de posición relativa o de exclusividad social (Biekart, 2015; Clément et al., 2020; Montero, 2024). Por ejemplo, durante el auge económico sudamericano de 2003–2013, amplios sectores salieron de la pobreza; sin embargo, al consolidarse como nueva clase media, algunos desarrollaron actitudes antiigualitarias cuando su progreso se estancó o percibieron amenazados sus privilegios incipientes, lo que contribuyó al apoyo a alternativas conservadoras (Junge et al., 2023). En términos analíticos, grupos que mejoraron en términos absolutos percibieron amenazas en términos relativos —esto es, una pérdida de posición frente a otros grupos en ascenso—, generando distanciamiento político respecto de las fuerzas progresistas que habían posibilitado su movilidad (Kurer, 2020).

Este fenómeno no es exclusivo de América Latina. La evidencia reciente sobre el auge del populismo de derecha muestra que sectores relativamente acomodo-

dados pueden llegar a respaldar plataformas autoritarias que prometen restaurar un orden social supuestamente alterado, motivados por la percepción de que la democratización socioeconómica ha erosionado un statu quo del que antes se beneficiaban (Norris & Inglehart, 2019; Zhirnov et al., 2024). En estos casos, las percepciones de posición relativa y de estatus social resultan más explicativas de los giros ideológicos que las ganancias materiales absolutas (Mutz, 2018; Gidron & Hall, 2017; Graham & Pettinato, 2002).

México —epicentro de la llamada Cuarta Transformación— no es ajeno a esta tensión. A nivel agregado, la salida de millones de personas de la pobreza, la reducción histórica de la desigualdad y la continuidad electoral del proyecto gobernante —expresada en una victoria en primera vuelta y en niveles de aprobación superiores al 70 %— dan cuenta de un respaldo social amplio y mayoritario al proyecto redistributivo. Sin embargo, este apoyo agregado no excluye la posibilidad de que, en determinados segmentos sociales, comiencen a emerger tensiones subjetivas asociadas a percepciones de estatus, reconocimiento y expectativas no satisfechas.

En la Ciudad de México, en particular, surge la pregunta de si está emergiendo una clase media en descontento incipiente y, de ser así, cuál es la magnitud, composición y alcance político de dicha desafección. Examinar el componente ideológico de subgrupos de clase media —individuos objetivamente beneficiados por políticas sociales que, no obstante, perciben esos apoyos como insuficientes, transitorios o incluso injustos en relación con sus propias trayectorias y aspiraciones— permite indagar si comienzan a configurarse procesos de distanciamiento simbólico o electoral respecto de la coalición política que impulsó esas políticas. Lejos de suponer un rechazo mayoritario, este análisis apunta a detectar señales tempranas de una paradoja del bienestar objetivo y el malestar subjetivo, cuyo impacto potencial resulta relevante para comprender la dinámica futura del apoyo político al proyecto redistributivo.

Hipótesis 2

La paradoja del bienestar predice que los individuos que han mejorado objetivamente sus condiciones de vida, pero experimentan estancamiento o deterioro en su bienestar subjetivo, presentarán menor apoyo al partido de izquierda gobernante y mayor propensión a orientaciones ideológicas de derecha, en comparación con quienes perciben una mejora subjetiva acorde a su avance material. En particular, se espera que, dentro de la clase media y media alta de la Ciudad de México, el grupo de personas “materialmente satisfechas pero subjetivamente insatisfechas” muestra una probabilidad mayor de distanciamiento electoral e ideológico respecto del proyecto redistributivo, configurando un caso empírico de malestar de estatus que erosiona la lealtad política pese a los logros socioeconómicos alcanzados.

2.3. Precariedad contemporánea, plataformas digitales y reconfiguración política

Las transformaciones recientes del capitalismo —en particular la digitalización económica y la expansión del trabajo precario— introducen nuevas mediaciones en la relación entre clase social e ideología política. La llamada economía de plataformas ha dado lugar a un creciente segmento de trabajadores urbanos precarizados —choferes de aplicaciones, repartidores, freelancers digitales— cuyo estatus laboral se sitúa en un espacio intermedio entre el empleo formal tradicional y el trabajo informal clásico. Estas condiciones materiales inestables tienden a producir orientaciones políticas ambivalentes y potencialmente volátiles, desafiando los esquemas tradicionales de alineamiento ideológico.

Una parte significativa de estos trabajadores está compuesta por jóvenes o adultos, ante mercados laborales rígidos y segmentados, encuentran en las plataformas una fuente de ingresos flexible, aunque carente de protección social. En muchos casos, estos individuos se auto perciben como micro emprendedores independientes más que como asalariados, lo que puede favorecer la internalización de discursos de auto responsabilidad, mérito individual y libre mercado. La retórica del “ser tu propio jefe”, promovida activamente por las plataformas, resulta particularmente atractiva en contextos donde el empleo asalariado formal ha sido históricamente inaccesible o abusivo, aunque dicha identificación no siempre se traduce en apoyos políticos estables a proyectos liberales clásicos (Wolf et al., 2025). Al mismo tiempo, estos trabajadores enfrentan inseguridad económica crónica, ingresos fluctuantes y ausencia de redes de protección estatal, factores que pueden volverlos más receptivos a políticas redistributivas orientadas a ampliar la seguridad social y el acceso a derechos laborales básicos (Baker & Dorr, 2022). Se configura así una dualidad ideológica característica del nuevo precariado urbano: por un lado, aspiraciones de autonomía individual y movilidad asociadas a una identidad de clase media emergente; por otro, una experiencia cotidiana de vulnerabilidad estructural que activa demandas de protección y reconocimiento. Esta tensión sitúa a los trabajadores de plataformas en un espacio ideológicamente intermedio, donde la identificación política no es lineal ni consistente.

La evidencia comparada sugiere que la precariedad laboral puede alimentar orientaciones políticas divergentes. En Europa, la inseguridad financiera y el empleo inestable han incrementado el atractivo tanto de opciones de izquierda radical como de fuerzas de ultraderecha xenófoba, mostrando que las clases medias precarizadas constituyen un electorado heterogéneo en búsqueda de proyectos capaces de responder a su condición incierta (Zhirnov et al., 2024). En América Latina, aunque la evidencia cuantitativa aún es incipiente, diversos estudios indican que los trabajadores informales y precarios tienden, en promedio, a apoyar con mayor frecuencia opciones de izquierda que de derecha, particularmente cuando estas prometen su incorporación al Estado de bienestar mediante esquemas de protección social para trabajadores indepen-

dientes (Baker & Dorr, 2022). No obstante, la continuidad de este apoyo no está garantizada: la frustración persistente derivada de condiciones laborales precarias puede traducirse en desafección política o en desplazamientos hacia opciones conservadoras, e incluso autoritarias, si las expectativas de movilidad y mejora material no se ven satisfechas (Standing, 2018). Junto a la dimensión laboral, la omnipresencia de plataformas digitales de información y redes sociales constituye una mediación adicional clave en la configuración de preferencias políticas. La sobreexposición a narrativas fragmentadas, moralizantes o antipolíticas puede amplificar el desencanto y erosionar la identificación con proyectos colectivos, especialmente entre trabajadores precarizados que ya experimentan inseguridad material y simbólica (Watson et al., 2024). En este contexto, la precariedad económica y la hiperconectividad informativa interactúan, intensificando la ambivalencia ideológica y debilitando los anclajes políticos tradicionales.

En conjunto, estas mediaciones contemporáneas están reconfigurando las alianzas y antagonismos políticos de manera intersticial. Las identidades de clase se vuelven más difusas y fluctuantes: un joven profesional precarizado puede compartir aspiraciones de consumo, mérito y reconocimiento con la burguesía tradicional, al tiempo que experimenta condiciones materiales propias de la clase trabajadora desprotegida. Esta ambivalencia convierte a la llamada “clase media precaria” en un terreno particularmente disputado entre proyectos hegemónicos contrapuestos, y la sitúa como un actor clave para comprender tanto la estabilidad como las fisuras de los proyectos redistributivos contemporáneos.

Hipótesis 3

La inseguridad económica asociada al trabajo precario moldeará comportamientos políticos ambivalentes. En promedio, los trabajadores urbanos precarizados de plataformas tenderán a apoyar en mayor medida opciones políticas de izquierda que los trabajadores asalariados formales, dada su mayor vulnerabilidad y demanda de protección social. Sin embargo, su alineamiento ideológico será menos consistente, presentando mayores niveles de desafección política y una mayor propensión a desplazamientos discursivos hacia la derecha cuando sus expectativas de movilidad y reconocimiento no se vean satisfechas.

2.4. “Síndrome de Estocolmo” político y fractura simbólica del bloque histórico

Un conflicto estructural recurrente en diversas experiencias progresistas latinoamericanas emerge cuando sectores medios —e incluso sectores medios-altos— que han mejorado objetivamente su situación gracias a políticas redistributivas comienza a manifestar un creciente malestar subjetivo. Este fenómeno expresa una tensión profunda entre la democratización material, asociada a una mayor igualdad económica, y las pérdidas percibidas en el plano simbólico por parte de grupos cuya identidad social se había construido sobre distin-

ciones jerárquicas que la expansión de la igualdad tiende a erosionar. En este sentido, las políticas igualitarias que amplían derechos, consumo y oportunidades pueden debilitar ciertas ventajas relativas que históricamente definieron a la clase media tradicional.

De esta tensión surge lo que Ramírez (2024) conceptualiza como un síndrome de Estocolmo político o ideológico-electoral. A diferencia del caso clínico clásico, aquí el “rehén” —sectores medios objetivamente beneficiados por la redistribución— termina identificándose simbólicamente con el “captor”, esto es, con las élites económicas y políticas que promueven proyectos antirredistributivos. Este proceso se traduce en la adopción de marcos interpretativos, valores e incluso comportamientos electorales que contradicen su propio interés material objetivo. Dicho de otro modo, los llamados “nuevos no pobres” que ascendieron socioeconómicamente gracias a políticas igualitarias pueden oponerse a que otros grupos recorran ese mismo camino, en un intento por proteger la ventaja —absoluta o relativa— recientemente adquirida (Ramírez & Minteguiaga, 2020; Ramírez, 2024).

Siguiendo la intuición de Walter Benjamin, la incomodidad no proviene tanto de la pérdida material como de la irrupción del “otro” —antes excluido— en espacios que habían funcionado como marcadores de distinción social. Una amplia literatura ha subrayado precisamente el papel de la posición social subjetiva y de las jerarquías de estatus en la configuración de las preferencias ideológicas (Gidron & Hall, 2017; Mutz, 2018). Las clases medias no se definen únicamente por su nivel de ingresos, sino por aspiraciones, comparaciones sociales y expectativas de reconocimiento; en consecuencia, su lealtad política puede fluctuar en función de cómo perciben su lugar relativo en la estructura social. La noción de “amenaza al estatus” sintetiza este mecanismo: aun en ausencia de pérdidas económicas tangibles, la percepción de que “los de abajo” avanzan y acceden a espacios antes exclusivos puede activar reacciones defensivas y antiigualitarias (Kurer, 2020).

Estas dinámicas no son exclusivas de un país. En Bolivia, el ascenso indígena y la igualación material logrados durante el gobierno de Evo Morales desencadenaron reacciones de temor y rechazo en segmentos de las clases medias urbanas tradicionales, que abrazaron narrativas autoritarias e incluso racializadas ante la percepción de pérdida de jerarquía histórica (Villanueva Rance, 2020; García Linera, 2025). De manera similar, en Ecuador, la reacción antiigualitaria de sectores medios consolidados fue un componente relevante en el giro político del período 2018–2025. En ambos casos, el éxito redistributivo activó conflictos simbólicos que terminaron erosionando el bloque social que había sostenido inicialmente a los proyectos progresistas.

En México, esta fractura simbólica también se ha vuelto visible en años recientes, aunque de manera parcial y no mayoritaria. Tras la elección de 2018, en la que una coalición amplia de clases populares y medias impulsó un proyecto

de transformación, una fracción de quienes se autoidentifican como “clase media” comenzó a expresar desafección, articulando discursos según los cuales el nuevo gobierno “favorece a los pobres” y “descuida a la gente trabajadora”. Paradójicamente, muchos de estos críticos internalizan narrativas de élite contrarias a políticas que habían contribuido a mejorar sus propias condiciones de vida. Estudios de opinión muestran que, en este segmento, las políticas sociales universales tienden a ser percibidas como ajenas o incluso injustas en relación con sus aspiraciones individuales (Abundis & León, 2022; Ramírez & Irigoyen, en prensa). Se configura así una narrativa de agravio en la que la clase media urbana se autodefine como el sector que “sostiene al Estado” y se percibe atrapada entre élites privilegiadas y sectores populares beneficiarios, ubicándose en un limbo aspiracional desde el cual emerge el resentimiento hacia el proyecto redistributivo.

El resultado de este proceso es que el malestar de ciertos sectores medios no se traduce en demandas de mayor igualdad, sino en reclamos de orden, seguridad y preservación del statu quo, creando condiciones favorables para la emergencia de proyectos políticos conservadores que capitalizan dichos temores (Carothers & Feldmann, 2021; Hunter & Power, 2019). Este comportamiento no es vivido como irracional por quienes lo protagonizan: la identidad y la autoestima sociales de estos grupos se encuentran profundamente vinculadas a una estructura jerárquica que perciben amenazada, lo que activa mecanismos psicológicos de defensa del estatus, ampliamente documentados en la literatura (Jost, 2019; Kahneman & Tversky, 1979). En este sentido, la percepción subjetiva de estatus emerge como una variable clave para comprender por qué el bienestar material objetivo no conduce necesariamente a gratitud política, sino que puede derivar en resentimiento y distanciamiento respecto de proyectos igualitarios.

Hipótesis 4

Dentro de la clase media beneficiada por la redistribución, aquellos individuos que experimentan mayor malestar subjetivo presentarán una mayor propensión a alinearse con ideologías y opciones políticas conservadoras o antirredistributivas, en comparación tanto con los sectores populares de menores ingresos como con sus pares de clase media que no manifiestan dicho malestar. Este patrón evidenciaría una fractura simbólica del bloque redistributivo, consistente con un síndrome de Estocolmo político en el que beneficiarios materiales debilitan su lealtad al proyecto de cambio e internalizan las perspectivas de las élites tradicionales.

3. Estrategia metodológica

Este capítulo se apoya en la base de datos y en el diseño metodológico general descritos en la sección metodológica del libro. No se reiteran aquí los detalles del diseño muestral ni del instrumento de recolección, sino que se presentan los criterios analíticos específicos y la estrategia empírica empleada para poner a prueba las hipótesis sobre la paradoja del bienestar objetivo, el malestar subjetivo y la reconfiguración ideológica en la Ciudad de México.

Siguiendo la literatura especializada, la ideología política se concibe como un fenómeno multidimensional, que no puede ser capturado adecuadamente mediante un único indicador (Treier & Hillygus, 2009; Feldman & Johnston, 2014). En consecuencia, este capítulo operacionaliza la ideología a través de tres dimensiones complementarias: (a) la autoubicación ideológica subjetiva, (b) el comportamiento electoral como ideología revelada, y (c) los valores ideológicos fundamentales.

Cada una de estas dimensiones se modela como una variable dependiente distinta, permitiendo evaluar tanto la coherencia como las tensiones entre identidad ideológica, valores y conducta política. Esta estrategia resulta especialmente pertinente para el objetivo central del capítulo: identificar situaciones en las que el bienestar material objetivo no se traduce en alineamientos ideológicos o electorales coherentes con proyectos redistributivos, sino que convive con malestar subjetivo, ambivalencia política o desplazamientos hacia posiciones conservadoras.

3.1. Variable dependiente (1): Autoubicación ideológica

La primera variable dependiente corresponde a la autoubicación ideológica del encuestado en la escala izquierda–derecha (0–10), donde valores más bajos indican una orientación más izquierdista y valores más altos una orientación más derechista. Esta medida sintetiza la identidad ideológica subjetiva del individuo y es ampliamente utilizada en estudios comparados de opinión pública. Dado el carácter ordinal de la escala y la posible no equidistancia percibida entre categorías, esta variable se modela mediante un modelo probit ordenado, incorporando ponderaciones muestrales y un conjunto de variables de control sociodemográficas y socioeconómicas. El modelo estima la propensión latente a ubicarse en posiciones ideológicas más derechistas en función de variables asociadas a posición de clase, trayectoria educativa, bienestar objetivo y subjetivo, precariedad laboral y percepciones de estatus.

Este enfoque permite evaluar si determinados perfiles —en particular, sectores medios con mejora material pero malestar subjetivo— presentan una mayor probabilidad de desplazarse hacia la derecha ideológica, aun cuando hayan sido objetivamente beneficiados por políticas redistributivas.

3.2. Variable dependiente (2): Ideología objetiva (comportamiento electoral)

La segunda variable dependiente captura la ideología revelada a través del comportamiento electoral, operacionalizada como un indicador binario de voto por el partido de izquierda Morena en la elección presidencial de referencia. El indicador toma valor 1 si el encuestado votó por Morena (elecciones presidenciales 2024) y 0 si votó por una opción distinta.

El voto por Morena se interpreta aquí como una manifestación observable de alineación ideológica con el proyecto redistributivo en el plano conductual, complementaria a la auto identificación ideológica subjetiva. Esta distinción permite identificar posibles disonancias entre lo que los individuos declaran ser ideológicamente y cómo efectivamente actúan en el terreno electoral.

La probabilidad de votar por Morena se estima mediante un modelo probit, incorporando como covariables la posición socioeconómica, el tipo de educación recibida (pública/privada), indicadores de bienestar objetivo y subjetivo, condiciones de precariedad laboral y valores ideológicos. Los modelos se estiman con errores estándar robustos y ponderaciones muestrales, a fin de garantizar inferencias consistentes.

Este modelo resulta clave para evaluar la hipótesis de que el malestar subjetivo y la amenaza percibida al estatus pueden erosionar el apoyo electoral al proyecto progresista incluso entre sectores que han mejorado materialmente.

3.3. Variable dependiente (3): Ideología valórica

La tercera variable dependiente corresponde a un Índice de Ideología Valores (IV), construido para captar la orientación ideológica del individuo en el plano de sus valores y actitudes fundamentales. A diferencia de la autoubicación subjetiva (identitaria) y del voto (conductual), el IV permite observar el contenido normativo que estructura las preferencias ideológicas.

El índice se construye a partir de ítems de actitudes agrupados en cinco bloques temáticos asociados a clivajes ideológicos ampliamente documentados en la literatura explicado en el capítulo metodológico: (1) género, (2) migración, (3) ecología, (4) redistribución económica, y (5) democracia. Al igual que el resto del libro mayor valor en el índice implica un mayor grado de posicionamiento ideológico conservador.

La construcción del IV se realiza mediante análisis de componentes principales (ACP)⁴, extrayendo el primer factor común que captura la mayor proporción de varianza compartida entre los ítems. De manera complementaria, se contrasta este índice con una versión alternativa basada en la suma estandarizada de respuestas, a fin de verificar la robustez de los resultados.

El IV se emplea como variable dependiente continua en modelos lineales, permitiendo evaluar hasta qué punto las mejoras materiales, el malestar subjetivo y la precariedad laboral se asocian con valores progresistas consistentes o, por el contrario, con orientaciones normativas conservadoras, incluso entre individuos objetivamente beneficiados por políticas redistributivas.

3.4. Variable explicativa central: Paradoja del bienestar objetivo y malestar subjetivo

La variable Paradojal de bienestar objetivo y malestar subjetivo se construyó para identificar a aquellos individuos que, pese a ubicarse en posiciones socio-económicas medias o altas, expresan una evaluación negativa de su situación personal en términos subjetivos. Esta variable busca capturar empíricamente la disonancia entre condiciones materiales relativamente favorables y percepciones de deterioro del bienestar, constituyendo el núcleo analítico de la paradoja abordada en este capítulo.

El bienestar objetivo se operacionaliza a partir de la posición de clase, considerando como tales a los individuos que son parte de la clase media o clase alta según el estrato de ingreso objetivo al que pertenecen. Esta medida permite identificar a sectores que, en términos relativos, no se encuentran en situación de privación material.

El malestar subjetivo se mide mediante la evaluación retrospectiva de la situación personal, a partir de la pregunta sobre si el encuestado se siente mejor, igual o peor que en 2019, año tomado como referencia previa a la pandemia. Se considera que existe malestar subjetivo cuando el individuo declara sentirse peor que en 2019, independientemente de su situación material actual.

A partir de la combinación de ambas dimensiones se construyó una variable dicotómica que toma valor 1 cuando el encuestado pertenece al estrato medio o alta de ingreso y, simultáneamente, declara sentirse peor que en 2019, y valor 0 en los demás casos. Esta codificación permite identificar al grupo de individuos objetivamente integrados pero subjetivamente insatisfechos, que constituye el foco analítico del capítulo.

⁴ Para poder utilizarlo como variable continua y mejorar la robustez de los modelos se usa el primer factorial normalizado del análisis de componentes principales y no la suma agregada de los factores de apoyo o no a la agenda de los movimientos sociales. Ver sección metodológica del libro.

La variable Paradoja del Bienestar se incorpora como variable explicativa central en los modelos estimados, con el objetivo de evaluar si esta disonancia entre posición socioeconómica y percepción subjetiva se asocia con desplazamientos ideológicos hacia la derecha, debilitamiento del apoyo electoral al proyecto redistributivo y orientaciones valorativas menos progresistas.

4. Resultados

4.1. Ideología autopercibida de derecha

La Tabla 1 presenta los resultados de un modelo probit ordenado que estima la probabilidad de ubicarse en posiciones más derechistas de la escala de ideología autopercibida (0–10), con especial atención a la categoría más alta de la escala. El resultado más destacado es el coeficiente positivo y altamente significativo de la variable Paradoja Bienestar ($dy/dx \approx 0.0885^{***}$, $p < 0.01$). Este efecto indica que, ceteris paribus, los individuos que combinan una mejora objetiva de sus condiciones materiales (ingresos estables, salida de la pobreza) con malestar subjetivo (percepción de estar peor que en el pasado reciente) presentan una mayor propensión a identificarse ideológicamente hacia la derecha.

Este hallazgo proporciona evidencia empírica consistente con la hipótesis central del capítulo: la paradoja entre bienestar objetivo y malestar subjetivo se traduce en un desplazamiento simbólico dentro del eje ideológico, incluso entre individuos objetivamente beneficiados por procesos redistributivos. Más que un rechazo directo a la redistribución en sí misma, los resultados sugieren la emergencia de una tensión identitaria asociada al estatus, en la que sectores de clase media o media-alta experimentan incomodidad frente a la pérdida de distinciones relativas en un contexto de mayor igualdad material.

Desde una perspectiva comparada, este patrón se alinea con la literatura que subraya el papel de las amenazas percibidas al estatus y de las pérdidas relativas simbólicas como motores de desplazamientos ideológicos hacia la derecha, independientemente de la situación económica objetiva (Mutz, 2018; Gidron & Hall, 2017). En el caso mexicano, la variable Paradoja Bienestar sintetiza esta tensión: los beneficiarios de la redistribución pueden interpretar la expansión de derechos y oportunidades como una erosión de su posición diferenciada, reaccionando mediante una reconfiguración de su autoidentificación ideológica. Se debe recordar que durante el sexenio de López Obrador 13 millones salieron de la pobreza, pero 13 millones adicionales son parte del grupo de la población que vive una vida digna (superaron el umbral de pobreza de ingresos y de vulnerabilidad de necesidades insatisfechas). Este mecanismo es consistente con lo que se ha conceptualizado como un síndrome de Estocolmo político, en el que sectores objetivamente favorecidos internalizan marcos interpretativos y valores propios de las élites tradicionales cuando perciben amenazada su posición relativa (Ramírez, 2024; Kurer, 2020).

La Tabla 1 presenta los resultados de un modelo probit ordenado que estima la probabilidad de ubicarse en posiciones más derechistas de la escala de ideología autopercebida (0–10), con especial atención a la categoría más alta de la escala. El resultado más destacado es el coeficiente positivo y altamente significativo de la variable Paradoja Bienestar ($dy/dx \approx 0.0885^{***}$, $p < 0.01$). Este efecto indica que, *ceteris paribus*, los individuos que combinan una mejora objetiva de sus condiciones materiales (ingresos estables, salida de la pobreza) con malestar subjetivo (percepción de estar peor que en el pasado reciente) presentan una mayor propensión a identificarse ideológicamente hacia la derecha.

Este hallazgo proporciona evidencia empírica consistente con la hipótesis central del capítulo: la paradoja entre bienestar objetivo y malestar subjetivo se traduce en un desplazamiento simbólico dentro del eje ideológico, incluso entre individuos objetivamente beneficiados por procesos redistributivos. Más que un rechazo directo a la redistribución en sí misma, los resultados sugieren la emergencia de una tensión identitaria asociada al estatus, en la que sectores de clase media o media-alta experimentan incomodidad frente a la pérdida de distinciones relativas en un contexto de mayor igualdad material.

Desde una perspectiva comparada, este patrón se alinea con la literatura que subraya el papel de las amenazas percibidas al estatus y de las pérdidas relativas simbólicas como motores de desplazamientos ideológicos hacia la derecha, independientemente de la situación económica objetiva (Mutz, 2018; Gidron & Hall, 2017). En el caso mexicano, la variable Paradoja Bienestar sintetiza esta tensión: los beneficiarios de la redistribución pueden interpretar la expansión de derechos y oportunidades como una erosión de su posición diferenciada, reaccionando mediante una reconfiguración de su autoidentificación ideológica. Se debe recordar que durante el sexenio de López Obrador 13 millones salieron de la pobreza, pero 13 millones adicionales son parte del grupo de la población que vive una vida digna (superaron el umbral de pobreza de ingresos y de vulnerabilidad de necesidades insatisfechas). Este mecanismo es consistente con lo que se ha conceptualizado como un síndrome de Estocolmo político, en el que sectores objetivamente favorecidos internalizan marcos interpretativos y valores propios de las élites tradicionales cuando perciben amenazada su posición relativa (Ramírez, 2024; Kurer, 2020).

Además del efecto central de la paradoja del bienestar, el modelo revela otros resultados relevantes. Si bien la variable educación universitaria no es estadísticamente significativa, la educación pública se asocia de manera negativa y estadísticamente significativa con la probabilidad de auto percibirse de derecha ($dy/dx \approx -0.0319^*$, $p < 0.01$), lo que sugiere que la socialización en instituciones públicas —potencialmente vinculada a mayores experiencias de diversidad social y valores igualitarios— actúa como un factor amortiguador frente al desplazamiento ideológico hacia posiciones conservadoras (ver siguiente capítulo para profundizar).

Otras variables presentan efectos nulos o no significativos. El Ingreso, la edad y el género tampoco muestran efectos estadísticamente significativos, lo que sugiere que este desplazamiento simbólico asociado al malestar relativo no se limita a cohortes etarias específicas ni se encuentra fuertemente diferenciado por sexo.

Cabe mencionar que, al evaluar el caso de los trabajadores asalariados y de plataforma (en el Modelo 2), se observa una diferencia relevante. En particular, entre los asalariados sí aparece una vinculación ideológica autopercibida con la derecha: la autoidentificación con la derecha se asocia de forma positiva y marginalmente significativa ($dy/dx \approx 0.0213739^*$, $p < 0.10$). En cambio, entre los trabajadores de plataforma, aunque el efecto no alcanza significancia estadística, el coeficiente no es positivo, lo que sugiere un patrón distinto de alineamiento ideológico.

En síntesis, al mostrar los efectos marginales de las principales covariables sobre la probabilidad de ubicarse en posiciones extremas de la derecha ideológica, se tiene un efecto robusto y positivo de la Paradoja Bienestar, junto con los efectos contrapuestos de la educación pública (negativo) y el empleo asalariado formal (positivo). En conjunto, esta evidencia apunta a una fractura parcial en el plano subjetivo del bloque redistributivo: sin cuestionar el apoyo mayoritario al proyecto progresista, los resultados sugieren que en determinados segmentos de la clase media emergen tensiones identitarias y simbólicas que erosionan la coherencia ideológica y facilitan desplazamientos hacia posturas conservadoras.

Este comportamiento no debe interpretarse como una forma de “irracionalidad” política. Por el contrario, coincide con enfoques de la psicología política que destacan el rol de los mecanismos de defensa del estatus y de la aversión a la pérdida simbólica en la formación de preferencias políticas (Jost, 2019; Kahneman & Tversky, 1979). En este sentido, más que una “falsa conciencia” en sentido clásico, los resultados sugieren una reacción defensiva frente a la democratización social, en la que el bienestar material objetivo no garantiza lealtad ideológica cuando se percibe amenazada la jerarquía social relativa. Pero no solo importa cuánto se redistribuye, sino cómo se distribuye. Las formas redistributivas que caracterizaron a los progresismos de la primera ola lograron avances significativos en términos de igualdad material, pero no necesariamente alteraron de manera sustantiva la correlación de fuerzas ni las asimetrías estructurales de poder. En este sentido, la igualdad en sí misma resulta insuficiente si no va acompañada de transformaciones en los mecanismos a través de los cuales se produce y se distribuye (Ramírez, 2024).

Desde esta perspectiva, el debate sobre la construcción de igualdades democráticas —capaces de erosionar relaciones de dominación y no solo de compensar sus efectos— se vuelve central. Como sugiere Ramírez (2024), solo procesos redistributivos que incidan en las estructuras de poder pueden dar lugar a sub-

jetividades políticas menos propensas a reproducir la paradoja del bienestar objetivo y el malestar subjetivo. Ello implica, necesariamente, abrir la discusión sobre el modo de acumulación, las formas de propiedad y los límites de una redistribución que no cuestiona el control social sobre los recursos estratégicos.

Tabla 1. Efectos Marginales (modelo probit ordenado) en ideología auto percibida de derecha (Ecuación 1)

	(1)	(2)
Variables	Coeficientes	Coeficientes
Paradoja Bienestar	0.0885365***	--
Trabajador Asalariado	--	.0213739*
Trabajador de plata-forma	--	-.0179458
Educación Pública	-0.029019**	-0.3354386**
Educ. Universitaria	0.0082216	0.0156657
Ingreso	-0.0017866	--
Edad	0.0022896	.0000914
Edad al cuadrado	-0.0000289	--
Género (1=Mujer)	-0.0022313	-.0033063
Observaciones	1,243	

*Notas: Se reportan efectos marginales (dy/dx) de un modelo probit ordenado para la probabilidad de ubicarse en la categoría 10 de la escala ordinal de ideología auto percibida (10 = “voto derecha”). La variable Paradoja Bienestar es una dummy (=1) donde se capturan los hogares de ingreso medio y alto que declaran estar peor que en 2019; captura malestar percibido pese a bienestar material. Los efectos marginales se evalúan en los promedios muestrales de las covariables. Errores estándar robustos entre paréntesis; estimación ponderada con pesos de probabilidad. N = 1,243. *, ** y *** denotan significancia estadística al 10%, 5% y 1%, respectivamente (pruebas bilaterales).*

4.2. Ideología Objetiva: voto hacia la izquierda

La Tabla 2 presenta los resultados de un modelo probit que estima la probabilidad de haber votado por Morena en la elección presidencial (2024), como indicador de ideología objetiva. Los resultados confirman y profundizan los patrones observados en el análisis de ideología autopercebida, ahora en el plano del comportamiento electoral efectivo.

El resultado más destacado es el efecto negativo y altamente significativo de la variable Paradoja del Bienestar ($dy/dx \approx -0.32^{***}$, $p < 0.01$), que además constituye el efecto de mayor magnitud sustantiva en el modelo. Este hallazgo indica que pertenecer al grupo de individuos que, aun ubicándose en posiciones de estrato medio o medio-alto, declara sentirse peor que en 2019, reduce de manera pronunciada la probabilidad de haber votado por Morena. En términos sustantivos, el malestar subjetivo dentro de sectores objetivamente integrados se traduce en desafección electoral respecto del partido de izquierda en el poder, incluso tras controlar por edad, educación, ocupación y otras variables relevantes.

Este resultado aporta evidencia empírica consistente con la hipótesis de una fractura parcial del bloque histórico redistributivo. Una fracción de la base social que, desde una perspectiva material, cabría esperar que respaldara políticas igualitarias, retira su apoyo al proyecto progresista, confirmando que el bienestar objetivo no garantiza por sí solo lealtad electoral (Ramírez, 2016; 2024). No se trata de un rechazo generalizado al gobierno, sino de un realineamiento segmentado, concentrado en sectores medios-altos atravesados por percepciones de estatus y expectativas frustradas.

Otros coeficientes del modelo permiten matizar este patrón. La edad presenta un efecto positivo y significativo ($dy/dx \approx +0.010^{***}$ por año, $p < 0.01$), lo que sugiere que los votantes de mayor edad mostraron una mayor propensión a apoyar a Morena. Este resultado puede vincularse con una memoria histórica de contextos previos de mayor desigualdad o con una identificación más estable con el proyecto político que gobierna la ciudad desde hace varios ciclos electorales.

Asimismo, la educación superior es empíricamente relevante: el efecto estimado es positivo y marginalmente significativo ($dy/dx \approx +0.059^*$, $p < 0.10$)⁵ Este hallazgo, además, es consistente con la evidencia previa, según la cual los universitarios no solo exhiben actitudes más afines al progresismo, sino que también tienden a votar por candidatos de izquierda (Saravia y Marroquín,

⁵ Ramírez, Irigoyen y Zaruma (2025), con base en el Latinobarómetro 2023, documentan nueva evidencia sobre la relevancia del papel de la educación universitaria y las identidades políticas en América Latina.

2021; Saravia, 2022; Casasola et al., 2024). En particular, para la Ciudad de México, poseer un título universitario se asocia con una mayor probabilidad de votar por la izquierda, específicamente por Morena. En este marco, el resultado relativo a la educación resulta particularmente ilustrativo. Haber cursado estudios en una institución pública se asocia de manera positiva y significativa con la probabilidad de haber votado por Morena ($dy/dx \approx +0.091^{**}$, $p < 0.05$), en comparación con quienes se formaron en instituciones privadas. Este patrón sugiere que la socialización en el sistema educativo público refuerza la afinidad con agendas redistributivas y de ampliación de derechos, coherentemente con lo observado en la Tabla 1, donde la educación pública se asociaba con una menor autopercepción ideológica de derecha.

Ahora bien, al analizar las condiciones de reproducción material y las disposiciones ideológicas que se expresan electoralmente; tenemos que, tanto aquel que recibe una transferencia social ($dy/dx \approx +0.093^{**}$, $p < 0.05$), la condición de ser trabajador de plataforma ($dy/dx \approx +0.103^{**}$, $p < 0.05$) como la de trabajador asalariado formal ($dy/dx \approx +0.091^{***}$, $p < 0.01$) incrementan la probabilidad de haber votado por Morena. Estos resultados indican que amplios segmentos de la clase trabajadora urbana —incluidos trabajadores precarizados de plataformas y asalariados tradicionales— mantuvieron su respaldo al proyecto progresista, posiblemente al percibir beneficios tangibles de las políticas implementadas (aumento del salario mínimo, ampliación de derechos laborales, programas sociales) o al evaluar negativamente un eventual retorno a esquemas neoliberales previos. Las políticas de transferencias monetarias como el incremento del salario como la de protección a sectores de plataformas parece han venido de la mano de apoyo electoral al gobierno de la 4T.

No obstante, este apoyo electoral coexiste con tensiones ideológicas latentes. Como mostró el análisis de ideología autopercebida, ciertos segmentos del trabajo asalariado presentan una mayor propensión a identificarse simbólicamente hacia la derecha. Esta disonancia entre comportamiento electoral y autoidentificación ideológica sugiere que se trata de un electorado potencialmente volátil, cuya lealtad política no está plenamente consolidada y podría reconfigurarse ante cambios en el contexto económico, discursivo o simbólico. En este sentido, la clase trabajadora urbana aparece no solo como base clave del proyecto redistributivo, sino también como un territorio en disputa desde el punto de vista ideológico.

En conjunto, estos hallazgos cuestionan la narrativa simplificada de un abandono generalizado de la “clase media” respecto del proyecto de la 4T. Lo que emerge es más bien una fractura intraclase media: mientras una parte de las sub-élites profesionales, empresariales o aspiracionales se distancia electoralmente del gobierno, la base trabajadora urbana —asalariada y precarizada— mantiene niveles elevados de apoyo. Esta segmentación confirma que la clase media no constituye un bloque homogéneo en términos políticos (Abundis & León, 2022).

Concretamente hay un fuerte efecto negativo de la Paradoja del Bienestar y de la autopercepción de clase alta, frente al efecto positivo de la edad y de la condición de trabajador. En su conjunto, los resultados indican que el éxito redistributivo material no se traduce automáticamente en un bloque político cohesionado. La 4T logró consolidar apoyos entre trabajadores y sectores populares, pero enfrenta tensiones simbólicas con una fracción de la clase media alta y alta que, pese a haberse beneficiado del contexto redistributivo, se realinea hacia la oposición.

Desde una perspectiva gramsciana, estos resultados sugieren que la hegemonía progresista ha avanzado con fuerza en el plano material, pero enfrenta desafíos en el terreno cultural y subjetivo. Redistribuir ingresos no equivale necesariamente a redistribuir sentido. En ausencia de una disputa ideológica capaz de resignificar el progreso como un proceso colectivo e inclusivo, parte de la ciudadanía puede terminar votando contra el mismo modelo que posibilitó su ascenso social, guiada por identificaciones simbólicas con el orden previo (Norris & Inglehart, 2019). Los resultados advierten así sobre los límites subjetivos de la redistribución y la necesidad de articular políticas materiales con una estrategia cultural capaz de sostener coaliciones redistributivas en el tiempo. No obstante, resulta fundamental también interrogar cómo se redistribuye, ya que los procesos de igualación no son neutrales: en el mismo acto de redistribuir se producen subjetividades, se consolidan o erosionan jerarquías simbólicas y se definen los límites políticos de la igualdad alcanzable.

Tabla 2. Efectos Marginales (modelo probit ordenado) en determinantes de la Ideología Objetiva (voto por la izquierda)

Variables	Efecto marginal
Paradoja Bienestar	-0.319*** (0.038)
Edad	0.010*** (0.001)
Educ. Universitaria	0.059* (0.034)
Educación Pública	0.091** (0.043)
Género (1=Mujer)	-0.018 (0.037)
Recibe transferencia del gobierno	0.093** (0.036)
Trabajador Asalariado	0.091*** (0.035)
Trabajador de plataforma	0.103** (0.047)

Zona de residencia	
Norte	0.064 (0.049)
Oriente	-0.033 (0.068)
Poniente	0.099* (0.052)
Sur	0.031 (0.052)
Observations	1,236

*Notas: La variable dependiente es un indicador igual a 1 si el encuestado reporta haber votado por Morena en la elección presidencial (y 0 en caso contrario). Se reportan efectos marginales (dy/dx) de un modelo probit estimado por máxima verosimilitud para Pr(Morena_Presidente=1). Los errores estándar (entre paréntesis) son robustos a heterocedasticidad (Eicker–Huber–White) y se obtienen por método delta. La estimación utiliza pesos de probabilidad [pweight=Pesos]. *, ** y *** indican significancia estadística al 10%, 5% y 1%, respectivamente (pruebas bilaterales).*

4.3. Determinantes de la ideología valórica (conservadora)

La Tabla 3 examina la dimensión de la ideología valorativa utilizando como variable dependiente el Índice Valórico (IV), construido a partir de actitudes hacia la igualdad de género, los derechos de las personas migrantes, la redistribución económica, la protección ambiental y el compromiso con la democracia. Valores más altos del índice indican orientaciones más conservadoras, mientras que valores más bajos reflejan posiciones más progresistas. Los resultados de cuatro especificaciones estimadas mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO) muestran un patrón consistente y sustantivamente relevante.

En particular, la Paradoja del Bienestar presenta un coeficiente positivo y estadísticamente significativo ($\beta \approx 0.141^{***}$, $p < 0.01$). Dado el sentido del índice, ello sugiere que quienes combinan bienestar objetivo (pertenencia a estratos medios y altos de ingreso) con malestar subjetivo se ubican, en promedio, en posiciones valorativas más conservadoras. En consonancia, tanto la autoidentificación ideológica (Tabla 1) como el comportamiento electoral (Tabla 2) muestran un desplazamiento hacia la derecha asociado a dicha paradoja. En el plano de los valores normativos profundos, el patrón se mantiene: estos individuos exhiben un giro conservador relativamente homogéneo en términos axiológicos, con mayor propensión a sostener posturas antiprogresistas en igualdad de

género, derechos de minorías, protección ambiental y principios democráticos. Desde una perspectiva analítica, esto indica que, a diferencia del “arcoíris ideológico” contemporáneo —donde pueden coexistir valores progresistas abstractos con distanciamiento simbólico de la izquierda y voto contra proyectos redistributivos—, la paradoja del bienestar opera aquí como un rechazo integral del ideario progresista.

Un hallazgo clave emerge al introducir en el Modelo 2 la variable “Desacuerdo con las transferencias sociales”, que captura el rechazo explícito a programas de ayuda estatal. Esta variable exhibe un coeficiente positivo y altamente significativo ($\beta \approx 0.313^{***}$, $p < 0.01$), lo que indica que oponerse a las transferencias sociales incrementa de manera sustantiva el puntaje del IV; en consecuencia, se asocia con orientaciones más conservadoras en el plano valórico. En términos analíticos, el desacuerdo con las transferencias monetarias no opera como una preferencia técnica por otros instrumentos, sino como un marcador ideológico: articula adhesiones antiprogresistas con una impugnación de formas concretas de redistribución. En ese sentido, más que un desacuerdo con el diseño de la política, expresa una resistencia normativa a la igualdad como horizonte político.

En relación con las covariables, los resultados aportan evidencia empírica que invita a revisar las interpretaciones generacionales convencionales. La edad muestra coeficientes positivos y significativos ($\approx 0.0146^*$ por año, $p < 0.10$), lo que sugiere que el conservadurismo valórico aumenta ligeramente con la edad. Lejos de contradecir la literatura, este hallazgo apunta a una posible disputa de los clivajes generacionales tradicionales (Norris & Inglehart, 2019), particularmente en contextos urbanos atravesados por malestar subjetivo. La persistencia del efecto al controlar por la paradoja del bienestar indica que ambos procesos responden a lógicas distintas y no redundantes.

El nivel educativo muestra coeficientes negativos en algunas especificaciones (por ejemplo, $\beta \approx -0.0727^{***}$, $p < 0.01$), sugiriendo que mayores años de escolaridad se asocian con valores menos conservadores. El signo positivo del nivel educativo en el modelo de voto a Morena sugiere que los individuos con mayor escolaridad tienden a dar un apoyo al oficialismo, es decir no supone el estudiantado una oposición ideológica al voto progresista, al menos en la Ciudad de México.

Las demás covariables operan como controles. Ser mujer se asocia con menor probabilidad de sostener valores conservadores, lo que sugiere que la experiencia de la desigualdad de género se traduce en disposiciones normativas más igualitarias, consistente con evidencia mexicana (Bejarano, Manzano y Montoya, 2011).

Otras covariables utilizadas en los modelos, aunque no presentan efectos estadísticamente significativos, su presencia refuerza la robustez de los resultados

al demostrar que las asociaciones observadas no dependen de factores socio-demográficos alternativos, sino que se concentran en las variables sustantivas analizadas.

En conjunto, los resultados de la Tabla 3 se organizan en torno a una sola paradoja: la ya documentada “paradoja del bienestar”, en la que mejoras objetivas en las condiciones de vida coexisten con malestar subjetivo. A partir de esa tensión, el desplazamiento hacia posiciones más conservadoras en el plano valórico y el rechazo a instrumentos redistributivos específicos —en particular, las transferencias monetarias— no constituyen una segunda contradicción, sino una derivación lógica del mismo proceso. Más que una disociación entre principios normativos progresistas y apoyos efectivos a la redistribución, el patrón sugiere un conservadurismo integral, donde la evaluación moral de la desigualdad y el juicio sobre la política social se refuerzan mutuamente. En síntesis, el binomio estatus–malestar articula una coherencia antirredistributiva.

El desafío, por tanto, no es únicamente cultural en sentido discursivo, sino profundamente estructural. La apelación a valores progresistas resulta insuficiente cuando los mecanismos concretos de redistribución reproducen jerarquías simbólicas y relaciones asimétricas de poder. Avanzar hacia una igualdad democrática implica repensar el cómo distributivo, los modos de acumulación y las formas de propiedad, a fin de evitar una igualdad desigualadora: mayor cohesión objetiva acompañada de una creciente desconexión subjetiva. En este marco, solo transformaciones que incidan sobre las bases materiales del poder pueden contribuir a la producción de subjetividades efectivamente compatibles con proyectos igualitarios duraderos.

Tabla No.3 Determinantes de la Ideología valórica (Mínimos Cuadrados Ordinarios)

Variables	(1)	(2)
Paradoja Bienestar	0.141*** (0.111)	0.0712 (0.0466)
Edad	0.0146* (0.00821)	0.00278** (0.00122)
Género (1=Mujer)	-0.0815* (0.0429)	-0.0725* (0.0408)
Nivel educativo	-0.0727*** (0.0276)	-0.0730*** (0.0268)
Educación pública	-0.0860 (0.0526)	-0.0716 (0.0494)
Trabajador de plataforma	-0.0171 (0.0446)	-0.0513 (0.0557)
Trabajador asalariado	-0.0673 (0.0587)	-0.00518 (0.0412)
Desacuerdo transferencias sociales	--	0.313*** (0.0470)
Zona	-0.000130 (0.000145)	-0.000202 (0.000139)
Constante	4.469*** (1.266)	4.370*** (1.156)
Observaciones	1,244	1,241
R cuadrada	0.052	0.107

*Notas: La variable dependiente es el Índice de Valores Progresistas (IVP). Dicho índice está aplicado a ítems sobre feminismo/igualdad de género, derechos de personas migrantes, redistribución económica, protección ambiental y valores democráticos; los ítems se recodificaron para que valores altos indiquen posiciones más progresistas. La tabla reporta coeficientes de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) estimados con pesos de probabilidad [pweight=Pesos]. Errores estándar robustos a heterocedasticidad (Eicker–Huber–White) entre paréntesis. *, ** y *** denotan $p < 0.10$, $p < 0.05$ y $p < 0.01$.*

4.4. Determinantes de malestar subjetivo: ideología, clase media y disidencia simbólica

La Tabla 4 aborda directamente la variable central de la hipótesis del capítulo: el malestar subjetivo, operacionalizado como la probabilidad de pertenecer al grupo que declara sentirse peor en la actualidad que en años previos —en particular, peor que previo la pandemia (2019). Este indicador captura una dimensión clave de la paradoja del bienestar, al focalizarse en el componente subjetivo del bienestar. Analizar sus determinantes permite comprender qué perfiles sociopolíticos configuran este segmento disidente en el plano de la subjetividad.

Los resultados son contundentes. El predictor más relevante del malestar subjetivo es la ideología autoidentificada de derecha, con coeficientes elevados y altamente significativos ($dy/dx \approx +0.153^{***}$). Esto indica que la probabilidad de sentirse peor es sustancialmente mayor entre quienes se ubican a sí mismos en la derecha política. El malestar declarado aparece así fuertemente ideologizado: no se trata de una reacción neutra ante condiciones materiales, sino de una percepción filtrada por marcos interpretativos conservadores.

Este hallazgo confirma que el malestar subjetivo no es meramente económico ni apolítico, sino que se encuentra canalizado ideológicamente hacia la derecha. A mayor inclinación derechista, mayor es la probabilidad para evaluar negativamente el presente, incluso frente a evidencia objetiva de mejora. La literatura ha documentado este tipo de procesos como formas de disonancia cognitiva políticamente motivada, en las que los opositores tienden a magnificar lo negativo del contexto actual para reforzar su identidad ideológica (Jost, 2019). En este sentido, el malestar subjetivo puede leerse como una forma de malestar ideológico: una emoción política anclada en creencias y valores conservadores más que en privaciones materiales directas.

La edad también muestra un efecto positivo y significativo ($dy/dx \approx 0.0758^{***}$, $p < 0.01$): los individuos de mayor edad presentan una mayor probabilidad de sentirse peor. Este resultado sugiere que los adultos mayores, aun cuando mantengan cierta estabilidad económica, pueden percibir los cambios sociales y culturales recientes como una pérdida respecto de un pasado idealizado. La transformación acelerada de códigos simbólicos, jerarquías y narrativas de autoridad tiende a generar incomodidad en cohortes socializadas en órdenes previos, reforzando lecturas nostálgicas o de demanda de orden (Norris & Inglehart, 2019). En contraste, los sectores más jóvenes parecen menos proclives a este tipo de evaluación retrospectiva pesimista.

El nivel educativo presenta un coeficiente positivo ($dy/dx \approx +0.301^{**}$, $p < 0.05$), indicando que, paradójicamente, los individuos con educación universitaria reportan mayores niveles de malestar subjetivo. Este resultado apunta a la existencia de un malestar ilustrado en segmentos de la clase media profesional: sectores con altas credenciales educativas y expectativas elevadas que

pueden sentir frustración frente a un proyecto político que cuestiona saberes tecnocráticos, redistribuye reconocimiento hacia sectores populares o confronta instituciones tradicionalmente asociadas al prestigio cultural. Además, estos grupos suelen estar más expuestos a medios críticos y a narrativas globales de crisis, lo que puede intensificar la percepción de deterioro.

En el segundo modelo emerge un resultado clave al incorporar el nivel de ingreso. El coeficiente negativo y altamente significativo ($dy/dx \approx -0.0992^{***}$, $p < 0.01$) indica que, en términos objetivos, los individuos con mayores ingresos intermedios y bajos presentan una menor probabilidad de experimentar malestar subjetivo. Este hallazgo introduce un matiz relevante: el descontento no parece concentrarse en los estratos con posiciones económicas más consolidadas, sino en segmentos intermedios, donde las condiciones materiales no alcanzan a traducirse en una sensación de seguridad o integración estable. En línea con las teorías de la privación relativa, el malestar tendería a intensificarse en estos sectores de frontera, caracterizados por expectativas de ascenso parcialmente frustradas y comparaciones sociales desfavorables (Graham & Pettinato, 2001). Este hallazgo sugiere que la fractura del bloque redistributivo no proviene principalmente de las élites consolidadas, sino de sectores medios que sienten que otros grupos avanzan más rápido o reciben mayor reconocimiento. Es en este segmento donde se gesta con mayor fuerza el síndrome de Estocolmo político: sujetos que han mejorado objetivamente, pero que interpretan el proceso redistributivo como una amenaza a su estatus relativo y, en consecuencia, construyen una narrativa de empeoramiento.

La satisfacción general con la vida, como era esperable, muestra un coeficiente negativo robusto ($dy/dx \approx -0.0805^{***}$, $p < 0.01$): quienes se declaran satisfechos con su vida tienen una probabilidad mucho menor de sentirse peor que antes. Este resultado valida la consistencia interna de la variable dependiente. Sin embargo, el hecho de que los efectos ideológicos persistan aun controlando por satisfacción vital indica que el malestar subjetivo no se reduce a infelicidad personal, sino que incorpora una dimensión política autónoma.

Al incorporar los perfiles ideológicos, los resultados refuerzan esta interpretación. Todos los perfiles asociados al apoyo a Morena presentan coeficientes negativos —muchos de ellos altamente significativos— sobre la probabilidad de malestar. En particular, el perfil “Morenista divergente en ambos planos” reduce de manera drástica la probabilidad de sentirse peor ($dy/dx \approx -1.459^{***}$, $p < 0.01$). Esto sugiere que incluso una identificación crítica o incompleta con el proyecto político funciona como un marco interpretativo protector, capaz de amortiguar el malestar subjetivo. Los perfiles “Morenista divergente en autoidentificación” y “Morenista divergente en valores” muestran efectos similares, aunque de menor magnitud.

Estos resultados confirman que el malestar subjetivo está profundamente mediado por la hegemonía discursiva. Los sujetos alineados —aunque sea parcial-

mente— con el proyecto de la 4T tienden a interpretar el contexto actual en clave de proceso, esperanza o transformación incompleta, mientras que los desafectos construyen narrativas de crisis y decadencia (Carothers & Feldmann, 2021). La percepción del bienestar no es, por tanto, un reflejo directo de las condiciones materiales, sino una lectura políticamente situada de la realidad.

En contraste, los perfiles anti-Morena presentan coeficientes positivos en todos los casos, aunque sin alcanzar significancia estadística robusta. El perfil antipolítico también muestra una asociación positiva relevante con el malestar, lo que indica que la desafección generalizada hacia la política constituye otra fuente de evaluación negativa del presente. Este patrón es consistente con escenarios de crisis de hegemonía, donde conviven oposiciones ideologizadas y apatía difusa, ambas acompañadas de percepciones pesimistas del rumbo social. Finalmente, el desacuerdo con las transferencias sociales presenta un coeficiente positivo, pero no es estadísticamente significativo ($dy/dx \approx +0.0293$, $p < 0.01$): pero cabe decir que, quienes rechazan las políticas redistributivas de transferencias monetarias tienen mayor probabilidad de sentirse peor que antes. Este resultado cierra el círculo analítico del capítulo. El malestar subjetivo no surge de la carencia material, sino de la oposición al sentido redistributivo del cambio. Es el relato usual de la clase media conservadora: “con tanto igualitarismo, el país va peor”. La evidencia empírica muestra que este relato estructura de manera consistente la experiencia subjetiva de una fracción relevante de los estratos medios.

En suma, la Tabla 4 parece revelar que el malestar subjetivo es una construcción político-ideológica, profundamente atravesada por identidades, valores y alineamientos discursivos. Lejos de ser un indicador neutro del bienestar social, funciona como un dispositivo simbólico a través de los cual ciertos sectores procesan el cambio social en clave de pérdida, aun cuando hayan sido objetivamente beneficiados. Este es el núcleo del síndrome de Estocolmo político: una forma de disconformidad subjetiva que no expresa privación, sino resistencia al proyecto igualitario que la hizo posible. El problema es cuando ese ha venido de la mano de objetivamente un bienestar objetivo y un distanciamiento del proyecto político que antes apoyaban.

Tabla no.4 Preferencias ideológicas del malestar subjetivo

Variables	(1) Modelo 1	(2) Modelo 2
Ideología auto percibida de derecha	0.153***	0.147***
Nivel de ingresos	--	-0.0992***
Edad	0.0758***	0.0826***
Edad al cuadrado	-0.000479*	-0.000563**
Género (1=Mujer)	-0.170	-0.156
Educación universitaria	0.301**	0.276**
Educación pública	-0.124	-0.110
Satisfacción con la vida	-0.0805***	-0.0807***
Antipolítica (=0)	0.116	0.0469
Morenista convergente(=1)	-0.364	-0.376
Morenista divergente en autoidentificación (=2)	-1.432***	-1.426***
Morenista divergente en valores (=3)	-0.874***	-0.882***
Morenista divergente en ambos (=4)	-1.459***	-1.526***
Antimorenista convergente(=5)	-0.00209	-0.0232
Antimorenista divergente en autoidentificación (=6)	0.194	0.145
Antimorenista divergente en valores (=7)	-0.0747	-0.0813
Antimorenista divergente en ambos(=8)	En clave	En clave
Desacuerdo transferencias sociales	0.0293	-0.0100
Trabajador de plataforma	0.0249	0.0508
Trabajador asalariado	0.190	0.179
Zona	-0.000435	-0.000355
Observaciones	1,235	1,235

Nota: Modelos probit estimados con ponderación muestral (pweight=Pesos) y errores estándar robustos (en paréntesis). La Tabla reporta efectos marginales promedio (AME) sobre Pr(Paradoja Bienestar =1), calculados con margins, dydx(). *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.*

5. Conclusiones y reflexiones finales

El análisis empírico desarrollado en este capítulo permite identificar con claridad un dilema central del progresismo capitalino contemporáneo: el avance sustantivo en la redistribución material no se ha traducido de manera automática en una consolidación equivalente en el plano subjetivo, ideológico y simbólico, particularmente entre determinados segmentos de la clase media urbana. En otros términos, el proyecto redistributivo logró mejorar de forma significativa las condiciones objetivas de vida, pero enfrenta tensiones persistentes en la construcción de lealtades políticas duraderas y en la internalización del sentido igualitario del cambio social, tensiones que no remiten únicamente a disputas narrativas, sino también a la forma concreta que adopta la redistribución y a los tipos de experiencia social que esta produce. No es menor señalar que aproximadamente una de cada cuatro personas que viven en la Ciudad de México pertenecen al grupo de estratos medios y altos que, si bien tienen resueltas sus condiciones materiales, se sienten subjetivamente peor que previo a la pandemia (2019).

Este hallazgo dialoga con una literatura reciente que advierte que el éxito material de las políticas igualitarias genera nuevas expectativas, comparaciones sociales y demandas de reconocimiento que, si no son procesadas políticamente, pueden derivar en frustración, ambivalencia ideológica y fragmentación del bloque redistributivo. La Ciudad de México constituye un caso particularmente ilustrativo de este fenómeno: en un contexto de reducción histórica de la pobreza y ampliación de la base de la clase media, emerge simultáneamente un malestar subjetivo concentrado en sectores que han mejorado objetivamente, pero que perciben su posición como frágil, reversible o simbólicamente amenazada, especialmente cuando la mejora material no se traduce en mayores márgenes de autonomía, estabilidad o control sobre las condiciones de reproducción de la vida.

Los resultados del capítulo muestran la existencia de una fractura parcial y fundamentalmente simbólica al interior del bloque histórico progresista. Esta fractura no adopta la forma de un rechazo homogéneo al ideario igualitario, sino que se expresa de manera diferenciada en tres planos complementarios. En el plano identitario, se observa un desplazamiento de la autoidentificación ideológica hacia posiciones más derechistas entre una fracción de la clase media beneficiada materialmente. En el plano electoral, este desplazamiento se traduce en una menor probabilidad de apoyo al partido gobernante entre individuos que combinan bienestar objetivo con malestar subjetivo si las elecciones fuesen hoy.

En el plano normativo, se registra un giro conservador pleno en los valores antiprogresistas, en particular a las transferencias monetarias hacia los más pobres, lo que sugiere que el conflicto no si se sitúa en gran medida el horizonte igualitario.

Este patrón confirma que la paradoja del bienestar objetivo y el malestar subjetivo si opera como una negación integral del ideario progresista, ya que es contundente en valores, identidad política y comportamiento electoral.

Los sujetos ubicados en la paradoja del bienestar —ascenso material objetivo y malestar subjetivo persistente— exhiben un patrón coherente: su conservadurismo en valores, en auto identificación ideológica y en comportamiento electoral se articula con el rechazo a políticas redistributivas, particularmente las transferencias. La paradoja no radica en una supuesta ingratitud, sino en cómo el cambio social es interpretado y significado mediante comparaciones relativas, expectativas crecientes y narrativas de merecimiento. En ese marco, la redistribución se experimenta de modo diferencial: no equivale mejorar ingresos vía una inserción social percibida como legítima y valorizada que hacerlo mediante transferencias que, aun elevando el consumo, no reconfiguran estatus ni relaciones de poder.

Una de las contribuciones centrales del capítulo consiste en demostrar que el malestar subjetivo no es solo un reflejo directo ni automático de la situación material, sino una construcción política e ideológica. Quienes se sienten “peor que antes” no son necesariamente los sectores más empobrecidos ni los perdedores objetivos del proceso redistributivo, sino aquellos que interpretan el cambio social a través de marcos simbólicos oposicionales al proyecto gobernante, marcos que interactúan con experiencias materiales de redistribución que no siempre producen reconocimiento, seguridad o sentido de pertenencia.

La ideología emerge, así como un lente interpretativo decisivo: la autoidentificación derechista incrementa de manera sistemática la probabilidad de evaluar negativamente el presente, incluso cuando se controlan condiciones materiales objetivas y niveles generales de satisfacción vital. En contraste, la identificación —aunque sea parcial, crítica o divergente— con el proyecto progresista actúa como un amortiguador del malestar, permitiendo leer el contexto actual como un proceso incompleto pero orientado al cambio, y no como un declive.

Este resultado refuerza una tesis clave de la economía política crítica contemporánea: la percepción del bienestar está profundamente mediada por la hegemonía cultural, pero esta mediación no opera en el vacío, sino en estrecha relación con la materialidad de las políticas redistributivas y con su capacidad —o incapacidad— de modificar relaciones sociales de dependencia y jerarquía. El malestar subjetivo no es apolítico ni neutro, sino una forma de emoción política que expresa resistencias simbólicas frente a la democratización del bienestar, resistencias que se intensifican cuando la igualdad se experimenta

como resultado contingente y no como derecho estructuralmente garantizado. El análisis focalizado en la clase media según ingresos permite afinar aún más esta interpretación. El malestar subjetivo no se concentra en los segmentos medios mejor posicionados, sino en los tramos inferiores de la clase media —los llamados “nuevos no pobres”—, donde la mejora material convive con márgenes de seguridad económica estrechos y con una elevada percepción de riesgo de movilidad descendente. La paradoja debe interpretarse, por tanto, menos como una reacción de privilegio insatisfecho y más como una forma de inseguridad intraclase, en la que avances objetivos parciales son vividos bajo condiciones persistentes de vulnerabilidad. En este contexto, pequeñas variaciones en precios, ingresos o expectativas pueden traducirse en evaluaciones retrospectivas marcadamente negativas, especialmente cuando la redistribución no logra consolidarse como una experiencia estable de autonomía social. La amenaza no es tanto perder lo que se tiene, sino no lograr consolidarlo.

La amenaza de estatus opera aquí como un mecanismo central. La democratización del bienestar reduce distancias objetivas, pero puede intensificar comparaciones sociales y ansiedades simbólicas en sectores que construyen su identidad sobre diferencias relativas. El resultado no es una subjetividad desanclada de la experiencia económica, sino una subjetividad atravesada por la fragilidad de la movilidad reciente y por marcos ideológicos que interpretan la igualdad como riesgo, en particular cuando la redistribución no se acompaña de transformaciones visibles en las relaciones de poder que estructuran el reconocimiento social. Desde esta perspectiva, la paradoja del bienestar objetivo y el malestar subjetivo constituye un síntoma de una transformación incompleta: se amplían derechos y condiciones materiales, pero persisten jerarquías simbólicas y estructuras de reconocimiento que tensionan la cohesión política del bloque redistributivo.

Desde un enfoque gramsciano, los hallazgos del capítulo sugieren que el progresismo ha avanzado con fuerza en el plano material, pero enfrenta límites en la construcción de una hegemonía cultural plenamente consolidada. Redistribuir ingresos no equivale necesariamente a redistribuir sentido, ni tampoco a redistribuir poder. En ausencia de una disputa ideológica capaz de resignificar la igualdad como un proceso colectivo y de políticas capaces de traducir la redistribución en experiencias duraderas de autonomía y reconocimiento, una parte de la ciudadanía puede terminar retirando su apoyo al mismo proyecto que posibilitó su ascenso. La sostenibilidad política de los proyectos redistributivos depende, por tanto, no solo de su eficacia económica, sino de su capacidad para transformar las bases culturales y materiales del orden social.

Las implicaciones para la política pública y la estrategia progresista son claras. Resulta imprescindible disputar activamente las narrativas que presentan la redistribución como una amenaza para la clase media y construir un sentido común integrador en torno a los logros del bienestar colectivo, pero también revisar críticamente los dispositivos concretos de redistribución y sus efectos

subjetivos. Los avances materiales deben ser vividos como parte de un proceso compartido que fortalece la cohesión social, y no como beneficios externos o transitorios dirigidos exclusivamente a “otros”. Al mismo tiempo, la evidencia sugiere que los esquemas universales tienden a generar mayor legitimidad social que los programas estrictamente focalizados, en tanto producen pertenencia y reducen la percepción de injusticia distributiva. Diseñar políticas que integren explícitamente a la clase media como beneficiaria —y no solo como contribuyente— resulta clave para reforzar el contrato social.

Asimismo, el bienestar no puede reducirse a una dimensión material. Las políticas públicas deben incorporar una dimensión de reconocimiento simbólico que valore las trayectorias, aspiraciones y esfuerzos de la clase media sin oponerlos a los de otros grupos sociales, evitando reproducir distinciones implícitas entre quienes “reciben” y quienes “producen”. La igualdad democrática requiere que el ascenso de las mayorías sea vivido como un logro compartido y no como una amenaza identitaria. En este sentido, la educación pública emerge como un espacio estratégico de socialización igualitaria y formación ciudadana. Invertir en su calidad y alcance no solo reduce desigualdades objetivas, sino que contribuye a formar subjetividades más compatibles con proyectos redistributivos de largo plazo.

Finalmente, se vuelve necesario institucionalizar la medición sistemática del bienestar subjetivo, las percepciones de estatus y la cohesión social. Detectar tempranamente las brechas entre condiciones objetivas y evaluaciones subjetivas permitiría anticipar tensiones políticas y diseñar respuestas preventivas. Gobernar el bienestar implica también gobernar sus significados, pero sin perder de vista que dichos significados se anclan en experiencias materiales concretas. La experiencia reciente de la Ciudad de México muestra que la redistribución puede producir bienestar sin producir lealtad si no transforma las jerarquías simbólicas y materiales que organizan la experiencia de clase. Democratizar la riqueza es una condición necesaria, pero no suficiente, para democratizar la subjetividad. La tarea pendiente del progresismo consiste en articular materialidad, poder y sentido, de modo que el bienestar deje de vivirse como una paradoja y se consolide como un proyecto colectivo compartido, capaz de sostener en el tiempo un bloque redistributivo amplio y duradero.

Capítulo III

Escuela e ideología: entre la fábrica de derechas y la posibilidad de lo común

*No es la conciencia la que determina la vida,
sino la existencia social la que determina la conciencia*

Karl Marx y Friedrich Engels, 1859

1. Introducción

La Ciudad de México suele nombrarse como una metrópoli gobernada por fuerzas progresistas; es decir, un espacio donde la ampliación de derechos, las políticas sociales y la gramática pública de la igualdad han funcionado, por décadas, como impronta identitaria frente al ciclo neoliberal. Pero esa descripción convive con un territorio profundamente estratificado, donde la experiencia de la vida urbana se subdivide en circuitos de clase, territorios y umbrales desiguales de alcance estatal. En ese sentido, el presente trabajo plantea la tensión: ¿se puede sostener un horizonte de ciudad democrática cuando una parte decisiva de la socialización escolar —que organiza rutinas, jerarquías, expectativas y formas de relación con el Estado— ocurre en regímenes de vida segmentados por dispositivos que modifican la composición ideológica de la ciudadanía?

Partimos desde una perspectiva teórico-política que reconoce a la escuela como una tecnología social que produce subjetividades (Althusser, 1971; Apple, 2004; Bourdieu y Passeron, 2010). En su materialidad cotidiana —tiempos, disciplina, evaluación, clasificación, autoridad— la institución escolar vuelve razonable un cierto orden del mundo. Por eso la ideología no puede reducirse a una preferencia individual consciente ni a un repertorio de “opiniones” agregables; se encarna en hábitos, rituales e instituciones que organizan lo que se vive como mérito o fracaso, como derecho o privilegio, como orden legítimo o amenaza, (Marx y Engels, 1970; Althusser, 1971). En ese tenor, la cuestión persiste: ¿qué tipo de vida se aprende como plausible en el circuito escolar?

El planteamiento cobra especial relevancia si se revisan los hallazgos en la Ciudad de México. Según los datos obtenidos mediante una encuesta estratificada, la trayectoria educativa predominantemente pública o privada aparece como el patrón diferenciador más potente en autoubicación ideológica y en baterías actitudinales. En una ciudad que se percibe como bastión progresista, la evidencia de que el circuito privado concentra disposiciones derechizantes obliga a problematizar la reproducción cotidiana de los habitus urbanos, donde lo

privado distribuye horizontes morales y lógicas políticas, además de credenciales académicas como mercancías. La importancia se manifiesta en el peso estructural de la matrícula privada —que no es marginal— en la ciudad, asegurando la existencia de mundos escolares masivos y diferenciados. Por otro lado, las instituciones públicas manifiestan una composición ideológica más igualitaria-progresista.

Ahora bien, el hallazgo central no se agota en la constatación del clivaje público-privado. Los resultados empíricos revelan, además, una anomalía en el tema seguridad: el patrón se invierte o se atenúa, y emerge una composición ideológica bajo amenaza. En otros términos, preferencias igualitarias pueden coexistir con punitivismo y demanda de mano dura no por incoherencia subjetiva, sino porque la amenaza reorganiza el cálculo moral político donde la vida cotidiana se vive como exposición, el orden aparece como solución disponible. Este reacomodo es consistente con enfoques que muestran cómo, bajo amenaza percibida, predisposiciones autoritarias pueden activarse sin alinearse automáticamente con otras dimensiones ideológicas (Feldman y Stenner, 1997). Y en una metrópoli territorialmente desigual, resulta necesario distinguir entre lo público relativamente protegido —donde la escuela puede operar como derecho y sostener disposiciones universalistas— y lo público erosionado por desprotección y capturas de facto, donde subsiste como institución (O'Donnell, 1993), pero pierde soberanía como regulador de la experiencia y potencializador de lo común.

A partir de ello, el capítulo trabaja con cuatro hipótesis articuladas. Primero, que el circuito educativo público-privado ordena de manera estable perfiles ideológicos distintos en múltiples dominios (redistribución, derechos, migración, meritocracia, transferencias y voto). Segundo, que esa asociación se vuelve evidente si tratamos el financiamiento como régimen de experiencia, donde el circuito privado tiende a aproximar la escolarización al valor de cambio —ganancia, inversión, distinción, compra de entorno— mientras el circuito público conserva con mayor fuerza un horizonte de valor de uso —derecho, reconocimiento, convivencia y común—. Tercero, que la seguridad constituye un principio de reorganización bajo amenaza y no constituye un eje ideológico “más”, si la experiencia de lo público es amenazante, el punitivismo se vuelve transversal. Cuarto, que para explicar este doble resultado —clivaje y doblaje securitario— debemos tratar la privatización como despliegue múltiple, porque además de la captura escolar con el mercado privado visible, ocurre por medio mecanismos político-institucionales, capturas territoriales y mediaciones tecnodigitales que reorganizan materialmente la vida escolar —privatizaciones furtivas—.

Metodológicamente, este capítulo se apoya en un diseño cuantitativo transversal basado en una encuesta aplicada a población residente en la Ciudad de México. La unidad de análisis es el individuo encuestado y el argumento empírico se estructura a partir de tres variables estratégicas centrales: trayectoria educativa

según circuito público-privado (variable explicativa central), posición securitaria (mano dura vs. diálogo) e ideología (autoubicación izquierda-derecha 0-10 y reactivos actitudinales). El análisis avanza en dos momentos, primero una lectura descriptiva de patrones, seguido de modelos probabilísticos para estimar la asociación entre trayectorias educativas, securitización y composiciones ideológicas, incorporando estratificaciones y controles (por ejemplo, ingreso, edad y género). Dado el carácter transversal del diseño, los hallazgos se presentan como regularidades empíricas compatibles con el marco teórico, sin pretender inferencias causales fuertes.

En síntesis, el patrón identificado es que la educación pública tiende a concentrar orientaciones más igualitarias y pro derechos, mientras la educación privada se asocia con disposiciones más conservadoras y con una mayor inclinación hacia opciones electorales de derecha. Al mismo tiempo, la seguridad exhibe que la composición punitiva se manifiesta ampliamente disponible y se intensifica donde hay mayor vulnerabilidad y exposición, lo que sugiere que el problema exige reconstrucción material de lo público como experiencia.

El texto está organizado para que teoría y evidencia dialoguen de manera continua durante todo el trabajo. Después de esta introducción, el capítulo abre con un marco teórico que conceptualiza la ideología como materialidad práctica y sitúa a la escuela como aparato ideológico de producción de sujetos; enseguida, propone comprender la ideología como estructura multidimensional para interpretar la torsión securitaria sin caer en lecturas moralizantes. A partir de ahí, se delimita lo público, lo privado y lo común como regímenes de gobierno de la vida escolar, y esa discusión se traduce en la tensión entre valor de uso y valor de cambio como clave para leer los regímenes de experiencia educativa. El apartado teórico culmina con el desarrollo de la noción de privatizaciones múltiples —visibles y furtivas— que reconfiguran el espacio escolar en la Ciudad de México.

Seguido de ello, describimos la metodología del texto y sobre esa base, se presenta el apartado de resultados y discusión por ejes (autoubicación ideológica, migración, género y derechos, redistribución, tradición y meritocracia, transferencias y comportamiento electoral, seguridad y autoridad). Posteriormente, se incorpora el nuevo apartado de modelos probabilísticos, que estima de forma multivariada el efecto del circuito educativo y del eje securitario sobre tres resultados: probabilidad de voto, autoubicación ideológica y un índice de ideología valórica conservadora. Finalmente, sostenemos la tesis política que se desprende de manera inmediata: la escuela funciona como infraestructura de democracia en la medida en que logra instituir lo público como experiencia y lo común como horizonte.

2. Aproximación teórica: ideología y escuela

Pensar la escuela lejos de la falsa neutralidad en la transmisión de contenidos exige reconocerla como una tecnología social de producción de subjetividades que organiza tiempos y espacios, distribuye trayectorias y expectativas, clasifica rendimientos, estabiliza un sentido común político moral y, al mismo tiempo, funciona como terreno en y de disputa. Como vimos, el supuesto rector de este capítulo es que la ideología no puede reducirse a una preferencia individual consciente o a un “conjunto de opiniones” agregables; es, de hecho, una forma histórica de experiencia que se reconstituye en hábitos, rituales, instituciones y condiciones materiales que vuelven verosímil un cierto orden del mundo. Desde ahí, la pregunta tradicional que problematiza la escuela desde los contenidos se desplaza porque no se trata únicamente de qué información circula, sino de qué tipo de vida se aprende como razonable —qué se percibe como mérito o fracaso, como derecho o privilegio, como orden legítimo o amenaza, como Estado protector o Estado ausente—.

En ese tenor, la aproximación que sostenemos permite formular el problema empírico del capítulo sin caer en posiciones moralistas. Tal como se demuestra en la sección de discusión y resultados, el clivaje público-privado aparece como el patrón más robusto de diferenciación ideológica; y, simultáneamente, al analizar el eje securitario se observa un cambio o, con más precisión, una composición ideológica bajo amenaza (derechos-igualdad por un lado, punitivismo-autoridad. por otro). Por ello, lo que buscamos explicar es el resultado de regímenes diferenciales de experiencia escolar en una metrópoli estratificada como Ciudad de México.

Ideología como materialidad práctica

Desde la economía política, ideología no equivale a identidad, ni puede imputarse como un acto deliberado de conciencia individual. La premisa clásica es que las formas de conciencia están ancladas en condiciones materiales e históricas, esto es: quienes dominan las condiciones de producción de la vida social tienden a dominar también las condiciones de producción de lo pensable y lo decible (Marx y Engels, 1970). La ideología, así, no se agota en lo que la gente declara creer, sino en lo que hace como si fuese natural; aquello que considera razonable, temible, legítimo o inevitable.

En esta línea, se vuelve central el planteamiento de Žižek al insistir en que la ideología no opera primariamente como “engaño”, sino como práctica, puede persistir incluso cuando el sujeto “sabe” —de manera cínica— que cierta ficción lo es, porque esa ficción continúa organizando deseos, identificaciones y

obediencias en el nivel de la realidad social vivida (Žižek, 1989). En un registro convergente que da solidez al planteamiento de este texto, Eagleton (1991) recuerda que “ideología” nombra un campo heterogéneo (desde ilusión y encubrimiento, hasta práctica material y producción de significaciones), y justamente por ello conserva potencia analítica; porque permite describir cómo se fabrica evidencia social, cómo se naturalizan jerarquías y cómo se estabiliza la legitimidad de una relación de poder (Eagleton, 1991).

Este punto importa para la escuela porque su capacidad de repetición cotidiana — la regularidad del horario, la evaluación, la disciplina, la autoridad legítima, la clasificación, la compañía, la soledad acompañada en el aula— la vuelve un dispositivo privilegiado para estabilizar experiencias. En particular, si la escolarización se fragmenta en circuitos diferenciados por financiamiento, territorio y seguridad, la escuela además de distribuir credenciales, produce regímenes de percepción sobre desigualdad, Estado, orden y futuro.

De este modo, si entendemos ideología como práctica y materialidad, entonces la escuela no “añade” ideología a sujetos ya hechos; contribuye en el convencimiento y “producción” de una forma de sujetos al organizar el mundo social de forma reiterada. Es aquí donde la tradición althusseriana ofrece un sostén teórico preciso para nombrar el mecanismo por el cual instituciones aparentemente “técnicas” (como la escuela) devienen tecnologías de subjetivación.

Aparatos ideológicos, interpelación y formación de sujetos en el campo escolar

La tesis de Althusser es cuando menos pertinente en el entendimiento de cómo aporta la escuela en la configuración de la ideología. En su planteamiento, la reproducción de las relaciones sociales de producción se sostiene mediante aparatos ideológicos (no sólo represivos) que producen sujetos adecuados al orden social (Althusser, 1971). La escuela adquiere un lugar privilegiado porque organiza masivamente la formación de sujetos para el trabajo, la ciudadanía y la obediencia cotidiana; su potencia en enseñar contenidos, pero, sobre todo, en producir disposiciones mediante rituales de clasificación, evaluación y normalización. Es una discusión que bajo una mirada liberal, podría recaer en la discusión de forma —escuela— o fondo —contenidos—, cuando lo que sostenemos es que la forma es fondo si supone hábitos y prácticas que constituyen la ideología. La interpelación (Althusser, 1971) —el “llamado” institucional que hace que el individuo se reconozca como sujeto— es particularmente intensa en el espacio escolar, pues ahí se jerarquizan trayectorias, se naturalizan diferencias, se distribuyen promesas de futuro y se aprende, de manera práctica, qué cuenta como mérito y qué como fracaso.

Aquí conviene fijar dos precisiones que serán decisivas más adelante. Primero, un aparato ideológico puede operar en instituciones privadas, puesto que lo privado no es exterior al Estado por el solo hecho de serlo, en la medida en que

participa en la reproducción social bajo marcos de reconocimiento, regulación y legitimidad pública. Segundo, lo público puede perder su carácter sustantivo cuando sus rituales son capturados por lógicas extraestatales —mercado, violencia territorial, poderes fácticos o mediaciones tecnodigitales— reconfigurando la interpelación en clave de amenaza. Este doble movimiento permite evitar esencialismos (“público como progresista”, “privado como conservador”) sin renunciar a la hipótesis estructural, es decir, que distintos regímenes institucionales tienden a producir sujetos políticos distintos porque institucionalizan experiencias disímiles.

Una vez desplazada la ideología del terreno de la opinión al de la práctica, el siguiente paso es evitar otro reduccionismo: suponer que la orientación izquierda-derecha es un eje único y coherente. Precisamente, los resultados sugieren que el clivaje público-privado ordena valoraciones generales, pero que el eje securitario introduce un doblaje que exige una teoría de la composición ideológica bajo amenaza.

Ideología como estructura multidimensional

Un riesgo habitual en estudios sobre autoubicación izquierda-derecha es suponer coherencia unidimensional en la configuración de perfiles ideológicos. En esa línea, quien apoya redistribución sería automáticamente “progresista” en seguridad; quien es conservador sería automáticamente “de derecha” en economía, y así sucesivamente. Feldman y Stenner (1997) muestran lo opuesto cuando evidencian que los sistemas de creencias políticas pueden organizarse alrededor de disposiciones latentes que no siempre se alinean; y bajo condiciones de amenaza percibida, predisposiciones autoritarias pueden activarse y producir preferencias por orden, castigo y liderazgo fuerte incluso si el sujeto sostiene posiciones igualitarias en otros dominios (Feldman y Stenner, 1997).

Esta clave es decisiva para leer la inversión observada en el campo de la seguridad: la derechización securitaria en segmentos de escolaridad pública constituye un reacomodo ideológico bajo amenaza y no un sesgo cognitivo. La amenaza como experiencia cotidiana reorganiza el cálculo moral político y vuelve razonable la demanda de mano dura aun entre sujetos con preferencias redistributivas. Analíticamente, esto obliga a tratar la ideología como composición: redistribución-igualdad por un lado; autoridad-punitivismo por otro; y, en el trasfondo, experiencias institucionales diferenciales que activan o desactivan esos ejes.

En estas experiencias institucionales se ancla también un régimen simbólico donde lo privado funciona como promesa de distinción. En la Ciudad de México, las estadísticas oficiales dan cuenta del peso estructural del circuito privado (y, por tanto, de circuitos de socialización escolar diferenciados): para el ciclo 2023-2024, la SEP reporta 2,977,012 alumnos en el sistema educativo total en CDMX, de los cuales 736,873 corresponden al sostenimiento privado; en educación básica, 1,350,850 alumnos, con 257,225 en escuelas privadas.

Con esto, evitamos caer en el moralismo —privado como malo— ni en el culturalismo —valores familiares—, por el contrario, buscamos identificar la influencia de los entornos privados en la configuración de la ideología, y los datos señalados justifican la relevancia. Falta, sin embargo, un paso conceptual: definir qué entendemos por lo público, lo privado y lo común como regímenes de gobierno de la vida escolar, porque allí se juega la traducción entre estructura institucional y experiencia subjetiva.

Lo público, lo privado y lo común: de la propiedad a los regímenes de gobierno de la vida escolar

Conviene conceptualizar estas formas de “propiedad” —público o privado— sin caer en etiquetas administrativas —propiedad estatal y particular—, sino formas de organización de la vida social que instituyen reglas de acceso, expectativas normativas, patrones de autoridad y dispositivos de valoración. En ese sentido, retomando a Rabotnikof que propone entender “lo público” como categoría móvil y polisémica definida por la combinación de lugares, lógicas y expectativas: dónde se asienta, con qué racionalidades opera y qué promesas normativas se le demandan (Rabotnikof, 2008). Lo público, así, puede describirse como un régimen orientado —cuando logra sostenerse— por principios de acceso no condicionado por pago, universalismo de derechos, rendición de cuentas y producción de un mundo común de reglas compartidas —aunque siempre disputado, incompleto y atravesado por jerarquías—.

Lo privado, por contraste, además del hecho jurídico de la propiedad, es un régimen de acceso y gobierno en el que la mediación central tiende a ser la capacidad de pago (en otras formas: selección, cuotas, barreras indirectas), y donde la vida escolar puede organizarse como adquisición de entorno, y acumulación de ventajas posicionales. En términos de racionalidad, lo privado tiende a alinear la experiencia escolar con lógicas de inversión, competencia y distinción, incluso cuando se hable de “formación integral”. Lo decisivo es que la separación entre público-privado opera como frontera de mundos que separa ofertas educativas cuyo efecto son también modos de relación con el Estado, con el “otro” y con el futuro en términos de previsibilidad.

Lo común, finalmente, permite salir de la dicotomía Estado-mercado sin caer en estatismo abstracto. Para Dardot y Laval (2015), lo común es un principio político instituyente que consolida prácticas de puesta en común, reglas de uso y obligaciones recíprocas que sustraen ámbitos de la vida a la apropiación privada y, también, a ciertas formas de captura jerárquica (Dardot y Laval, 2015). En ese sentido, en el campo educativo, lo común se instituye en condiciones materiales (protección mínima, reglas compartidas, reconocimiento) y en formas de gobierno (participación, deliberación, límites a la mercantilización). Cuando esas condiciones se erosionan, la vida escolar se reorienta hacia soluciones individualizadas (mercado) o autoritarias.

En similar tenor, Minteguiaga (2008), al trasladar esta discusión al campo educativo, muestra que lo público en educación es una construcción histórica y disputada, que puede rearticularse desde lo estatal hacia lo societal e incluso hacia el mercado. De tal manera que, mantener esta perspectiva supone también reconocer el aporte teórico-metodológico al identificar que el clivaje público-privado no habla únicamente de quién administra la escuela, sino qué régimen de vida escolar se vuelve dominante —derecho o ganancia; convivencia o separación; previsibilidad o amenaza—, y por esa vía se producen disposiciones políticas.

Por ello, si público-privado-común remite a regímenes de gobierno, entonces la pregunta automática pasa a ser cómo esos regímenes reordenan y dotan de sentido social la educación: ¿educación como derecho y forma de vida común, o educación como mercancía, ganancia, inversión y credencial posicional? Esa distinción, ideal para este trabajo requiere ubicar el valor de cambio y valor de uso en el sistema educativo visto como aparato ideológico. Así, nos alejamos por completo de los desplazamientos ideales y propagandistas de la construcción ideológica por medio del concierto educativo.

Regímenes de financiamiento y producción de subjetividades: valor de uso y valor de cambio

La distinción entre valor de uso y valor de cambio permite conceptualizar el clivaje público-privado como tensión entre regímenes de experiencia educativa. Por un lado, el valor de uso remite a la utilidad concreta que se realiza en el uso; mientras que el valor de cambio, remite a la forma social mediante la cual los productos se vuelven comparables como mercancías, subordinando sus cualidades a una lógica de equivalencia abstracta mediada por el mercado (Marx, 1976). Si trasladamos al campo educativo, la distinción no implica que la educación sea literalmente una mercancía en todo momento, sino que su organización institucional puede aproximarla —con intensidades variables— a un régimen mercantil que busca la ganancia, que la visualice como espacio de inversión, competencia, reputación y acumulación de ventajas, y por tanto, reproduce otro habitus. En otras palabras, el desplazamiento hacia valor de cambio es producto de una materialidad práctica manifestada de manera insistente durante todo el proceso educativo: la selección, métricas, rankings, marketing escolar, pago, endeudamiento, promesa de empleabilidad, compra de redes y contactos; esta última, la inversión en el capital cultural.

Aquí resulta útil articular dos ideas de la economía política crítica de la educación. Primero, que la mercantilización no requiere privatización total, basta con que el sistema sea gobernado por instrumentos que convierten el derecho en “servicio” y la ciudadanía en “cliente” (Ball y Youdell, 2008; Verger et al., 2016). Segundo, que la educación en clave de mercado tiende a operar como bien posicional y su “utilidad” o función se define por la distancia respecto de otros, y por su capacidad de producir distinción (y no sólo aprendizaje; en muchos casos, sin aprendizaje técnico). En otros términos, la escolarización se

vive como competencia por posiciones, y defiende, como razonable, interpretar la desigualdad como resultado del mérito individual y percibir lo público como falla, costo o riesgo.

Por eso, sostenemos que el circuito privado tiende a institucionalizar —con intensidades variables— una experiencia compatible con el valor de cambio, en un espacio hipermercantilizado donde las relaciones están básicamente mediadas por el mercado. A su vez, el circuito público relativamente protegido puede sostener con mayor fuerza un horizonte de valor de uso en tanto se ejerza la escuela como derecho, institución de encuentro, espacio de reconocimiento y producción de lo común. En los resultados presentamos empíricamente esa diferencia, pues en múltiples dimensiones, el clivaje público-privado ordena valoraciones políticas y morales de manera estable.

Sin embargo, el aporte específico del capítulo está en mostrar que el valor de uso de lo público puede degradarse o invertirse cuando la experiencia escolar pública ocurre bajo amenaza territorial, desprotección y captura de facto. Aunque el derecho persiste como norma formal, éste se erosiona como experiencia, pues que la vida cotidiana se reorganiza alrededor de silencios y amenazas. En ese régimen, la demanda de orden no supone “conservadurismo punitivo” o “anhelo de castigo; es, por el contrario, en una respuesta verosímil a la desprotección. Así, la preferencia igualitaria —salarios, derechos, programas sociales, etcétera— puede coexistir con punitivismo por constitución bajo amenaza (Feldman y Stenner, 1997).

Con esto, ya se proponemos la siguiente tipología: 1) privado mercantilizado, donde domina la gramática del valor de cambio (inversión, distinción, compra de entorno); 2) público protegido, donde lo público conserva densidad sustantiva como derecho y como experiencia de lo común; y (3) público bajo privatización furtiva (o públicamente erosionado por captura territorial), donde lo público subsiste como etiqueta institucional pero se reconfigura bajo regulación informal. Esta tipología ubica entonces a las escuelas como ensamblajes de financiamiento, territorio, seguridad, dispositivos de gobierno y mediaciones tecnodigitales.

Así se entiende mejor el patrón de inversión securitaria que reconocemos entre los hallazgos de la encuesta realizada, y requiere una hipótesis sobre privatizaciones múltiples —visibles y furtivas— que reorganizan materialmente la vida escolar y, con ella, las disposiciones ideológicas. A continuación, intentamos conceptualizar esas privatizaciones furtivas.

3. Triple privatización del espacio escolar en Ciudad de México

El concepto de triple privatización —que aquí desagregamos en cuatro vectores— nombra una mutación del espacio escolar que va más allá de la expansión de planteles privados o de una discusión presupuestaria. Hablamos de una reconfiguración de las condiciones materiales de la experiencia educativa que, a su vez, organiza disposiciones ideológicas. En el marco ya establecido —ideología como práctica material; aparatos e interpelación; y composición ideológica bajo amenaza—, esta propuesta busca mostrar que la escuela funge como nodo de producción de subjetividades cuya forma concreta depende de cómo se ensamblan mercado, redes de gobernanza, territorio y plataformas.

En la Ciudad de México, la hipótesis se vuelve verosímil por dos rasgos estructurales: el primero es la magnitud del circuito privado, aun cuando en una metrópoli gobernada por izquierdas, las estadísticas oficiales dan cuenta de una presencia significativa de matrícula privada y, con ello, de circuitos de socialización escolar diferenciados. El segundo es que el carácter de “la escuela pública” en la ciudad se distribuye territorialmente con desigual presencia del Estado, lo cual desemboca en la existencia de escuelas donde la vida cotidiana se organiza bajo amenaza, incertidumbre y capturas de facto. Esa ecología institucional vuelve inteligible el doble resultado empírico que organiza este trabajo: 1) el eje público-privado como patrón diferenciador robusto y, 2) en seguridad, una torsión donde segmentos de trayectorias públicas tienden a derechizarse.

Privatización visible

La literatura comparada denomina privatización visible a los procesos por los cuales la educación se reordena como campo competitivo, es decir, escuelas que compiten por matrícula, reputación y recursos; estudiantes y familias son refigurados como consumidores; y el Estado, lejos de desaparecer, gobierna lejos mediante incentivos, métricas y regímenes de rendición de cuentas. Whitty, Power y Halpin (1998) mostraron tempranamente que los dispositivos de “elección” en el campo educativo ocultan bajo la idea de libertad para elegir, una tecnología de gobierno que reestructura jerarquías y refuerza segmentaciones preexistentes.

Lo decisivo es que la “elección” no ocurre en un vacío social, en contextos desconocidos o en puntos de partida igualados entre los aspirantes del sistema educativo, por el contrario, se distribuye desigualmente según clase, capital cultural, información y redes. Por ello, la evidencia sobre cuasi mercados ha

documentado de manera recurrente efectos de estratificación. En Chile, caso paradigmático por la radicalidad del diseño voucher, Hsieh y Urquiola encuentran que la expansión de la elección se asocia con mayor estratificación y no con mejoras sustantivas en promedios de logro (Hsieh y Urquiola, 2006). En una línea complementaria, Elacqua sintetiza cómo la estructura de oferta, los cobros y los mecanismos de selección se acoplan para reforzar segregación socioeconómica (Elacqua, 2012).

Desde la economía política, estudios señalan que privatización puede simular única y superficialmente provisión privada, pero realmente supone reconfiguración de financiamiento, regulación y coordinación del sistema educativo: alianzas público-privadas, consultorías, evaluaciones, marcos discursivos que traducen el derecho a la educación a lenguajes de rendimiento, eficiencia y competencia (Verger, Fontdevila y Zancajo, 2016). Dicho de otro modo, lo privado es pero no se limita a propiedad, sino a un conjunto de racionalidades que colonizan la experiencia escolar incluso en instituciones formalmente públicas.

En el plano ideológico, esta privatización visible importa porque vuelve “razonable” que la desigualdad se interprete como mérito y que lo público se perciba como falla o riesgo. En contextos como Gran Bretaña, por ejemplo, la evidencia muestra asociaciones entre escolarización privada y actitudes de voto conservador en la adultez (Wiggins, 2023). En CDMX ocurre algo similar con la privatización posible que genera mundos escolares separables y esos mundos tienden a sedimentar disposiciones políticas diferenciadas. En ese sentido, no basta decir “la gente de derecha elige privado” o simplemente “lo privado genera gente de derecha”, lo cual demuestra una posición fetichizada; lo que importa es cómo el circuito privado organiza una experiencia del mundo donde el Estado aparece como prestador intermitente, y donde la vida social se piensa como competencia por posiciones.

Privatización político institucional

Un segundo vector, distinto del mercado escolar directo, es la privatización político-institucional, es decir, el desplazamiento de la deliberación pública por redes híbridas (fundaciones, consultoras, think tanks, empresas tecnológicas) que definen agendas, métricas y “soluciones”, refigurando al Estado como plataforma de implementación. En clave latinoamericana, este desplazamiento dialoga con la idea de una agenda educativa global que circula como repertorio de políticas y dispositivos, reconfigurando fines y lenguajes de la educación (Bonal y Tarabini, 2011). De hecho, Saltman (2010) analizó esta dinámica en términos de filantropía de riesgo, entendida como intervención que traslada racionalidades empresariales (accountability, performance, gestión por resultados) al corazón de la educación pública, redefiniendo qué cuenta como calidad, éxito e innovación (Saltman, 2010). Asimismo, estos dispositivos que “hacen política” fuera de los circuitos clásicos de control democrático, instalan pri-

oridades y criterios que tienden a naturalizar racionalidades de mercado (Ball y Junemann, 2012). Sobre ese tenor, Reckhow (2013) documenta, cómo los flujos de dinero filantrópico reordenan coaliciones, fortalecen organizaciones intermedias e inciden en la dirección de reformas locales.

Ideológicamente, este vector opera como colonización de la definición de realidad: qué se entiende por “calidad”, qué se premia, qué se mide, qué se vuelve deseable como sujeto escolar. Este argumento sirve también para responder por qué la ciudad puede sostener un discurso progresista y, simultáneamente, reproducir circuitos escolares donde se estabilizan disposiciones conservadoras. Insistimos en la necesidad de romper la idea del adoctrinamiento escolar por contenidos; por ello, manifestamos que la cuestión está más relacionada a la gobernanza que organiza expectativas, premios y reconocimientos y que de manera continua está (re)produciendo subjetividades, posiciones políticas o, mejor dicho, sentidos de vida. Se reproduce una lógica, un ethos y un habitus compatible con el valor de cambio.

Privatización furtiva territorial: zonas marrones, violencia y escuela

El tercer vector es decisivo para comprender la combinación ideológica “preferencia por igualitarismo y mano dura” que se manifiesta en las encuestas. Privatizar va más allá de escuelas, es producir condiciones en las cuales funciones públicas básicas se vuelven intermitentes y son reemplazadas por órdenes coercitivos privados. O'Donnell conceptualizó estas configuraciones como zonas marrones, territorios donde el Estado de derecho no se despliega plenamente y coexisten legalidades parciales con poderes fácticos que administran coerción, protección y arbitraje (O'Donnell, 1993).

En esa línea, las escuelas públicas que se sitúan en o cerca de esas geografías, donde el espacio escolar deja de ser visto —y nunca lo fue— como una institución pedagógica, se establecen como nodos territoriales donde intervienen otros habitus, es decir, otras formas de relacionarse en espacios comprendidos como escenarios dispuestos para el ejercicio de lo común. Cambian los horarios, desplazamientos, silencios, formas de obediencia, estrategias de autoprotección.

La evidencia mexicana sobre violencia y educación es consistente en registrar efectos sobre resultados y bienestar. Jarillo, Magaloni, Franco y Robles (2016) documentan impactos del conflicto asociado a la guerra contra las drogas en niños y escuelas, y discuten mecanismos como ausentismo y alteraciones de la vida escolar (Jarillo et al., 2016). Por su lado, Michaelsen y Salardi (2020) encuentran efectos negativos de la violencia sobre rendimiento educativo y resaltan la vivencia de estrés y perturbación del entorno (Michaelsen y Salardi, 2020). Márquez-Padilla, Pérez-Arce y Rodríguez-Castelán analizan respuestas familiares ante la violencia —incluida la migración— y encuentran efectos acotados en la matrícula total, con heterogeneidades por grupo y estrategias familiares (Márquez-Padilla et al., 2019).

Esta literatura permite sostener que, bajo amenaza, la ideología se reordena por ejes que no se alinean automáticamente. La preferencia por redistribución puede coexistir con demanda de mano dura, porque, como señalamos anteriormente, el territorio produce una experiencia del Estado como ausencia o impotencia, y el “orden” se vuelve una expectativa moral política plausible. En términos de privatización furtiva, el punto es que lo público pierde fuerza y se degrada como experiencia de previsibilidad y derecho. En México, además, hay trabajos que permiten aproximar etnográfica e institucionalmente esta transformación de la vida escolar bajo conflictividad comunitaria.

La consecuencia teórica sostiene el argumento, es decir, la privatización furtiva territorial ayuda a explicar por qué el circuito público puede producir disposiciones igualitarias cuando opera como derecho relativamente protegido, pero puede activar disposiciones autoritarias en tanto opera como experiencia de desprotección. Así, el doblaje securitario supone una respuesta verosímil dentro de una ecología institucional marcada por amenaza, y por tanto, no puede ser visto, como un giro meramente ideológico.

Privatización furtiva digital: soledad acompañada

Finalmente, el cuarto vector que completa esta privatización furtiva en su dimensión contemporánea es el crecimiento de lo digital. El capitalismo de plataformas puede ser entendido como un régimen en el que empresas e infraestructura intermedian y capturan datos de actividades sociales, convirtiéndose en condición de posibilidad de prácticas cotidianas (Srnicek, 2017). En ese sentido, Zuboff (2019) caracteriza el capitalismo de vigilancia como extracción sistemática de experiencia humana para producir predicción y modificación conductual. En el campo educativo, esto reabre el problema público-privado en un plano más profundo, donde incluso una escuela pública puede quedar acoplada a infraestructuras privadas que organizan comunicación, evaluación, registro y sobre todo, sociabilidad.

Evitando el riesgo de caer en argumentos repetitivos, la investigación educativa reciente ha mostrado que la plataformización tampoco es neutral al momento de enseñar y organizar el espacio educativo —y los tiempos que lleva—. Es, por el contrario, un ensamblaje que reconfigura gobierno escolar, datos y subjetividades. En ese mismo sentido, Williamson (2017) muestra que la vida escolar puede volverse objeto de captura y cálculo a través de infraestructura —que sostiene la digitalidad— en la producción, control y tratamiento de datos educativos, que a su vez, configuran la experiencia misma. En años recientes, informes como el de Education International advierten cómo, en el contexto de COVID-19, la emergencia aceleró la entrada de actores privados y consolidó infraestructuras comerciales en educación (Williamson y Hogan, 2020). En clave más específica, trabajos sobre Google Classroom y la expansión de ecosistemas corporativos en escuelas permiten comprender la “naturalización” de plataformas como solución por defecto y sus efectos de datificación (Perrotta et al., 2020).

Entonces, en este caso, la privatización es furtiva; primero, porque no requiere declarar un proceso privatizador, pues basta con que la escuela adopte plataformas que apropiaran datos y atención. Segundo, porque reorganiza el tiempo y la vida cotidiana. Sobre ese aspecto, Crary (2013) describe el régimen 24-7 como horizonte de funcionamiento continuo que erosiona pausas y ritmos comunes, debilitando formas de comunidad y experiencia compartida (Crary, 2013). En un registro afectivo político, Berardi ayuda a pensar la sobrecarga atencional y patologías colectivas; en nuestro marco, esto puede volver más disponibles salidas individualizantes o autoritarias en contextos de amenaza (Berardi, 2009). Es así como, la plataformización convive con privatización visible y territorial; y se acopla a ellas; donde lo público se vive como riesgo (por violencia) o como déficit (por mercado), la plataforma aparece como sustituto de comunidad y como ilusión de acompañamiento, lo cual reorganiza la sociabilidad, el conflicto y la atención por vías privadas.

Con estos cuatro vectores, la “triple privatización” es teóricamente identificada sobre 1) el espacio escolar mercantilizado y elección segmentada; 2) en las redes filantrópicas que buscan redefinir fines y métricas; 3) en territorios bajo amenaza que reconfigura la autoridad y orden; y 4) las plataformas que capturan datos, atención y ritmos de vida. En ese sentido, este marco teórico permite leer el clivaje público-privado en el aparato educativo como patrón ideológico diferenciador, que además de enseñar contenidos en el currículo, produce experiencias que sedimentan disposiciones políticas. Y, sobre todo, permite comprender por qué la seguridad invierte el patrón cuando lo público se vive como desprotección, y la demanda de orden puede devenir —por experiencia material— un componente central de la orientación política.

4. Metodología

Este capítulo utiliza una encuesta aplicada a población residente en la Ciudad de México, con un diseño cuantitativo transversal y unidad de análisis individual. El instrumento integra, por un lado, la autoubicación ideológica izquierda–derecha (0–10) y, por otro, baterías de reactivos que permiten construir perfiles actitudinales en dimensiones clave: autoritarismo (preferencia por gobierno autoritario o líder fuerte sin controles), exclusión-xenofobia (competencia laboral y acceso desigual a servicios para migrantes), género y derechos (antifeminismo o derechos reproductivos), redistribución (impuestos progresivos e impuesto a herencias), tradicionalismo (tradiciones o cambio) y meritocracia (atribución del éxito al esfuerzo individual). A ello se suma el eje central securitización (mano dura o diálogo), en diálogo con la idea de “composición bajo amenaza”.

La estrategia analítica enfatiza tres variables: 1) trayectoria educativa pública o privada como explicación principal, posición en seguridad como segundo eje explicativo e ideología como variable de resultado (tanto autopercebida como actitudinal). El procedimiento sigue una secuencia deliberada, primero se identifican patrones descriptivos al cruzar educación, seguridad e ideología; posteriormente se estiman modelos probabilísticos para evaluar cómo se asocian estas dimensiones y cómo varían bajo estratificaciones y controles adicionales (ingreso, edad, género, entre otros). La construcción detallada de variables e índices se remite al capítulo metodológico general del libro. Por último, aclaramos que este diseño no puede señalar inferencias causales robustas, por lo que los resultados se interpretan como regularidades empíricas consistentes con la hipótesis teórica.

5. Resultados y discusión: clivaje público-privado, privatizaciones múltiples y horizonte político de la escuela

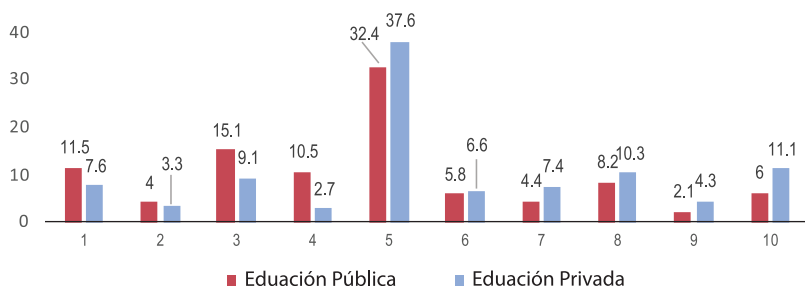
Los resultados empíricos y su lectura teórica convergen en que en la Ciudad de México, la trayectoria educativa predominantemente pública o privada puede fungir como infraestructura ideológica, esto es, como régimen de experiencia que organiza la escala valorativa con la que los sujetos interpretan la desigualdad, el Estado, el mérito, los derechos y la pertenencia. Lejos de ser una aproximación superficial entre “preferencias” y “tipo de escuela”, expresa una forma históricamente situada de producción de subjetividades: la ideología se fundamenta en prácticas, rituales, dispositivos y condiciones materiales que vuelven verosímil un orden del mundo (Althusser, 1971; Žižek, 1989). Por eso, la fuerza del clivaje público-privado se observa en múltiples reactivos de la encuesta y construyen un patrón: donde se mueve la autoubicación izquierda-derecha, también se desplazan redistribución, meritocracia, derechos de género, actitudes hacia migración, disposición frente a transferencias y voto. La consistencia del movimiento en varios ejes refuerza el argumento de la constitución de perfiles políticos relativamente coherentes producidos por regímenes diferenciales de vida escolar.

Al mismo tiempo, en este eje, el clivaje educativo se atenúa —la preferencia por mano dura es prácticamente idéntica en público y privado), y emerge claramente otra composición ideológica donde el igualitarismo coexiste con punitivismo. Sostenemos que la inseguridad reordena el cálculo moral-político y vuelve “razonable” la demanda de orden donde existe amenaza cotidiana. Ahora bien, los hallazgos permiten avizorar un derrotero político en tanto se comprende que si el circuito público —cuando opera como derecho relativamente protegido— tiende a producir disposiciones más igualitarias y universalistas; por tanto, defender y reconstruir la escuela pública como espacio de lo común supone una política de ciudad. Y si, simultáneamente, la seguridad modifica los perfiles políticos, entonces el problema no se resuelve con mano dura, sino con un horizonte democrático, donde el Estado refuerce su soberanía en territorios escolares hoy operan privatizaciones furtivas.

Autoubicación izquierda-derecha según tipo de educación

En la autoubicación ideológica, en el extremo “muy izquierda” (1), la trayectoria pública registra 11.5% frente a 7.6% en privada; en el extremo 10, la privada alcanza 11.1%, casi el doble del público (6.0%).

Gráfico 1. En una escala de 0 a 10, donde 0 es “muy de izquierda” y 10 “muy de derecha” (%)



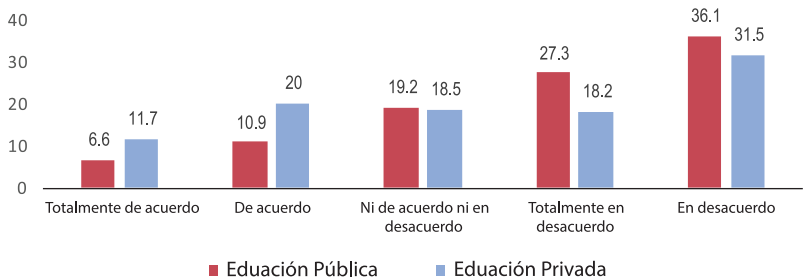
Fuente: Encuesta estratificada CDMX, 2025.
Elaboración propia.

Este contraste es relevante por dos razones: primero, porque muestra que la educación, además de entregar credenciales, distribuye horizontes morales y lógicas políticas. Incluso cuando la encuesta no permite afirmar causalidad estricta, sí permite sostener que el circuito escolar condensa y estabiliza disposiciones sobre cómo se entiende la desigualdad —estructura o esfuerzo—, o qué se espera del Estado —derecho o prestador—, o cómo se define el orden social (mérito o colaboración). Segundo, porque la autoubicación se articula con los movimientos en la redistribución, mérito, y derechos. Ese cambio puede ser leído como efecto del circuito privado que tiende a institucionalizar una experiencia compatible con el valor de cambio —inversión, distinción, compra de entorno— mientras el circuito público se aproxima al valor de uso —derecho, convivencia, acceso, reconocimiento—.

Migración y ciudadanía: derecho como bien escaso

En migración, el circuito privado muestra mayor inclinación restrictiva cuando se trata de acceso a derechos. En la afirmación “los migrantes no deberían tener acceso a los mismos servicios de salud y educación que los mexicanos”, el acuerdo suma 31.7% en privada frente a 17.5% en pública; el “totalmente en desacuerdo” es mayor en pública (27.3%) que en privada (18.2%). Este patrón puede asociarse al régimen donde la vida se organiza en clave de intercambio, de adquisición de entornos; así los derechos tienden a imaginarse como recursos a proteger y restringir.

Gráfico 2. Los migrantes no deberían tener acceso a los mismos servicios de salud y educación que los mexicanos (%)



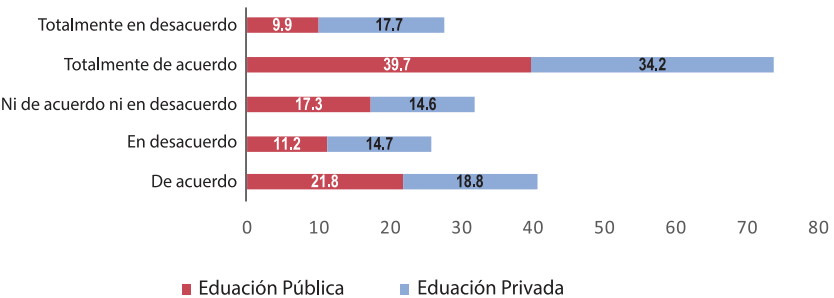
Fuente: Encuesta estratificada CDMX, 2025.
Elaboración propia.

Por ello, en ciudades con altos niveles de desigualdad con circuitos privados que consolidan las experiencias educativas, el acceso mediado por capacidad de pago al ejercicio de derecho es verosímil. Dicho de otro modo, la privatización visible —mercado educativo— puede producir una disposición distinta al percibir al “otro” como amenaza competitiva antes que como sujeto de derecho.

Género y derechos

En derechos de género el patrón se mantiene en la pregunta: “la legalización del aborto es necesaria para garantizar la igualdad de derechos”, donde el “totalmente de acuerdo” es mayor en pública (39.7%) que en privada (34.2%); y el rechazo extremo llega a 17.7% en privada frente a 9.9% en pública. En el reactivo sobre antifeminismo (“el feminismo busca someter a los hombres”), el desacuerdo es mayor en pública.

Gráfico 3. La legalización del aborto es necesaria para garantizar la igualdad de derechos (%)



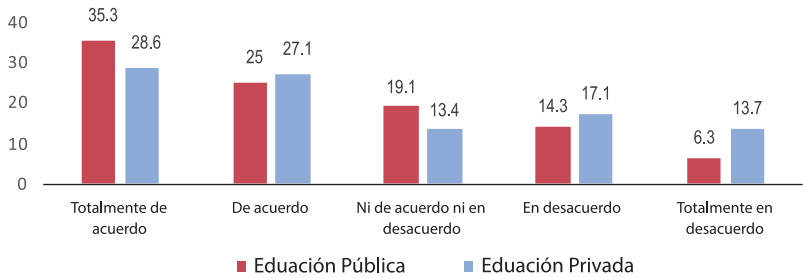
Fuente: Encuesta estratificada CDMX, 2025.
Elaboración propia.

De este modo, el patrón de alineación que tiene el circuito privado con lógicas de distinción y transmisión legítima de ventajas, sugiere que presenten perfiles políticos más restrictivos en derechos. En el circuito público, en cambio, como experiencia de lo común, el reconocimiento de derechos se vuelve más verosímil porque la vida escolar tiende a situarse en anhelos igualitaristas.

Redistribución: valor de cambio y legitimación de la desigualdad.

Ante “cobrar más impuestos a los ricos y menos a los pobres para reducir desigualdad”, el apoyo es mayor en pública (35.3%) que en privada (28.6%), y el rechazo extremo se duplica en privada (13.7%) frente a pública (6.3%).

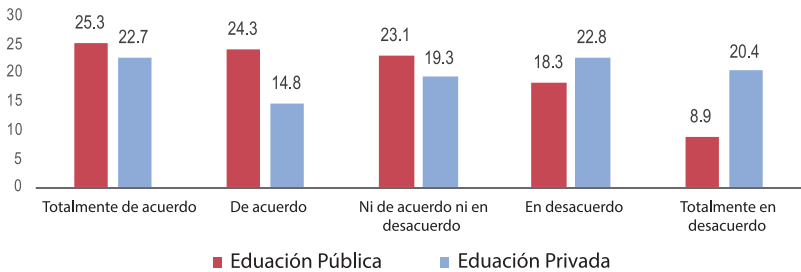
Gráfico 4. Los gobiernos deberían cobrar más impuestos a las personas ricas y menos impuestos a las personas pobres para reducir la desigualdad (5%)



Fuente: Encuesta estratificada CDMX, 2025.
Elaboración propia.

En el impuesto a herencias, la diferencia se amplía: 20.4% en privada y 8.9% en pública. Se expresa de manera diáfana cómo se percibe la herencia —como resultado de acumulación histórica que genera desigualdad— que en lo público el apoyo al impuesto es superior por más de 10 puntos porcentuales.

Gráfico 5. Debería existir un impuesto a las herencias de los más rico.



Fuente: Encuesta estratificada CDMX, 2025.
Elaboración propia.

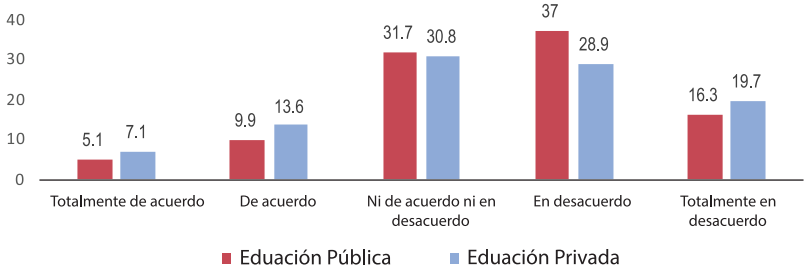
Es coherente con las relaciones basadas en valor de cambio. Es decir, cuando la educación se vive como consumo y mecanismo de distinción, la desigualdad tiende a justificarse con mayor fuerza a través de repertorios de mérito, propiedad y transmisión legítima. La redistribución se percibe entonces como amenaza a la ventaja adquirida. En cambio, cuando la escolarización se vive como derecho y experiencia de lo público y común, la desigualdad se vuelve más inteligible como problema social y la redistribución aparece como legítima.

En ese sentido, el mercado escolar —y la cultura política que lo acompaña— puede apoyar en la composición política de derechos. Mientras lo público, cuando se sostiene, puede apoyar en la composición ideológica que considere al Estado como garantía de derecho. Aquí se expresa, de manera directa, el sentido político de la discusión, en tanto muestra la dialéctica de las instituciones educativas en el modo de acumulación: la escuela no solo forma trabajadores que vivan el ethos clásico (Echeverría, 2010) sino que tiene la potencia de generar ciudadanía crítica y establecerse como bien común que influye en las composiciones ideológicas.

Tradición y meritocracia dispositivos individualizantes

En el reactivo sobre tradición o cambio, quienes provienen de educación privada expresan una posición conservadora (20.7%) frente a trayectorias en educación pública (15.0%).

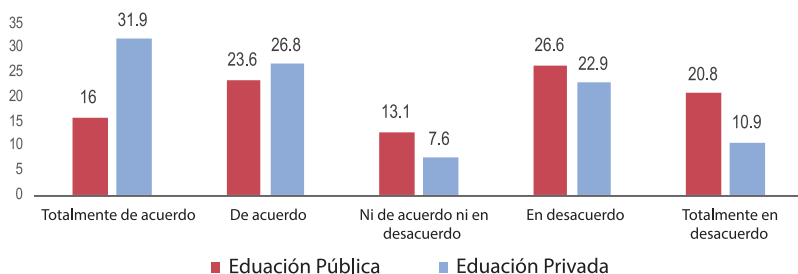
Gráfico 6. Es más importante respetar las tradiciones y costumbres que promover cambios sociales (%)



Fuente: Encuesta estratificada CDMX, 2025.
Elaboración propia.

En similar tenor, en la pregunta sobre meritocracia, como se visualiza en el gráfico 6, la mayoría de las personas que defienden el “échaleganismo”, está en las trayectorias privadas (31.9%); la mitad en lo público (16.0%). El rechazo es doble en la pública (20.8%).

Gráfico 7. La mayoría de las personas que quieren salir adelante lo logran si se esfuerzan lo suficiente (%)



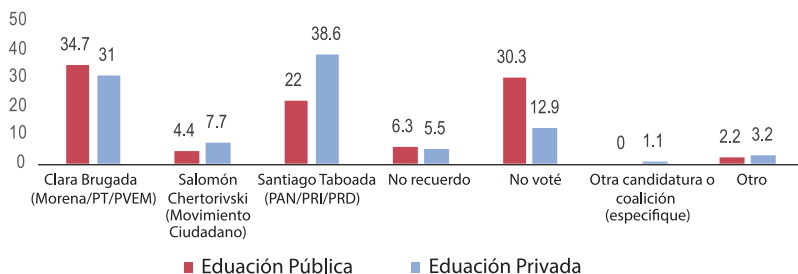
Fuente: Encuesta estratificada CDMX, 2025.
Elaboración propia.

La meritocracia como dispositivo de legitimación de desigualdad despolitiza la estructura y reubica la explicación —y en la moralidad conservadora, la culpa— en el individuo (Bourdieu y Passeron, 2010). En un régimen donde la educación se aproxima al valor de cambio, la meritocracia supone justicia. Sin embargo, en términos concretos, el mercado escolar se expone como compra de ventajas en trayectorias educativas con desigualdades de origen. Políticamente, esto es relevante porque el sostenimiento de un horizonte democrático se ve disputado por un circuito educativo mercantilizado que produce masivamente una lógica individualizante; de ese modo, se erosionan dinámicas solidarias, empáticas y se invisibiliza lo común. De tal manera que es cuando menos lógico preferir la mano dura como solución, cuando los problemas sociales se promocionan como fallas individuales.

Transferencias y conducta electoral

En transferencias, la educación privada se inclina más hacia el rechazo (32.7%) que la pública (19.2%); en contraste, la pública defiende con firmeza en un 32.1% frente a privada (23.4%). En el plano electoral, PAN-PRI-PRD alcanza 48.8% en privada frente a 28.8% en pública; Morena-PT-PVEM pasa de 39.7% (pública) a 28.8% (privada). En Jefatura de Gobierno, la privada registra más voto por Taboada (38.6%) que la pública (22.0%).

Gráfico 8. Votación Jefe/a de Gobierno (%)



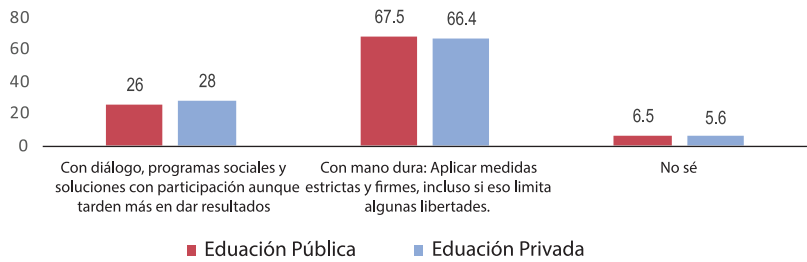
Fuente: Encuesta estratificada CDMX, 2025.
Elaboración propia.

Más allá de la coyuntura, lo significativo es cómo converge la redistribución, meritocracia, transferencias y voto en un perfil ideológico construido a través de la escala valorativa de la encuesta. Frente al momento político que vive México, y su expresión en una ciudad progresista, la preferencia electoral dice mucho sobre la posición ideológica frente al bloque histórico (Gramsci, 1950). La notable diferencia en la preferencia por el candidato de la derecha entre educación pública y privada, muestra nuevamente cómo los regímenes educativos definen la relación con la política.

Seguridad: evidencia de privatización furtiva territorial

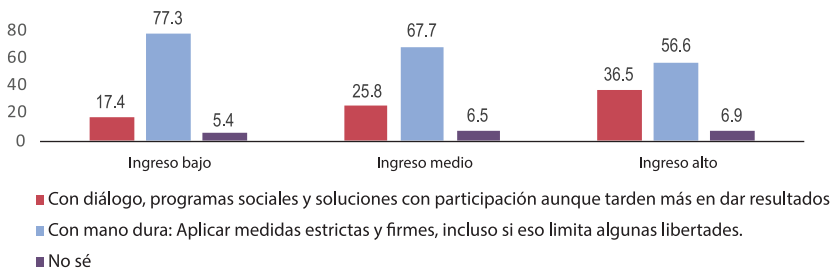
El eje securitario es el punto donde la hipótesis adquiere su máxima potencia explicativa. Por tipo de educación, mano dura es prácticamente idéntica, un 67.5% en pública y 66.4% en privada. La seguridad, entonces, no reproduce con la misma fuerza el clivaje educativo que sí ordena redistribución, mérito o derechos. Pero al estratificar por ingreso, aparece un clave: la preferencia por “diálogo” sube de 17.4% (ingreso bajo) a 36.5% (ingreso alto). Esta es la firma empírica de la composición ideológica bajo amenaza, donde la seguridad se decide como respuesta a exposición, vulnerabilidad y experiencia de la violencia, más que como alineamiento doctrinal, tesis que defienden perspectivas idealistas.

Gráfico 9. La seguridad se soluciona con Mano Dura o con Diálogo —abrazos no balazos— (%)



Fuente: Encuesta estratificada CDMX, 2025.
Elaboración propia.

Gráfico 10. La seguridad se soluciona con Mano Dura o con Diálogo (abrazos no balazos) por Ingreso (%)



Fuente: Encuesta estratificada CDMX, 2025.
Elaboración propia.

La discusión debe ser explícitamente política, pues la encuesta permite leer cómo la mano dura es una solución disponible en contextos de desprotección. Y justamente por eso, el derrotero no puede ser punitivo, porque si el apoyo a la mano dura se intensifica donde hay amenaza estructural, entonces responde a una falla de lo público como experiencia. Así, entonces, esta falla que aparenta ser administrativa, es realmente una privatización furtiva territorial. En otros términos y siguiendo el marco teórico, las zonas marrones de O'Donnell (1993), pueden ser vistas cuando lo público se degrada y pierde capacidad de garantizar previsibilidad, protección y reglas comunes, a pesar de subsistir bajo la formalidad institucional. La escuela, en ese contexto, se modifica por completo: cambian horarios, silencios, obediencias, estrategias de autoprotección. Así, el deseo de orden no debe ser leído como conservadurismo.

En suma, reiteramos que la consecuencia político-educativa en una ciudad que pretende sostener ciudadanía democrática, empática y no autoritaria, debe atender estos procesos privatizadores que generan una composición ideológica distinta. Defender la escuela pública como productora de disposiciones progresistas exige garantizar condiciones materiales mínimas de lo público en relación con la seguridad, porque además sabemos que la política educativa es un campo en disputa y por constitutivamente político.

Autoritarismo y “líder fuerte”

En autoritarismo, el apoyo agregado es relativamente bajo, pero, siguiendo el patrón, hay diferencias por circuito educativo. En la pregunta “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”, la educación privada concentra más “totalmente en desacuerdo” (58.6%) que la pública (48.8%), mientras más personas de educación pública estarían de acuerdo (16.3%) que en privada (12.8%). En el ítem de “líder fuerte” se repite lo anterior: la privada concentra más rechazo total (64.9%), mientras una proporción mayor de participantes de educación pública manifiesta acuerdo (29.1%).

Gráfico 11. El país necesita un líder fuerte que no tenga que preocuparse por elecciones o parlamentos (%)

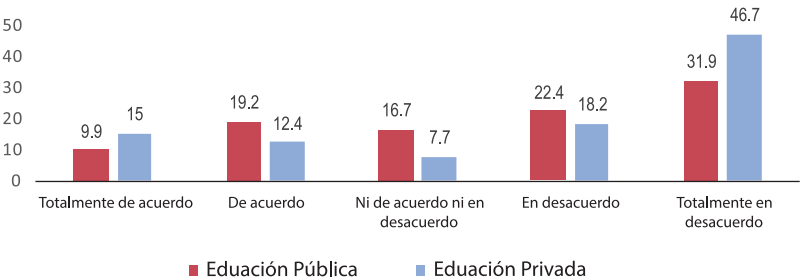
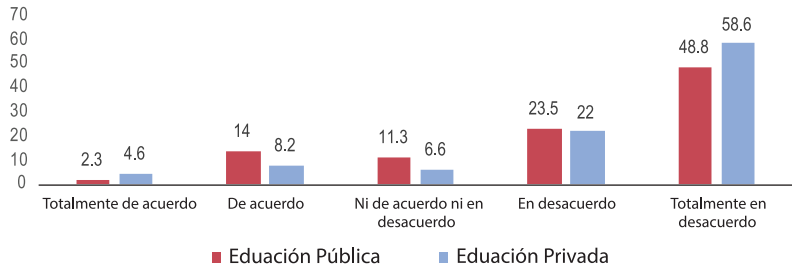


Gráfico 12. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático (%)



Fuente: Gráfica 11 y 12. Encuesta estratificada CDMX, 2025.
Elaboración propia.

Si leemos los resultados con cuidado, lo público no produce autoritarismo; en general, porque el conjunto de resultados muestra que lo público —en otros ejes— produce disposiciones más igualitarias y pro derechos. Lo que sucede, es que la experiencia de desprotección y amenaza puede reconfigurar la relación con la autoridad. Cuando la autoridad democrática aparece incapaz de garantizar previsibilidad y cuidado, la figura del “líder fuerte” puede ser imaginada como solución eficaz. Esta es, de nuevo, una expresión de composición ideológica bajo amenaza. Pues el mismo sujeto puede sostener preferencias redistributivas y, simultáneamente, aceptar soluciones antidemocráticas cuando el hecho en cuestión es el orden en tanto seguridad.

Como vimos, la escuela es un lugar potencial de formación democrática, pero si opera en condiciones de “público erosionado”, la autoridad se reconfigura en clave de excepción y la ciudadanía pierde previsibilidad. Por ello, la tarea es establecer condiciones materiales que hacen creíble y vivible la democracia en la vida cotidiana. La escuela, así como la democracia se experimenta, se vive. Y si la experiencia supone amenazas, la posición securitista es lógica.

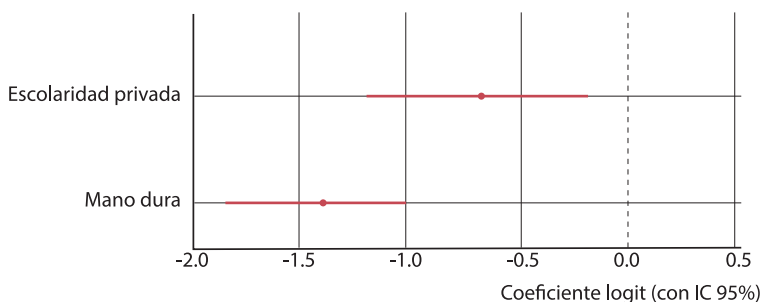
6. Modelos probabilísticos: Educación, seguridad e ideología

A fin de profundizar en el análisis empírico propuesto a lo largo del capítulo, se estimaron tres modelos probabilísticos que permiten observar la asociación entre el tránsito por instituciones educativas privadas, el respaldo a una agenda de mano dura en seguridad y distintas dimensiones de la orientación ideológica. Como señalamos en la introducción, este modelo no pretende establecer relaciones causales fuertes, sino otorgar consistencia estadística de los patrones identificados previamente, controlando por un conjunto de condiciones materiales —ingreso, edad, género, nivel educativo y bienestar subjetivo— que estructuran diferencialmente la experiencia social.

Formalmente, los modelos permiten estimar: 1) la probabilidad de votar por Sheinbaum, 2) la probabilidad de ubicarse en la parte derecha del eje ideológico autoidentificado y 3) el puntaje obtenido en el índice de ideología valórica conservadora. En todos los casos, las variables explicativas centrales son la trayectoria educativa (pública o privada) y la preferencia en el eje de seguridad (mano dura o diálogo), mientras que las variables de control permiten evitar interpretaciones espurias sin suplantar el argumento estructural del capítulo.

Asimismo, estos modelos se sitúan en coherencia con el enfoque teórico que entiende la ideología como una práctica social sedimentada en regímenes de experiencia. En ese sentido, los resultados cuantitativos presentados a continuación deben ser leídos como expresión empírica de esa estructura, en lugar de una inferencia causal entre variables independientes y dependientes.

Modelo 1: Impacto de la educación privada y la posición de “mano dura” en seguridad en la probabilidad de votar por CS.

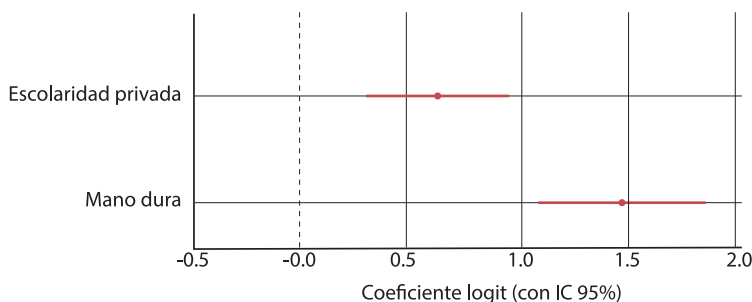


Nota: Los coeficientes mostrados corresponden a un modelo de regresión logística que estima la probabilidad de votar por Sheinbaum en función del paso por instituciones educativas privadas y la preferencia por mano dura en seguridad. El gráfico presenta los coeficientes logit y sus intervalos de confianza al 95%. No se exponen las variables de control incluidas en el modelo (ingreso, edad, género, nivel educativo, salud mental y bienestar subjetivo), pero los resultados se mantienen robustos al incluir dichos controles.

El gráfico anterior sintetiza uno de los hallazgos más consistentes de la estimación multivariada: tanto el tránsito por instituciones privadas como la preferencia por mano dura reducen significativamente la probabilidad de votar por la candidata de izquierda. La magnitud del efecto de la variable “mano dura” resulta especialmente pronunciada, lo que sugiere que el eje securitario opera como principio reorganizador de la orientación política; es, como señalamos, una composición ideológica bajo amenaza, donde la experiencia de exposición cotidiana vuelve plausible —e incluso deseable— la promesa de control y autoridad.

Por su parte, la escolaridad privada también muestra un efecto negativo significativo, aunque de menor magnitud. Esto refuerza la tesis central del capítulo: los circuitos educativos funcionan como regímenes diferenciados de socialización política. En este sentido, el paso por instituciones privadas tiende a producir disposiciones menos afines a proyectos políticos igualitarios, al sedimentar un ethos individualizante, competitivo y meritocrático. Aunque el modelo incluye controles sociodemográficos y de bienestar, el efecto se sostiene, lo que permite pensar la trayectoria escolar como marcador estructural, pero sobre todo, como una tecnología institucional que estabiliza ciertas formas de interpretar la vida social y la desigualdad.

Modelo 2. Impacto de la educación privada y la posición de “mano dura” en seguridad en la probabilidad de tener una ideología autodeclarada de derecha.



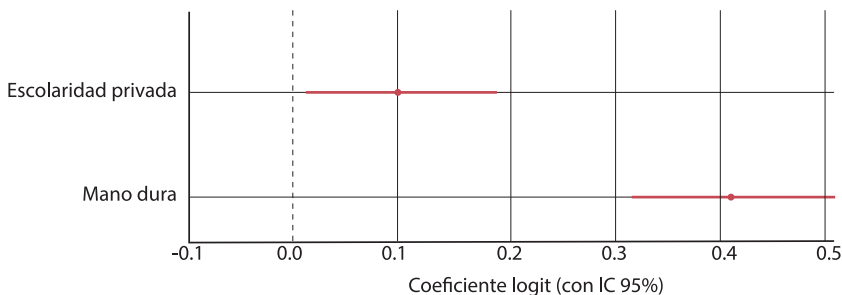
Nota: El gráfico muestra los coeficientes estimados mediante regresión logística ordinal, donde la variable dependiente corresponde a la autoubicación ideológica en una escala de 0 (izquierda) a 10 (derecha). Se presentan los efectos de haber transitado por instituciones educativas privadas y de apoyar una agenda de mano dura en seguridad, sin mostrar las variables de control incluidas (nivel educativo, ingreso, edad, género, salud mental). Las barras reflejan los intervalos de confianza al 95%.

El gráfico permite observar que tanto el paso por educación privada como el respaldo a medidas de mano dura están significativamente asociados con una mayor probabilidad de ubicarse ideológicamente hacia la derecha del espectro político. La magnitud del efecto de la variable “mano dura” es especialmente alta, de modo que se establece como uno de los predictores más poderosos del corrimiento ideológico conservador. Esto refuerza la tesis ya discutida: los contextos de amenaza o desprotección, el orden se vuelve una promesa moralmente legítima, y la autoridad aparece como solución verosímil, aun entre sujetos que en otros dominios podrían sostener preferencias igualitarias.

Por otro lado, la escolaridad privada también presenta un efecto positivo y estadísticamente significativo, lo que sugiere, como se ha indicado en líneas anteriores, que además de credenciales, el circuito educativo configura disposiciones políticas específicas. Como se discutió previamente, la escolarización privada tiende a sedimentar un ethos basado en el valor de cambio, la competencia por posiciones y una lógica meritocrática que se traduce, políticamente, en una mayor afinidad por visiones conservadoras del orden social.

Este modelo ofrece evidencia adicional para señalar que la ideología, lejos de expresar solo una opinión individual, es el resultado sedimentado de experiencias institucionales diferenciales. En este caso, tanto el régimen educativo como la experiencia de amenaza moldean de forma robusta la orientación política de los sujetos.

Modelo 3. Impacto de la educación privada y la posición de “mano dura” en seguridad en la probabilidad de tener ideología valórica conservadora.



Nota: Los coeficientes corresponden a un modelo de regresión lineal estimado con corrección por diseño muestral (svy). No se muestran las variables de control incluidas en el modelo (nivel educativo, ingreso, edad, género y salud mental), pero los efectos presentados se mantienen estadísticamente significativos al incluir dichos controles.

El índice de ideología valórica, construido como una síntesis de posicionamientos frente a agendas clave —democracia, migración, género, redistribución y medio ambiente—, permite identificar de forma estructurada las disposiciones ideológicas subyacentes que no siempre se expresan en el voto o en la autoiden-

tificación en la escala izquierda–derecha. A diferencia de la simple declaración ideológica, este índice capta orientaciones más estables y arraigadas respecto del orden social, el rol del Estado, la autoridad, y las jerarquías culturales.

En este marco, los resultados del modelo confirman que tanto la preferencia por una agenda de mano dura como el tránsito por instituciones educativas privadas se asocian de manera positiva y estadísticamente significativa con puntajes más altos en la construcción de una ideología valórica conservadora.

La magnitud del coeficiente asociado a la mano dura es claramente elevada y con alta significancia estadística ($p < 0.001$), lo que refuerza la idea de que la seguridad opera como eje estructurante de disposiciones políticas conservadoras. El apoyo a estrategias punitivas expresa una cosmovisión más amplia que valora el orden, la autoridad y la jerarquía social como principios deseables y no un mero instrumento para combatir la inseguridad.

Por su parte, el efecto positivo de la escolaridad privada, aunque de menor magnitud, es también significativo. Esto se interpreta, desde la perspectiva desarrollada en el texto, como resultado de una socialización política diferencial: la experiencia en instituciones privadas no solo implica exposición a redes sociales físicas específicas y discursos meritocráticos, sino también una menor cercanía con narrativas igualitarias o redistributivas, que suelen estar más presentes en la educación pública. En conjunto, estos hallazgos muestran que el tipo de institución educativa y la orientación ante la seguridad no operan como simples variables contextuales, sino como mecanismos concretos de producción de ideología valórica.

Con estos modelos podemos percibir cómo la ideología, entendida como estructura práctica internalizada, se moldea a través de experiencias institucionales —como la educación— y de posicionamientos frente a amenazas colectivas —como la inseguridad—. Así, el índice de ideología valórica sintetiza cómo ciertos recorridos de vida configuran estructuras morales estables que trascienden el voto coyuntural y la autodefinición subjetiva.

7. Reconstruir lo público como experiencia y lo común como horizonte

Este apartado formula, de manera explícita, el horizonte político que se desprende del marco teórico y de los hallazgos empíricos. La democracia no se sostiene únicamente por reglas electorales ni por discursos progresistas, requiere experiencias cotidianas de lo público que vuelvan realizable la igualdad y el derecho. En la Ciudad de México, los resultados muestran que el clivaje educativo público-privado organiza disposiciones ideológicas, y el eje seguridad reacomoda la composición ideológica. Con ello se rompen dos ilusiones. La primera —liberal— supone que la ideología es ante todo un problema de “ideas” que se corrige con información, campañas o currículos “neutros” y “democráticos”. La segunda —esencialista— sostiene que basta con la defensa abstracta de la escuela pública para producir ciudadanía democrática. Lo que se evidencia es que la escuela produce política porque instituye un régimen de vida. Por eso, el derrotero político, lejos de ser un moral, es una agenda de reconstrucción de condiciones de experiencia.

En términos analíticos, se propusieron tres configuraciones: privado mercantilizado, público protegido y público bajo privatización furtiva. El derrotero político consiste en ampliar el público protegido y desactivar las privatizaciones furtivas que degradan lo público en el territorio y en lo digital. Esto implica, además, recuperar lo común como principio instituyente: no como consigna, sino como práctica de gobierno democrático de la vida escolar (Dardot y Laval, 2015).

Hablar de reconstrucción de lo público como experiencia significa, en clave de valor de uso y valor de cambio (Marx, 1976), impedir que el orden escolar quede colonizado por completo por la lógica del valor de cambio y, simultáneamente, garantizar que el valor de uso sea realizable. Asimismo, la ampliación de infraestructura, aunque es vital, no termina el problema porque el régimen de experiencia puede expandirse sin dejar de reproducir competencia posicional si lo que se amplía es, en los hechos, el mercado de entornos. La pregunta que marca la hipótesis política es, entonces, cómo reconfigurar las condiciones que hacen creíble la democracia en la vida cotidiana, en especial en territorios donde lo público se vive bajo un régimen de amenaza.

Por eso, las privatizaciones múltiples deben tratarse como un problema de gobierno democrático. En el apartado teórico se conceptualizó una “triple privatización” desagregada en cuatro vectores, y el fondo político del hallazgo exige leerlos como un mismo ensamblaje. La privatización visible (mercado y elección) tiene como consecuencia ideológica la meritocracia como gramática legitimadora, y la degradación del derecho a la forma de “servicio”

o “beneficio”. La privatización político-institucional reordena el sentido común escolar al fijar —por redes híbridas, métricas y dispositivos de gestión— qué cuenta como éxito, qué se premia y qué se vuelve deseable como sujeto. La privatización furtiva territorial (zonas marrones) produce condiciones en las que funciones públicas básicas —seguridad, previsibilidad de reglas, garantía efectiva de derechos— se vuelven intermitentes y son reemplazadas por órdenes privados coercitivos. Y la privatización furtiva digital (plataformización y vigilancia) opera como dispositivo de poder que reconfigura ritmos, autoridad y reconocimiento, incluso dentro de escuelas formalmente públicas.

En ese marco, formulamos tres aspectos críticos que, en conjunto, buscan recomponer la escuela como infraestructura democrática. En primer lugar, se vuelve indispensable desmercantilizar la experiencia educativa, es decir, intervenir sobre el régimen de competencia posicional que organiza la escolarización como valor de cambio. La meritocracia aparece aquí como núcleo legitimador de un orden donde la educación se vive como compra de entorno y acumulación de ventajas: estabiliza jerarquías, desplaza estructura hacia individuo y vuelve “natural” que el éxito sea leído como atributo moral. Desmercantilizar, por tanto, implica disputar las racionalidades que traducen el derecho en privilegio, la ciudadanía en clientela y la escuela en credencial; en otros términos, reducir el peso de la lógica del valor de cambio sobre la vida escolar y reconstituir condiciones para que el valor de uso vuelva a ser experiencia material.

En segundo lugar, sostenemos que es necesario reconstituir lo “público”. Los resultados sugieren que, cuando la escolarización pública se ejerce como derecho relativamente asegurado —aun con limitaciones estructurales— tiende a sostener disposiciones universalistas y de reconocimiento. Esto obliga a concebir lo público como régimen de vida con umbrales mínimos garantizados: infraestructura digna, estabilidad institucional, acompañamiento socioemocional, reglas legítimas y participación efectiva. Lo público asegurado o protegido es una forma de experiencia donde el Estado aparece como garante y donde se vive el derecho ejercido.

En tercer lugar, resulta imprescindible desactivar la composición punitiva bajo amenaza mediante restitución efectiva de lo público. El dato de seguridad muestra que la mano dura en el circuito público puede ser una respuesta disponible bajo amenaza. Por ello, el combate al punitivismo se logra transformando materialmente el contexto que produce esa disponibilidad: disminuir exposición, reducir intermitencia estatal, garantizar previsibilidad, cuidado y derechos en la vida cotidiana. Esta apuesta es, por definición, democrática, puesto que impide que el miedo se convierta en principio organizador de lo social y que, con ello, se normalicen soluciones autoritarias como salida “realista”. La disputa por el orden como condición de posibilidad de convivencia, ubica a la escuela como dispositivo que puede recuperar su potencia pública al formar ciudadanía empática y disposición democrática, en lugar de reproducir competencia y disponibilidad social del autoritarismo.

En este punto, la noción de lo común sirve para escapar de reduccionismos

como el estatismo abstracto que identifica lo público con propiedad estatal y administración burocrática; y el liberalismo competitivo que reduce lo social a una suma de decisiones individuales en un mercado de opciones. En el campo que aquí se analiza, lo común nombra el gobierno democrático de la vida escolar y, por ello, opera como antídoto material frente al doble riesgo que exhiben los resultados, por un lado, la privatización visible que vuelve al “otro” competidor y a la educación valor de cambio; por otro, la privatización furtiva territorial que vuelve al otro amenaza y puede hacer del miedo lógica de organización cotidiana, una consolidación de un hábitus. Así, entonces, la escuela es infraestructura de democracia cuando logra instituir lo público como experiencia y lo común como horizonte.

8. Conclusiones

En la Ciudad de México la democracia se sostiene por experiencias cotidianas de lo público que muestra plausible la posibilidad de mejorar la vida de las personas. En ese terreno, la escuela importa porque organiza vida y expectativas; de modo que ahí se aprende qué cuenta como derecho o privilegio, mérito o fracaso, Estado protector o Estado intermitente.

La evidencia muestra que la trayectoria educativa predominantemente pública o privada funciona como régimen de experiencia que ordena perfiles ideológicos distintos. La autoubicación izquierda-derecha y varias baterías actitudinales (redistribución, derechos, migración, meritocracia), además de transferencias y voto, se desplazan de modo consistente según el circuito escolar. Esto permite sostener —sin moralismo— que el clivaje público-privado expone formas de vida escolar: lo privado tiende a aproximar la escolarización al valor de cambio (inversión, distinción, compra de entorno), mientras lo público, cuando se sostiene, conserva un horizonte de valor de uso (derecho, reconocimiento, convivencia y común). Por eso, la ciudad puede proclamarse progresista y, simultáneamente, reproducir masivamente circuitos escolares que sedimentan disposiciones conservadoras.

El aporte decisivo del capítulo, sin embargo, es mostrar el doblaje securitista. En el eje seguridad, el patrón público-privado se atenúa o se invierte; y la preferencia por mano dura aparece ampliamente disponible y se intensifica donde hay mayor vulnerabilidad. En otras palabras, el punitivismo no es como aluden posiciones conservadoras, una respuesta del nivel doctrinario del contenido educativo; es, por otro lado, una solución disponible cuando lo público se experimenta como desprotección. En esa línea, los modelos probabilísticos incorporados en el capítulo confirman que la seguridad opera como principio reorganizador: aun controlando por covariables, la posición de “mano dura” muestra el efecto más pronunciado sobre el corrimiento ideológico y el comportamiento electoral, y reordena el clivaje educativo cuando la experiencia urbana se vive como exposición.

Asimismo, los modelos multivariados fortalecen el argumento del circuito escolar como régimen de experiencia. Los resultados son: la educación privada reduce la probabilidad de voto por opciones progresistas y aumenta la probabilidad de autoubicación hacia la derecha, y ese efecto se reproduce cuando la ideología se mide como un índice valórico conservador, además de la autopercepción. En conjunto, el apartado consolida los hallazgos descritos en el apartado de “resultados”, al mostrar que el patrón público-privado y el doblaje securitario persisten cuando se estima su asociación neta.

Al mismo tiempo, conviene subrayar el alcance temporal de estos hallazgos.

Los modelos probabilísticos estiman asociaciones en un corte transversal y, aun cuando resulten coherentes con la descripción teórica del capítulo —y por ello sean interpretables como expresión de regímenes de experiencia—, no autorizan a afirmar que estas tendencias se mantendrán intactas a lo largo del tiempo. En consecuencia, es menester ubicarlo como un intervalo de tiempo, una delimitación discreta y no continua, lo cual no disminuye su relevancia, pues el argumento se formula como advertencia: incluso en una ciudad de progresismo histórico, pueden activarse y expandirse disposiciones rechazantes abriendo la pregunta política central que atraviesa el libro: hasta qué punto puede avanzar la derecha dentro de un orden urbano que se proclama igualitario, y qué condiciones materiales e institucionales permiten contener —o acelerar— ese desplazamiento.

Para explicar el doble resultado —clivaje educativo y doblaje securitario— tratamos la privatización como ensamblaje múltiple. La privatización visible (mercado y cuasi mercados) segmenta entornos y naturaliza competencia; la privatización político-institucional desplaza la deliberación por redes, métricas y racionalidades gerenciales; la privatización furtiva territorial (zonas marrones) describe territorios donde el Estado es intermitente y poderes fácticos administran coerción y “orden” (O’Donnell, 1993); y la privatización furtiva digital introduce plataformización, datificación y captura del tiempo-atención como infraestructura privada “por defecto” (Srnicek, 2017; Zuboff, 2019). Juntas, estas dinámicas reconfiguran la vida escolar y, con ella, las disposiciones políticas plausibles.

Con esta base, la tipología propuesta —privado mercantilizado; público protegido; público erosionado por privatización furtiva— permite concluir que defender y salvar a la escuela pública requiere ampliación de condiciones materiales que hagan creíble el derecho y desactivar las capturas territoriales y digitales que degradan lo público como experiencia. De ahí se desprende el derrotero normativo para desmercantilizar la vida escolar —reducir la colonización del valor de cambio—, restituir umbrales de protección y previsibilidad en territorios escolares, y reconstruir lo común como principio de gobierno democrático de la vida escolar (Dardot y Laval, 2015). El derecho ejercido es, en el plano más concreto, un hecho practicable; vivible.

En suma, la escuela como circuito privado tiende a reforzar una economía moral individualizante y posicional, mientras el circuito público protegido sostiene disposiciones más universalistas; y donde lo público se vive bajo amenaza, emerge la disponibilidad punitiva. Los modelos probabilísticos permiten precisar que estamos ante asociaciones consistentes entre circuito educativo y seguridad con tres resultados de distinta naturaleza —voto, autoubicación e ideología valórica—, lo que refuerza la tesis de que la democracia escolar depende de cómo se materializan —o se erosionan— las condiciones de lo público. Por eso, la pregunta que guía investigaciones sobre ideología y educación debe pensar en cómo se vive, habita y reproduce la escuela, además de la enseñanza como composición ideológica.

Capítulo IV

Las agendas feministas en CDMX: entre la masificación y la diversificación

1. Introducción

Las agendas feministas ocupan hoy un lugar central en el debate público de la Ciudad de México, tanto por la expansión de derechos en materia de género y sexualidad como por la visibilidad adquirida por las violencias que atraviesan la vida cotidiana de las mujeres. Este proceso de ampliación y legitimación social del feminismo no se ha producido de manera lineal ni homogénea, sino a través de apropiaciones diferenciadas, consensos amplios en torno a ciertos principios y controversias persistentes respecto de otros. Más que un campo marcado por polarizaciones nítidas, el escenario capitalino parece caracterizarse por una convivencia compleja entre adhesiones mayoritarias, acuerdos parciales y resistencias selectivas, que no siempre se organizan según clivajes políticos, generacionales o de género previsibles. En este contexto, el presente capítulo propone una lectura empírica y analítica de cómo se configuran las actitudes hacia distintas agendas feministas en la Ciudad de México, atendiendo no solo a los niveles de apoyo y rechazo, sino también a las formas heterogéneas en que estas agendas son comprendidas, jerarquizadas y articuladas con identidades políticas, trayectorias sociales y valores más amplios.

En este marco, el objetivo de este capítulo es analizar los resultados de la encuesta en relación con los posicionamientos frente a la agenda feminista en la Ciudad de México. La investigación partió de una hipótesis según la cual la ampliación de derechos en materia de género y sexualidad convive con discursos de reacción que cuestionan la soberanía sobre el propio cuerpo y presentan al feminismo como una amenaza, tensiones que, en el caso de la Ciudad de México, se expresan en ámbitos cotidianos como la familia, la escuela y el trabajo. Sin embargo, el principal hallazgo de la encuesta muestra que, a diferencia de otros contextos donde las agendas de género tienden a organizar posiciones fuertemente polarizadas, en la CDMX estas cuestiones concitan altos niveles de adhesión social y consensos transversales amplios. En este sentido, los resultados son consistentes con lo señalado por Shoshan y Gutiérrez Martínez (2025) acerca de la debilidad relativa de la polarización política e ideológica en México, incluso en temas que en otros países generan divisiones más marcadas.

Los resultados se presentan en dos grandes apartados. El primero se concentra en el análisis de seis preguntas del cuestionario que remiten de manera directa a distintas dimensiones de la agenda feminista: (A) la caracterización del feminismo como una ideología que busca someter a los hombres; (B) la valoración de las políticas de cuotas para mujeres; (C) la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado entre varones y mujeres; (D) el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su propio cuerpo y la maternidad; (E) la legalización del aborto como condición para garantizar la igualdad de derechos; y (F) el reconocimiento de los feminicidios como un problema grave que requiere políticas específicas. Cada una de estas dimensiones es examinada a partir de cruces con variables sociodemográficas y políticas clave: género, edad, voto, clase social autopercebida, nivel de ingresos, tipo de educación recibida (pública o privada) y zona geográfica de residencia.

El segundo apartado profundiza en la dimensión ideológica de los resultados y se detiene en el apoyo a la agenda feminista a partir de tres modelos analíticos. El primero explora la relación entre la intensidad del apoyo a dicha agenda y la probabilidad de votar por la candidata Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. El segundo analiza cómo el nivel de adhesión a la agenda feminista se asocia con la ideología política autodeclarada. Finalmente, el tercer modelo busca explicar el posicionamiento respecto de la agenda feminista a partir de un conjunto más amplio de valores ideológicos que estructuran las orientaciones políticas de la ciudadanía. Para ello, se construye un índice de valores ideológicos que sintetiza el grado de apoyo o rechazo a cinco temas: igualdad económica, defensa de la democracia, sostenibilidad ambiental, feminismo e igualdad de trato entre población local y migrante.

En síntesis, el propósito de este capítulo es indagar qué agendas feministas concitan mayores niveles de adhesión social, cuáles generan resistencias y desde qué posiciones ideológicas, de clase, género, generación y territorio se construyen dichos posicionamientos. Lejos de asumir alineamientos automáticos entre progresismo/feminismo/mujeres o su reverso, conservadurismo/antifeminismo/varones, el análisis muestra un escenario más complejo, en el que los apoyos y rechazos a las distintas agendas feministas se distribuyen de manera heterogénea y no siempre coinciden con las identidades políticas o sociodemográficas esperables. De este modo, el trabajo propone una lectura compleja de las actitudes hacia el feminismo en la Ciudad de México, invitando a repensar sus vínculos con la ideología, la representación política y los debates públicos contemporáneos.

2. Primera parte. Resultados e interpretaciones de las preguntas sobre feminismos

2.1. El feminismo es una ideología que busca someter a los hombres

La pregunta acerca de qué es el feminismo, a quiénes representa y cuáles son sus principales agendas forma parte de un debate público activo que circula en diversos sectores sociales de la sociedad de CDM. En este debate coexisten interpretaciones que se contraponen: por un lado, aquellas que entienden al feminismo como un movimiento político orientado a la ampliación de derechos y a la reducción de desigualdades sociales de género; por el otro, posiciones que lo caracterizan como un activismo que amenaza o perjudica a los hombres, a la pérdida de posibles privilegios, a la erosión de jerarquías simbólicas que dan forma al orden patriarcal o a la distribución de su poder en el hogar.

En este marco, la inclusión de la pregunta que indaga si el feminismo es una ideología que busca someter a los hombres resulta particularmente relevante, dado que recoge una de las narrativas críticas más extendidas sobre el movimiento feminista y sus demandas. Los resultados de la encuesta muestran un alto rechazo a esta afirmación, lo que permite identificar un distanciamiento significativo respecto de esta caracterización negativa del feminismo.

Esto se constata si miramos las respuestas por edad: hay un significativo rechazo en todas las franjas etarias, aunque las distintas intensidades con las que se oponen sugieren que la valoración del feminismo permea de maneras diferentes a las distintas generaciones: son las más jóvenes (de 15 a 29 años) las que rechazan con porcentajes que llegan al 75.9% (11,7% en desacuerdo y 64,2% totalmente en desacuerdo). La diferencia con otras franjas de edad es significativa: la suma de desacuerdo y muy desacuerdo es de alrededor del 60% entre quienes tienen más de 30 años en adelante. A la vez, si miramos los niveles de acuerdo con la idea de que el feminismo es una ideología que busca someter a los hombres, vemos en las jóvenes generaciones (15-29 años) el nivel más bajo de acuerdo con el 11,7% y el más alto es el de la generación intermedia (30 a 40 años) con el 27,3% sumando acuerdo y muy de acuerdo.

El dato que más llama la atención tiene que ver con la brecha generacional que se registra entre la franja de 15 a 29 y de 30 a 44 años. No sólo invita a pensar el carácter variable del impacto de las agendas feministas en distintos grupos de

edad sino, además, en el proceso de masificación del feminismo en un tiempo reciente en el que tuvieron lugar hechos significativos en la ampliación y crecimiento del movimiento feminista en Ciudad de México, en el país. A partir de las preguntas siguientes podemos notar cómo estas agendas se reflejan en las maneras en que se tematizan aspectos centrales para los feminismos, como el aborto legal, pero también con un conjunto de transformaciones que tienen que ver con diferentes dimensiones como la violencia de género, la distribución de roles sociales, la visión sobre la autonomía de las mujeres, de su sexualidad y de los cuerpos o el lugar de las mujeres en la vida pública y política.

El rechazo a la idea de que el feminismo busca someter a los hombres es también mayoritario cuando miramos la distribución de las respuestas que dan varones y mujeres. Así y todo, se reconoce una brecha de género: las mujeres rechazan más (76,8%) y con más contundencia esta afirmación, aunque el 53% de los varones también se opone, lo hacen con menos intensidad (la posición en total desacuerdo es del 55,5% entre las mujeres y de 29,6% entre los varones).

Otro dato relevante es el alto porcentaje de varones (20,5%) que afirma que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por un lado, podríamos pensar que precisaría tener más información para tener una posición sobre este punto. Por otro, este porcentaje podría querer decir que evitan dar una respuesta. En otras palabras, podría interpretarse como un acuerdo encubierto.

La mayor parte de las personas encuestadas, independientemente de su nivel de ingresos, rechaza la afirmación de que el feminismo busca someter a los hombres. El desacuerdo total supera el 60%. Así y todo a mayor nivel de ingresos más rechazo a la idea de que el feminismo busca someter a los hombres. El nivel de desacuerdo entre las personas con ingresos altos llega a ser del 71,6% (desacuerdo y totalmente en desacuerdo), 64,2% entre ingresos medios y 60% entre ingresos bajos. La diferencia entre los niveles de ingresos más bajos y los más altos es significativa en términos estadísticos (11,6%) y podría leerse en función del mayor acceso a la educación, a información diversa y a círculos sociales con visiones más progresistas sobre el feminismo y la igualdad de género.

La variación en función de la clase social autopercebida presenta puntos de contacto con el cruce por ingresos: hay porcentajes significativos de rechazo a la idea de que el feminismo es una ideología que somete a los hombres (al menos seis de cada diez personas encuestadas) pero se registran intensidades muy diferentes. Entre quienes se perciben como parte de las clases más altas predominan posiciones de rechazo contundente a esa idea: el 83,7 % de la clase alta está totalmente en desacuerdo con esta posición, porcentaje que asciende al 94,3% si sumamos desacuerdo más muy en desacuerdo. Entre las clases medias altas, medias, medias-bajas y bajas el porcentaje de totalmente en desacuerdo disminuye significativamente (33,3%, 48,1%, 39,3% y 40,7%, respectivamente). Al observar las posiciones de acuerdo (considerando acuerdo y muy de acuer-

do) vemos un crecimiento significativo del rechazo a esta posición en todos los casos: clases bajas (59,3%), medias bajas (61,1%), medias (69,8%), medias altas (66%). De modo inverso, los porcentajes de adhesión a la idea de que el feminismo somete a los hombres, son mayores entre las clases más bajas.

En suma, se reconoce una brecha socioeconómica relevante: quienes tienen menores ingresos y quienes se reconocen como parte de las clases sociales más bajas tienden a ser más propensos a esta afirmación, mientras que cuanto mayores son los ingresos y la percepción de formar parte de una clase más alta, más crece y más se enfatiza el rechazo. Vale aclarar que aquí consideramos clases altas urbanas, cuestión que podría mostrar variaciones en otros escenarios.

Una gran proporción de encuestados, tanto con educación pública como privada, rechaza que el feminismo sea una ideología que busca someter a los hombres pero, de igual forma que en los casos anteriores, las variaciones se pueden en la intensidad de este rechazo y la proporción de quienes adhieren a la afirmación varían significativamente entre los dos grupos: quienes recibieron educación pública muestran niveles de desacuerdo mayores con la idea de que el feminismo somete a los hombres, con un porcentaje de desacuerdo del 67,7% (sumando desacuerdo y muy en desacuerdo), mientras que entre quienes tuvieron educación privada este porcentaje es del 58%, con un contraste de casi 10 puntos porcentuales. Esto permitiría pensar que en el sistema de educación pública hay una comprensión más clara sobre el rol del feminismo, mientras que en la educación privada se observa un nivel mayor de ambivalencia en la adhesión: el 24,3% está de acuerdo (en sus dos intensidades) y el 17,7% se muestra neutral. El principal contraste surge entre quienes se manifiestan totalmente en desacuerdo: el 47,2% en la educación pública, frente al 30% en la privada.

Las diferencias podrían obedecer a diversos factores asociados con el tipo de educación, como los contenidos curriculares, los valores institucionales sostenidos por los diferentes tipos de gestiones educativas (por ejemplo, en materia religiosa en algunas de las escuelas privadas), el acceso a diferentes fuentes de información, que puede influir en las perspectivas sobre roles de género y movimientos sociales.

Al indagar las zonas geográficas, la mayor parte de los encuestados rechaza que el feminismo busca someter a los hombres y los porcentajes están todos por encima del 59% si sumamos las posiciones que sostienen estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Entre los votantes de diferentes fuerzas políticas también hay altos niveles de rechazo, sobre todo entre quienes votaron por Sheinbaum en las últimas elecciones (73,1%), pero los porcentajes son casi idénticos entre votantes a otras fuerzas (71,4%) y con niveles más bajos entre votantes de Gálvez (57,9%) y no votantes (54,6%). Esto hace pensar que la visión sobre el feminismo como algo

diferente del sometimiento de los hombres es fuerte entre quienes votan por Morena pero no solamente, en otros votantes las respuestas son contundentes. Es decir, el rechazo al feminismo como un movimiento que busca someter a los hombres es algo que excede las fronteras partidarias.

El trabajo de Shoshan y Gutiérrez Martínez (2025) permite observar la otra cara de este fenómeno: las posiciones críticas al feminismo circulan con argumentos similares entre votantes de fuerzas políticas diferentes. Los autores señalan que tanto entre votantes del PAN como de Morena pueden encontrarse varones que aceptan ciertos avances en los derechos y en los roles sociales de las mujeres, “pero consideran que esos cambios han ido demasiado lejos” (p. 174). Si bien este tipo de posicionamientos no puede reconstruirse a partir de las preguntas específicas de la encuesta aquí analizada, resulta relevante destacar que tanto los apoyos como las críticas al feminismo atraviesa posiciones partidarias muy disímiles, lo que refuerza la idea de que el feminismo opera como un clivaje transversal más que como una identidad política homogénea.

Estas discusiones se inscriben, además, en un contexto sociopolítico marcado por tensiones persistentes entre el activismo feminista y los gobiernos de Morena. La llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador despertó expectativas significativas en distintos sectores feministas, vinculadas tanto a la promesa de una “Cuarta Transformación” orientada a la justicia social como a la conformación de un gabinete con paridad de género (Ruiz, 2018). En un escenario atravesado por profundas desigualdades de género y altos niveles de violencia contra las mujeres, estas expectativas se articularon con la posibilidad de que el nuevo gobierno otorgara un lugar central a la agenda feminista y promoviera transformaciones sustantivas en materia de derechos, autonomía y reconocimiento. Sin embargo, como señalan Kessler y Vommario (ídem), esas expectativas dieron lugar a tensiones a lo largo del gobierno de AMLO, a partir de los cuestionamientos de amplios sectores del feminismo a las políticas oficiales en áreas como violencia de género, cuidados, trabajo doméstico y derecho al aborto, así como a las posiciones asumidas por las denominadas “feministas de la 4T” que respaldaron al gobierno.

Balance general

La idea de que el feminismo es una ideología que busca someter a los hombres es rechazada de forma mayoritaria y enfática por la población de la CDMX en todos los grupos demográficos. El rechazo es más contundente entre mujeres, entre las generaciones más jóvenes (de 15 a 29 años), en los sectores con ingresos más altos y pertenecientes a las clases más altas, así como también entre quienes recibieron educación pública. La adhesión a esta idea –o las posiciones neutrales– son minoritarias y más relevantes entre varones, en la franja de 30 a 44 años y entre los sectores de menos ingresos y que se perciben como parte de las clases más bajas. Quienes recibieron educación privada, los votantes de Gálvez y zonas como el Norte y el Oriente muestran niveles más altos de acuerdo o de neutralidad en esta dimensión.

Estas diferencias podrían sugerir que la adhesión a narrativas antifeministas se relaciona con una menor vinculación o socialización en los discursos progresistas, en la persistencia de roles de género más tradicionales o con la influencia de círculos sociales y mediáticos específicos.

2.2. Es justo que existan políticas de cuotas para mujeres no para hombres

Las políticas de acción afirmativa para las mujeres son medidas específicas orientadas a corregir desigualdades estructurales de género que parten del reconocimiento de que las mujeres parten de posiciones históricamente desventajosas en el acceso a recursos, poder y reconocimiento. Su fundamento normativo se encuentra en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por las Naciones Unidas en 1979, cuyo artículo 4, inciso 1, establece “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero no deberá, en modo alguno, entrañar, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidades y trato”. Esta definición es precisada por la Recomendación General n° 25 (2004) del Comité de la CEDAW, que enfatiza la necesidad de estas medidas para superar desigualdades estructurales y alcanzar la igualdad sustantiva. En este marco, políticas de cupo (un porcentaje estipulado para mujeres) o paridad (misma cantidad de espacios para mujeres y hombres) buscan promover una igualdad real —y no meramente formal—, desmontar sesgos de género y acelerar procesos de cambio que, de otro modo, serían excesivamente lentos. Como señala Dahlerup (2006), sin medidas de acción afirmativa el avance hacia la igualdad sustantiva seguiría una trayectoria incremental que podría demorar décadas o incluso generaciones, mientras que las cuotas operan como un “fast track” que acelera el acceso de las mujeres a la representación en condiciones de igualdad.

En la encuesta se preguntó a las personas si consideran justa la existencia de políticas de cuotas para mujeres. Las respuestas muestran la existencia de un amplio rechazo (del 69,4%) a las políticas de cuotas para mujeres, con porcentajes muy bajos de apoyo (14%).

En contraposición con otras de las preguntas analizadas, en las que la edad permitía ver apropiaciones diferentes de las agendas, el rechazo a las cuotas es transversal a todos los grupos de edad. El 69,4% entre quienes tienen entre 15 y 29 años; el 65,8% en la franja de 20 a 44 años, el 70,4% entre los 45 y 49 y el 73,8% entre quienes superan los 50 años.

Sorprende advertir que no hay diferencias sustantivas por género, aunque sí aparece un matiz relevante y contrario al sentido común: son las mujeres las que más rechazan estas políticas: 72,1% (sumando las posiciones en desacuerdo y totalmente en desacuerdo) y presentan menos niveles de apoyo (12,2%). Los varones, por su parte, rechazan esta premisa de manera contundente pero con un porcentaje levemente mejor (66,8%).

El análisis por voto tampoco introduce grandes diferencias. Entre quienes votaron a Gálvez, el rechazo es especialmente alto: 75,8% (sumando ambas intensidades de desacuerdo). Sin embargo, el rechazo también es mayoritario entre quienes votaron a Sheinbaum, donde alcanza el 68,2%. Las posiciones de apoyo son igualmente bajas en todos los grupos de votantes.

El análisis por ingreso reafirma el patrón general de rechazo hacia la idea de que es justo que haya políticas de cuotas hacia las mujeres y no hacia los varones, con porcentajes muy altos en todos los segmentos. Las personas con ingresos bajos son quienes más rechazan estas políticas, con un 73,8% al sumar ambas categorías de desacuerdo, cifra muy similar a la de ingresos medios, que registra un 73,7%. En los ingresos altos, el rechazo disminuye más de diez puntos y se ubica en 59,7%.

Las diferencias más marcadas surgen al observar las clases sociales: el mayor rechazo (en ambas intensidades de desacuerdo) se registra en la clase baja, con el 73,4%, seguida por la clase media baja, con el 71,4%; la clase media, con el 68,4% y la clase media-alta con el 65,4%. La clase alta constituye una excepción: sólo el 32,6% rechaza estas políticas (con un 29,8% en desacuerdo y apenas 2,8% totalmente en desacuerdo), lo que representa una ruptura clara respecto del resto de las clases.

Entre quienes expresan apoyo a las acciones de discriminación positiva, los porcentajes son bajos en la mayor parte de las clases, aunque se incrementan a medida que asciende la posición social: 9,8% en clase baja; 9,6% en clase media baja; 20% en clase media; y un llamativamente bajo 4,1% en clase media alta, dato que resulta disonante respecto de la tendencia ascendente. En la clase alta, nuevamente, se observa una diferencia contundente: el 64,5% está “totalmente de acuerdo” (y no se registra porcentaje en “de acuerdo”), cifra que destaca por su magnitud y singularidad dentro del conjunto.

Quienes estudiaron en instituciones públicas expresan un apoyo de 14,2% (en ambas intensidades de acuerdo), mientras que entre quienes fueron a privadas el apoyo es de 13,4%. El rechazo se mantiene igualmente cercano y elevado: 69,7% en educación pública y 69,2% en educación privada.

Algo similar ocurre si analizamos la zona a la que pertenecen las personas encuestadas: no se aprecian variaciones sustantivas, aunque sí aparece un gradiente. Si ordenamos de mayor a menor rechazo (sumando desacuerdo y to-

talmente en desacuerdo), el oriente presenta el valor más alto de rechazo con 78,5%, seguido por la categoría “otro” con 71,3%; el poniente con 69,3%; el sur con 68,5% y el norte con 65,4%.

Balance general

El conjunto de los datos revela un patrón claro: existe un rechazo extendido y transversal hacia las políticas de cuotas para mujeres. Este rechazo atraviesa edades, géneros, zonas, niveles educativos e incluso preferencias electorales. La única excepción notable es la clase alta, que muestra un nivel de apoyo muy superior al resto de los grupos sociales. En el resto de las clases sociales —incluyendo la clase media, que en otros estudios suele expresar ambivalencias más marcadas— el rechazo se mantiene estable y elevado. Esta homogeneidad sugiere que las cuotas pueden ser percibidas como injustas, como privilegios no merecidos o como intervenciones que alteran expectativas meritocráticas ampliamente compartidas.

En este sentido, cabe preguntarse cómo leer el hecho de que las mujeres rechacen incluso más que los hombres estas políticas abre preguntas importantes: ¿se trata de una internalización de marcos meritocráticos y antiprivilegio?, ¿de la percepción de que las cuotas estigmatizan o deslegitiman sus trayectorias?

La evidencia tampoco muestra una polarización política significativa: incluso entre votantes de candidaturas con posicionamientos diferentes con respecto a temas de igualdad, los niveles de rechazo son muy altos. Esto indica que la oposición a las cuotas podría trascender los alineamientos electorales y estar asociada a climas culturales más amplios o a marcos morales consolidados.

Si bien los argumentos de este rechazo deberían complementarse con preguntas específicas o ser profundizados por medio de técnicas de tipo cualitativo para explorar mejor los argumentos que sostienen quienes rechazan medidas que fueron pensadas para promover la igualación de derechos entre mujeres y varones, es posible desplegar algunas hipótesis de lectura.

En primer término, podría pensarse en la adhesión a una forma de igualitarismo abstracto (Inglehart y Norris, 2003), esto es, la premisa de que el trato entre las personas debe ser igual para todos/as, sin diferencias, y que cualquier forma de justicia sobre un grupo particular (las acciones afirmativas) significa una excepción justificada, incluso cuando busque modificar o corregir desigualdades estructurales. Desde este punto de vista, la existencia de cuotas puede ser vista como una forma de romper la neutralidad en el trato —sobre todo si se trata de intervenciones estatales— que generan resistencias y oposiciones.

Esto también podría explicarse a partir de la extensión de un sentido común meritocrático que coloca en el centro la idea del esfuerzo individual como elemento que justifica moralmente las desigualdades, interpretadas como justas.

En ese sentido, todo aquello que se interponga con dichas lógicas de merecimiento es visto como fuente de desigualdad, aun cuando la evidencia muestra que los sistemas meritocráticos están atravesados por sesgos de género.

Otro elemento para leer estas posiciones puede tener que ver con la narrativa antiestatal y la desconfianza institucional: cuando el Estado es visto como la fuente de la discrecionalidad (Seman, 2023) la intervención por medio de políticas afirmativas puede leerse como acciones que promueven favoritismo político y que inclinan la cancha en favor de algunas minorías (Kessler y Vommaro, 2025).

No deja de ser llamativo el hecho de que sean las mujeres aquellas que más se oponen a las políticas de cuotas. En algunas investigaciones (Franceschet, Krook y Piscopo, 2012) se muestra que dicho rechazo se asocia con el rechazo de la estigmatización (esto es, ser vistas como personas que llegaron por los cupos), porque sostienen el ideal meritocrático o porque ven las cuotas como formas de paternalismo. En este caso, no se trata de una negación de la desigualdad sino más bien de una forma de subjetivación de las mujeres en escenarios o contextos donde la autonomía o la autosuficiencia pueden ser considerados valores fundamentales.

La gramática que subyace a esta posición se asemeja a lo que la literatura ha denominado feminismo liberal meritocrático, que acepta la igualdad de derechos en abstracto y rechaza los mecanismos que redistribuyen poder real en instituciones saturadas de sesgos de género (Fraser, 2013; McRobbie, 2009). Es, en términos sintéticos, un feminismo “de competencia” más que un feminismo “de justicia”.

2.3. Los hombres y las mujeres deben compartir por igual las tareas domésticas y de cuidado

La división sexual del trabajo constituye uno de los pilares históricos de la desigualdad de género y refiere a la asignación diferencial de tareas productivas y reproductivas según el género. En este esquema, mientras que la posición de los varones fue asociada de manera prioritaria con el trabajo remunerado y la de las mujeres se vinculó con el desarrollo de tareas domésticas y de cuidado, realizadas centralmente en el ámbito privado y sin reconocimiento económico ni social. Como señala Silvia Federici, el trabajo doméstico fue históricamente naturalizado como una extensión de la feminidad, lo que contribuyó a invisibilizar su carácter productivo y su centralidad para la reproducción social, lo que la autora sintetizó en la famosa frase “eso que llaman amor es trabajo no pago” (Federici, 2018). Los feminismos cuestionaron tempranamente esta organización del trabajo al mostrar que la asignación casi exclusiva de las tareas domésticas y de cuidado a las mujeres tiene efectos directos sobre sus horizontes de vida, en particular en términos de autonomía económica, de los usos del tiempo, de sus trayectorias laborales y de la participación en la esfera pública.

Por eso, la distribución de tareas entre varones y mujeres se convirtió en un tópico central sobre el cual la encuesta intenta ofrecer algunas pistas. El 91% de las personas encuestadas expresa su acuerdo (sumando acuerdo y totalmente de acuerdo), mientras que el desacuerdo es de apenas el 3,3%.

Los niveles de adhesión a esta premisa se mantienen elevados si miramos las respuestas por edad (entre 15 y 29 es del 96,5% y en las demás franjas etarias alrededor del 90%), género (entre las mujeres es del 94,5%, entre las cuales el 68,6% se reconoce totalmente de acuerdo y entre varones de 89,9%), voto (entre los votantes de Sheinbaum alcanza el 92,3% y entre votantes de Gálvez, el 89,3%, los que votaron por otras fuerzas políticas muestran el 94,8% de apoyo, porcentaje equivalente entre quienes no votaron, con el 94,6%), ingreso (89,9% en ingresos bajos, 91% en los medios y 95,5% en los altos), clase (90% de promedio en todas las clases), educación (que gira en torno al 90% en ambos tipo de instituciones educativas) y en cuanto a las zona de residencia tampoco se observan diferencias significativas.

Balance general

¿Cómo podemos interpretar que la distribución de tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres presente un nivel de consenso elevado y transversal? El amplio apoyo a podría sugerir que la distribución equitativa de tareas se ha consolidado como un valor entre las personas encuestadas, incluso en un escenario en el que otros de los temas vinculados a las agendas de género causan mayor polarización y diferencias entre grupos. Siguiendo a Nancy Fraser (2016) y a Joan Tronto (2013), este consenso muestra que los cuidados dejaron de ser vistos como agenda propia de algunos grupos, como las mujeres o las personas más jóvenes, para convertirse en un horizonte común de diferentes grupos sociales y generacionales

Las diferencias observadas son mínimas y no modifican la tendencia general. Así, aunque las personas más jóvenes muestran mayores niveles de acuerdo, entre los mayores de 50 años esta adhesión también tiene una adhesión significativa. Lo mismo podemos decir en relación con las diferencias de género: aun cuando las mujeres se inclinan con mayor énfasis por la opción “totalmente de acuerdo” entre los varones esta opción de respuesta también es mayoritaria, aspecto que ilustra que esta agenda que involucra la corresponsabilidad doméstica es tema que no solo colocan en el centro las mujeres.

De igual manera, aún en perfiles de votantes que pueden tener diferencias relevantes en cuanto a las agendas de género, el apoyo a la distribución de tareas supera, en todos los casos, el 89%. Es decir que desborda identificaciones político-partidarias y permite identificar una creencia transversal en un electorado heterogéneo con valores diferentes. En suma, aunque la encuesta no recoge las prácticas de las personas sino las declaraciones sobre sus visiones sobre algunas

agendas y es posible que ese ese ideal no se materialice de manera plena e igualitaria, los resultados permiten ver cómo la corresponsabilidad función como un ideal aceptado socialmente (Esquivel, 2020).

Otro dato relevante es que la adhesión al principio según el cual las tareas deben distribuirse entre varones y mujeres se observa con fuerza en sectores con diferentes niveles de ingreso, clase y educación. Esto permite pensar que la percepción sobre la distribución equitativa del cuidado no necesariamente es patrimonio de una élite progresista ni de un grupo socioeconómico específico. Incluso en la clase alta —donde algunos estudios suelen registrar resistencias en torno a la redistribución de cuidados, especialmente en hogares en los que se tercerizan tareas a partir de la contratación de servicio doméstico— el apoyo sigue siendo mayoritario y enfático. Esto sugiere que el ideal de la distribución equitativa de tareas de cuidado opera como un marcador discursivo y cultural generalizado, más allá de las condiciones materiales que luego pueden dificultar o complejizar su implementación práctica. En términos territoriales, tampoco aparecen tensiones significativas: todas las zonas muestran niveles muy altos de apoyo. Esto permite inferir que la idea de corresponsabilidad doméstica no está asociada de manera exclusiva a ciertos estilos o formas de vida.

En suma, la amplia aceptación de la idea de igualdad en las tareas de cuidado puede vincularse con la masificación e institucionalización de discursos de igualdad de género en las últimas décadas —que permeó políticas públicas, medios, escuelas y entornos laborales— así como también con la visibilización del impacto desigual que las tareas de cuidado tienen sobre la vida de las mujeres, que contribuye a que deje de ser visto como un asunto privado y se lo aborde como un asunto socialmente relevante.

Ahora bien, la pregunta que surge de estos datos, en los que leemos un acuerdo unánime, es cómo se vincula esa adhesión con las prácticas, en otros términos, cómo se traduce ese consenso en transformaciones efectivas —y equitativas— dentro de los hogares (Connell, 2009). Esta mirada está en línea con las críticas feministas a la “igualdad declarativa” que no alteran la división sexual del trabajo ni la distribución del tiempo (Federici, 2013; Fraser, 2016). Por tanto, la posible brecha entre los valores declarados y las prácticas efectivas (Hochschild, 1989) podría ser terreno de indagaciones en profundidad en análisis posteriores.

2.4. Las mujeres tienen derecho a decidir libremente sobre su propio cuerpo y maternidad

El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad ha constituido uno de los núcleos centrales de las agendas de los feminismos en las últimas décadas, en tanto que condensa disputas históricas en torno a la autonomía, la ciudadanía y la igualdad. Desde distintas tradiciones feministas se ha señalado que el control social, jurídico y moral sobre la sexualidad y la

reproducción ha operado como un mecanismo clave de subordinación de las mujeres, al imponer la maternidad como destino y restringir la capacidad de decidir sobre los propios proyectos de vida. La posibilidad de elegir si tener hijos, cuándo y cuántos, no solo amplía libertades individuales, sino que incide de manera estructural en los horizontes educativos, laborales y vitales de las mujeres, cuestionando la naturalización de la maternidad obligatoria y redefiniendo las bases mismas de la ciudadanía moderna (Adrienne Rich, 1996; Carole Pateman, 1995).

Resulta interesante advertir que, de acuerdo con los datos de la encuesta, la adhesión a esa afirmación muestra un significativo apoyo a nivel general: el 86,8% se manifiesta favorable y con un alto nivel de intensidad: el 60,4% está muy de acuerdo y el 26,6% de acuerdo.

Así y todo, vale considerar no es posible desagregar el alcance y el significado que atribuyen las personas a la idea de “decidir sobre el propio cuerpo y maternidad”, que podría implicar un abanico de situaciones que van desde la posibilidad de elegir cuándo ser madres hasta el acceso a distintos métodos anticonceptivos –algunos generan controversias, como la ligadura de trompas o la pastilla del día después– o incluso la decisión de interrumpir un embarazo. Ahora bien, esta afirmación reconoce evidentes variaciones según edad, género, ingresos, clase social, educación y zona geográfica.

Si miramos por grupo de edad se reconocen diferencias sustantivas: la adhesión entre las personas de 15 a 29 años llega al 96,6% de acuerdo. El 80,9% se manifiesta muy de acuerdo y un 15,7% de acuerdo. En los demás grupos de edad el contraste es significativo: las posiciones muy a favor se mantienen en el rango del 50% aproximadamente (52,9% de 30 a 44, 52,4% de 45 a 49 y 52,6% en más de 50 años).

Al analizar las diferencias por género, tanto varones como mujeres muestran posiciones elevadas de adhesión pero, como podría suponerse, los porcentajes son significativamente más altos entre las mujeres (el 91,2% está de acuerdo, con una distribución del 66,6% muy de acuerdo y el 24,6% de acuerdo). Entre los varones el acuerdo es del 82,6% (el 53,9% está totalmente de acuerdo y el 28,7% de acuerdo). La diferencia no deja de ser relevante si miramos tanto el porcentaje total de acuerdo entre unos y otras, como la intensidad en los acuerdos.

Las posiciones a favor del derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo también son elevadas entre los votantes de las diferentes fuerzas políticas y no muestran grandes variaciones entre los diferentes electorados, alrededor del 85% promedio en todos los casos.

Si observamos esta respuesta por ingresos, en todos los grupos hay porcentajes muy elevados de adhesión pero las adhesiones más intensas se ven en los secto-

res con ingresos más altos (67,1% muy de acuerdo), frente a los medios (57,4% muy de acuerdo) y bajos (58,1% muy de acuerdo), distribución que se replica si vemos las diferentes intensidades de acuerdo y totalmente de acuerdo: 93,1% ingresos altos, 86,2% medios y 82,2% bajos. Las posiciones de desacuerdo, aunque son mucho más bajas, son más altas (entre desacuerdo y muy en desacuerdo) entre los sectores de ingresos bajos (9,5%), seguidos por los medios (8,8%) y los altos (4,2%).

El derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo concita apoyo en todas las clases, pero hay variaciones significativas. El acuerdo (considerando ambas intensidades) presenta porcentajes altos que aumentan cuanto más alta es la clase social: Baja 77,3%, media-baja 86,3%, media 89,5%, media-alta 88,7% y Alta 100%.

Tanto quienes pasaron por la educación pública como la privada muestran un alto nivel de acuerdo con la afirmación, lo que indica que la idea de la autonomía corporal y reproductiva de las mujeres tiene un respaldo mayoritario en la sociedad, independientemente de la trayectoria educativa, con más del 80% en ambos casos.

La idea de que las mujeres tienen derecho a decidir libremente sobre su propio cuerpo y maternidad también presenta un amplio respaldo en todas las zonas, con porcentajes mayores al 80% en todas las zonas.

Balance general

El apoyo a la idea de que las mujeres tienen derecho para decidir sobre su propio cuerpo y maternidad muestra patrones de apoyo significativo, aunque hay variaciones en las diferentes variables exploradas. El apoyo es más fuerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, con porcentajes de adhesión del 96.6% que contrastan con los grupos de mayor edad cuyo apoyo es elevado pero con menor intensidad. Esto sugiere, en sintonía con otras de las respuestas, que la relación de las generaciones con las agendas vinculadas con los feminismos es más intensa. Además, se trata de generaciones que han sido contemporáneas a debates como la interrupción voluntaria del embarazo y que parecieron tener una posición en relación con los derechos reproductivos que influye y se relaciona con el modo en que perciben y defienden su autonomía.

Las mujeres muestran niveles más altos de apoyo (91.2%) en comparación con los hombres (82.6%), aspecto que señala una diferencia relevante en la percepción y defensa de los derechos reproductivos. En cuanto al voto, los ciudadanos que no votaron y los votantes de ciertas fuerzas políticas, como la de Sheinbaum, presentan el apoyo más alto, pero con diferentes intensidades.

Las personas que pasaron por la educación pública tienden a apoyar más intensamente esta causa, mientras que en el análisis por clase social, los niveles de

apoyo aumentan significativamente con la clase alta alcanzando el 100% entre la clase más alta. Esto sugiere que la educación y la clase socioeconómica inciden en la percepción de los derechos reproductivos de las mujeres. La variabilidad en el apoyo a través de las zonas geográficas indica que el contexto local también juega un papel importante.

2.5. La legalización del aborto es necesaria para garantizar la igualdad de derechos

La pregunta anterior refería, de manera general, al derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo y maternidad. Aquí se vuelve más específica y aborda uno de los temas de la agenda feminista que genera significativas controversias sociales: la legalización del aborto como una forma de garantizar la igualdad de derechos.

La adhesión a esta idea reconoce un apoyo significativo entre las personas que respondieron la encuesta, aunque también es la pregunta que muestra mayores niveles de rechazo: el 59% está a favor —21% de acuerdo y 38,3% totalmente de acuerdo— mientras que el rechazo asciende al 23,9%, resultado que surge de la suma del 12,1% en desacuerdo y el 11,8% en totalmente en desacuerdo.

Las diferencias por edad son significativas. Al igual que en los demás casos, el grupo de 15 a 29 años muestra el porcentaje más alto de acuerdo con esta idea, con el 73,3% (57,2% totalmente de acuerdo y 20,1% de acuerdo), mientras que el rechazo es apenas del 8,3%. Entre los 30 y 44 años el apoyo desciende 20 puntos y llega al 51,9% (15,5% de acuerdo y 36,4% totalmente de acuerdo), mientras que el desacuerdo asciende al 26,9%. Entre los 45 y 49 años el apoyo se mantiene relativamente en torno al 48,8% (24,7% de acuerdo y 24,7% totalmente de acuerdo), pero el rechazo crece y se ubica en el 33,4%. Entre quienes tienen 50 y 59 años el apoyo vuelve a aumentar: alcanza el 57,9% (26,3% de acuerdo y 31,6% totalmente de acuerdo) y el desacuerdo disminuye ligeramente hasta el 29,6%. En conjunto, estos datos muestran una curva no lineal, con un apoyo muy alto en la juventud, un descenso en edades intermedias y una recuperación entre las personas mayores.

Si miramos la distribución por género, las diferencias son relevantes aunque menos pronunciadas: las mujeres muestran un apoyo del 62,4%, con un peso notable de la posición totalmente de acuerdo (42,6%), frente al 56,2% de los varones, entre los cuales también tiene relevancia la adhesión más fuerte (33,8% se manifiesta totalmente de acuerdo). En ambos casos, el rechazo es sensiblemente menor que el apoyo: entre las mujeres el alcanza el 21,1% y entre los hombres asciende a 26,8%. Esto indica que, aunque hay diferencias, la opinión favorable es mayoritaria en ambos casos.

El cruce por voto introduce el contraste más marcado y muestra que en relación con la posición sobre el aborto existe una brecha electoral. El apoyo entre

el electorado de Sheinbaum asciende al 70,5% (46,1% totalmente de acuerdo y 21,4% de acuerdo), mientras que el desacuerdo es de solo el 19%, generando una distancia de 50 puntos entre apoyo y rechazo. Entre los votantes de Gálvez el apoyo cae al 44% (21,4% de acuerdo y 22,6% totalmente de acuerdo) y el desacuerdo asciende al 37,5% (15,6% en desacuerdo y 21,9% en totalmente de desacuerdo). Entre los votantes de otras fuerzas partidarias, el 53,7% está a favor y el 20,1% en contra, mientras que entre quienes manifiestan no haber votado los apoyos ascienden al 66,5% y el rechazo llega al 15,2%.

Este cruce confirma que la posición frente a la legalización del aborto se vincula fuertemente con identidades políticas y alineamientos partidarios.

Por ingreso, las diferencias son moderadas pero consistentes: el apoyo es del 53,8% en ingresos bajos (35% totalmente de acuerdo y 18,8% de acuerdo), sube a 56,7% en ingresos medios (31,7% totalmente de acuerdo y 25% de acuerdo) y alcanza su nivel más alto en ingresos altos, con un 67,5% de apoyo (50% totalmente de acuerdo y 17,5% de acuerdo). El rechazo es similar en ingresos bajos y medios —25,5% y 29%, respectivamente— y disminuye en ingresos altos, donde es del 15,4%.

La tendencia indica que a mayor nivel de ingreso, mayor apoyo a la idea de que la legalización del aborto es necesaria para la igualdad de derechos.

Por clase social también se observan diferencias relevantes y, en este caso, más amplias. La clase baja muestra un apoyo del 52,8% (16,5% de acuerdo y 36,3% totalmente de acuerdo), muy cercano al 52,2% de la clase media baja (22,8% de acuerdo y 29,4% totalmente de acuerdo).

En la clase media el apoyo se incrementa significativamente y asciende al 66% (22,1% de acuerdo y 43,9% totalmente de acuerdo). En la clase media-alta se ve un leve ascenso que coloca los niveles de adhesión en el 63,5% (14,3% de acuerdo y 49,5% totalmente de acuerdo). La clase alta es la que exhibe el apoyo más elevado, con un total del 89,4% (19,3% de acuerdo y un contundente 70,1% totalmente de acuerdo).

El rechazo desciende claramente al ascender en la estructura social: va del 27,7% en clase baja al 7,7% en clase alta, pasando por valores intermedios estables en clase media baja (26,7%), media (21,1%) y media alta (22,5%).

El nivel educativo no genera variaciones pronunciadas en los apoyos, aunque sí en los rechazos. Entre quienes fueron a educación pública, el 61,5% está a favor (21,8% de acuerdo y 39,7% totalmente de acuerdo), mientras que en educación privada el apoyo es un poco mejor, de 53% (18,8% de acuerdo y 34,2% totalmente de acuerdo). Sin embargo, la diferencia más relevante se da en el rechazo: en educación privada, la suma de desacuerdo y totalmente desacuerdo llega al 32,4%, mientras que en educación pública baja a 21,1%.

Finalmente, la ubicación territorial también muestra matices. El apoyo es al menos del 50% en todas las zonas, pero varía de modo significativo entre zonas. De mayor a menor apoyo encontramos: la zona poniente presenta el nivel más alto de apoyo, con un 69,3%, seguida por oriente con 68%. En zona norte el apoyo es del 57,9%, en “otro” alcanza el 56% y en zona sur baja al 51,6%. Con una diferencia de 18 puntos entre la zona de mayor y menor apoyo, estos datos muestran que las actitudes frente al aborto también se organizan territorialmente.

Balance general

La posición sobre la legalización del aborto, entendida como una forma de garantizar la igualdad de derechos, es la que muestra más variaciones de todas las respuestas.

Una primera brecha para considerar es la generacional: esta posición reconoce adhesiones más elevadas entre los grupos más jóvenes de edad, que además concentran porcentajes en las posiciones más radicalizadas de apoyo (totalmente de acuerdo). A medida que aumenta la edad ese acuerdo disminuye y crecen los niveles de desacuerdo, aunque esta posición sigue siendo minoritaria. Esto debe pensarse en relación con los procesos de socialización política de las generaciones más jóvenes, que fueron contemporáneas de debates públicos y movilizaciones feministas que pusieron el debate sobre el aborto en el centro de la escena. En el caso estudiado esto cobra especial relevancia si consideramos que después de muchas décadas de activismo feminista, la agenda del aborto entró de lleno en la conversación pública desde el año 2000, con debates como los que tuvieron lugar en torno a la reforma del código penal en materia de aborto, conocida como la Ley Robles, de la votación de nuevas reformas por parte de la Asamblea Legislativa en diciembre de 2003 y la reforma de la Ley de Salud y de una discusión pública impulsada por una iniciativa para despenalizar el aborto en todos los casos, iniciada por el PRD en 2007 que, tras una larga deliberación y de la organización de audiencias públicas, llegó a que la Suprema Corte de Justicia resolviera la constitucionalidad de la despenalización del aborto (Lamas, 2009).

La brecha de género muestra que las mujeres, en todas las edades, apoyan en mayor proporción y con mayor intensidad (con un porcentaje mayor de “totalmente de acuerdo”) la idea de que la legalización del aborto es necesaria para garantizar la igualdad de derechos. Los varones muestran porcentajes importantes de apoyo, pero en menor proporción y con relativo desacuerdo.

La generación y el género explican más las posiciones sobre el aborto que los ingresos y la clase. Así y todo, cuanto más alta es la clase social más acuerdo con la idea de que la legalización del aborto es precisa para garantizar igualdad de derechos y mayor la intensidad del acuerdo (totalmente de acuerdo). En los grupos con menores ingresos o clases sociales más bajas muestran niveles más altos de desacuerdo.

La brecha política o electoral es la que muestra datos más contundentes: quienes votaron por Sheinbaum registran los niveles más altos de apoyo enfático; quienes votaron por Gálvez muestran apoyos elevados pero menos intensos.

Finalmente, el territorio también introduce matices: zonas con mayor nivel socioeconómico y educativo muestran más apoyos enfáticos, mientras que las zonas con menor desarrollo relativo concentran algo más de desacuerdo. Sin embargo, en ninguno de los casos el rechazo es mayoritario, lo que confirma que la oposición al aborto legal es socialmente minoritaria, aunque persistente y localizada en segmentos específicos.

En conjunto, los datos revelan que el aborto legal es un tema que activa diferencias estructurales —edad, género, educación, voto— que no aparecían con tanta fuerza en otras preguntas.

Un elemento que considerar, y sobre el que se podrían hacer nuevas exploraciones con base en técnicas cualitativas, tiene que ver con los argumentos que esgrimen las personas para sostener posiciones favorables a la legalización del aborto. En concreto, aunque la formulación de la pregunta sugiere una relación entre la posición a favor del aborto legal y el acceso a derechos, diferentes investigaciones cualitativas muestran que existen maneras de construir las adhesiones con base en argumentos individuales que tienen una relación más o menos distante con la narrativa sobre los derechos. En concreto, Nitzan Shoshan y Gutiérrez Martínez (2025) analizan las posiciones a favor y en contra del aborto legal entre votantes de diferentes fuerzas políticas en México. Su trabajo muestra, por un lado, la existencia de adherentes y detractores en ambos espacios partidarios. Por otro, que entre los votantes de Morena muchas veces las razones por las que adhieren al aborto legal no lo hacen necesariamente como un argumento a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres, sino más bien como una decisión individual. Investigaciones sobre las mujeres que militan en las nuevas derechas en Argentina (Vázquez y Spataro, 2025), como las liberales libertarias que adhieren a las ideas de Javier Milei, las posiciones sobre el aborto generan disensos. Algunas están a favor del derecho del “niño por nacer” (leído como derecho a la vida) y otras a favor del derecho de las mujeres a elegir. Desde esta posición fundamentan una adhesión a la legalización del aborto pero no ven esto como un derecho que el Estado deba garantizar a las mujeres. En otras palabras, sostienen una posición proaborto pero bajo una premisa individualista y desde una narrativa antiestado: legal sí, pero “pagáelo vos”.

El punto a mencionar es que los argumentos y las posiciones desde las que se puede llegar a estar de acuerdo con la legalización del aborto son diversas. Aunque en este caso hay una relación entre voto a Sheinbaum y la posición a favor del aborto, no terminamos de conocer los argumentos en los que se construye esa adhesión.

2.6. Los feminicidios son un problema grave que requiere políticas específicas para ser enfrentado

Desde una perspectiva feminista, el femicidio ha sido conceptualizado como la expresión más extrema de la violencia de género, en tanto implica el asesinato de mujeres por razones vinculadas a su condición de género. Como plantea Rita Segato (2016), estos crímenes no pueden ser comprendidos como hechos individuales o meramente privados, sino como actos profundamente políticos y comunicativos que funcionan como mensaje disciplinador hacia las mujeres.

El acuerdo con la idea de que los feminicidios son un problema grave que requiere políticas específicas para ser enfrentado es contundente si miramos los porcentajes totales, así como la intensidad de esta afirmación. Entre las personas de 15 a 44 años, donde alcanza el 91,9%. Un escenario equivalente se da entre las personas de 30 a 44 años, con un porcentaje de acuerdo del 83,9%.

Los porcentajes permanecen altos en las franjas de más edad los porcentajes de acuerdo tienden a mantenerse altos: 84,6% entre las personas de 45 a 49 y 87,9% entre los 50 a 59.

Tanto varones como mujeres muestran niveles de adhesión a la idea de que el feminicidio es un problema grave que requiere de políticas específicas para ser tratado, aunque hay diferencias porcentuales sustantivas: las mujeres muestran un 92,1% de acuerdo y los varones un 81,6%, es decir que hay 10,5 puntos porcentuales de diferencia. Además, el 71,6% de las mujeres está muy de acuerdo con esta idea, frente al 53,8% de los varones.

La adhesión a la idea de que los feminicidios son un problema grave que requiere de políticas específicas presenta niveles de adhesión altos (con, al menos el 80% de acuerdo) y es transversal entre los votantes de diferentes fuerzas políticas. Las diferencias que se ven tienen más que ver con la intensidad, los porcentajes de desacuerdo y la neutralidad.

Entre los votantes de Sheinbaum se ve el porcentaje más alto de adhesión, con el 89,8% de acuerdo o totalmente de acuerdo. Le siguen aquellas personas que votaron a otras fuerzas políticas (con el 86,9%). Entre los votantes a Galvez las posiciones de acuerdo y muy de acuerdo también son elevadas (85,5%). El porcentaje de los que están totalmente de acuerdo (62,1%) es muy alto y es comparable con los votantes de Sheinbaum (63%) y los no votantes (63,5%). Esto indica que quienes sí están de acuerdo dentro de este grupo, lo están con una fuerte convicción. Los votantes de otras fuerzas políticas son los que muestran una convicción más fuerte en relación con la posición “totalmente de acuerdo” que llega al 66,3% y es la más alta entre todos los perfiles de votantes. Así y todo, las diferencias entre votantes no llegan a ser estadísticamente significativas.

Entre los que no votaron se registra un porcentaje alto de adhesión a esta idea (el 82,6% está de acuerdo y muy de acuerdo), aunque este es el porcentaje más bajo entre todos los perfiles de votantes. En este grupo se observa el porcentaje más alto de ni acuerdo ni desacuerdo (con un 10,3%). En los demás casos esta posición oscila entre el 6 y el 7,4%.

De igual manera que con la edad, el género y con el voto, si miramos la posición sobre este punto en función de los ingresos, notamos que el nivel de acuerdo es muy alto en todas las categorías de ingreso. Si sumamos acuerdo más muy de acuerdo, los porcentajes están por encima del 79% en todos los grupos. Esto refuerza la idea de que la gravedad de los feminicidios y la necesidad de políticas específicas es una preocupación ampliamente compartida en la sociedad. Un dato para tener en cuenta es que el porcentaje de acuerdo aumenta a medida que pasamos de un nivel de ingresos bajo a uno medio (con una diferencia porcentual de 9 puntos) y del medio al alto (con 5 puntos de diferencia). En suma, entre las adhesiones entre la categoría más baja de ingresos y la más alta es de 14 puntos porcentuales.

En los sectores de ingresos bajos se registra el porcentaje más alto de ni de acuerdo ni en desacuerdo (con el 12%, frente al 6,7% entre las personas de ingresos medios y 2,9% de ingresos altos). También es en este grupo que observamos niveles de desacuerdo más altos, con el 8,7% en desacuerdo o muy en desacuerdo, frente a al 5% entre sectores de ingresos medios y el 3,9% de sectores de ingresos altos. Aunque estas no llegan a ser diferencias significativas en términos estadísticos muestran una heterogeneidad mayor entre las posiciones o la priorización de otras agendas.

En suma, es posible reconocer una relación entre nivel de ingresos y grado de acuerdo con la idea de que los feminicidios son un problema grave que requiere de políticas específicas. A mayor nivel de ingresos, mayor acuerdo con esta afirmación y más disminuyen los porcentajes de desacuerdo y neutralidad⁶.

⁶ Los resultados de otras investigaciones permiten formular una hipótesis de lectura en relación con estos datos: en ocasiones, los sectores con menores niveles de ingreso muestran una posición más refractaria a estas políticas y agendas cuando involucran la presencia del Estado y la financiación de acciones concretas. La formulación de la pregunta evoca tanto la posición sobre los feminicidios como también la idea de que para trabajar contra esto es preciso diseñar “políticas específicas”. Aunque no se explicita de qué tipo de acciones se trataría, la evocación de la intervención estatal por medio de programas y acciones sugiere un elemento más para tomar en cuenta en el análisis de esta respuesta, como se puede observar en contextos como el argentino a partir de la extensión de sensibilidades liberal-libertarias antiestatales (Seman, 2023 y Vázquez y Spataro, 2025). En otras palabras, más allá del aspecto “moral” de la batalla cultural llevada adelante por las derechas radicales, estas conectan con sensibilidades por lo bajo que encuentran en movimientos vinculados con las agendas feministas o de género como expresión de una forma ilegítima del uso de fondos públicos y recursos estatales en favor de intereses “minoritarios” (Kessler y Vommaro, 2025).

De igual manera que con las preguntas anteriores, los niveles de acuerdo son muy elevados y están por encima del 80% en todos los casos si los miramos por clase social: 82,6% en la clase baja, 83,6% en la media-baja, 90,3% en la media, 91,3% en la media-alta y 92,2% en la alta). En suma: cuanto mayor es la clase social, más aumenta la adhesión a esta idea y más crece el porcentaje de adhesiones más intensas (muy de acuerdo). También crece la intensidad a medida que crece la clase; donde crece la posición muy de acuerdo.

Las posiciones de desacuerdo también son más altas cuanto más baja es la clase social. El porcentaje más alto es del 9,4%, entre las clases bajas y desciende hasta llegar a 0% en la clase alta. En la clase baja y medio-baja se registra un 8,1% y un 11,2%, respectivamente, en las posiciones de ni de acuerdo ni en desacuerdo. En suma, la afirmación sobre los feminicidios y la necesidad de políticas específicas resuena fuertemente en todas las clases sociales, pero la intensidad del acuerdo y la uniformidad de la opinión aumentan progresivamente con el estatus socioeconómico, siendo la clase alta la que demuestra el consenso más enfático y sin fisuras.

Respecto del análisis por institución educativa, existe un alto nivel de acuerdo general con la afirmación en ambos grupos: para quienes recibieron educación pública, el acuerdo total es del 88.1% (23.7% de acuerdo + 64.4% totalmente de acuerdo). Para quienes recibieron Educación Privada, el acuerdo total es del 83.6% (24.9% de acuerdo + 58.7% totalmente de acuerdo).

Las variaciones que se dan según tipo de educación recibida tienen que ver con las intensidades de acuerdos y los niveles de desacuerdo. Quienes recibieron educación pública muestran un porcentaje significativamente más alto de totalmente de acuerdo (64.4%) en comparación con quienes recibieron Educación Privada (58.7%). Esto sugiere que el segmento con educación pública percibe la urgencia y gravedad del problema con una convicción ligeramente más fuerte y enfática.

Si miramos la respuesta sobre los feminicidios segmentadas según la zona geográfica de residencia de los encuestado notamos que, nuevamente, hay altos niveles de acuerdo con la idea de que los feminicidios sobre un problema grave que requiere políticas específicas, si combinamos de acuerdo con muy de acuerdo, al menos el 82% comparte esto en todas las zonas geográficas.

El análisis de la afirmación “los feminicidios son un problema grave que requiere políticas específicas para ser enfrentado” muestra un fuerte consenso en todas las categorías demográficas, con variaciones en la intensidad de acuerdo. Este dato cobra especial relevancia y se muestra como una preocupación central para la CDMX. Ese consenso amplio atraviesa todas las variables analizadas, aunque con matices que ayudan a comprender cómo se vive y se interpreta esta problemática en distintos grupos. Estos datos son coincidentes con los que señalan Kessler y Vommaro (2025), quienes indican que los femicidios fueron un tema central de preocupación en los grupos focales que realizaron en Méxi-

co, preocupación compartida por todas las afinidades políticas, grupos de edad y lugares de residencia.

Por edad, la inquietud es especialmente fuerte entre las y los jóvenes de 15 a 29 años, donde el apoyo total a la afirmación alcanza un 91,9%. En los grupos de mayor edad, el acuerdo sigue siendo mayoritario, aunque con una menor proporción de quienes se declaran “muy de acuerdo”, lo cual marca diferencias en la intensidad, más que en la dirección de la postura.

Las brechas de género también son elocuentes. Las mujeres expresan un respaldo más enfático —71,6% “muy de acuerdo” frente al 53,8% de los varones—, evidenciando que la violencia de género, y en particular el feminicidio, interpele de manera diferencial según la experiencia social de cada grupo.

En términos políticos, la preocupación aparece como un punto de encuentro: el acuerdo supera el 80% entre prácticamente todos los electorados. Aun así, quienes votaron por Sheinbaum y quienes adhieren a otras fuerzas políticas muestran niveles de convicción más firmes, revelando adhesiones más sólidas. Las condiciones socioeconómicas también modulan el apoyo. A medida que aumenta el ingreso, crece el nivel de acuerdo y disminuyen la neutralidad y el desacuerdo: los sectores de mayores ingresos sostienen posturas más claras y menos ambivalentes.

El tipo de educación recibida introduce otro matiz relevante. Entre quienes asistieron a la educación pública, el acuerdo es más alto e intenso; en cambio, entre quienes provienen de instituciones privadas, si bien predomina la aprobación, aparecen porcentajes más visibles de desacuerdo.

Balance general

En conjunto, estos hallazgos confirman que el feminicidio constituye una preocupación central y ampliamente compartida en Ciudad de México, pero también que esa preocupación adquiere diferentes intensidades y matices según la generación, el género, las condiciones sociales y las trayectorias educativas. Es un consenso robusto que revela la profundidad con la que esta problemática atraviesa la vida cotidiana y las percepciones sociales en la ciudad.

Dicho esto, resulta pertinente introducir algunas reflexiones adicionales. En primer lugar, la tematización de los feminicidios como problema grave, tal como se manifiesta en este estudio, permite dimensionar el alcance y la relevancia que cobró la ampliación de los debates sobre las desigualdades de géneros, la violencia y las agendas feministas. Al mismo tiempo, precisamente por esto, es posible que muchas personas respondan de acuerdo con lo que se espera que digan en un tiempo como el actual, en otros términos, manifestarse o responder en contra de la idea de que el feminicidio es un problema grave representa una posición con fuerte prestigio social.

En segundo lugar, así como anteriormente mencionamos en relación con los argumentos por los que llegan las personas a la defensa del aborto legal, que son heterogéneos y que una encuesta como esta no necesariamente puede captar o reconstruir, las maneras en las que las personas condenan los feminicidios podrían tener diferentes posiciones o supuestos. A modo de ejemplo, Nitzan Shoshan y Gutiérrez Martínez (2025) realizan focus group con votantes de diferentes fuerzas políticas en México y muestran que, en algunos casos, los modos en que se modula el rechazo a los feminicidios tienen que ver con pensarlos en conexión con una agenda sobre inseguridad, antes que como resultado específico de la violencia hacia las mujeres. En el caso de Vázquez y Spataro (2025), se muestra cómo las mujeres que militan y se organizan en las extremas derechas tienen la agenda de la violencia contra las mujeres en el centro de su activismo. Ahora bien, el modo en que encuentran respuestas a esa violencia tiene que ver con la defensa personal y la libre portación de armas (“defiéndete sola”) y con visiones punitivistas que se sintetizan en la consigna “al violador, bala”.

En suma, esta investigación podría nutrirse de estudios complementarios que aborden desde la perspectiva de los sujetos cuáles son los argumentos que sostienen al momento de manifestar sus posiciones sobre las agendas de género.

A modo de síntesis de la primera parte

Los resultados de la encuesta permiten ordenar con claridad los temas según niveles de aceptación y rechazo, así como identificar las variables que estructuran las diferencias.

En primer lugar, los mayores consensos se concentran en dos afirmaciones. La más robusta es la idea de que hombres y mujeres deben compartir por igual las tareas domésticas y de cuidado, que alcanza niveles de adhesión superiores al 90% en todos los segmentos y con una intensidad alta (“totalmente de acuerdo”). Se trata del punto de mayor acuerdo transversal de toda la encuesta y el que menos diferencias muestra entre edades, géneros, clases sociales, voto o territorio. Algo similar ocurre con la afirmación de que los feminicidios son un problema grave que requiere políticas específicas, que también concita un respaldo ampliamente mayoritario y se consolida como una preocupación central en la CDMX. En este caso, las diferencias no se expresan tanto en el acuerdo/desacuerdo, sino en la intensidad del apoyo, que es mayor entre mujeres, jóvenes y sectores de ingresos más altos. Respecto de estas dos afirmaciones, es importante señalar que, en el contexto de las discusiones sobre feminismos de los últimos años, no sería políticamente correcto señalar que las mujeres son las que deben hacerse cargo solas de las tareas domésticas, así como que los feminicidios no son un problema grave, lo que invita a reflexionar sobre la necesidad de construir otros modos de indagación para estudiar lo que sucede más allá de la declaración de principios con temas tan contundentes como éstos.

Un segundo grupo de preguntas muestra cómo otras agendas feministas no suscitan la misma intensidad de apoyos, aunque exista una tendencia a analizar las agendas feministas como un todo homogéneo. Por ejemplo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y maternidad y la idea de que la legalización del aborto es necesaria para garantizar la igualdad de derechos recibieron respuestas afirmativas, aunque no tan contundentes. Ambas cuentan con mayorías claras a favor, aunque hay notables diferencias: el 86,8% de la muestra se manifiesta favorable y con un alto nivel de intensidad al derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y maternidad (el 60,4% está muy de acuerdo y el 26,6% de acuerdo), mientras que la legalización del aborto como necesaria para garantizar igualdad de derechos obtiene un apoyo significativamente menor: el 59% está a favor —21% de acuerdo y 38,3% totalmente de acuerdo— mientras que el rechazo asciende al 23,9% (resultado que surge de la suma del 12,1% en desacuerdo y el 11,8% en totalmente en desacuerdo). Estas preguntas también activan brechas más visibles por edad, género, voto, educación y clase social. En estos temas, las generaciones jóvenes y las mujeres expresan adhesiones más intensas; a medida que aumenta la edad, disminuye el acuerdo enfático y crecen las posiciones más moderadas o neutrales. El aborto, en particular, es el tema que concentra más matices y polarización relativa, aunque el rechazo sigue siendo minoritario y localizado en segmentos específicos. Asimismo, y en contraste, hay una agenda que genera absoluto rechazo: la de las políticas de cuotas para mujeres. A diferencia del resto de las preguntas, aquí predomina un rechazo extendido y homogéneo, transversal a casi todas las variables analizadas. Ni el género ni la orientación política generan clivajes fuertes, y resulta especialmente llamativo que las mujeres expresan niveles de rechazo incluso más altos que los varones. La única excepción relevante es la clase alta, donde el apoyo es significativamente mayor. Este resultado sugiere que las cuotas activan marcos culturales y morales —meritocráticos, antiprivilegio y de desconfianza hacia la intervención estatal— que atraviesan de manera amplia a la sociedad.

Finalmente, la afirmación de que el feminismo busca someter a los hombres, que permitiría advertir qué es lo que la CDMX entiende por feminismo y si hay confusiones al respecto, es rechazada de forma clara y mayoritaria, lo que indica una baja adhesión social a las narrativas antifeministas más explícitas. Sin embargo, las diferencias observadas —mayor rechazo entre mujeres, jóvenes y sectores de mayor ingreso, y más acuerdo o neutralidad entre varones de mediana edad y sectores de menores recursos— muestran que estas narrativas no están ausentes, sino socialmente localizadas.

En conjunto, los datos permiten concluir varias cuestiones en relación con las agendas de género exploradas. En primer lugar que la generación explica más que el género y que la clase social. La orientación política introduce, sobre todo en relación con el aborto, algunos matices. Las personas jóvenes y las mujeres tienden a mostrar apoyos más intensos y consistentes, mientras que las brechas de clase son menos pronunciadas. No obstante, la clase social introduce dif-

erencias: cuanto mayor es el ingreso y/o la clase social autopercibida, mayor adhesión a las agendas asociadas a los feminismos. Este patrón sugiere que, más que un rechazo generalizado, lo que emerge es un mapa complejo de consensos amplios, controversias puntuales y clivajes generacionales y de género que estructuran las percepciones sobre la igualdad en la Ciudad de México.

Por otro lado, las agendas feministas no suscitan iguales adhesiones y rechazos. Algunas tienen más legitimidad social que otras y son aceptadas masivamente, por lo menos de forma declarativa. El ejemplo más claro es la distribución de tareas dentro del hogar y la valoración del feminicidio como un problema grave a tratar. Otras, como las vinculadas al derecho sobre el propio cuerpo y aborto, reconocen más matices.

Esta heterogeneidad interna sugiere que para pensar las agendas feministas, sus valoraciones y apropiaciones, no podemos limitarnos a pensar desde la clásica división entre izquierda-derecha ni tampoco en función de bloques homogéneos ya que no permiten captar las singulares configuraciones de las subjetividades contemporáneas. Comprender la valoración y extensión de las agendas feministas también supone entender que hay personas que apoyan el aborto pero rechazan las cuotas; que demandan igualdad en el hogar pero sostienen discursos securitarios, quienes repudian la violencia de género pero sostienen posiciones conservadoras sobre la sexualidad y la familia o que simpatizan con las agendas feministas pero, al mismo tiempo, se distancian electoralmente de proyectos progresistas.

Todos estos elementos densifican la comprensión de por qué el feminismo no predice de manera lineal el apoyo político, sino que se despliega como un conjunto de vectores que expresan la conflictividad profunda del orden social contemporáneo. Al mismo tiempo sugiere la potencia de estudios cualitativos que permitan reconstruir las razones y los modos en que las personas compatibilizan argumentos que, desde las clasificaciones, podríamos colocar en casilleros separados.

Así, el módulo feminista actúa como prisma que ilumina las tensiones profundas de la subjetividad política contemporánea. No organiza simplemente preferencias: reorganiza el mapa político, fractura identidades previas y exhibe los límites de una lectura dicotómica entre izquierda y derecha.

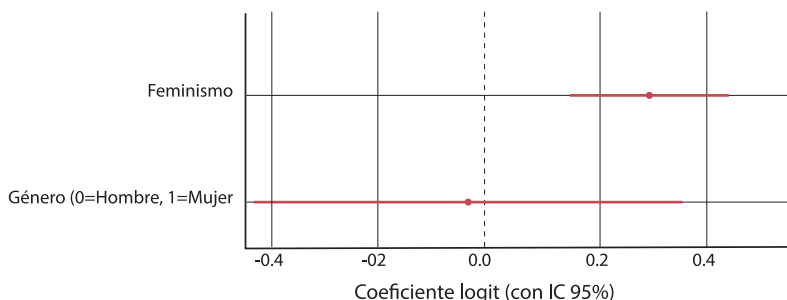
3. Segunda Parte. Modelo Ideológico

Esta segunda parte del artículo se propone analizar el cruce entre feminismo e ideología a partir de la construcción de modelos presentados en el anexo metodológico, que buscan discriminar el índice de apoyo a la agenda feminista según tres modelos: la probabilidad de votar por la candidata Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México (Modelo 1); la ideología política autodeclarada (Modelo 2); y el índice de valores ideológicos construido para este trabajo, que sintetiza el nivel de apoyo o rechazo hacia los siguientes principios normativos como Igualdad económica, Defensa de la democracia, Sostenibilidad ambiental, Feminismo, Igualdad de trato entre ciudadanos locales y migrantes (Modelo 3).

3.1. Modelo 1 (Feminismo e ideología electoral a favor de CS)

Se examinó la influencia del apoyo a la agenda feminista —medido mediante un índice compuesto de seis ítems— sobre la probabilidad de votar por Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Los resultados muestran que el índice de feminismo tiene un efecto positivo y altamente significativo ($\beta = 0.299$, $p < 0.001$) sobre la intención de voto por Sheinbaum, incluso tras controlar por variables sociodemográficas como edad, género, educación, ingreso, salud mental, y movilidad. El valor del coeficiente implica que, por cada punto adicional en el índice de apoyo feminista (en una escala de 0 a 6), aumenta en promedio la probabilidad de elegir electoralmente a Sheinbaum, reflejando una asociación robusta entre posturas feministas y respaldo político a la actual presidenta. La significancia estadística elevada ($z = 4.08$) y el estrecho intervalo de confianza (95% CI: 0.156–0.444) refuerzan la precisión de esta estimación. Este hallazgo sugiere que la identidad política de Sheinbaum se alinea perceptivamente con la agenda feminista en el electorado capitalino, operando el feminismo no solo como una postura normativa sino como un eje organizador del comportamiento electoral. El modelo ofrece evidencia empírica sólida de que el feminismo constituye un predictor estadísticamente significativo del voto por Sheinbaum, articulando una forma específica de ideología progresista con consecuencias electorales mensurables.

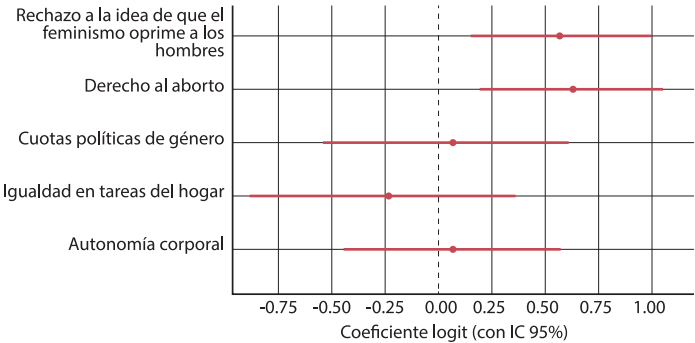
Gráfico. Efecto del feminismo y del género sobre el voto por CS, (Modelo probabilístico Logit)



Nota: Gráfico de coeficientes estimados a partir de un modelo logit ordinal. Los puntos representan los efectos marginales de cada variable sobre la probabilidad de ubicarse en una posición ideológica más a la derecha (en una escala de 0 a 10). Las líneas horizontales indican los intervalos de confianza al 95%. Coeficientes cuyo intervalo incluye el valor cero no son estadísticamente significativos. Las estimaciones han sido ajustadas a partir de un modelo de regresión logística que controla por características socioeconómicas y demográficas (edad, nivel educativo, ingreso, salud mental y movilidad).

En contraste, el coeficiente estimado para la variable género (0 = hombre, 1 = mujer) en el mismo modelo no alcanza significación estadística ($\beta = -0.048$, $p = 0.825$; IC 95%: -0.447 a 0.351), lo que impide establecer una asociación clara entre el hecho de ser mujer o hombre y la probabilidad de votar por Claudia Sheinbaum. A pesar de que el signo del coeficiente sugiere una leve propensión negativa, el intervalo de confianza amplio y centrado en torno al cero evidencia una alta incertidumbre en la estimación. Esto implica que, una vez controladas otras variables sociodemográficas como edad, escolaridad o nivel de ingreso, el género por sí solo no explica diferencias sistemáticas en el respaldo electoral a Sheinbaum. Este resultado desafía suposiciones frecuentes que asocian automáticamente el voto femenino con candidatas mujeres, y sugiere que el voto por Sheinbaum se estructura menos por identidad de género y más por alineamientos ideológicos sustantivos.

Gráfico. Efecto de apoyos específicos de la agenda feminista sobre el voto por Sheinbaum (Modelo probabilístico Logit)

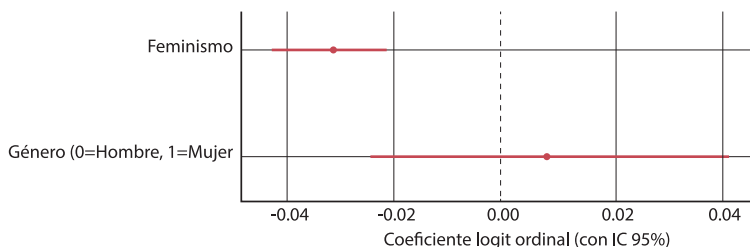


Nota: Gráfico de coeficientes estimados a partir de un modelo logit ordinal. Los puntos representan los efectos marginales de cada variable sobre la probabilidad de ubicarse en una posición ideológica más a la derecha (en una escala de 0 a 10). Las líneas horizontales indican los intervalos de confianza al 95%. Coeficientes cuyo intervalo incluye el valor cero no son estadísticamente significativos. Las estimaciones han sido ajustadas a partir de un modelo de regresión logística que controla por características socioeconómicas y demográficas (edad, nivel educativo, ingreso, salud mental y movilidad).

El análisis desagregado de las dimensiones del feminismo permite identificar qué aspectos específicos de la agenda feminista están más estrechamente asociados con el respaldo electoral a Claudia Sheinbaum. Entre los ítems considerados, destacan con significancia estadística positiva el rechazo a la idea de que el feminismo oprime a los hombres ($\beta = 0.585$, $p = 0.006$) y el apoyo al derecho al aborto ($\beta = 0.618$, $p = 0.004$), ambos con intervalos de confianza al 95% que no incluyen el cero. Estos resultados sugieren que el voto por Sheinbaum se alinea particularmente con un cuestionamiento activo a los marcos discursivos antifeministas. En cambio, las demás dimensiones —como las cuotas políticas de género, la igualdad en las tareas del hogar y el derecho a decidir sobre el cuerpo— no presentan los mismos números. Esto podría interpretarse como una jerarquización ideológica dentro del campo feminista, en la que el electorado capitalino identifica más claramente en detrimento de otros, como por ejemplo aborto, que se analizará más adelante. La evidencia empírica indica, por tanto, que el feminismo que moviliza voto por Sheinbaum no es homogéneo.

3.2. Modelo 2 (Feminismo y Género sobre Ideología autodeclarada)

Gráfico 2: Efecto de Feminismo y Género sobre Ideología autodeclarada (0=Izquierda, 10=Derecha) (Modelo probabilístico Logit ordinal)



Nota: Gráfico de coeficientes estimados a partir de un modelo logit ordinal. Los puntos representan los efectos marginales de cada variable sobre la probabilidad de ubicarse en una posición ideológica más a la derecha (en una escala de 0 a 10). Las líneas horizontales indican los intervalos de confianza al 95%. Coeficientes cuyo intervalo incluye el valor cero no son estadísticamente significativos. Las estimaciones han sido ajustadas a partir de un modelo de regresión logística que controla por características socioeconómicas y demográficas (edad, nivel educativo, ingreso, salud mental y movilidad).

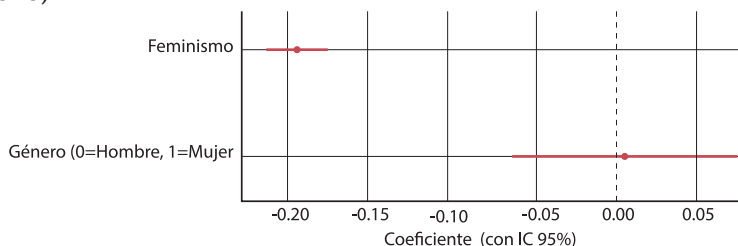
En el segundo modelo, estimado mediante regresión logística ordinal, se analiza cómo el nivel de apoyo a la agenda feminista predice la ubicación ideológica autodeclarada en una escala de 0 (izquierda) a 10 (derecha). El coeficiente del índice de feminismo resulta negativo y estadísticamente significativo ($\beta = -0.318$, $p < 0.001$; IC 95%: -0.421 a -0.215), lo que indica que un mayor respaldo a la agenda feminista se asocia de forma consistente con una autopercepción más cercana a la izquierda del espectro político. A diferencia de variables sociodemográficas más estables, el feminismo aparece aquí como un vector de posicionamiento político con capacidad discriminante sobre la ideología. La fuerza y claridad del coeficiente sugieren que el feminismo no sólo estructura actitudes hacia temas específicos, sino que se integra activamente en el mapa cognitivo ideológico del electorado capitalino, funcionando como un anclaje simbólico de adscripción ideológica.

En contraste, la variable género (0 = hombre, 1 = mujer) no presenta un efecto estadísticamente significativo sobre la autoidentificación ideológica ($\beta = 0.090$, $p = 0.58$; IC 95%: -0.231 a 0.411), lo que indica que, una vez controladas las demás variables del modelo, no existen diferencias sistemáticas entre hombres y mujeres respecto a su ubicación ideológica en la escala 0–10. A pesar de que el coeficiente es positivo —lo cual sugeriría, en principio, una leve tendencia de las mujeres a ubicarse hacia la derecha—, el amplio intervalo de confianza que incluye el cero impide atribuirle validez empírica. Este resultado desmitifica las expectativas de una alineación automática entre género y posición ideológica, sugiriendo que el género, como categoría estructural, no predice por sí solo la

ideología política en este contexto urbano. En cambio, es la adscripción normativa a valores —como el feminismo— la que parece desempeñar un papel central. En términos teóricos, este hallazgo refuerza la necesidad de distinguir entre identidades demográficas y posicionamientos ideológicos, y de evitar reduccionismos que asumen correspondencias automáticas entre ambas dimensiones.

3.3. Modelo 3. Feminismo e ideología valórica

Gráfico. Efecto de feminismo y género sobre ideología valórica (Modelo OLS)



Nota: Gráfico de coeficientes estimados a partir de un modelo logit ordinal. Los puntos representan los efectos marginales de cada variable sobre la probabilidad de ubicarse en una posición ideológica más a la derecha (en una escala de 0 a 10). Las líneas horizontales indican los intervalos de confianza al 95%. Coeficientes cuyo intervalo incluye el valor cero no son estadísticamente significativos. Las estimaciones han sido ajustadas a partir de un modelo de regresión logística que controla por características socioeconómicas y demográficas (edad, nivel educativo, ingreso, salud mental y movilidad).

En el tercer modelo, que estima mediante regresión lineal el impacto del feminismo sobre un índice continuo de valores ideológicos, se observa que el apoyo a la agenda feminista se asocia de forma significativa y negativa con la adhesión a una ideología valórica conservadora. El coeficiente estimado ($\beta = -0.195$, $p < 0.001$; IC 95%: -0.219 a -0.171) indica que, a mayor intensidad en el respaldo al feminismo, menor es la puntuación en el índice que sintetiza posturas conservadoras. Este resultado sugiere que el feminismo no opera únicamente como una postura sectorial o temática, sino como un eje transversal de orientación valórica general, capaz de estructurar el posicionamiento del individuo frente a una variedad de principios normativos (como igualdad económica, ambientalismo, derechos migrantes y democracia). La magnitud del efecto —el más pronunciado en el modelo— y su elevada significancia estadística refuerzan la idea de que el feminismo actúa como un vector ideológico integrador, en clara oposición a matrices de pensamiento conservador. Este hallazgo corrobora la potencia explicativa del feminismo como principio estructurante del campo político ideológico en contextos urbanos como el de la Ciudad de México.

Por su parte, la variable de género (0 = hombre, 1 = mujer) no muestra un efecto estadísticamente significativo sobre la orientación valórica conservadora ($\beta = 0.005$, $p = 0.885$; IC 95%: -0.067 a 0.077). Esta falta de asociación indica que no existen diferencias consistentes entre hombres y mujeres en cuanto a

su posicionamiento en el índice de valores ideológicos, una vez que se controlan otras variables relevantes como ingreso, edad, educación, movilidad, salud mental y apoyo al feminismo. El resultado reitera un patrón observado en modelos anteriores: el género, como variable sociodemográfica, no parece ser un determinante autónomo del posicionamiento ideológico, lo que desafía interpretaciones que suponen un alineamiento automático entre el género y las actitudes valorativas.

A modo de síntesis de la segunda parte

Esta segunda parte del artículo muestra que el apoyo a la agenda feminista aumenta la probabilidad de votar por Claudia Sheinbaum, se vincula con una autopercepción ideológica más cercana a la izquierda y se vincula con un sistema de valores ideológicos asociados a la igualdad, los derechos y la ampliación de la democracia. En contraste, el género —entendido como una categoría sociodemográfica— no presenta efectos significativos una vez que se controlan otras variables relevantes, lo que indica que no existe una correspondencia automática entre ser mujer y sostener posiciones feministas o progresistas ni, a la inversa, ser hombre y tener posiciones antifeministas o conservadoras.

Estos resultados permiten sostener que el feminismo atraviesa a personas de distintos géneros y trayectorias sociales. Asimismo, el análisis desagregado muestra que este apoyo a la agenda feminista no es homogéneo: algunas dimensiones, como el rechazo a los discursos que entienden que el feminismo busca someter a los hombres y la distribución igualitaria de las tareas en el hogar tienen mayor peso político que otras. En conjunto, los hallazgos invitan a pensar el feminismo menos como una identidad cerrada y más como un repertorio de valores y asociados a un grupo social específico, sino más como un eje transversal que atraviesa posiciones políticas, partidarias e identidades de género.

4. Conclusiones generales y guía para la militancia

Según el estudio de Nitzan Shoshan y Gutiérrez Martínez (2025), mientras que en muchos países las agendas de género tienden a estructurar posiciones fuertemente polarizadas, en la Ciudad de México estas cuestiones producen, de manera llamativa, altos niveles de adhesión social. En particular, se observan consensos transversales muy robustos en torno a tres ejes: la idea de que hombres y mujeres deben compartir por igual las tareas domésticas y de cuidado, y que los feminicidios constituyen un problema grave que requiere políticas específicas —ambas con niveles de acuerdo superiores al 90% y escasas diferencias entre grupos sociales—, así como el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y maternidad, que alcanza un 87% de adhesión. Si bien el apoyo a la legalización del aborto como condición para garantizar la igualdad de derechos es significativamente menor (59%), este nivel de respaldo continúa siendo elevado y refuerza la centralidad que las agendas de género ocupan en el debate público de la ciudad. De esta manera los datos de la encuesta son congruentes con lo que sostienen los autores: la polarización política e ideológica en México es relativamente débil.

Es por eso que la exploración de este núcleo de preguntas requiere interpretaciones adicionales para poner a prueba hipótesis e interpretar las respuestas ofrecidas por las personas encuestadas.

Sobre la relación del movimiento feminista con la representación partidaria y/o estatal de sus agendas

Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta en la historia de México y llega al poder de la mano de una fuerza política asociada con la izquierda. Aunque la relación con algunos sectores del movimiento feminista ha sido tensa, muchas ven en la figura de Sheinbaum la posibilidad de materializar un conjunto de demandas y agendas de género.

Frente a este escenario, resulta valioso recuperar algunos de los balances realizados a propósito de otras experiencias en la región. Paz Frontera es una activista feminista que acaba de publicar el libro *¿Demasiado feminismo?*. La política feminista entre el Estado, el activismo y la batalla cultural de la derecha radical (Siglo XXI, 2025). Allí sistematiza la experiencia de diferentes países en los que se produjo una institucionalización del feminismo, por ejemplo, a partir de la creación de Ministerios específicos (como Chile, Brasil y Uruguay en 2015 y Argentina en 2017 y 2019). La institucionalización del feminismo en el Esta-

do propone una reflexión valiosa para entender tanto las críticas “por derecha”, asociadas a la narrativa antifeminista de las nuevas derechas, como también para las lecturas desde el progresismo. ¿Cuándo y cómo para las feministas el Estado –al que se responsabilizó por la violencia, la opresión, por ser patriarcal– podía convertirse en un aliado?, ¿qué implica que el feminismo llegue al Estado de la mano de activistas, agendas y áreas?, ¿puede confluir esa llegada con una sensibilidad antiestatista que ven en el feminismo una forma (más o específica) de la “casta”, en este caso como una “casta feminista”?

El análisis sobre estas experiencias ilumina algunos puntos centrales para fuerzas políticas progresistas vinculadas con gestiones de gobierno que ven en los feminismos un espacio para trabajar y/o una agenda para implementar.

La relación entre feminismo y progresismo no es lineal.

Como muestra claramente esta encuesta es posible identificar narrativas o sensibilidades feministas dentro y fuera del progresismo. Por lo mismo, dentro del progresismo las posiciones en relación con las agendas feministas no son homogéneas, por citar solo un ejemplo, las políticas de acción afirmativa como las cuotas para mujeres son rechazadas ampliamente, incluso dentro de votantes de Sheinbaum.

Según Bedín (2025), es preciso recuperar los aportes de la teoría y la epistemología feminista para cuestionar la estructura binaria rígida entre conceptos que tienden a pensarse como una relación ineludible: por un lado, entre progresismo, feminismo y mujeres; y por otro lado, un contramovimiento antifeminista, antigénero, conservador y de varones. Esta visión dicotómica no sólo estereotipa a partir de una visión binarista sino que, además, es poco útil para captar la complejidad de las configuraciones políticas y discursivas actuales. Según Nitzan Shoshan y Gutiérrez Martínez (2025), las posiciones sobre agendas de género en México no pueden comprenderse simplemente a partir de una diferenciación entre conservadores y progresistas. Tal como señalamos, en su investigación muestran que hay votantes de Morena que adoptan posturas conservadoras en relación con agendas como el aborto legal, el matrimonio igualitario, la adopción monoparental, el movimiento feminista y las transformaciones del rol de las mujeres en la sociedad. Mientras que otros, que se identifican con partidos de centro o centro-derecha, mostraron posiciones más progresistas en relación con estas agendas. Los autores recuperan testimonios de personas entrevistadas que se posicionaron a favor de las agendas feministas se construyen con base en argumentos conservadores. A modo de ejemplo, un varón, simpatizante de Morena de 35 años que fundamenta estar totalmente de acuerdo con el derecho al aborto bajo el argumento de que podría ser un método para prevenir la delincuencia, no porque sea un derecho para las mujeres.

El trabajo de Paz Frontera (2025), propone una clave de análisis que también conviene integrar a la reflexión. A partir de la derrota política y electoral de

gobiernos progresistas que llevaron adelante políticas vinculadas con los feminismos, como en el caso argentino, propone pensar que las “reacciones” hacia el feminismo están lejos de registrarse de manera exclusiva en las nuevas derechas antifeministas. La derrota del progresismo en la región también se observa con el surgimiento de la pregunta –en el seno de partidos y grupos “aliados” al feminismo– acerca de la pertinencia que tuvo, o no, haber incorporado estos tópicos a las agendas partidarias. En concreto, la autora menciona evocaciones a la idea de que “perseguir cierto tipo de acoso parece demasiado, las leyes de cuotas parecen demasiado, hablar con la e [en alusión al lenguaje inclusivo] parece demasiado. A veces se trata de rechazos estratégicos (el feminismo le haría perder votos a la izquierda, al progresismo, al socialismo, al peronismo), pero muchas veces se trata de rechazos morales y políticos. (...) se esfuerzan en señalar al género como un elemento que les habría impedido o podría impedirles algo” (2025: 22).

La oficialización de la agenda feminista en el Estado genera tensiones.

La incorporación y la oficialización de las agendas feministas representa una oportunidad valiosa para combatir desigualdades de género, ampliar o garantizar el cumplimiento de derechos, dar visibilidad o compensar desigualdades de género. Pero acarrea, al mismo tiempo, desafíos que el feminismo autonomista ya ha señalado.

Desde el feminismo autonomista, aquella corriente del feminismo que sostiene que la lucha por la emancipación de las mujeres debe mantener su autonomía frente al Estado, se han formulado críticas persistentes a los procesos de institucionalización y estatalización de las agendas de género. Silvia Federici observa, por ejemplo, que “la institucionalización del feminismo ha tendido a transformar una lucha contra el sistema en un conjunto de reformas administradas desde arriba” (Federici, 2013: 19). De manera convergente, Verónica Gago señala que “el feminismo no es una política pública sino una fuerza que desborda las instituciones” (Gago, 2019: 31), lo que permite comprender las tensiones que emergen cuando estas demandas son traducidas en políticas públicas. Por su parte, María Galindo afirma que “el feminismo institucional no cambia el sistema, lo maquilla” (Galindo, 2013: 45), describiendo un diagnóstico recurrente sobre los límites atribuidos a este tipo de incorporación estatal. En conjunto, estos planteos ofrecen un marco interpretativo para analizar las fricciones entre activismo feminista y acción gubernamental sin reducirlas a posiciones coyunturales o estrictamente partidarias.

Paz Frontera (2025) coloca también estos desafíos sobre la mesa: ¿cómo se incorporan o traducen las agendas del movimiento feminista en medidas públicas y estatales?, ¿hay un método (feminista) para hacer política y/o políticas públicas desde el Estado?, ¿qué desafíos que involucra la relación de las feministas estatales con un movimiento feminista amplio y heterogéneo?, ¿se puede

pensar en un “feminismo estratégico, mestizo e impuro”?, se pregunta la autora recuperando a Clara Serra (2018).

La investigación realizada con mujeres que militan en las nuevas derechas (Vázquez y Spataro, 2025), desplegó un conjunto de interrogantes adicionales: ¿es posible que la sensibilidad antiestado modele una forma de crítica adicional al feminismo por haberse oficializado como política pública estatal? Esta pregunta cobra una particular potencia en el contexto mexicano actual.

¿Es posible un feminismo de Estado?

La relación entre las agendas feministas y el Estado está en el centro de controversias que tuvieron lugar históricamente en el movimiento feminista. Este tiempo no está exento de esos debates y suma una capa más a la reflexión si consideramos: 1) que el lenguaje de las nuevas y extremas derechas toma al antifeminismo como principal adversario (Bonet-Martín, 2021; Guemes, 2023) y como pegamento simbólico, 2) que la expansión de estas derechas coincide con un tiempo de expansión de las narrativas antiestatales que complejiza la relación entre agendas y consignas (por ejemplo, el derecho al aborto legal) y su materialización. A modo de ejemplo, se puede ilustrar la posición de las llamadas “feministas liberales” que militan en el espectro de las nuevas derechas (Vázquez y Spataro, 2025), que están de acuerdo con la despenalización del aborto pero –acorde con su visión de un Estado mínimo– sostienen que el aborto debe ser legal pero costado de manera individual. Esto mismo podría pensarse en relación con otras de las agendas y temas que aborda la encuesta: la posición predominantemente favorable al derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo ¿implica, por ejemplo, una posición acerca del rol del Estado como garante de esa posibilidad? Los resultados de este trabajo abren preguntas que invitan a pensar un diagnóstico sobre puntos nodales de las agendas feministas pero que podrían complementarse y profundizar con un nuevo trabajo de campo cualitativo que permita densificar la comprensión de las posiciones que surgen de este trabajo.

ANEXO

Construcción de la variable de apoyo a la agenda feminista

Los modelos econométricos buscan analizar la relación entre la agenda feminista y la producción de ideología. En un primer momento se construyó un índice de apoyo a la agenda feminista como variable compuesta, sumando seis ítems dicotómicos (1 = acuerdo, 0 = desacuerdo) relacionados con distintas dimensiones del feminismo contemporáneo:

1. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo (aborto)
2. Igualdad en las tareas del hogar
3. Paridad política (cuotas de género)
4. Rechazo a la idea de que el feminismo oprime a los hombres
5. Feminicidios como problema estructural
6. Autonomía corporal

El índice resultante varía entre 0 (mínimo apoyo) y 6 (máximo apoyo). Esta variable es usada como medida de intensidad feminista del ciudadano que vive en la Ciudad de México.

Esta variable se configuró en la principal variable a ser evaluado en tanto su relación con la ideología estudiada a través de apoyo electoral a la 1) Presidenta Claudia Sheinbaum, 2) autoidentificación ideológica (10=derecha); y, 3) Índice de valores ideológicos; controlado por variables socioeconómicas y demográficas. Detallamos cada modelo realizado.

Modelo 1: Probabilidad de votar por Claudia Sheinbaum

El primer modelo busca identificar la relación entre la intensidad de apoyo a la agenda feminista y la probabilidad de votar por la candidata Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Se especifica un modelo de regresión logística binaria, donde la variable dependiente Y_i toma el valor de 1 si la persona declaró intención de voto por Claudia Sheinbaum, y 0 en cualquier otro caso.

$$Pr(Y_i = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 \text{Feminismo}_i + X_i \gamma)}}$$

Donde:

- $Feminismo_i$ es el índice de apoyo feminista
- X_i representa un vector de variables de control (edad, sexo, escolaridad, etc.)
- β_1 estima el efecto marginal del feminismo sobre la probabilidad de voto por Sheinbaum

Además, se estimaron modelos logísticos individuales para cada componente del índice para estudiar qué agenda feminista es la que permite discriminar la votación por la actual Presidenta de la República.

Modelo 2: Intensidad feminista e ideología política

El segundo modelo analiza cómo el nivel de apoyo a la agenda feminista predice la ideología política autodeclarada, medida en una escala del 0 al 10, donde valores más altos indican una identificación con la derecha política.

Dado que la variable dependiente es ordinal con múltiples niveles, se emplea un modelo **logit ordinal (modelo de regresión logística acumulada)**:

$$Pr(Y_i \leq j) = \frac{1}{1 + e^{-(\theta_j - \beta_1 Feminismo_i - X_i \gamma)}}, \text{ para } j = 0, 1, ..$$

Donde:

- θ_j son los umbrales estimados para cada nivel de la variable ordinal
- β_1 mide el efecto del feminismo en la orientación ideológica
- Una $\beta_1 < 0$ sugeriría que mayor intensidad feminista se asocia con posturas ideológicas más de izquierda

Modelo 3: Determinantes del posicionamiento en valores ideológicos

El tercer modelo busca explicar el posicionamiento individual frente a un conjunto de valores ideológicos clave en la ciudadanía de la Ciudad de México. Para ello, se construyó un índice de valores ideológicos (IV) que sintetiza el nivel de apoyo o rechazo hacia los siguientes principios normativos:

- Igualdad económica
- Defensa de la democracia
- Sostenibilidad ambiental
- Feminismo
- Igualdad de trato entre ciudadanos locales y migrantes

Este índice se construyó mediante técnicas de reducción de dimensiones, así como este índice se construyó mediante técnicas de reducción de dimensiones,

asignando un puntaje continuo a cada individuo. Valores más altos en el índice reflejan una mayor adhesión a posturas conservadoras, tradicionalistas y neo-liberales, mientras que valores más bajos indican una orientación **progresista, igualitaria y democrática**.

Con este índice como variable dependiente, se estimó un modelo de regresión lineal (OLS), que permite cuantificar el impacto de la intensidad del apoyo a la agenda feminista sobre los valores ideológicos de los ciudadanos.

La especificación del modelo es la siguiente:

$$IV_i = \alpha + \beta_1 \cdot Feminismo_i + X_i \cdot \gamma + \varepsilon_i$$

Donde:

- IV_i : Índice de valores ideológicos del individuo i
- $Feminismo_i$: Nivel de apoyo a la agenda feminista (índice de 0 a 6)
- X_i : Vector de variables de control (nivel educativo, edad, género, ingreso, ocupación, entre otras)
- ε_i : Término de error aleatorio

Este modelo permite evaluar si existe una asociación significativa entre el compromiso feminista y el posicionamiento ideológico general de los ciudadanos. En particular, se espera que un mayor apoyo a la agenda feminista se asocie con una menor adhesión a valores conservadores, controlando por características socioeconómicas y demográficas.

Capítulo V

Tiempo y espacio: entre la alienación (del tiempo perdido) y la ideología

1. Introducción

¿Qué ocurre cuando el tiempo ya no nos pertenece? ¿Qué pasa cuando los días transcurren sin nosotros dentro? No porque hayamos muerto, sino porque hemos sido desalojados de nuestras propias horas. Como quien habita una casa ocupada por otro, el tiempo se vuelve una sucesión de obligaciones no elegidas, una coreografía que no bailamos por placer, sino por necesidad. El sujeto contemporáneo —urbano, precarizado, hiperconectado y solo— no solo vende su fuerza de trabajo; vende también su tiempo, su atención, su espera, su descanso. Marx vio en la alienación la pérdida de sí frente a la mercancía. Benjamin advirtió que el progreso avanzaba como una tormenta que empujaba al ángel hacia el pasado. Y Rosa nos mostró que la aceleración moderna nos expropia no solo el tiempo, sino también la posibilidad de resonar con el mundo. Hoy, en las metrópolis del Sur global, la alienación se mide en segundos perdidos, en horas prestadas, en días vividos para otros. El tiempo se ha vuelto el nuevo campo de batalla de lo político.

Este capítulo parte de una provocación: que la ideología política no solo nace de ideas, sino también de ritmos. Que la ideología no solo habita en discursos o narrativas, sino en los calendarios, en las rutinas, en los silencios que llenan el día. Y que la alienación —lejos de ser un concepto del pasado— se ha transformado en una forma cotidiana de habitar el presente.

Desde esta intuición, el análisis se desplaza hacia el estudio de la alienación temporal como estructura de producción ideológica. No se trata simplemente de cuánto tiempo se tiene, sino de qué tiempo se vive, con qué agencia, bajo qué condiciones, y con qué deseo. A través de una lectura situada en América Latina, donde el tiempo es plural, colonizado, desigual y a la vez resistente, se propone una matriz crítica que conecta experiencia temporal e ideología. Porque no se puede pensar la emancipación sin liberar el tiempo. Porque quizás la pregunta no es ya quién soy, sino: ¿a quién le pertenece mi día?

2. Ideología y alienación temporal: una aproximación teórica

La noción de alienación ha sido una de las piedras angulares del pensamiento crítico desde el siglo XIX. En los Manuscritos económico-filosóficos (1844), Marx la define como el proceso mediante el cual el ser humano se ve desposeído del sentido y control sobre su propio trabajo, su producto, su comunidad y su esencia. Si bien esta formulación se ancla en una crítica al capitalismo industrial, su núcleo conceptual —la pérdida de soberanía sobre las condiciones de existencia— permanece vigente en la contemporaneidad, aunque ha desplazado su eje desde el trabajo hacia la vida cotidiana y, especialmente, hacia la experiencia del tiempo.

Autores como Hartmut Rosa (2016) han desarrollado esta línea argumental en clave contemporánea. Desde su teoría de la aceleración social, Rosa plantea que una de las formas dominantes de alienación moderna es la disonancia entre los ritmos de vida impuestos y los ritmos que las personas desearían habitar. La alienación ya no se da solo en la fábrica, sino en el tiempo que se escapa, que se acelera, que no se vive. La falta de resonancia con el entorno, con los vínculos, con el tiempo mismo, constituye una forma sutil pero profunda de desconexión subjetiva y política.

En esta misma línea, Nancy Fraser (2014) ha argumentado que las luchas por el tiempo deben ser reconocidas como luchas por justicia. Para Fraser, la redistribución del tiempo —de trabajo, de cuidados, de descanso— es central para cualquier proyecto emancipador, pues las formas contemporáneas de dominación implican también la captura de los marcos temporales en los que las personas pueden participar de la vida social. Así, el tiempo deja de ser una variable neutral o técnica, para convertirse en una estructura política y cultural de organización de la vida.

A esta discusión se suma una dimensión poco explorada: las temporalidades del Estado. El Estado no solo interviene afectivamente en la vida cotidiana —como ocurre con programas sociales que buscan reducir la soledad o amortiguar la precariedad—, sino que también impone cronologías propias, muchas veces alienantes. Las formas estatales de organización del tiempo se expresan en esperas burocráticas, demoras estructurales, plazos inciertos y promesas postergadas. Autores como Javier Auyero (2012) han documentado cómo los sectores populares deben habitar una “espera estructural” frente a servicios públicos que los interpelan más como cuerpos en pausa que como ciudadanos plenos. Elizabeth Povinelli (2011), por su parte, ha mostrado cómo el Estado

puede producir formas de “vida diferida”⁷, en las que ciertos sujetos existen en un presente suspendido, siempre a la espera de un futuro que no llega. La alienación temporal no se manifiesta solo en la velocidad, sino también en la inmovilidad forzada. Las filas para acceder a la salud, la justicia o el transporte no son solo ineficiencias técnicas, sino dispositivos políticos que jerarquizan cuerpos y vidas según su valor temporal.

Sin embargo, esta conceptualización crítica del tiempo aún conserva un sesgo eurocéntrico. Desde América Latina, diversos autores han cuestionado la idea de una experiencia universal de la aceleración o del tiempo lineal. En textos recientes, Silvia Rivera Cusicanqui (2018), René Zavaleta Mercado (1986) o Bolívar Echeverría (2006) han problematizado la forma en que el tiempo ha sido colonizado, homogeneizado y expropiado, no solo por el capital sino también por las formas modernas de institucionalidad estatal, educativa o urbana.

Desde estas perspectivas, el tiempo en América Latina no puede asumirse como lineal, homogéneo o simplemente acelerado, sino como estratificado, mestizo, tensionado por múltiples cronologías superpuestas. Rivera Cusicanqui, por ejemplo, propone la noción de tiempo *ch'ixi*: un tiempo contradictorio y plural, donde coexisten el ritmo comunitario indígena con la cronología capitalista, el tiempo agrícola con el tiempo de fábrica, el descanso ritual con la producción industrial. En ese contexto, la alienación temporal no es solo el exceso de velocidad, sino también el estancamiento forzado, la imposibilidad de habitar los propios ritmos, la sobrecarga de tiempo improductivo y precarizado.

El pensamiento crítico latinoamericano ha insistido en que esta experiencia diferencial del tiempo es también una matriz ideológica. En contextos de desigualdad estructural, el tiempo se distribuye de manera jerárquica: mientras ciertos cuerpos tienen el poder de decidir sobre su uso del tiempo (delegar cuidados, evitar traslados, acceder al ocio), otros deben habitar tiempos fragmentados, discontinuos, no elegidos. En ese marco, la alienación temporal no es una vivencia individual, sino una estructura colectiva de subordinación, que produce formas específicas de subjetividad política, tanto de desafiliación como de resistencia.

Estas condiciones temporales tienen consecuencias ideológicas de largo alcance. El desfase entre el tiempo vivido y el tiempo deseado puede generar sentimientos de frustración, cinismo, desafección, pero también una politización afectiva del malestar. La “herida temporal” de las mayorías urbanas en América Latina —atravesadas por el trabajo informal, la movilidad forzada, el cuidado no reconocido, la soledad estructural— configura subjetividades dispuestas a buscar en la política no solo representación, sino contención emocional, reparación simbólica o sentido de pertenencia.

⁷ La metáfora más cercana que usa la mencionada autora es “vidas atrapadas en un tiempo suspendido”.

En este marco, la ideología ya no puede ser comprendida únicamente como sistema de creencias explícitas o posicionamientos ideológicos tradicionales (izquierda/derecha), sino también como una forma de ordenar el malestar cotidiano, de dotarlo de sentido y canalizarlo hacia opciones políticas que prometen transformar —o al menos reconocer— esas vivencias temporales alienadas.

Este capítulo se inscribe, por tanto, en una línea de investigación que articula tiempo, subjetividad e ideología, con base en una crítica situada desde el Sur. Al centrar la mirada en la alienación temporal como variable estructurante de la vida política, se propone ampliar el campo de estudio del comportamiento electoral y de la formación ideológica, incorporando no solo variables socio-económicas o identitarias, sino también la geografía (emocional) del tiempo cotidiano como campo legítimo de disputa.

3. Metodología: medición de la alienación desde una perspectiva temporal

En este capítulo, la alienación se aborda desde una matriz analítica centrada en el tiempo. Específicamente, se parte del supuesto de que una vida alienada es aquella en la que los individuos viven de manera sistemática una distribución del tiempo cotidiano que se aleja de sus propios deseos o ideales. En lugar de definir la alienación únicamente como malestar o insatisfacción subjetiva, se opta por una operacionalización empírica que permite cuantificar la distancia entre el tiempo efectivamente vivido y el tiempo considerado deseable. Para ello, se construye una variable de alienación temporal a partir de los datos recabados en la encuesta aplicada en la Ciudad de México, la cual incluye una batería de preguntas sobre el uso del tiempo en diversas actividades de la vida cotidiana. La medición se basa en dos dimensiones:

1. Tiempo real individual (T_i): cantidad de tiempo (en horas) que una persona declara dedicar diariamente a una actividad específica.
2. Tiempo social ideal (T_{di}): cantidad de tiempo que la persona quisiera dedicar a las actividades estudiadas.

A partir de esta información, se calcula la alienación específica por actividad mediante la fórmula:

$$\text{Alienación}_{ia} = \text{Tiempo real}_{ia} - \text{Tiempo ideal}_{ia}$$

donde a representa cada una de las actividades consideradas (por ejemplo, dormir, trabajar, cuidar, socializar, etc.), e i cada individuo encuestado. Posteriormente, se construye un **índice de alienación social temporal**, que sintetiza el desequilibrio acumulado en todas las esferas del tiempo cotidiano de cada ciudadano:

$$\text{Alienación social temporal}_i = \sum_{a=1}^{12} (\text{Tiempo real}_{ia} - \text{Tiempo ideal}_{ia})$$

Esta medida permite observar no solo la alienación específica por actividad, sino también la carga estructural de desequilibrio temporal que enfrentan los individuos en su vida diaria.

En una primera etapa del análisis, se explora críticamente la distribución del tiempo real, del tiempo ideal y de la alienación para cada actividad, cruzando los resultados según variables como género, edad, clase social y territorio, con el objetivo de visibilizar injusticias temporales estructurales. En una segunda etapa, se analiza si estos desajustes —en su forma agregada o desagregada— están vinculados con diferentes dimensiones de la ideología política: el comportamiento electoral, la autoidentificación ideológica (izquierda/derecha) y las orientaciones valóricas (progresismo/conservadurismo).

4. La distribución del tiempo en la vida cotidiana en la Ciudad de México

La distribución del tiempo constituye una dimensión fundamental, aunque frecuentemente invisibilizada, del análisis social. Lejos de ser una cuestión meramente individual o técnica, el uso del tiempo revela estructuras profundas de organización social, jerarquías de valor atribuidas a distintas actividades y formas de reproducción de desigualdades. En el caso de la Ciudad de México, los datos agregados sobre el tiempo promedio diario dedicado a diversas actividades permiten delinear una cartografía del día a día urbano y sus tensiones estructurales.

La actividad que mayor tiempo consume es dormir, con un promedio de 6.45 horas diarias. Si bien el sueño es una necesidad biológica ineludible, su duración inferior a las recomendaciones sanitarias mínimas (que oscilan entre 7 y 9 horas para adultos) sugiere que amplios sectores de la población podrían estar experimentando privación crónica de descanso. Esta reducción del tiempo de sueño, en una de las ciudades más extensas y desiguales del país, debe ser leída no solo como una cuestión de hábitos, sino como un síntoma de las múltiples presiones que impone la vida urbana: extensas jornadas laborales, largos desplazamientos, sobrecarga de responsabilidades y altos niveles de estrés.

En segundo lugar, el trabajo remunerado absorbe 5.75 horas diarias, lo cual ratifica su centralidad como eje estructurador del tiempo social⁸. No obstante, esta cifra debe leerse con cautela: en un contexto donde el empleo informal y precario es ampliamente dominante, el tiempo destinado al trabajo puede no reflejar ingresos suficientes ni condiciones laborales dignas. Además, su interacción con otras actividades invisibilizadas —como el trabajo doméstico y de cuidados— plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de estas jornadas.

El estudio aparece como la tercera actividad en importancia temporal, con 3.54 horas promedio. Esta cifra sugiere una participación significativa en actividades educativas, pero también obliga a preguntarse por la distribución etaria de estos tiempos y las brechas en el acceso a la formación continua. Más allá de los promedios, ¿quiénes pueden estudiar en condiciones adecuadas, y quiénes deben postergar o abandonar su formación para asumir otras tareas?

⁸ Es importante señalar que este promedio incluye a toda la población. Si se toma en cuenta solo los trabajadores asalariados el promedio diario de trabajo es de 8.4 horas diarias.

Tabla 1. Distribución diaria del tiempo según género, Ciudad de México (2025)

(Horas diarias)

Tiempo	Total	Mujer	Hombre
Dormir	6.45	6.42	6.49
Trabajo	5.75	5.52	6.01
Estudio	3.54	3.66	3.41
Cuidado	4.08	4.82	3.29
Sociabilidad	3.34	3.04	3.66
Ocio	2.69	2.42	2.98
Movilidad	2.79	2.75	2.83
Comer	2.48	2.56	2.40
Redes	2.63	2.52	2.74
Salud	1.51	1.48	1.55
Participación	1.17	1.11	1.24
Soledad	1.89	1.95	1.82

Una categoría especialmente reveladora es la de los cuidados, que promedia 4.08 horas diarias. Esta cifra es particularmente significativa, pues representa una inversión de tiempo considerable en tareas históricamente invisibilizadas en las estadísticas económicas tradicionales. El cuidado —de niños, personas mayores, enfermos, el hogar— constituye una infraestructura silenciosa pero indispensable para la reproducción de la vida cotidiana. Su peso dentro del total sugiere que cualquier política pública que pretenda intervenir sobre el bienestar social debe necesariamente incorporar una perspectiva de sostenibilidad de los cuidados.

En contraste, las actividades asociadas al ocio (2.69 horas) y a la sociabilidad (3.34 horas) aparecen con una presencia moderada. Este equilibrio parcial podría interpretarse como un intento por mantener espacios de esparcimiento y vínculos sociales en medio de una jornada intensamente estructurada por obligaciones productivas y reproductivas. Sin embargo, la calidad de estos tiempos también está en cuestión: ¿se trata de ocio activo o pasivo? ¿De relaciones sociales electivas o de vínculos obligados?

Uno de los elementos más problemáticos en esta distribución es el tiempo invertido en la movilidad (2.79 horas diarias). En una ciudad caracterizada por su dispersión territorial, la precariedad del transporte público y la segregación socioespacial, esta cifra revela la pesada carga que implica simplemente trasladarse. El tiempo de movilidad no solo erosiona el tiempo disponible para otras

actividades, sino que también opera como un factor de exclusión: acceder a empleo, salud o educación puede depender de cuánto tiempo se puede —o se está dispuesto a— invertir en desplazarse.

En términos de consumo digital, el dato de 2.63 horas diarias dedicadas a redes resulta particularmente elocuente. Este tiempo supera al que se dedica a comer (2.48 horas), lo que evidencia un patrón donde la conectividad digital ha colonizado franjas significativas del tiempo cotidiano. Si bien no es posible juzgar de forma unívoca el valor de este tiempo —que puede combinar entretenimiento, trabajo, interacción social o activismo—, su expansión sugiere una transformación profunda en las formas de relación, información y subjetivación.

El tiempo dedicado al cuidado de la salud (1.51 horas) aparece bajo, especialmente en un contexto urbano donde el acceso a servicios de salud suele ser desigual y las enfermedades crónicas están en aumento. Esto puede reflejar no solo la falta de acceso o disponibilidad, sino también la subordinación del autocuidado frente a otras prioridades impuestas por la jornada diaria.

Aún más preocupante es el escaso tiempo destinado a la participación social o comunitaria (1.17 horas), lo cual podría estar indicando un debilitamiento de los lazos cívicos, la desafección política o la imposibilidad práctica de involucrarse en procesos colectivos. En ciudades donde la sobrevivencia cotidiana absorbe la mayor parte del tiempo disponible, el ejercicio de la ciudadanía activa se ve profundamente limitado.

Finalmente, el dato de 1.89 horas diarias en soledad invita a una lectura compleja. Si bien la soledad puede ser elegida y necesaria para el descanso emocional, también puede ser el resultado del aislamiento social, de la fragmentación de los vínculos comunitarios o de condiciones estructurales que impiden construir redes de apoyo. En el caso de la investigación aquí planteada se preguntó exclusivamente por aquella soledad involuntaria. En contextos urbanos marcados por la inseguridad, la violencia o el individualismo exacerbado, la soledad puede convertirse en un síntoma de disolución del tejido social.

En suma, la distribución general del tiempo en la Ciudad de México exhibe una estructura cotidiana donde las exigencias productivas, los cuidados y la movilidad ocupan el centro, desplazando otras dimensiones igualmente fundamentales para una vida digna, como el descanso, la participación social y la salud. Esta estructura no es neutra: es resultado de decisiones políticas, arreglos institucionales y patrones culturales que jerarquizan unas actividades sobre otras. Por ello, cualquier esfuerzo por transformar las condiciones de vida en la ciudad requiere intervenir no solo en la disponibilidad de recursos materiales, sino también en la organización social del tiempo.

4.1. La desigualdad distribución del tiempo según género

Ahora bien, los promedios esconden desigualdades. Si hacemos un primer corte según género podemos evidenciar patrones de comportamiento diario diferenciado. Una de las diferencias más evidentes y estructuralmente significativas en la distribución del tiempo entre mujeres y hombres se encuentra en las tareas de cuidado. Las mujeres dedican, en promedio, 4.82 horas diarias a este tipo de actividades, mientras que los hombres destinan únicamente 3.29 horas. Esta diferencia de más de una hora y media no es menor: revela el peso desproporcionado que las mujeres siguen asumiendo en el sostenimiento de la vida cotidiana. El trabajo de cuidado, históricamente invisibilizado y no remunerado, continúa recayendo casi exclusivamente sobre ellas, lo que no solo limita su tiempo disponible para otras actividades, sino que también perpetúa una desigualdad estructural que atraviesa generaciones. Esta carga adicional restringe de forma directa el acceso de las mujeres al empleo formal, a la formación profesional, al descanso y al ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.

En estrecha relación con lo anterior, se observa que las mujeres reportan menos horas en el trabajo remunerado: 5.52 horas frente a las 6.01 de los hombres. Aunque la brecha puede parecer moderada en términos absolutos, su análisis no puede desvincularse de la doble jornada que enfrentan muchas mujeres: trabajan dentro y fuera del hogar, pero bajo condiciones distintas. Esta diferencia podría reflejar también la concentración de mujeres en empleos informales, de medio tiempo o con mayor flexibilidad, muchas veces asumidos no por elección, sino como única opción compatible con sus responsabilidades domésticas. Además, es importante considerar que el acceso desigual al trabajo de calidad profundiza las brechas salariales y limita el desarrollo profesional de las mujeres a lo largo del tiempo.

Por último, una de las manifestaciones más sutiles pero no menos importantes de la desigualdad de género se encuentra en el uso del tiempo libre. Los hombres registran, en promedio, más tiempo dedicado tanto al ocio (2.98 horas frente a 2.42 en mujeres) como a la sociabilidad (3.66 horas frente a 3.04). Esta diferencia, que podría parecer secundaria frente a las anteriores, es en realidad una señal clara de que el tiempo disponible para la recreación, la vida social y el descanso efectivo no está distribuido equitativamente. Mientras los hombres gozan de más horas para actividades que favorecen el bienestar, el esparcimiento y la participación cultural, las mujeres ven este tiempo reducido debido a la sobrecarga de responsabilidades cotidianas. El acceso desigual al ocio no solo afecta la salud emocional y mental, sino que también restringe la posibilidad de establecer redes sociales amplias, ejercer la ciudadanía y participar en espacios públicos de forma plena.

En conjunto, estas diferencias no son aisladas ni circunstanciales: reflejan un orden social del tiempo que reproduce y sostiene las desigualdades de género en múltiples dimensiones.

4.2. Juventud urbana: entre la hiperconexión, la soledad y la precariedad laboral

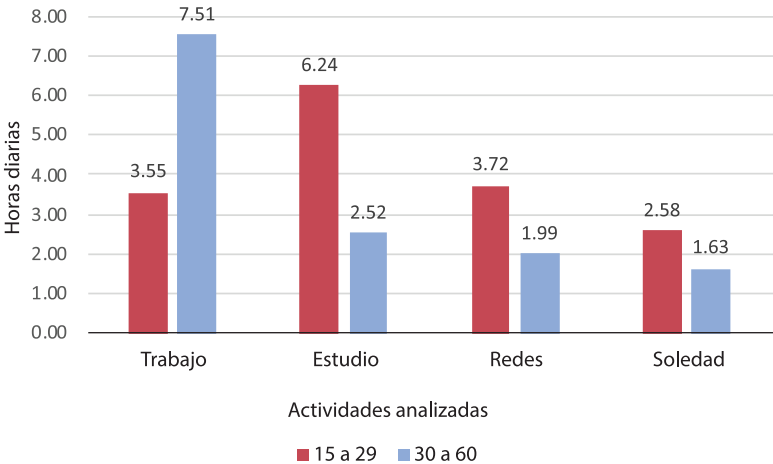
El análisis del grupo de 15 a 29 años revela un conjunto de desigualdades etarias que no solo lo diferencian del resto de la población, sino que evidencian una experiencia juvenil atravesada por tensiones profundas. La juventud aparece como una etapa altamente demandante, en la que se acumulan presiones académicas, fragilidad laboral, exposición digital excesiva y, paradójicamente, elevados niveles de soledad.

En primer lugar, la juventud dedica 6.24 horas diarias al estudio, una cifra significativamente superior a la de cualquier otro grupo etario. Esta concentración de tiempo en actividades formativas muestra la expectativa social de “prepararse para el futuro”, aunque a menudo ese futuro sea incierto. El énfasis en la capacitación permanente no necesariamente se traduce en movilidad social ni en condiciones dignas de empleo; más bien, revela que las instituciones educativas funcionan como espacios de contención ante un mercado laboral que no logra absorber a las nuevas generaciones.

En contraste, los jóvenes son quienes menos trabajan: solo 3.55 horas diarias, en un contexto donde registran las tasas más altas de desempleo y subempleo. Esta baja inserción laboral no es sinónimo de libertad, sino de precariedad estructural: imposibilidad de acceder a un ingreso estable, dependencia económica prolongada y dificultad para construir un proyecto de vida autónomo. El tiempo que no se trabaja no es tiempo libre; es tiempo suspendido, marcado por la incertidumbre y la falta de oportunidades.

Gráfico 1. Juventud: hiperconexión, soledad y precarización, CDMX (2025)

(Horas diarias)



Otro rasgo crítico de la juventud es que constituye el grupo más hiperconectado digitalmente, con 3.72 horas diarias en redes sociales, muy por encima del resto de la población. Sin embargo, esta altísima exposición digital no debe confundirse con integración social. Estar conectado no significa estar comunicado. La interacción digital masiva no necesariamente produce vínculos significativos; a menudo, puede intensificar sentimientos de comparación, aislamiento o insuficiencia. La hiperconexión funciona como un sustituto precario de la presencia comunitaria, sobre todo en un contexto urbano donde los espacios públicos, el tiempo libre y las redes de apoyo se encuentran erosionados.

El hecho de que este mismo grupo registre el mayor tiempo de soledad involuntaria (2.58 horas) refuerza esta paradoja: jamás una generación estuvo tan conectada y, al mismo tiempo, reportó sentirse tan sola. Esto revela una fractura en la experiencia relacional contemporánea: vínculos más inmediatos pero menos profundos, comunidades virtuales extensas pero emocionalmente frágiles, comunicación constante pero no necesariamente significativa. La soledad juvenil no es un fenómeno individual, sino un síntoma de un entorno social que fragmenta vínculos, precariza la experiencia del tiempo y traslada al individuo la responsabilidad de sostenerse emocionalmente en un contexto incierto.

Se puede señalar que, la juventud en la Ciudad de México vive una condición marcada por la exigencia académica, la precarización laboral, la hiperexposición digital y el aislamiento emocional. Estas desigualdades no responden a “etapas naturales de la vida”, sino a una organización social que exige mucho, ofrece poco y deja a los jóvenes en una posición ambivalente: hiperconectados pero solos, formándose intensamente pero sin garantías de empleo, con tiempo disponible pero sin posibilidades reales de emplearlo para construir autonomía.

4.3. Tiempo, clase social y desigualdad cotidiana: una mirada desde la Ciudad de México

El tiempo, como recurso social, no se distribuye de forma equitativa. A diferencia del discurso liberal que lo presenta como una dimensión “neutral” y universal, el tiempo está profundamente atravesado por las condiciones materiales de existencia. Los datos analizados en la Ciudad de México permiten observar cómo las personas de distintos niveles socioeconómicos —representados aquí como estratos bajo, medio y alto— organizan su jornada diaria de manera desigual, no por elección individual, sino por las limitaciones y oportunidades estructurales impuestas por su posición de clase.

Uno de los hallazgos más reveladores está en el tiempo destinado al cuidado. Las personas del estrato bajo dedican, en promedio, 5.24 horas diarias a estas tareas, en contraste con solo 3.37 horas en el estrato alto. Esta diferencia de casi dos horas diarias es altamente significativa. Refleja una distribución de re-

sponsabilidades domésticas y de cuidados profundamente inequitativa, donde los sectores de menores ingresos asumen una mayor carga —probablemente sin apoyo institucional, ni servicios públicos, ni posibilidad de delegar o tercerizar estas labores—. Esta diferencia, además, tiene un costo directo: limita el tiempo disponible para el descanso, la formación o el ocio.

A la par, se observa que las personas de estratos más bajos también dedican más tiempo al trabajo remunerado que los sectores medios (5.77 vs. 5.52 horas), aunque los sectores altos registran el valor más alto (6.04 horas), lo cual podría reflejar ocupaciones más intensas en carga horaria, pero también más estables, formales o mejor remuneradas. La jornada más larga en el sector alto no se traduce necesariamente en mayor precariedad, sino más bien en un trabajo de mayor calidad y mayor capacidad de autonomía sobre el uso del tiempo.

Tabla 2. Distribución del tiempo según estratos de ingreso económico, CDMX (2025)

(Horas diarias)

	Estrato Bajo (30% más po- bre)	Estrato Alto (30% más rico)	Estrato Alto (30% más rico)
Dormir	6.23	6.50	6.60
Trabajo	5.77	5.52	6.04
Estudio	4.21	3.35	3.14
Cuidado	5.24	3.75	3.37
Sociabilidad	3.16	3.37	3.47
Ocio	2.54	2.65	2.89
Movilidad	3.15	2.72	2.53
Comer	2.68	2.29	2.54
Redes	2.73	2.47	2.74
Salud	1.65	1.50	1.40
Participación	1.10	1.15	1.27
Soledad	2.62	1.64	1.48

En términos de movilidad urbana, quienes pertenecen al estrato bajo también enfrentan un tiempo mucho mayor en traslados (3.15 horas frente a solo 2.53 horas en el sector alto). Esta diferencia no es solo una cuestión logística: es una forma concreta de exclusión territorial. El tiempo perdido en transporte implica menor tiempo para estudiar, descansar o compartir con otras personas. Además, sugiere que la geografía de la desigualdad —vivienda en periferias, infraestructura deficiente, transporte ineficiente— se convierte también en desigualdad de tiempo.

Otro contraste relevante se encuentra en el estudio y la formación. Las personas de ingresos bajos reportan 4.21 horas, frente a 3.14 horas en el sector alto. Aunque podría parecer una señal positiva —más tiempo dedicado al estudio en sectores populares—, este dato puede reflejar una mayor concentración de jóvenes en condiciones de prolongar su formación, pero también una dificultad estructural para transitar hacia el mercado laboral. En contraste, los sectores altos pueden contar con trayectorias educativas más cortas y efectivas para acceder a empleos bien remunerados.

En cuanto al ocio y la sociabilidad, el patrón se invierte. Las personas de mayores ingresos disfrutan de más tiempo en ambas actividades (ocio: 2.89 horas / sociabilidad: 3.47 horas), mientras que los sectores bajos tienen los valores más bajos (2.54 y 3.16 horas, respectivamente). Esta diferencia pone en evidencia una desigualdad en el acceso al tiempo libre, entendida no solo como descanso, sino como espacio de disfrute, vínculo social, creatividad o participación cultural. Para los sectores más pobres, el ocio es un lujo y no un derecho cotidiano. Finalmente, los datos sobre soledad son particularmente inquietantes: las personas del estrato bajo reportan 2.62 horas diarias de soledad involuntaria, frente a solo 1.48 horas en el estrato alto. Esto rompe con el imaginario que asocia pobreza con vida comunitaria o redes sociales extensas. Por el contrario, muestra que la pobreza puede ir acompañada de aislamiento emocional y desconexión afectiva, como resultado de la precariedad, la sobrecarga de trabajo y la falta de espacios para el encuentro.

La estructura del tiempo revela, con crudeza, la estructura de clases. Mientras los sectores altos pueden distribuir su jornada con mayor autonomía —delegando cuidados, accediendo a trabajos mejor remunerados, viviendo cerca de sus centros de actividad, y gozando de tiempo para el ocio—, los sectores bajos enfrentan una sobrecarga de responsabilidades, más tiempo perdido en traslados, menos descanso, menos ocio y más soledad.

La desigualdad no solo se mide en ingresos: también se expresa en cuánto tiempo se pierde, se cuida, se trabaja, se traslada o se está solo. Redistribuir el tiempo —como derecho, como bien común, como política pública— debería ser una prioridad central para construir una ciudad más justa y humana.

5. La alienación temporal en CDMX: entre el tiempo impuesto y el tiempo deseado

La alienación temporal es una expresión directa de la desigualdad contemporánea. A diferencia de otras formas de exclusión más visibles, esta opera en lo cotidiano, de forma silenciosa, organizando nuestras jornadas de manera que muchas veces contradicen nuestras propias aspiraciones. En otras palabras, alienación temporal significa vivir una vida cuyo ritmo, duración y distribución no hemos elegido del todo, y que responde más a las exigencias externas —económicas, familiares, sociales— que a las necesidades personales o comunitarias.

En términos absolutos, la población de la Ciudad de México experimenta una alienación temporal total de 7.68 horas diarias al comparar el tiempo que efectivamente dedica a diversas actividades con el tiempo que idealmente quisiera dedicarles. Esta cifra revela una profunda disonancia entre el ritmo de vida impuesto por las condiciones sociales, laborales y urbanas, y los deseos subjetivos de uso del tiempo. Es decir, cada persona, en promedio, vive una jornada de casi ocho horas donde el tiempo transcurre fuera de su control o en contra de sus preferencias, una forma invisible pero estructural de desigualdad cotidiana. ¿Cómo se descompone tal distancia en la distribución del tiempo vivido y el deseado en la vida cotidiana?

Los datos provenientes de la Ciudad de México muestran con claridad esta fractura entre el tiempo real (el que se vive) y el tiempo ideal (el que se desea). En actividades como el cuidado, la diferencia alcanza niveles alarmantes: en promedio, las personas dedican 4.08 horas diarias a estas labores, aunque preferirían dedicar solo 2.27 horas, lo que genera una alienación de 1.82 horas diarias. Este desajuste revela una carga desproporcionada, especialmente para las mujeres y los hogares de bajos ingresos, que se ven obligados a sostener la vida cotidiana sin apoyos institucionales suficientes. La alienación en el cuidado no solo refleja sobrecarga, sino también una desigual distribución del trabajo reproductivo en la estructura urbana y familiar.

Otra dimensión crítica es la movilidad: las personas pasan en promedio 2.79 horas al día en traslados, aunque desearían dedicarle solo 1.18 horas. Esta brecha de 1.6 horas es producto de un modelo urbano fragmentado, donde vivir lejos del trabajo, de la escuela o de los servicios no es una elección, sino una consecuencia directa de la segregación espacial y la precariedad del transporte público. El tiempo perdido en movilidad es tiempo sustraído al descanso, al ocio, a la vida social o a la salud. Aquí, la ciudad misma se vuelve una fuente de alienación temporal estructural.

La tercera forma destacada de alienación es el uso de redes sociales, donde se registra una diferencia de 1.07 horas entre el tiempo efectivo (2.63 horas) y el tiempo ideal (1.56). Aunque este dato podría leerse como exceso de ocio, en realidad puede reflejar una conexión compulsiva y sustitutiva, asociada a la soledad, la ansiedad o la desconexión social. Es decir, no se trata de un ocio deseado, sino de una forma de ocupación del tiempo que no necesariamente genera satisfacción. Esto se confirma al observar los datos de soledad, donde las personas reportan casi una hora más de lo deseado (0.91 h). En conjunto, estas cifras apuntan a una experiencia de tiempo desvinculado, disperso y emocionalmente insatisfactorio, especialmente entre jóvenes y sectores urbanos desconectados de redes afectivas sólidas.

Incluso actividades valoradas como el trabajo remunerado (0.56 h de alienación) o la sociabilidad (0.24 h) muestran desajustes menores pero persistentes, lo que indica que incluso las formas de tiempo “productivo” o relacional están siendo vividas bajo presiones, sin la autonomía deseada. Por el contrario, las únicas actividades donde el tiempo real es menor al ideal —es decir, donde hay un deseo de “tener más tiempo”— son dormir (–1.05 horas), salud, participación social y ocio. Este patrón es revelador: lo que más falta en la vida cotidiana no es productividad, sino descanso, bienestar físico, implicación comunitaria y esparcimiento personal.

Este conjunto de datos permite afirmar que la ciudad impone un régimen temporal que está en tensión con las aspiraciones vitales de su población. La alienación temporal no es una cuestión de organización individual, sino el resultado de una estructura urbana y social que impone tiempos de cuidado excesivos, trayectos interminables, conexión/soledad forzada y descanso insuficiente. Combatir esta forma de desigualdad exige buscar formas de garantizar el derecho al descanso, al transporte digno, a los servicios cercanos y al reconocimiento del trabajo de cuidados.

5.1. Desigualdades en la distribución del tiempo alienado

El tiempo alienado no se distribuye de forma neutra ni aleatoria: su vivencia está profundamente estructurada por las desigualdades sociales. Aunque todos los grupos sociales enfrentan cierto grado de alienación temporal —esa distancia entre el tiempo que efectivamente se vive y el que idealmente se desea vivir—, lo hacen en condiciones profundamente desiguales.

El análisis por género, edad y estrato económico revela que el tiempo alienado es una experiencia diferenciada y, en muchos casos, estructuralmente injusta. Lejos de tratarse de decisiones individuales o estilos de vida, estas brechas son el resultado de relaciones de poder, roles impuestos y condiciones materiales que obligan a ciertos grupos a ceder parte significativa de su tiempo a actividades no deseadas, mal distribuidas o poco reconocidas.

En las siguientes secciones se explorarán con mayor profundidad estas desigualdades temporales: cómo las mujeres enfrentan una sobrecarga persistente en actividades de cuidado, cómo las juventudes viven tiempos marcados por presiones educativas, movilidad forzada y soledad, y cómo los sectores populares disponen de menos margen de agencia sobre su tiempo, atrapados entre necesidades económicas, déficit de infraestructura y jornadas extendidas. Analizar el tiempo desde esta perspectiva permite no solo visibilizar estas formas de injusticia, sino también repolitizar el debate sobre la calidad de vida urbana.

5.2. Alienación temporal por género: las brechas invisibles del tiempo

Desde el enfoque de género, la alienación temporal ofrece una ventana crítica a las desigualdades estructurales que atraviesan la vida cotidiana. Las mujeres experimentan una alienación particularmente alta en actividades de cuidado (+2.54 horas), un dato contundente que evidencia cómo siguen cargando desproporcionadamente con el trabajo reproductivo. Este resultado no sólo refleja una injusta distribución del tiempo dentro de los hogares, sino que también visibiliza cómo el ideal de tiempo para sí mismas se ve sistemáticamente desbordado por las exigencias del cuidado hacia otros.

Además, las mujeres muestran alienación negativa en dormir (-1.38 horas), lo que indica que descansan menos de lo que desearían, una situación que puede vincularse a jornadas dobles (trabajo remunerado + trabajo doméstico), y a una gestión del tiempo personal profundamente limitada. Aunque destinan menos horas al trabajo remunerado que los hombres (5.52 vs. 6.01 horas), no se traduce en más tiempo libre, sino en una mayor sobrecarga de otras actividades no reconocidas económicamente.

En contraste, los hombres presentan una alienación más moderada, con picos en cuidado (+1.04) y trabajo (+0.51), pero también sobreinvierten tiempo en actividades como redes sociales (+1.20), superando sus propios ideales en este rubro. La menor alienación en el sueño (-0.67 horas) sugiere que gozan de un mejor acceso al descanso. A su vez, su menor involucramiento en el cuidado (comparado con las mujeres) refleja no sólo una desigualdad objetiva, sino también una diferencia subjetiva: no se identifican como deseantes de participar más en esas tareas, lo que perpetúa un modelo tradicional de roles de género.

5.3. Alienación temporal por grupo etario: trayectorias del tiempo forzado

El análisis por edades revela cómo las distintas etapas del ciclo vital están marcadas por formas específicas de alienación temporal. El grupo joven (15 a 29 años) presenta las mayores brechas negativas en actividades como dormir (-1.36 horas) y movilidad (-2.08 horas), pero también una fuerte alienación “positiva” en estudio (+1.30 horas), lo que indica que las juventudes destinan

más tiempo del que desearían a actividades escolares, en detrimento del descanso y el tiempo libre. Este desajuste evidencia una presión hacia la productividad formativa, muchas veces sin los beneficios o estabilidad que debería garantizar el tránsito educativo. Sumado a ello, la sobrecarga de movilidad revela el peso de trayectos largos o poco eficientes en su cotidianidad urbana, lo que también merma su bienestar.

Por su parte, los adultos de 30 a 44 años son quienes experimentan la mayor alienación en el trabajo (+1.62 horas) y en el cuidado (+2.86 horas), reflejando el punto álgido de responsabilidades laborales y familiares. La alienación en el cuidado indica que estas personas dedican bastante más tiempo del que idealmente querrían a actividades relacionadas con el sostenimiento de otros, una carga desigualmente distribuida al interior de los hogares. Este tramo etario encarna la tensión más clara entre las exigencias del mercado y las lógicas reproductivas de la vida.

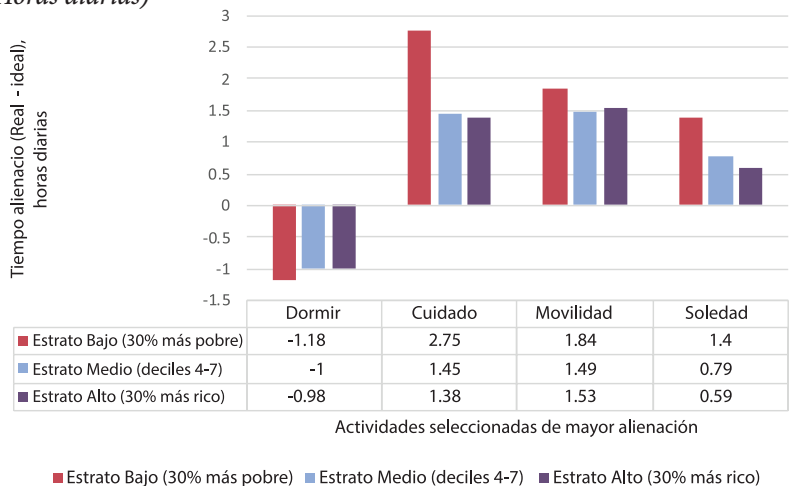
En cambio, en los grupos de mayores de 60 años, se reduce la alienación laboral (apenas +0.35 horas) y aparecen ajustes en los tiempos deseados y reales, como en el sueño (-0.07) y el estudio (+0.02). Sin embargo, persiste una alienación significativa en el cuidado (+1.53) y un incremento en sociabilidad (+1.11), lo que podría leerse como una necesidad insatisfecha de vínculos sociales que el entorno urbano o familiar no está garantizando. En conjunto, el envejecimiento parece venir acompañado de un tiempo más equilibrado, pero no necesariamente más satisfactorio o pleno.

5.4. Desigualdades de alienación temporal según estrato socioeconómico

El análisis del tiempo alienado en la Ciudad de México revela que el acceso a un tiempo digno, autónomo y satisfactorio está profundamente condicionado por la posición que se ocupa en la estructura social. Si bien todas las personas experimentan algún grado de distancia entre el tiempo real y el tiempo ideal, lo cierto es que esa brecha se ensancha o se acorta en función del género, la edad y, particularmente, del estrato socioeconómico. El caso de los estratos de ingreso ilustra con fuerza cómo la desigualdad no solo se expresa en lo material, sino también en el manejo y la vivencia del tiempo cotidiano.

Gráfico X. Asimetrías del tiempo alienado según clase social, CDMX (2025)

(Horas diarias)



La población de estrato bajo es, con claridad, la más afectada por formas estructurales de alienación temporal. Dedicando 2.75 horas más de lo deseado al trabajo de cuidado, este grupo enfrenta una sobrecarga invisible y no remunerada que consume buena parte de su jornada. Esta alienación no es solo un desbalance entre deseos y realidades, sino un mandato social: cuidar es una obligación impuesta, no una elección libre. A esto se suma una elevada carga de movilidad no deseada (1.84 horas), que puede interpretarse como resultado de condiciones precarias de transporte, largos traslados y segmentación espacial de oportunidades urbanas. En este mismo grupo, dormir aparece también como un lujo recortado: se duerme 1.18 horas menos de lo deseado. Esta carencia de descanso básico es un síntoma claro de una forma de pobreza que excede lo económico: una pobreza de tiempo que erosiona la calidad de vida de forma sistemática.

El estrato medio se ubica en una situación intermedia, pero no por ello exenta de tensiones. Aunque sus niveles de alienación son menores, todavía enfrentan desequilibrios importantes en las esferas del cuidado (1.45 horas de más) y la movilidad (1.49 horas de más). Además, este grupo reporta mayor alienación en el trabajo (0.54 horas) que el estrato alto, a pesar de tener jornadas laborales más cortas en promedio. Esto sugiere que, más allá del tiempo cuantitativo, existe una insatisfacción cualitativa ligada a las condiciones del empleo, al estrés o a la falta de sentido. Este estrato, en transición entre la subsistencia y el privilegio, enfrenta contradicciones entre el tiempo productivo, el tiempo personal y las expectativas sociales de rendimiento.

El estrato alto, por su parte, experimenta una alienación más contenida y selectiva. Gracias a mayores recursos materiales y simbólicos, sus integrantes tienen una mayor capacidad para delegar, externalizar o evitar tareas no deseadas, lo que se traduce en menores niveles de sobrecarga en el cuidado y la movilidad. No obstante, también presentan señales de tensiones propias de los sectores privilegiados: dedican más tiempo del que desearían al trabajo (+0.67 horas), lo que puede estar asociado a lógicas de autoexigencia, alta responsabilidad o precariedad emocional en contextos de alta competencia. Asimismo, registran una fuerte alienación en el uso de redes sociales (+1.10 horas), lo que revela un fenómeno transversal: la hiperconectividad forzada o adictiva que recorre todos los estratos, pero que en los grupos altos se mantiene como una obligación profesional, social o simbólica.

Los datos analizados muestran con contundencia que el tiempo, lejos de ser un recurso neutro, es una dimensión estructuralmente desigual de la vida social. No todas las horas valen lo mismo, ni se viven del mismo modo. Para algunos, el tiempo se convierte en un espacio de autonomía, descanso o recreación. Para otros, en cambio, se vuelve un campo de obligación, sacrificio y carencia. Esta alienación no es solo una cuestión individual o psicológica, sino una expresión concreta de cómo se organizan el poder, los recursos y las oportunidades en la ciudad. En última instancia, la redistribución del tiempo debería ocupar un lugar central en las agendas de justicia social y política urbana. Así como se lucha por redistribuir la riqueza o garantizar el acceso a derechos básicos, también es urgente garantizar el derecho a un tiempo digno, a decidir sobre la propia jornada y a vivir una vida donde el tiempo no esté constantemente capturado por necesidades impuestas desde afuera.

6. Desigualdades territoriales en la distribución del tiempo cotidiano

La distribución del tiempo en la vida cotidiana no ocurre en el vacío. Está profundamente atravesada por determinantes territoriales que reflejan desigualdades estructurales, económicas y sociales. En la Ciudad de México, el espacio urbano no solo delimita el acceso a servicios, empleo o infraestructura, sino que también condiciona el modo en que las personas viven el tiempo: cuánto trabajan, cuánto descansan, cuánto se mueven, y cuánto pueden socializar, cuidar o cuidarse.

El análisis comparativo entre las cuatro zonas de la ciudad —Norte, Sur, Poniente y Oriente— revela patrones diferenciales en la distribución del tiempo real, que permiten aproximarse a los efectos espaciales de las desigualdades sociales.

Uno de los hallazgos más elocuentes es la intensidad del tiempo destinado al trabajo en el Oriente, que alcanza las 7.88 horas diarias, cifra muy superior a la registrada en el Norte (5.82) o el Sur (5.86). Esta carga horaria podría estar asociada a una mayor prevalencia del trabajo informal, jornadas extendidas o multiempleo, fenómenos que históricamente se concentran en las periferias urbanas y entre los sectores más precarizados. Este sobretrabajo repercute directamente en otras dimensiones de la vida cotidiana: el Oriente también es la zona donde menos se duerme (6.12 h), lo que sugiere una relación directa entre mayor exigencia laboral y menor tiempo de descanso.

En contraste, el Norte y Sur de la ciudad reportan más tiempo de sueño (6.64 y 6.58 h, respectivamente) y una menor carga laboral. Si bien esto podría implicar mejores condiciones de equilibrio vida-trabajo, también puede reflejar tasas más altas de desempleo, informalidad no absorbida por el mercado laboral o una composición demográfica con más población dependiente.

El tiempo dedicado al estudio es también desigual: es mayor en el Norte (3.49 h) y en el Oriente (3.30 h), y más bajo en el Sur (2.97 h). Estas cifras podrían vincularse a las trayectorias educativas diferenciadas entre zonas, al acceso a instituciones educativas, o incluso a la edad promedio de la población residente. En zonas donde el trabajo absorbe una proporción importante del día, como el Oriente, el hecho de que aún se dedique tiempo considerable al estudio podría estar señalando la persistencia de jóvenes que combinan ambas actividades, muchas veces bajo condiciones de sacrificio personal.

Otro ámbito revelador es el del trabajo de cuidados, que muestra mayor concentración en el Norte (4.78 h) y Sur (4.58 h), y niveles menores en Poniente (3.63 h). Esto podría responder a una menor externalización del cuidado en zonas populares, donde el acceso a servicios como guarderías o cuidado de adultos mayores es más limitado, y las tareas recaen en el hogar, usualmente en mujeres. Por su parte, las zonas de mayores ingresos podrían delegar dichas tareas a terceros, reduciendo el tiempo personal destinado al cuidado directo. En términos de sociabilidad, el Oriente destaca con 4.17 horas, superando ampliamente al resto de zonas. Este dato puede leerse como evidencia de formas de vida comunitaria más densas y colectivas, propias de barrios con tradiciones vecinales fuertes y estructuras familiares ampliadas. En cambio, el Poniente (2.97 h) reporta el menor tiempo de sociabilidad, posiblemente relacionado con patrones de vida más individualizados y privatizados.

La movilidad representa otra fuente de desigualdad: en el Sur y Norte, los tiempos promedio superan las 2.8 horas, mientras que en el Poniente la cifra desciende a 2.46. Esto refleja diferencias espaciales de localización respecto a los centros de actividad económica y educativa, así como acceso a infraestructura de transporte. A mayor lejanía o peor conectividad, más tiempo se pierde en desplazamientos, afectando directamente la calidad de vida.

El tiempo en redes sociales —como forma moderna de interacción— también presenta disparidades. Mientras que en el Norte, Sur y Poniente se invierte entre 2.45 y 2.54 horas diarias, el Oriente registra apenas 1.78 horas. Esta diferencia puede deberse tanto a limitaciones de acceso y conectividad como a un uso más presencial de la sociabilidad en dicha zona.

Por último, el tiempo dedicado a la salud, participación y soledad se mantiene relativamente estable entre zonas, con ligeras variaciones. No obstante, la soledad es mayor en el Sur (2.17 h) y en el Norte (1.98 h), y menor en el Oriente (1.54 h), lo que podría estar vinculado a diferentes configuraciones de los hogares, redes afectivas y prácticas cotidianas de acompañamiento.

En conjunto, esta radiografía territorial del tiempo cotidiano permite advertir que el lugar que se habita en la ciudad estructura profundamente las formas de vida posibles. Los datos muestran que el tiempo —recurso finito, subjetivo y colectivo— se distribuye de forma desigual, y que dichas desigualdades están ancladas en patrones espaciales que reproducen jerarquías sociales históricas. El tiempo, en este sentido, no solo se vive, también se padece.

6.1. La ciudad fragmentada en el tiempo: desigualdades territoriales en la alienación temporal

del espacio urbano. En el caso de la Ciudad de México, el tiempo no se experimenta de forma uniforme; al contrario, se configura como una dimensión desigual, estratificada y territorialmente segmentada, que acompaña y refuerza otras formas de exclusión social.

La tabla comparativa de tiempo real e ideal por zonas (Norte, Sur, Poniente y Oriente) permite mapear la distribución diferencial del malestar temporal en la ciudad. Lejos de ser un problema individual o de "mala organización", la alienación del tiempo emerge como un fenómeno estructural: una consecuencia de cómo la ciudad distribuye el trabajo, los cuidados, la movilidad, los servicios y el acceso al descanso. En otras palabras, el espacio urbano no solo reparte recursos, sino también impone cronologías divergentes, vidas que se estiran, se comprimen, o se diluyen según el lugar que se habite.

La comprensión de estas desigualdades temporales requiere situarlas en la geografía social de la ciudad. Cada zona —Norte, Sur, Poniente y Oriente— condensa condiciones territoriales diferenciadas que moldean la experiencia del tiempo. El Poniente agrupa las alcaldías con mayor acceso a infraestructura, empleos formales y servicios de proximidad, lo que reduce la presión sobre la movilidad y el cuidado. El Norte combina densidad poblacional, precariedad laboral y redes familiares extensas, produciendo tanto sobrecarga de cuidados como tensiones emocionales. El Sur articula territorios semirrurales y periferias desconectadas, donde las largas distancias hacia los centros económicos convierten la movilidad en una condena temporal y fragmentan el tejido comunitario. El Oriente —la zona más poblada y socioeconómicamente vulnerable— enfrenta la mayor precarización laboral, escasez de servicios de cuidado y mayores tiempos de traslado, generando una acumulación de malestares temporales que atraviesa trabajo, descanso, movilidad y bienestar emocional. Así, las divergencias en la alienación temporal no solo reflejan decisiones individuales, sino la profunda desigualdad territorial que estructura la vida urbana en la Ciudad de México. Analicemos las principales desigualdades espaciales de la alienación temporal.

1. Dormir: un privilegio territorial

El déficit de sueño es una constante generalizada, pero con intensidades desiguales. Las cuatro zonas presentan una alienación negativa —se duerme menos de lo que se considera ideal—, pero es en el Oriente donde la diferencia alcanza su punto máximo (−1.30 horas), seguido por el Poniente (−1.17 h) y el Sur (−0.93 h). Dormir, en este contexto, no es una necesidad garantizada sino un lujo cronológico: se erosiona más en los márgenes urbanos, donde los desplazamientos son más largos, las jornadas laborales más exigentes y las condiciones materiales más precarias.

2. Trabajo y sobrecarga: el peso del modelo productivo

En el otro extremo, el tiempo de trabajo muestra una alienación creciente conforme se transita hacia las periferias más vulnerables. El Oriente registra una sobrecarga laboral de +1.74 horas, más del triple que el Poniente (+0.97 h) y claramente superior al Norte (+0.12 h). Este patrón sugiere una estructura laboral más explotadora o precarizada en las zonas con menor acceso a empleos

formales y mejor remunerados. Trabajar más allá de lo deseado no es una elección sino una imposición estructural, que se vuelve más intensa allí donde las oportunidades son más frágiles.

3. Cuidados y movilidad: doble carga estructural

Las actividades de cuidado no remunerado y de movilidad exhiben patrones de alienación significativos que refuerzan la lógica de acumulación del malestar. En el caso de los cuidados, las personas que habitan el Norte (+2.36 h) y el Sur (+2.11 h) son quienes más tiempo dedican a estas tareas más allá de lo deseado, lo cual puede interpretarse como un vacío institucional de apoyo en estas regiones —por ejemplo, menor disponibilidad de servicios públicos de cuidado, guarderías, estancias infantiles o apoyos comunitarios.

En movilidad, la tendencia es similar. Aunque la alienación es elevada en las cuatro zonas, el Sur (+1.76 h), el Norte (+1.72 h) y el Oriente (+1.39 h) presentan los valores más altos. La inversión de tiempo excesivo en traslados es una forma de violencia urbana crónica, que erosiona el bienestar, reduce el tiempo de ocio y salud, y afecta de manera diferencial a las clases trabajadoras. El Poniente, más conectado y central, muestra una alienación menor (+1.19 h), evidenciando cómo el acceso a infraestructura y empleo cercano mitiga la fatiga de la movilidad.

4. Lo emocional también es desigual: soledad, ocio y redes

Las actividades vinculadas a la esfera subjetiva y relacional —soledad, ocio y redes sociales— también presentan brechas temporales que revelan desigualdades emocionales distribuidas territorialmente. La soledad no deseada, por ejemplo, tiene su expresión más aguda en el Sur (+1.41 h) y el Norte (+1.03 h), lo cual podría asociarse a estructuras familiares fragmentadas, aislamiento urbano o falta de tejido comunitario. El Oriente muestra una alienación significativa también (+0.62 h), lo cual refuerza la idea de una ciudad emocionalmente fracturada.

En redes sociales, el Norte (+0.90 h) y el Sur (+1.04 h) muestran un uso por encima de lo deseado, mientras que en el Poniente y el Oriente, la alienación es también positiva, pero ligeramente menor. Esto podría interpretarse como una forma de compensación relacional o evasión emocional en contextos donde el tiempo presencial para la sociabilidad o el ocio está restringido por la sobrecarga.

El tiempo de ocio, en cambio, aparece como sistemáticamente erosionado: el Poniente (−0.47 h), el Sur (−0.23 h) y el Oriente (−0.22 h) registran menos tiempo de esparcimiento del que desean, lo que refuerza una lógica de vida centrada en el deber, el rendimiento o la subsistencia, con escaso margen para el disfrute.

5. Una cartografía del tiempo desigual

En suma, el análisis de la alienación temporal por zonas permite delinear una verdadera cartografía de la injusticia cronológica en la Ciudad de México. Las personas que viven en el Oriente y el Sur enfrentan los mayores niveles de desajuste entre lo que hacen y lo que desean hacer, acumulando déficit en sueño, ocio, cuidados, movilidad y salud. El Norte, aunque menos extremo, comparte muchos de estos patrones. El Poniente, más favorecido materialmente, también evidencia tensiones, especialmente en trabajo y descanso.

La desigualdad urbana no es solo espacial o económica: es también temporal. Las horas se estiran o se comprimen según el lugar que se habita, y con ello se construyen biografías más cansadas, más solas, más presionadas. Tener tiempo —para descansar, para cuidar, para jugar o simplemente para no hacer nada— se vuelve un privilegio territorial.

El tiempo, en este marco, deja de ser un recurso neutral para convertirse en un dispositivo de dominación: una tecnología silenciosa del malestar que profundiza las fracturas urbanas, reproduce desigualdades y erosiona el bienestar colectivo. Entender la alienación temporal como un fenómeno político es clave para repensar la justicia urbana en clave cronopolítica.

7. Efectos de la alienación temporal en la probabilidad de voto.

En el contexto de lo afirmado en las secciones anteriores, se exploró también la relación entre la alienación temporal y la intención de voto por Claudia Sheinbaum mediante un modelo de regresión logística⁹. Esta aproximación permite analizar en qué medida la experiencia de vivir un tiempo no elegido —impuesto por exigencias externas, desajustado respecto a los deseos subjetivos— influye en las decisiones políticas de la ciudadanía. La pregunta que orienta este análisis es: ¿cómo incide la vivencia cotidiana del tiempo alienado en el respaldo a una figura política que representa simultáneamente continuidad institucional y promesa de transformación?

Los resultados muestran que la alienación temporal tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre la probabilidad de votar por Sheinbaum ($\beta = -0.0064$, $p = 0.042$), controlado por variables socioeconómicas y emocionales. En otras palabras, a medida que las personas acumulan más horas de desajuste entre el tiempo que viven y el que desearían vivir, disminuye la probabilidad de que apoyen electoralmente a la candidata oficialista. Este hallazgo resulta especialmente revelador si se considera que la alienación temporal no es una categoría ideológica, sino una vivencia estructural que atraviesa la experiencia urbana en múltiples dimensiones: el exceso de tiempo en traslados, la sobrecarga de cuidados, el déficit de descanso o la conexión digital compulsiva. Es claro que la materialidad construye subjetividades.

Modelo probabilístico logit: Probabilidad de voto a Claudia Sheinbaum y alienación en la vida cotidiana, 2025

	Coefficiente	P>z
Alienación en la vida cotidiana	-0.0064	0.0420
Salud mental	-0.2129	0.0000
Educación privada	-0.5480	0.0120
Ingreso	0.0560	0.1060
Edad	0.0156	0.0280
Movilidad privada	-0.2807	0.0990
Género	0.0720	0.7190
Constante	-0.2645	0.6020

⁹ Probabilidad de voto si las elecciones fueran hoy, diciembre 2025.

La lectura política de este hallazgo sugiere que quienes viven una vida cotidiana más fragmentada, sobrecargada o desconectada de sus aspiraciones temporales tienden a distanciarse del proyecto político que promete transformaciones sociales, quizá porque no encuentran en él respuestas tangibles a su malestar cotidiano. La alienación, en este sentido, no es solo una condición social, sino una experiencia emocional y política: una forma de desgaste que puede erosionar la confianza institucional y el compromiso electoral.

En conjunto, el análisis confirma que la vivencia cotidiana del tiempo, y particularmente la experiencia de alienación temporal estructural, tiene efectos políticos mensurables. Votar o no por una figura política como Sheinbaum no depende solo de adscripciones ideológicas o evaluaciones racionales de gobierno, sino también de cómo se vive el tiempo en la ciudad. El malestar temporal —expresado en jornadas agotadoras, tiempos expropiados o descansos imposibles— se convierte en una forma de desafiliación política silenciosa pero potente. Redistribuir el tiempo, en este sentido, no es solo una demanda ética o social: es una condición para reconstruir el vínculo entre ciudadanía y política.

7.1. Formas de alineación temporal y malestar político: desagregando la alienación cotidiana

Hasta aquí, el análisis ha mostrado que la alienación temporal social general —entendida como la distancia entre el tiempo real y el tiempo ideal en la vida cotidiana— constituye un predictor estadísticamente significativo del comportamiento electoral, particularmente en relación con la probabilidad de votar por Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esta mirada general, aunque reveladora, plantea una pregunta clave: ¿todas las formas de alienación temporal inciden por igual en las decisiones políticas, o existen ciertas dimensiones del tiempo cotidiano cuyo desajuste impacta de forma diferenciada?

Para responder a esta pregunta, se estimó un segundo modelo de regresión logística en el que la variable de alienación total fue desagregada en dimensiones específicas del tiempo cotidiano, incluyendo: dormir, trabajo remunerado, estudio, cuidado, sociabilidad, ocio, movilidad, alimentación (comer), redes sociales, salud, participación social y soledad. Este ejercicio permite identificar cuáles actividades, cuando se viven en desequilibrio respecto al ideal subjetivo, contribuyen más directamente a moldear decisiones políticas. En todos los casos, el modelo está controlado por variables socioeconómicas, demográficas y emocionales, a fin de aislar el efecto propio de cada tipo de alienación. Es importante señalar que, si bien todas estas dimensiones fueron consideradas en el análisis, en esta sección se presentan únicamente aquellas que mostraron efectos estadísticamente significativos sobre la probabilidad de voto.

Los resultados ofrecen una radiografía compleja, pero profundamente significativa, de cómo la experiencia cotidiana del tiempo moldea los vínculos políticos. En primer lugar, la alienación en la sociabilidad muestra un coeficiente

Tabla X. Modelo econométricos sobre el impacto de distintas formas de alienación temporal sobre la ideología electoral, autodeclarada y valórica (CDMX, 2025)

	Variables dependientes					
	<i>Ideología electoral</i> (1=Sheinbaum, 0=Otro) (Logit)		<i>Ideología autodeclarada</i> (1= izquierda; 10 derecha) Logit Ordinal		<i>Ideología valórica</i> (1=Izquierda, 4=derecha) (OLS)	
	Coeficiente	P>z	Coeficiente	P>z	Coeficiente	P>z
Alienación en la Sociabilidad	-0.071	0.020				
Alineación en la movilidad	-0.041	0.072			-0.020	0.023
Alienación en la participación democrática	-0.090	0.019	0.104	0.037		
Alienación en la soledad involuntaria	0.044	0.018				
Alienación en el tiempo del cuidado			0.046	0.036	0.017	0.000

Nota: se presentan los coeficientes estadísticamente significativos. No se presentan las variables socioeconómicas y demográficas de control.

negativo y estadísticamente significativo ($\beta = -0.071$, $p = 0.020$), lo cual sugiere que quienes dedican más tiempo del que quisieran a interactuar con otros en contextos no elegidos —como vínculos obligados, reuniones forzadas o contactos funcionales— tienden a distanciarse electoralmente de la candidata. Este hallazgo puede leerse como un malestar relacional: la imposibilidad de disponer libremente de los vínculos cotidianos podría generar una subjetividad más crítica, menos confiada, menos propensa a respaldar figuras del poder.

La alienación en la participación social también presenta un efecto negativo significativo ($\beta = -0.090$, $p = 0.019$). Es decir, cuando las personas sienten que están participando más de lo que desean —o bien, lo hacen bajo presión, sin sentido o como parte de obligaciones externas— disminuye la probabilidad de que voten por Sheinbaum. Este resultado interpela a la idea de una ciudadanía activa como deseable en sí misma: no toda participación implica empoderamiento, y cuando es vivida como carga o frustración, puede alimentar la distancia con el sistema político. En este caso, el exceso de participación no elegida

se convierte en un síntoma de desgaste democrático más que de compromiso ciudadano. Forzar a militantes a participar puede tener un efecto contradictorio si se quiere sumar adhesiones políticas.

Por su parte, la alienación en la movilidad arroja una relación negativa significativa ($\beta = -0.041$, $p = 0.072$), lo cual sugiere que las largas horas de desplazamiento diario —vivas como imposición— también inciden en el voto. El peso simbólico del traslado forzado en una ciudad fragmentada como la Ciudad de México opera como una forma de extenuación cotidiana que tiende a debilitar los lazos con proyectos políticos que no han logrado resolver la crisis de movilidad urbana. Las distancias son leídas como tiempos perdidos y terminan afectando el apoyo popular a la transformación social.

Un resultado inesperado —pero profundamente revelador— surge en torno a la alienación por soledad involuntaria. El modelo muestra que a mayor distancia entre el tiempo real y el deseado en esta dimensión, mayor es la probabilidad de votar por Claudia Sheinbaum ($\beta = +0.044$, $p = 0.018$). Es decir, quienes se sienten más solos de lo que querrían, tienden a expresar un mayor respaldo político hacia la candidata oficialista. Lejos de ser una paradoja, esta asociación puede comprenderse a la luz de un contexto político donde la soledad social ha sido reconocida, al menos simbólicamente, como un problema público.

En efecto, una de las estrategias más potentes de la Cuarta Transformación ha sido la intervención directa sobre los márgenes afectivos del Estado, con políticas específicas hacia dos grupos particularmente expuestos a la soledad estructural: los adultos mayores y los jóvenes. Programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro” o la pensión universal para personas mayores no solo han representado un ingreso, sino una forma de reconocimiento y acompañamiento estatal en una sociedad que, por décadas, abandonó emocional y materialmente a estos sectores. En este marco, el voto por Sheinbaum podría operar como una expresión de gratitud, identificación o deseo de continuidad, no simplemente por los beneficios materiales, sino por el sentido de presencia que el Estado ha intentado construir en torno a estas poblaciones.

Desde una perspectiva más interpretativa, este hallazgo sugiere que la soledad no anula la agencia política, sino que puede reconfigurarla en clave afectiva: votar por quien promete no dejarte solo. En este sentido, la alienación en la soledad no aparece solo como síntoma de aislamiento, sino como una grieta emocional desde donde también se produce apoyo político. La política no solo se juega en la economía o en la ideología, sino también en los umbrales de la experiencia cotidiana, donde el acompañamiento simbólico puede pesar tanto como el programa de gobierno.

Estos hallazgos muestran que la alienación temporal no es un bloque homogéneo, sino un conjunto de vivencias diferenciadas que afectan de manera diversa las decisiones políticas. Mientras algunas dimensiones del tiempo alienado —

como la sociabilidad forzada o la sobreparticipación— erosionan el vínculo con el poder institucional, otras —como la soledad— parecen activarlo bajo formas más complejas. Analizar el tiempo como estructura de subjetivación política permite avanzar hacia una comprensión más fina del comportamiento electoral, una que no se basa únicamente en valores ideológicos o factores socioeconómicos, sino en la experiencia vivida de la jornada urbana. En este sentido, la política del tiempo cotidiano emerge como campo legítimo y urgente de análisis político.

Una vez examinados los vínculos entre alienación temporal y comportamiento electoral, el análisis se desplazó hacia la exploración de la ideología en dos planos diferenciados pero complementarios: por un lado, la ideología auto-declarada, entendida como la ubicación subjetiva de los individuos en una escala de izquierda a derecha; y por otro, la ideología valórica, que sintetiza orientaciones normativas en torno a la igualdad económica, la democracia, el feminismo, la sostenibilidad ambiental y la xenofobia. Ambos modelos permiten observar cómo la experiencia desigual del tiempo cotidiano —medida a través de distintas formas de alienación— incide en la configuración ideológica en contextos urbanos como el de la Ciudad de México.

En el caso de la ideología autodeclarada, dos dimensiones resultan estadísticamente significativas. La primera es la alienación en la participación democrática, cuyo coeficiente positivo ($+0.104$, $p = 0.037$) indica que las personas que desearían participar más activamente en la vida política pero no pueden hacerlo tienden a ubicarse más a la derecha del espectro ideológico. Este resultado, aparentemente contraintuitivo, puede interpretarse como una reacción de desencanto que no se traduce en radicalización progresista, sino en una retirada hacia posiciones más conservadoras. En un contexto de desconfianza institucional y desencanto con la política formal, el malestar participativo puede derivar en demandas de orden o en la idealización de formas de gobierno más autoritarias o tecnocráticas.

La segunda dimensión significativa en este modelo es la alienación en el tiempo de cuidado, también con signo positivo ($+0.046$, $p = 0.036$). Aquí, quienes experimentan un desfase entre el tiempo que desean dedicar al cuidado (de hijos, mayores u otros dependientes) y el tiempo que efectivamente tienen, tienden igualmente a autodefinirse más a la derecha. Esta asociación puede leerse como una respuesta conservadora ante la sobrecarga reproductiva y la falta de apoyo institucional. En lugar de cuestionar estructuralmente la distribución del trabajo de cuidados, parte de la población puede replegarse en valores tradicionales que reafirman el rol privado y familiar del cuidado como deber individual, naturalizado y despolitizado. En este sentido, la alienación no genera necesariamente conciencia progresista, sino que puede fortalecer una ideología de responsabilidad individual y orden moral.

El modelo de ideología valórica, por su parte, arroja hallazgos complementarios. La alienación en la movilidad presenta un coeficiente negativo y significativo (-0.020 , $p = 0.023$), lo cual indica que las personas que no pueden desplazarse como desearían en su vida cotidiana —ya sea por falta de tiempo, recursos o infraestructura— tienden a adoptar valores más progresistas. Este resultado sugiere que la frustración con la movilidad no solo genera malestar físico, sino que activa una conciencia crítica sobre las desigualdades territoriales, el acceso diferencial a la ciudad y la injusticia estructural. En este caso, la alienación funciona como un catalizador de politización, que fortalece la adhesión a principios de equidad, sostenibilidad y derechos sociales.

De manera consistente con el modelo anterior, la alienación en el tiempo de cuidado también aparece como significativa en el plano valórico (coeficiente $+0.017$, $p = 0.000$), confirmando que esta dimensión temporal tiende a consolidar orientaciones conservadoras. En lugar de fomentar una reflexión crítica sobre la organización social del cuidado, la sobrecarga tiende a naturalizar los roles tradicionales y a reforzar actitudes de rechazo hacia las políticas de igualdad, feminismo o redistribución. Es decir, la alienación en el cuidado genera una forma de subjetividad política conservadora tanto en la dimensión ideológica autodeclarada como en la valórica.

Según lo observado, estos resultados invitan a repensar la relación entre malestar temporal e ideología. Lejos de asumir una correspondencia lineal entre alienación y progresismo, los datos muestran que no todas las frustraciones temporales producen las mismas orientaciones políticas. Algunas, como la alienación en la movilidad, abren espacio a una ideología crítica y transformadora; otras, como el desfase en el cuidado o en la participación, refuerzan lógicas conservadoras. La clave, entonces, no está solo en el malestar, sino en su marco interpretativo, en la experiencia colectiva que lo acompaña y en los lenguajes políticos disponibles para dotarlo de sentido.

Los resultados de los modelos sobre ideología autodeclarada y valórica permiten avanzar más allá del análisis del voto inmediato, para captar cómo la experiencia desigual del tiempo cotidiano estructura las orientaciones ideológicas más profundas de los individuos. Aquí, la alienación no actúa solo como catalizador de malestar o movilización, sino también como mecanismo de adaptación subjetiva a condiciones estructuralmente adversas. Esto se observa con especial claridad en dos dimensiones: el cuidado y la participación democrática.

Cuidado: resignación conservadora ante la sobrecarga

En ambos modelos (autodeclarado y valórico), la alienación en el tiempo de cuidado muestra una relación positiva y significativa con posiciones ideológicas más conservadoras. Este hallazgo desafía la idea de que el malestar cotidiano genera necesariamente conciencia progresista. En cambio, podría estar operando un mecanismo de preferencias adaptativas (Elster, 1983), mediante el cual las personas ajustan sus valores a las condiciones materiales que no pueden cambiar.

En este caso, la sobrecarga en el cuidado —experimentada como injusticia pero asumida como inevitable— podría generar una resignación moral que refuerza visiones tradicionales del rol familiar, el orden doméstico y la meritocracia afectiva. Ante la falta de corresponsabilidad estatal o comunitaria, el sujeto alienado no demanda transformación, sino que adapta sus creencias para justificar su situación: “es mi deber”, “así ha sido siempre”, “la política no resuelve esto”. Así, el conservadurismo no surge solo por convicción ideológica, sino como respuesta adaptativa a un tiempo saturado, no elegido y estructuralmente invisibilizado.

Participación: exceso forzado y conservadurismo como refugio

Si bien en muchos marcos teóricos la participación política se asocia con procesos de empoderamiento y politización crítica, los datos analizados en esta investigación revelan una dinámica distinta. En el modelo de ideología auto-declarada, se observa que las personas que participan más de lo que desearían tienden a ubicarse más hacia la derecha del espectro ideológico. Este resultado desafía la noción de que toda forma de participación conlleva agencia o compromiso cívico. Por el contrario, sugiere que en ciertos contextos, la alienación en el tiempo de participación puede ser vivida como una carga, un acto impuesto más que elegido, inscrito en dinámicas institucionales, laborales, religiosas o comunitarias que exigen presencia sin convicción.

En este sentido, no se trataría de una ciudadanía activa en términos deliberativos, sino de una participación forzada o instrumental, donde el involucramiento responde más a obligaciones externas que a una voluntad política propia¹⁰. Esta forma de participación alienada —es decir, desvinculada del deseo o la agencia— puede generar un efecto de desencanto y retraimiento, que se traduce ideológicamente en una mayor afinidad con posiciones conservadoras. En lugar de generar compromiso con proyectos transformadores, la sobreparticipación no deseada podría alimentar formas de distanciamiento, cinismo o búsqueda de orden, propias de discursos más autoritarios o tecnocráticos.

Este tipo de participación forzada es especialmente visible en contextos de movilización promovida desde el aparato estatal, como ocurre cuando trabajadores de la burocracia pública son convocados —directa o indirectamente— a asistir a marchas, actos masivos o eventos políticos en respaldo a un proyecto de gobierno. En estos casos, la participación deja de ser un ejercicio de ciudadanía y se convierte en una práctica de subordinación simbólica, que puede generar cansancio, desafección o incluso un giro ideológico hacia posiciones que prometen orden, distancia y menor exposición política.

10 Es importante señalar que la variable analizada hace referencia a la alienación en la participación dado que el tiempo dedicado a la participación tiene un efecto positivo en incrementar las probabilidades de ser de izquierda y votar por la actual Presidenta de México.

En este contexto, el conservadurismo no se expresa como abstención, sino como respuesta defensiva ante una sobreexposición política no elegida. Quienes participan más de lo que desean podrían desarrollar una visión más escéptica, rígida o jerárquica del orden social, precisamente porque han sido involucrados en dinámicas colectivas donde no se sienten representados o donde el involucramiento es percibido como inútil o desgastante.

Otra hipótesis plausible es que esta sobreparticipación forzada reactiva estructuras tradicionales de poder —como el clientelismo, el control territorial o el deber moral—, donde la acción política deja de ser deliberativa y se convierte en instrumento de subordinación. Así, el rechazo a la participación no surge de la apatía, sino de la experiencia de una ciudadanía instrumentalizada, que lleva a valorar el orden, la jerarquía o incluso el repliegue individual frente a lo colectivo.

Finalmente, este resultado pone en cuestión la idea progresista de que más participación equivale a más democracia. Lo que este hallazgo sugiere es que la calidad de la participación importa más que su cantidad, y que el desajuste entre participación real y deseada puede erosionar el vínculo con los ideales democráticos y favorecer una ideología más conservadora, individualista o autoritaria.

Movilidad: conciencia progresista desde el malestar espacial

En contraste, la alienación en la movilidad sí parece generar un efecto político progresista. Aquellos que no pueden moverse como quisieran —ya sea por distancias, tiempos perdidos o inseguridad— muestran actitudes más críticas hacia el orden vigente, como revela su menor puntuación en el índice de ideología valórica. A diferencia del cuidado o la participación, la movilidad es una alienación más visible, compartida y menos naturalizada. Por ello, activa lecturas estructurales sobre la ciudad, la injusticia territorial y la desigualdad de acceso a derechos.

En este caso, la alienación no se adapta, sino que politiza. La imposibilidad de desplazarse dignamente interpela directamente al Estado, al modelo de ciudad y al orden económico. No hay resignación, sino demanda. La movilidad aparece, así, como una grieta por donde entra la crítica, la colectivización del malestar y el deseo de transformación.

Estos hallazgos evidencian que la alienación temporal no genera unívocamente radicalización ni crítica. Dependiendo de la dimensión en que se exprese —y del grado de naturalización o visibilidad que tenga en el orden social—, puede generar adaptación conservadora, desencanto pasivo o politización transformadora. El efecto de “uvas amargas” (preferencias adaptativas) ayuda a comprender por qué, en ciertas esferas como el cuidado o la participación, la alienación produce no solo malestar, sino conformismo ideológico. Así, la

ideología no refleja únicamente una estructura racional de valores, sino también una respuesta subjetiva al desequilibrio temporal vivido, en contextos donde las alternativas reales son percibidas como imposibles o inviables.

En este sentido, el análisis del tiempo —como vivencia, como malestar y como límite estructural— permite abrir nuevas formas de comprensión de la ideología en América Latina. Lejos de ser una categoría fija o ideacional, la ideología se revela como una forma de gestión simbólica del malestar cotidiano, donde la política se juega en el modo en que se sobrevive al día.

8. Conclusiones: redimir el tiempo, politizar la espera

No hay dominación sin calendario. Las estructuras de poder no solo ocupan el espacio, sino que organizan la vida desde la arquitectura del tiempo: ¿cuándo se duerme?, ¿cuánto se cuida?, ¿qué se posterga? Como advirtió Zavaleta, no basta con observar la estructura objetiva; es necesario pensar lo abigarrado, lo múltiple y lo fragmentado. La alienación en América Latina no opera únicamente por la expropiación de medios materiales, sino por la captura de los ritmos vitales.

Este capítulo ha mostrado que la alienación temporal no es una experiencia abstracta ni un residuo teórico del marxismo clásico. Es una vivencia cotidiana, profundamente encarnada, que produce subjetividad política. En las ciudades del Sur global, el tiempo alienado no solo cansa: desafilia, adapta, hiere o politiza. Es desde el exceso de cuidado, la participación forzada, el traslado interminable o la soledad impuesta donde se configuran sentidos, se ordenan valores, se traza la ideología.

En este panorama, no puede obviarse el peso estructural de las desigualdades territoriales. La alienación temporal no se distribuye de forma homogénea, sino que se estratifica espacialmente: quienes habitan en las periferias urbanas o en zonas con menor infraestructura y servicios sufren una expropiación sistemática de su tiempo vital. Los largos trayectos, la espera constante en el transporte público, la falta de acceso cercano a salud, educación o cultura, configuran una experiencia del tiempo marcada por la interrupción y el desgaste. Esta “temporalidad del margen” —hecha de espera, dilación y desplazamiento forzado— no solo reproduce desigualdad, sino que también modela subjetividades políticas atravesadas por el cansancio, la frustración o el deseo de transformación. En ciudades profundamente segregadas como la Ciudad de México, el tiempo no solo es clase, también es territorio.

Los hallazgos permiten sostener que no toda alienación genera politización progresista. El malestar cotidiano puede derivar en adaptación conservadora, en resignación afectiva, en conformismo funcional. Las “uvas amargas” de Elster vuelven con fuerza en los campos del cuidado y la participación: ante la imposibilidad de cambiar las condiciones, se ajustan las expectativas, se endu-recen las creencias, se mitifica el orden. La ideología, en este marco, no es una opción libre sino un lenguaje de la sobrevivencia.

Pero no todo es captura. También hay grietas. En la movilidad, por ejemplo, la alienación abre la posibilidad de una conciencia crítica. El tiempo perdido en la ciudad fracturada no solo desgasta: también revela la injusticia espacial, interpela al Estado, reactiva el deseo de transformación. Aquí la alienación no solo domina: también empuja, con dolor, hacia la crítica.

Como advertía Bolívar Echeverría, la modernidad latinoamericana está marcada por una contradicción irresuelta entre ethos barroco y racionalidad capitalista. El tiempo no escapa a esa tensión. Ni lineal ni homogéneo, el tiempo en América Latina es disperso, tensionado, mestizo. La política del tiempo cotidiano —ese campo de lo invisible, lo postergado, lo roto— se vuelve, por tanto, un lugar legítimo de disputa ideológica. En sus silencios, en sus esperas, en sus sobrecargas y desajustes, se juega no solo la vida, sino también el sentido.

Frente a ello, la emancipación no puede limitarse a redistribuir ingresos o ampliar derechos formales. Hay que devolverle a la gente su tiempo robado: su derecho a dormir, a cuidar sin desgastarse, a moverse sin agotarse, a participar sin coerción, a estar acompañado sin mendigar afecto. Redimir el tiempo — como categoría crítica, como horizonte político— es uno de los desafíos centrales de las democracias urbanas del siglo XXI.

Inspirándose en Benjamin, podría decirse que la historia no siempre se forja en los grandes eventos, sino en los instantes en que, en medio de la rutina alienada, alguien se detiene, reconoce la fractura del tiempo vivido, y decide que ya no quiere habitarlo así.

ANEXO

Tabla 1. Alienación según edad y género, CDMX (2025)

Actividad	15 a 29	30 a 44	45 a 60	Más de 60	Mujer	Hombre
Dormir	-1.36	-1.52	-0.94	-0.07	-1.38	-0.67
Trabajo	-0.63	1.62	0.83	0.35	0.59	0.51
Estudio	1.3	-0.61	-0.41	0.02	-0.06	0.21
Cuidado	0.94	2.86	1.84	1.53	2.54	1.04
Sociabilidad	-0.1	-0.19	0.43	1.11	0.02	0.47
Ocio	-0.23	-0.7	0.04	0.69	-0.29	0.07
Movilidad	2.08	1.6	1.53	1	1.73	1.47
Comer	0.3	-0.49	0.17	0.3	0.01	0.04
Redes	0.01	0.37	0.78	0.94	0.95	1.2
Salud	0	-0.36	-0.06	0.12	-0.18	-0.07
Participación	-0.01	-0.17	-0.15	-0.01	-0.16	-0.01
Soledad	1.57	0.73	0.62	0.62	1.1	0.71

Capítulo VI

Malestar psicosocial, deseo e ideología en la Ciudad de México

1. Introducción

En los últimos años, la salud mental ha adquirido una centralidad inédita en el debate público, no solo como problema clínico individual, sino como síntoma de un orden social crecientemente desigual, acelerado y fragmentado. América Latina, y en particular las grandes metrópolis como la Ciudad de México, concentran buena parte de este malestar: desigualdad extrema, precarización del trabajo, violencia cotidiana, crisis de los cuidados y una reorganización profunda de los tiempos y vínculos sociales.

Este capítulo se inscribe en ese problema y propone una pregunta específica: ¿cómo se articulan el malestar psicosocial, la ideología política y el comportamiento electoral en la Ciudad de México? En el marco de la encuesta realizada, se analiza la relación entre salud mental —construido a partir de síntomas como estrés, ansiedad, insomnio, tristeza, vacío y deseos de no seguir viviendo— y distintas dimensiones de la ideología (autoubicación izquierda–derecha e índice de valores conservadores/liberales), así como su vínculo con el voto a la candidatura oficialista en la elección de 2024.

Lejos de entender la salud mental como un déficit individual, el capítulo la aborda como un indicador de malestar psicosocial estructural. La hipótesis de trabajo es que dicho malestar no solo expresa desigualdades materiales, sino que también reconfigura las disposiciones políticas: erosiona la confianza en los proyectos de continuidad, alimenta sentimientos de desaliento democrático y puede hacer más atractivos ciertos discursos conservadores que prometen orden, control y certezas.

El texto se organiza en seis secciones adicionales. Primero, se discute la salud mental como síntoma de un orden desigual. Luego se examinan los cambios en la sociabilidad, la soledad y la sexualidad en la era de las redes y los territorios virtuales. En tercer lugar, se presenta el marco de psicología política que permite comprender la relación entre malestar e ideología. La cuarta sección resume el diseño metodológico y los modelos estadísticos empleados. La quinta

desarrolla los principales resultados, organizados en tres ejes: gradientes sociales y territoriales del malestar, vínculos sexo–afectivos y alienación cotidiana, y traducciones políticas del malestar. Finalmente, se discuten las implicancias para la democracia y se proponen líneas de política pública orientadas a articular salud mental, igualdad y proyectos progresistas.

2. Salud mental como síntoma de un orden desigual

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió desde 1946 la salud no como la mera ausencia de enfermedad, sino como “un estado de completo bienestar físico, mental y social”, definición que ha sido ampliamente discutida pero que consolidó una comprensión holística del fenómeno sanitario. En la misma línea, la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud concibe la salud como un recurso para la vida cotidiana y no como el objetivo de la vida, subrayando las capacidades de las personas para realizar sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y transformar o afrontar su entorno. Desde esta perspectiva, la salud mental no se reduce a diagnósticos psiquiátricos, sino que remite a la posibilidad de sostener un sentido de continuidad, pertenencia y agencia en contextos muchas veces adversos.

A escala global, el World Mental Health Report 2022 de la OMS documenta un aumento sostenido de los problemas de salud mental y destaca que las respuestas estatales son insuficientes y desiguales, en particular en países de ingresos medios como los latinoamericanos. En América Latina, una tradición crítica de medicina social y salud colectiva ha insistido en que la salud mental es inseparable de los determinantes sociales, económicos y políticos: desigualdad de clase, violencia estructural, racismo, patriarcado y herencias coloniales (Breilh, retomado por Harvey, Piñones-Rivera y Holmes, 2023; Abarca-Brown y Ortega, 2024). Los enfoques de “competencia estructural” dialogan hoy con esta tradición para mostrar cómo las condiciones de vida —y no solo las características individuales— organizan la distribución del sufrimiento psíquico.

La evidencia reciente confirma que la región atraviesa una verdadera crisis de salud mental, con aumentos de ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias y conductas suicidas, especialmente entre jóvenes y mujeres. El informe mundial de salud mental de la OMS y distintos estudios en países latinoamericanos vinculan estos síntomas con pobreza persistente, precarización del trabajo, inseguridad y violencias múltiples. En México, análisis ecológicos han mostrado que el aumento de la incidencia de depresión y de las tasas de suicidio se inscribe en un entramado de desigualdades territoriales y cambios en las formas de vida urbana (Cabello-Rangel, Márquez-Caraveo y Díaz-Castro, 2020). Estudios específicos sobre la Ciudad de México reportan prevalencias muy elevadas de síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático, con patrones especialmente intensos entre mujeres jóvenes y personas en situación socioeconómica desventajosa (Sánchez, E., et. al, 2025).

El enfoque que asumimos en este capítulo se distancia deliberadamente de una mirada puramente clínica o individualizante. En lugar de hablar de “trastornos” en sentido estricto, trabajamos con la noción de malestar psicosocial: un conjunto de síntomas subjetivos —estrés, ansiedad, insomnio, tristeza, sensación de vacío, ideas de no querer seguir viviendo— que se distribuyen de manera desigual según la posición de clase, el género, la edad y el territorio. Esta idea dialoga con las propuestas de salud colectiva latinoamericana que hablan de determinación social de la salud más que de simples “determinantes” (Breilh, en Harvey, M., et al., 2023; Abarca-Brown y Ortega, 2024), subrayando que las estructuras de explotación, dominación y desposesión producen formas específicas de sufrimiento psíquico (Harvey, M. 2023). Se trata, por tanto, de un termómetro de la sociedad, no de un inventario de patologías individuales.

Con esta clave, la salud mental aparece como un espejo de la estructura social. Quienes viven en condiciones de mayor precariedad económica, inestabilidad laboral, hacinamiento, violencia o sobrecarga de cuidados tienden a reportar un malestar más intenso, mientras que quienes habitan territorios con mejores ingresos, mayor infraestructura urbana y redes de apoyo más densas muestran indicadores relativamente mejores (OMS, 2025). Del mismo modo, los espacios marcados por la falta de servicios públicos, la inseguridad y la débil presencia institucional concentran tanto peores condiciones materiales como mayores prevalencias de síntomas de ansiedad, depresión y desesperanza (Sánchez et al., 2025). La salud mental, así entendida, es inseparable de la desigualdad y de las formas concretas que adopta la violencia estructural en las ciudades latinoamericanas. Tal perspectiva será evaluada para el caso de la Ciudad de México.

2.1. Soledad, vínculos y territorios: De la ciudad al espacio virtual

La soledad ha pasado de ser un estado episódico a ser definida como un problema de salud pública. La literatura reciente la concibe como la vivencia afectiva de una brecha entre los vínculos que se desean y los que efectivamente se tienen, diferenciándola de la mera situación objetiva de estar a solas (Jost, G. et al., 2025). Esta distinción es clave para pensar el presente: nunca hubo tantas posibilidades técnicas de conexión y, sin embargo, los indicadores de soledad y aislamiento subjetivo aumentan, especialmente entre adolescentes y jóvenes (idem).

Diversos trabajos señalan un “paradigma de la hiperconexión solitaria”: el uso intensivo de internet y redes sociales puede ampliar contactos, pero al mismo tiempo favorecer formas de interacción más superficiales, comparativas y mediadas por algoritmos, que no sustituyen la experiencia de apoyo afectivo y pertenencia (Smith, A. y Alheneidi, H, 2023). Metaanálisis recientes muestran asociaciones sistemáticas —aunque de magnitud diversa— entre uso problemático de redes sociales, ansiedad, depresión, peor bienestar y mayores niveles de soledad en población joven. (Ahmed, O., et al., 2024).

En América Latina, y en México en particular, este patrón se inserta en una rápida digitalización de la vida cotidiana. En 2021 se estimaba que alrededor del 77 % de la población mexicana utilizaba redes sociales, con un tiempo medio de conexión de alrededor de tres horas y media diarias (Jost, G., et.al, Ob. Cit). Estudios específicos con adolescentes de secundaria en Guadalajara muestran niveles elevados de “miedo a perderse algo” (FoMO) asociados a un uso intenso de plataformas como WhatsApp, TikTok e Instagram, y a mayores niveles de malestar emocional (ibid). Paralelamente, encuestas a familias mexicanas registran que casi la mitad de las y los adolescentes se perciben “adictos” a sus dispositivos móviles y consideran que pasan demasiado tiempo conectados, mientras padres y madres observan un impacto negativo en la vida familiar cotidiana.

Los datos de la encuesta utilizada en este capítulo se inscriben en ese paisaje: una proporción importante de personas declara pasar varias horas al día en redes sociales y plataformas digitales, mientras que las actividades presenciales compartidas —reunirse con amistades, participar en organizaciones, asistir a espacios culturales o comunitarios— ocupan un lugar más reducido (ver capítulo V). La ciudad, históricamente pensada como espacio de encuentro, cede terreno frente al “territorio virtual” como principal mediación de los vínculos.

La relación entre tiempo en soledad y malestar tampoco es lineal. Estudios longitudinales con jóvenes de origen mexicano en Estados Unidos muestran que el tiempo pasado a solas aumenta a lo largo de la adolescencia, y que quienes pasan proporciones más altas de tiempo en soledad durante la secundaria presentan más soledad en la adultez temprana, especialmente cuando esta soledad se combina con baja calidad de relaciones con pares y conflicto familiar. La soledad crónica se vincula, a su vez, con mayor riesgo de síntomas depresivos, ansiedad y trayectorias de salud más deterioradas (Jost, G., et.al, 2025).

En este contexto, la dimensión sexoafectiva se vuelve un prisma privilegiado para leer la densidad de los vínculos. En este marco, parece ser relevante estudiar la asociación entre abstinencia sexual y peor salud mental. No se trata de patologizar la no actividad sexual —que puede ser elección o responder a distintas formas de autonomía—, sino indagar si la ausencia de relaciones sexuales se experimenta como carencia, frustración o imposición del contexto, aparece con más frecuencia acompañada de estrés, ansiedad, tristeza e ideas de no querer seguir viviendo.

La literatura internacional sugiere que no es la mera frecuencia de relaciones sexuales lo que importa, sino la calidad de la experiencia y del vínculo. Estudios con adolescentes y jóvenes muestran que mayores niveles de satisfacción sexual se asocian a menores niveles de ansiedad y depresión, mientras que la insatisfacción sexual se vincula a más síntomas de malestar psíquico (Carcedo, R., et al., 2020). Al mismo tiempo, investigaciones sobre conductas sexuales en la adolescencia señalan que ciertas formas de actividad sexual, especialmente

cuando se dan fuera de relaciones afectivas significativas o bajo fuerte presión de género, pueden asociarse a más síntomas depresivos, en particular entre mujeres. (Vasilenko, S., 2016). Estos hallazgos refuerzan la idea de que la sexualidad funciona como un indicador sensible de la calidad de los vínculos y de las normas culturales que los atraviesan.

Desde esta perspectiva, la asociación entre abstinencia sexual y peor salud mental podría leerse como síntoma de una ecología más amplia de soledad. Menos vínculos sexoafectivos significativos, menos espacios de confianza y ternura, más horas frente a la pantalla o en traslados, trabajo fragmentado y precario, miedo en el espacio público y deterioro de los lugares de encuentro configuran un entorno que erosiona la capacidad de sostener relaciones profundas. Las investigaciones sobre soledad en juventudes muestran de manera consistente que el bajo apoyo social percibido, la baja aceptación entre pares, la victimización y los síntomas depresivos son factores de riesgo centrales para la soledad crónica. (Jost, G. M. et al., 2025)

Bajo esta lógica, la soledad analizada en este capítulo debe ser leída no es sólo como un atributo individual ni una preferencia de estilo de vida, sino el resultado de una trama de condiciones materiales (precariedad, inseguridad, largos tiempos de trabajo y transporte) y simbólicas (normas de género, cultura digital de la comparación permanente, meritocracia afectiva) que reorganiza los territorios de la vida cotidiana. El “paso de la ciudad al espacio virtual” no es neutro: redistribuye posibilidades de encuentro, intensifica el peso del reconocimiento mediado por pantallas y produce nuevas formas de vulnerabilidad psíquica que se expresan en el malestar, la soledad y las dificultades para sostener vínculos sexoafectivos plenos.

2.2. Salud mental, ideología y justificación del orden

Para comprender cómo el malestar psicosocial se traduce (o no) en posiciones políticas, resulta útil dialogar con la tradición de la psicología política crítica. La teoría de la justificación del sistema (system justification theory), propuesta por John Jost y Mahzarin Banaji (1994; Jost, Banaji & Nosek, 2004), plantea que las personas no solo tienden a defender sus propios intereses grupales, sino también a justificar el orden social existente, incluso cuando éste las perjudica. Según esta perspectiva, la defensa del statu quo cumple una función psicológicamente paliativa: reduce la ansiedad y la disonancia que produciría reconocer la injusticia de un sistema del que dependemos para vivir (Jost, 2019). De ahí que, en contextos de amenaza o incertidumbre, las creencias que legitiman jerarquías económicas, de género o raciales puedan intensificarse, aun entre quienes ocupan posiciones subordinadas.

En una línea cercana, la teoría del manejo del terror (terror management theory) –desarrollada por Greenberg, Pyszczynski y Solomon (1986; Pyszczynski, Solomon & Greenberg, 2015)– sostiene que la conciencia de la propia mortali-

dad genera un potencial de angustia que es canalizado a través de la adhesión a cosmovisiones culturales y figuras de autoridad que prometen orden, continuidad y sentido. Cuando esa conciencia de vulnerabilidad se activa (por violencia, crisis económicas, pandemias, etc.), se fortalecen las identificaciones con símbolos nacionales, religiosos o de “ley y orden”, y se incrementa la hostilidad frente a grupos percibidos como amenazantes.

En este marco, la pandemia de COVID-19 pudo haber funcionado como un experimento extremo de “activación de la mortalidad” a escala planetaria, pero con impactos particularmente severos en América Latina. La combinación de altas tasas de contagio y mortalidad, confinamientos prolongados, duelos no elaborados y deterioro acelerado de las condiciones de vida intensificó tanto el malestar psicosocial como la búsqueda de marcos de sentido relativamente estables. Desde la lógica del manejo del terror, no sorprende que ese shock de vulnerabilidad haya reforzado, por un lado, demandas de cuidado, protección social y salud pública, y por otro, aperturas hacia discursos de orden, control y sacrificio en nombre de la nación o de la “normalidad” perdida. En ciudades como la Ciudad de México, donde la pandemia se superpuso con precariedad laboral crónica, hacinamiento urbano y violencia previa, el “sentido de muerte” no se limitó al riesgo biológico, sino que se tradujo en una percepción más amplia de vida amenazada —material, afectiva y simbólicamente— que constituye un trasfondo ineludible del malestar que analizan los modelos de este capítulo.

Por su parte, la teoría de la dominancia social (social dominance theory), formulada por Jim Sidanius y Felicia Pratto (1999), explica la persistencia de jerarquías entre grupos a partir de la combinación de instituciones, prácticas cotidianas e ideologías que naturalizan la superioridad de ciertos colectivos sobre otros. La orientación a la dominancia social (social dominance orientation) captura la preferencia individual por relaciones jerárquicas entre grupos y se ha asociado sistemáticamente con actitudes antiigualitarias, racistas y sexistas, así como con apoyo a políticas punitivas y autoritarias (Sidanius & Pratto, 1999).

En esta misma dirección, los trabajos recientes sobre el círculo moral aportan una dimensión complementaria. Waytz, Iyer, Young, Haidt y Graham (2019) muestran que las personas difieren no solo en cómo justifican el orden social, sino también en quiénes son incluidos dentro del conjunto de seres considerados moralmente relevantes. Mientras ciertas orientaciones tienden a “ensanchar” el círculo moral hacia pobres, migrantes, minorías sexuales, animales y naturaleza, otras lo “achican” hacia núcleos más estrechos y jerarquizados (familia, nación, “gente como uno”). El estudio muestra, además, que esta expansión o contracción del círculo moral se asocia de manera sistemática con la autoubicación ideológica: quienes se sitúan más a la izquierda tienden a incluir un conjunto más amplio de sujetos en su comunidad moral, mientras que quienes se identifican con posiciones conservadoras exhiben un parroquialismo moral mayor, es decir, una menor disposición a extender obligaciones de cuidado y justicia más allá del propio grupo.

Tomamos estos hallazgos como marco comparado, conscientes de que se trata de investigaciones realizadas principalmente en Estados Unidos y otros países del Norte global. En el contexto latinoamericano, el cierre del círculo moral se superpone, además, con la colonialidad del poder, el racismo de clase y la violencia urbana, que delimitan de modo muy concreto quién es visto como “pueblo” y quién como “enemigo” o “sobrante” (Quijano, 2000).

En este capítulo, el índice de ideología valórica conservadora/neoliberal puede leerse precisamente como un intento de capturar ese parroquialismo moral: puntuaciones altas expresan una mayor aceptación de jerarquías de género, clase, raza y nacionalidad, así como una menor receptividad frente a agendas feministas, ecologistas, de diversidad sexual o de derechos humanos. Los modelos empíricos permitirán explorar hasta qué punto el cierre del círculo moral se enlaza con perfiles específicos de malestar psicosocial y con formas de desafección democrática en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, al articular este índice con el análisis de las preferencias electorales hacia un proyecto nacional-popular como la Cuarta Transformación, cuyo horizonte declarado es el de una comunidad política más amplia e inclusiva, será posible indagar en qué medida las configuraciones de malestar y parroquialismo moral no solo organizan las disposiciones ideológicas, sino que también se traducen en apoyos o distancias frente a propuestas que buscan expandir —o disputar— los límites de quién cuenta como “pueblo” y como destinatario legítimo de derechos y redistribución.

En conjunto, estos enfoques convergen en una tesis crucial para este capítulo: el sufrimiento, la inseguridad y el sentimiento de amenaza no se traducen automáticamente en demandas de cambio igualitario. Pueden, por el contrario, alimentar deseos de orden, castigo y control, y predisponer a una mayor aceptación de proyectos autoritarios o conservadores que prometen restaurar una cierta “normalidad” perdida.

Trasladada al contexto latinoamericano, esta literatura ayuda a entender por qué sectores golpeados por la crisis, la violencia o la frustración de expectativas pueden inclinarse hacia discursos conservadores o punitivistas, en lugar de radicalizar demandas redistributivas. La región combina altos niveles de desigualdad y precariedad con una historia larga de colonialidad del poder (Quijano, 2000) y de violencias de género, raciales y territoriales que estructuran la subjetividad política. Autoras como Rita Segato (2016) han mostrado cómo las formas contemporáneas de violencia —desde los feminicidios hasta la guerra contra el narcotráfico— reactivan matrices coloniales y patriarcales, alimentando un clima de miedo que puede ser capitalizado por proyectos de derecha y extrema derecha.

Al mismo tiempo, análisis comparados sobre el auge del autoritarismo populista en el Norte global subrayan que el avance de fuerzas iliberales se explica, en parte, como una “reacción cultural” (cultural backlash) de sectores que se perc-

iben amenazados por cambios en las jerarquías de género, etnia y moralidad (Norris & Inglehart, 2019). En América Latina, esa reacción se entrelaza con el agotamiento de ciclos progresistas en ciertos países, las promesas incumplidas de movilidad social y el impacto subjetivo de crisis sucesivas (económicas, sanitarias, de seguridad).

En la Ciudad de México, el malestar psicosocial que documenta este capítulo se inscribe en esa constelación. La irrupción de un proyecto nacional-popular en los últimos años reconfiguró las coordenadas ideológicas del campo político y elevó las expectativas de cambio. La elección de 2024 no sólo enfrentó programas distintos, sino también evaluaciones subjetivas de la vida cotidiana: percepción de mejora o deterioro de las condiciones materiales, confianza o desconfianza en la continuidad del proyecto, miedo a perder lo ganado o deseo de “probar algo distinto”. En este escenario, el malestar puede operar como combustible tanto para la desafección democrática como para la adhesión a narrativas de orden y castigo.

El análisis que aquí se presenta aborda estas dinámicas en un doble registro. Por un lado, recupera los aportes de la psicología política global para pensar cómo, bajo condiciones de amenaza e incertidumbre, las personas pueden justificar el orden, adherir a jerarquías de grupo, cerrar su círculo moral y buscar refugio en proyectos conservadores o autoritarios (Jost, 2019; Sidanius & Pratto, 1999; Waytz et al., 2019). Por otro lado, tensiona esas teorías desde las experiencias latinoamericanas de desigualdad extrema, violencia estructural y democracias frágiles, donde la relación entre malestar e ideología se juega en condiciones históricas específicas: la guerra contra el narcotráfico, la cronificación de la informalidad laboral, la sobrecarga de cuidados, la racialización de la pobreza y la persistencia de jerarquías coloniales en el espacio urbano (Quijano, 2000; Segato, 2016). El objetivo no es patologizar el conservadurismo, sino mostrar cómo determinadas configuraciones de malestar psicosocial hacen más verosímiles ciertas narrativas políticas —más cerradas, jerárquicas y punitivas— y más inverosímiles otras orientadas a la igualdad, la ampliación de derechos y la democratización de la vida social.

3. Metodología

Este estudio adopta un enfoque metodológico mixto para comprender las relaciones entre la salud mental, la ideología política (autodeclara y valórica) y el comportamiento electoral en la Ciudad de México. Dado el carácter complejo y multifactorial de estas dimensiones, la estrategia analítica fue diseñada en tres fases sucesivas que permiten abordar, de manera robusta, tanto la construcción de variables clave como la modelación estadística de sus efectos. A continuación, se detalla cada una de las etapas del enfoque metodológico empleado.

Fase 1: Construcción de variables dependientes

En la primera fase, se construyeron las variables dependientes. La variable de ideología autodeclarada, originalmente medida en una escala ordinal de 1 a 10, fue tratada como continua bajo el supuesto de que las distancias entre categorías representan intervalos equidistantes. En esta escala, el valor 1 corresponde a una posición de extrema izquierda, mientras que el valor 10 indica una ubicación ideológica de extrema derecha.

Para el caso del índice de ideología valórica (IIV), se construyó un índice sintético mediante Análisis de Componentes Principales (ACP). Este índice resume múltiples ítems relacionados con valores neoliberales, conservadores, antiecológicos, antifeministas, autoritarios y antidemocráticos, de modo que valores más altos indican una mayor adhesión a dichas posiciones.

Fase 2: Expansión del modelo de salud mental

En la segunda fase, se desarrolla un modelo específico y detallado enfocado exclusivamente en la variable de salud mental. Esta decisión metodológica se fundamenta en la necesidad de profundizar en los factores asociados a esta dimensión.

Dado que en los modelos de ecuaciones simultáneas (Fase 3) la salud mental será tratada como variable endógena, su especificación responde a criterios de identificación estructural, lo que implicó incluir únicamente un subconjunto de posibles predictores. Esta parsimonia fue necesaria para asegurar la estimación adecuada del sistema y evitar problemas de sobreidentificación o multicolinealidad entre ecuaciones. Sin embargo, esta estrategia analítica implica un sacrificio en la complejidad del modelo de salud mental.

Con el objetivo de superar esa limitación y obtener una comprensión más rica de los determinantes de la salud mental, se estima, previamente, un modelo ordinal logístico (ologit), incorporando una batería más amplia de variables

explicativas de la salud mental. Entre los predictores adicionales se incluyeron indicadores de alienación temporal, tiempo de soledad y sociabilidad, así como una especificación más completa de las zonas geográficas de residencia. Este modelo permite capturar con mayor precisión las condiciones psicosociales asociadas a los problemas de salud mental en la Ciudad de México, y ofrece una base más sólida para interpretar su rol en la ideología y el comportamiento electoral.

Dado que estás utilizando un modelo ologit (logit ordinal), se asume que existe una variable latente continua Y_i^* (salud mental no observada directamente), relacionada con las variables independientes, y la variable observada Y_i (salud mental ordinal) es una categorización de Y_i^* .

El modelo estimado fue el siguiente:

$$Y_i^* = \beta_0 + \beta_1 \text{No sexoi} + \beta_2 \text{Edadi} + \beta_3 \text{Ingresoi} + \beta_4 \text{Géneroi} + \beta_5 \text{Tiempo Soledad Involuntariai} + \beta_6 \text{Alienacion con el Trabajoi} + \beta_7 \text{Tiempo diario de Sociabilidad} + \delta_j \text{Zonaij} + \varepsilon_i$$

Donde:

- Y_i^* : nivel latente de salud mental
- Y_i : salud mental observada (ordinal: 0, 1, ..., 6)
- β_0 : intercepto
- δ_j : efectos fijos por zona geográfica
- $\varepsilon_i \sim \text{Logística}(0,1)$: error con distribución logística estándar (por ser logit)

Regla de clasificación ordinal:

$$Y_i = k \text{ si } \mu_{k-1} < Y_i^* \leq \mu_k \text{ para } k = 0, 1, \dots, 6$$

con:

μ_k : puntos de corte o umbrales estimados por el modelo
 $\mu_{(-1)} = -\infty$, $\mu_6 = +\infty$

Fase 3: Modelos de ecuaciones simultáneas

En la segunda fase, se utilizaron modelos de ecuaciones estructurales estimados mediante mínimos cuadrados en tres etapas (3SLS), con el objetivo de analizar la relación simultánea entre salud mental e ideología. Las ecuaciones estimadas fueron:

Modelo I.

- (1) Ideología autodeclarada_i = $\alpha_0 + \alpha_1 \text{Salud Mental}_i + \alpha_2 \text{Educación}_i + \alpha_3 \text{Ingreso}_i + \alpha_4 \text{Edad}_i + \alpha_5 \text{Género}_i + \alpha_6 \text{Zona}_i + \varepsilon_{1i}$
- (2) Salud Mental_i = $\beta_0 + \beta_1 \text{NoSexo}_i + \beta_2 \text{Edad}_i + \varepsilon_{2i}$

Modelo II.

$$(1) \text{ Índice de ideología valórica (IIV)}_i = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ Salud Mental}_i + \alpha_2 \text{ Educación}_i + \alpha_3 \text{ Ingreso}_i + \alpha_4 \text{ Edad}_i + \alpha_5 \text{ Género}_i + \alpha_6 \text{ Zona}_i + \varepsilon_{1i}$$

$$(2) \text{ Salud Mental}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{ NoSexo}_i + \beta_2 \text{ Edad}_i + \varepsilon_{2i}$$

La variable Salud Mental es ordinal (0 al 6) y representa la intensidad de problemas que tiene cada ciudadano. Los problemas analizados fueron: ansiedad o nerviosismo, dificultad para dormir o insomnio, sentirse con alguna forma de tristeza o desánimo frecuente, sentirse con estrés o sobrecarga, depresión diagnosticada o sentimientos persistentes de vacío o sentimiento en algún momento que la vida no vale la pena o que preferiría no seguir viviendo.

Fase 4: Modelo de votación

Finalmente, para evaluar si los problemas de salud mental tienen un efecto sobre el comportamiento electoral, se estimó un modelo logit probabilístico. La variable dependiente fue dicotómica, donde 1 indica haber votado por Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales y 0 en caso contrario. El modelo estimado fue el siguiente:

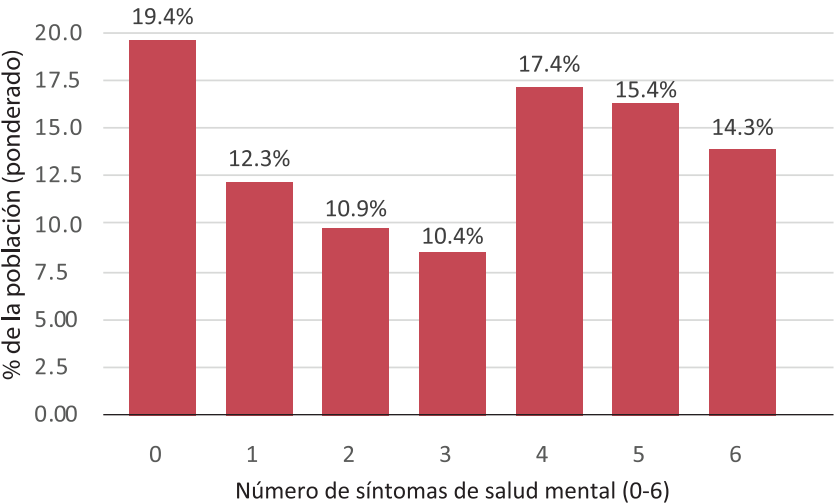
$$\text{Pr (Voto}_i = \text{Sheinbaum)} = f (\text{SaludMenta}_i, \text{AlienaciónTemporal}_i, \text{Educación}_i, \text{Ingreso}_i, \text{Edad}_i, \text{Género}_i, \text{Zona}_i).$$

4. Resultados: mapas del malestar y sus traducciones políticas

4.1 Generaciones en desasosiego: desigualdades sociales y salud mental

El punto de partida es un panorama general ya alarmante. En la Ciudad de México, alrededor de 7 de cada 10 personas reportan estrés (69 %) y 6 de cada 10 ansiedad (60 %), mientras que 55 % declara insomnio y 55 % tristeza frecuente. Cerca de 3 de cada 10 mencionan síntomas de depresión (29 %) y la sensación de que la vida carece de sentido (29 %). Es decir, el malestar psicosocial no es una experiencia marginal, sino una condición ampliamente extendida.

Gráfico 1. Distribución de la intensidad de malestar psicosocial, CDMX 2025



La distribución por intensidad refuerza esta lectura: sólo 19,4 % de la población no presenta ningún síntoma, mientras que casi la mitad (47,1 %) acumula cuatro o más de los seis problemas de salud mental analizados. No estamos frente a molestias aisladas, sino ante síndromes de malestar compuesto, donde estrés, ansiedad, insomnio y tristeza tienden a coexistir con síntomas más graves de depresión e ideas de vacío vital.

Juventud: una generación saturada de síntomas

En este mapa general, las juventudes se ubican nítidamente en el epicentro del malestar psicosocial. Entre las y los jóvenes de 15 a 29 años, casi ocho de cada diez declaran ansiedad (78,6 %) y una proporción similar reporta estrés (83,8 %), cifras que más que duplican las observadas entre las personas mayores de 60 años (33,4 % y 39,5 %, respectivamente. Del mismo modo, la tristeza persistente afecta al 72,5 % de este grupo frente al 32,1 % de los mayores, mientras que el insomnio alcanza al 67,6 % de las y los jóvenes en contraste con el 38,9 % en el tramo de 60 años o más. Los síntomas más graves tampoco son marginales: la depresión se presenta en 38,7 % de quienes tienen entre 15 y 29 años (frente a 15,5 % en las personas mayores) y la sensación de que la vida carece de sentido afecta a 41,6 % de las y los jóvenes, casi cuatro veces más que en el grupo de 60+ (10,8 %). En conjunto, estas cifras dibujan una generación que transita la entrada a la adultez bajo una carga desproporcionada de malestar, muy superior a la que reportan quienes ya atravesaron el ciclo vital.

Tabla 1. Prevalencia de problemas de salud mental según grupo de edad (CDMX, 2025)

	15 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Ansiedad	78.6	71	48.4	33.4
Insomnio	67.6	55.9	52.3	38.9
Tristeza	72.5	62.7	44.4	32.1
Estrés	83.8	79.7	65.8	39.5
Depresión	38.7	37.4	21.1	15.5
Vida sin sentido	41.6	37.3	19.8	10.8

La brecha generacional es brutal: para casi todos los síntomas, las y los jóvenes duplican —o más— las prevalencias de las personas mayores. También el grupo de 30 a 44 años presenta niveles muy altos (por ejemplo, 71 % de ansiedad, 79,7 % de estrés, 62,7 % de tristeza), aunque algo por debajo del segmento más joven. A partir de los 45 años se observa una caída marcada: la ansiedad baja a 48,4 % y la tristeza a 44,4 %, y entre los mayores de 60 los indicadores se sitúan en torno a un tercio de la población.

Estos datos permiten hablar de una “juventud cansada” y sobreexpuesta al mal-estar psicosocial. Lejos de la imagen clásica de la juventud como etapa de expansión vital, lo que aparece aquí es una generación que entra a la vida adulta bajo altas cargas de estrés, ansiedad, sentimientos de vacío y pérdida de sentido, en un contexto de precariedad laboral, encarecimiento de la vivienda, inseguri-

dad y sobreexposición a las redes digitales. El malestar no es sólo una experiencia íntima, sino la forma subjetiva en que se procesa un orden social que ofrece pocas certezas materiales y simbólicas.

Desigualdades sociales del malestar: género, clase, ingresos, territorio

El componente generacional se entrelaza con desigualdades estructurales muy claras.

Género. Las mujeres concentran sistemáticamente más síntomas que los hombres. La ansiedad alcanza al 66,7 % de las mujeres frente al 52,9 % de los hombres; el insomnio al 61,2 % versus 48 %; la tristeza al 60,8 % versus 48,4 %; y el estrés al 76 % frente al 62,3 %. La sensación de vida sin sentido es casi el doble entre mujeres (37,4 %) que entre hombres (19,8 %). Es decir, la “juventud cansada” tiene un rostro marcadamente femenino, coherente con la sobrecarga de cuidados, la violencia de género y la precariedad laboral que soportan muchas mujeres jóvenes.

Ingresos. El gradiente por ingreso es igualmente nítido. En el estrato de ingreso bajo, el 70,3 % reporta ansiedad, el 64,9 % insomnio, el 62,2 % tristeza y el 76,1 % estrés; además, 40,4 % declara síntomas de depresión y 34,2 % la sensación de vida sin sentido. En el extremo opuesto, entre quienes tienen ingresos altos, la ansiedad baja a 50,9 %, el insomnio a 44,8 %, la tristeza a 48 %, y la depresión a 22,3 %; la vida sin sentido afecta a 23,5 %. Las brechas son de 15 a 20 puntos porcentuales para muchos indicadores. El malestar psicosocial aparece así estratificado por capacidad de ingresos: cuanto menor el ingreso, mayor la probabilidad de acumular síntomas.

Clase social. La desigualdad se vuelve aún más dramática al mirar la autoidentificación de clase. En la clase baja, el 78,4 % declara ansiedad, el 79,6 % tristeza y el 84,9 % estrés; casi la mitad (47,9 %) reporta depresión y más de la mitad (52,7 %) la sensación de vida sin sentido. En el otro extremo, la clase alta presenta valores muy inferiores: 8,5 % en ansiedad y tristeza, 29,9 % en estrés, 2,8 % en depresión y 0 % en vida sin sentido. La distancia entre la clase baja y la alta en, por ejemplo, “vida sin sentido” es de más de 50 puntos porcentuales. Difícil encontrar una imagen más clara de cómo la estructura de clase se inscribe en el cuerpo y en la psique.

Territorio. También existe un marcado clivaje territorial. La zona Oriente —la más popular y precarizada— concentra los peores indicadores: 69,1 % de ansiedad, 71,6 % de insomnio, 64,6 % de tristeza, 77,1 % de estrés, 39,7 % de depresión y 32,8 % de vida sin sentido. Ninguna de las otras zonas (Norte, Sur, Poniente) alcanza estos niveles de acumulación de síntomas; en ellas la ansiedad se sitúa en torno al 57–62 % y la depresión en torno al 29–32 %. El mapa del malestar mental reproduce, casi punto por punto, el mapa de la desigualdad urbana: allí donde hay más carencias materiales, hacinamiento, tiempos de traslado y violencia, también hay más ansiedad, insomnio, tristeza y desesperanza.

Juventud en las intersecciones de la desigualdad

Si ponemos todo esto junto, emerge una figura especialmente vulnerable: jóvenes, mujeres, de clase baja o de ingresos bajos, residentes en la zona Oriente. Si bien por tamaño de muestra no se realiza las intersecciones entre edad, género, clase y territorio, pero las tendencias sugieren que quienes se ubican en esas intersecciones acumulan múltiples desventajas superpuestas.

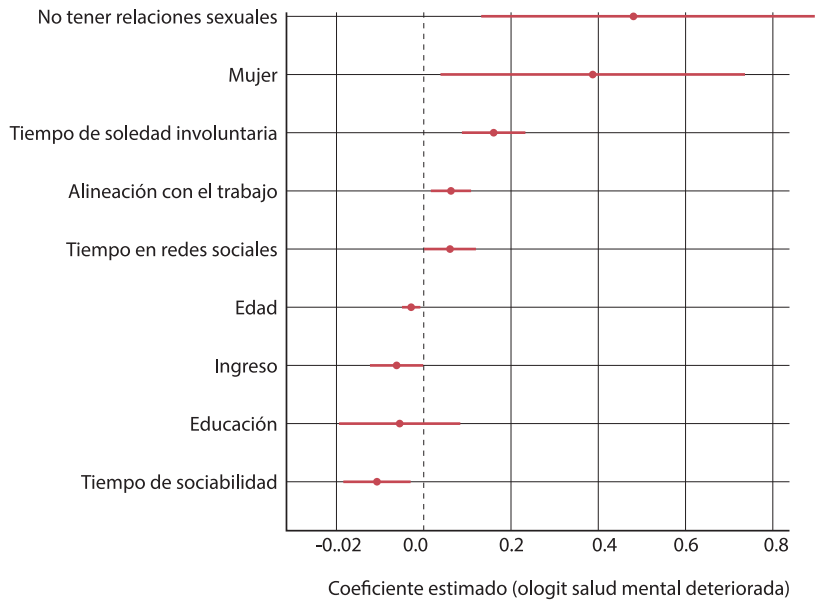
La juventud aparece así como el sector que ingresa a la vida adulta con una carga desproporcionada de malestar psicosocial, y esa carga se profundiza cuando se combina con desigualdades de clase, ingreso, género y territorio. Más que un problema “individual”, los datos dibujan una estructura de sufrimiento social: el malestar mental como forma en que se experimenta, en primera persona, un orden que distribuye de manera desigual el tiempo, la seguridad, las oportunidades y el reconocimiento.

Este punto es clave para el hilo conceptual del capítulo: la salud mental no puede leerse como un conjunto de “trastornos” aislados, sino como un termómetro de la injusticia social y, en el caso de las juventudes, como un indicador de hasta qué punto la transición a la adultez se ha vuelto una experiencia atravesada por la precariedad, el miedo y la sensación de futuro bloqueado.

5. Tiempo, soledad, vínculos sexoafectivos y clase: determinantes estructurales del malestar psicosocial

Antes de estimar el sistema de ecuaciones simultáneas, se desarrolló un modelo específico orientado exclusivamente a analizar los factores asociados al malestar psicosocial. El objetivo no es “psicologizar” el problema, sino precisamente lo contrario: mostrar, con mayor resolución, cómo se inscribe en una trama de tiempos sociales, vínculos y posiciones estructurales. Para ello se utilizó como variable dependiente una medida ordinal de intensidad de problemas de salud mental, con siete niveles (0–6) que combinan ansiedad, insomnio, tristeza, estrés, depresión y sensación de que la vida no tiene sentido. El modelo estimado es un logit ordinal, lo que permite analizar cómo distintos factores aumentan o reducen la probabilidad de ubicarse en categorías más altas de malestar.

Gráfico 2. Determinantes de la salud mental deteriorada: coeficientes del Modelo Ordinal Logístico, CDMX-2025



Nota: El modelo está controlado por variables territoriales.

Los resultados son elocuentes. Entre todas las variables, la de no tener relaciones sexuales destaca por la magnitud y robustez de su efecto: el coeficiente es de 0,49 ($p < 0,01$), el mayor del modelo. En términos de odds, esto implica que las personas que declaran no haber tenido relaciones sexuales recientes (o nunca) presentan aproximadamente un 60 % más de probabilidades de ubicarse en categorías superiores de malestar psicosocial, en comparación con quienes sí han tenido relaciones, manteniendo constantes las demás variables. Este hallazgo refuerza la hipótesis formulada en secciones previas: la abstinencia sexual no aparece aquí como una decisión autónoma aislada, sino como síntoma de una ecología de soledad y desconexión relacional. No se trata de moralizar la falta de actividad sexual, sino de constatar que, en el contexto urbano analizado, la ausencia de vínculos sexo-afectivos tiende a coexistir con mayores niveles de angustia, tristeza y vacío, en línea con estudios que subrayan el papel protector de las relaciones íntimas significativas sobre la salud mental (Carcedo et al., 2020; Vasilenko, 2016).

El segundo bloque de resultados refuerza la centralidad de la dimensión relacional y temporal. El tiempo de soledad involuntaria tiene un efecto positivo y altamente significativo ($\beta = 0,16$; $p < 0,001$): a mayor cantidad de tiempo pasado a solas que no se desea, mayor probabilidad de malestar. Simétricamente, el tiempo de sociabilidad presenta un coeficiente negativo y significativo ($\beta = -0,08$; $p < 0,01$), lo que indica que una mayor interacción cotidiana con otras personas reduce la probabilidad de situarse en los niveles más altos de deterioro psicosocial. Ambos efectos son de magnitud similar y apuntan en una misma dirección: lo decisivo no es únicamente “cuánto” se está solo, sino cómo se combina la soledad no elegida con la falta de espacios de sociabilidad densa. En términos estructurales, el modelo parece estar captando los efectos subjetivos de una organización social del tiempo marcada por largas jornadas, extensos desplazamientos, inseguridad en el espacio público y plataformas digitales que no logran compensar la erosión de los vínculos cara a cara.

La variable de tiempo en redes sociales muestra un coeficiente positivo de menor magnitud ($\beta \approx 0,04$) y sólo marginalmente significativo ($p \approx 0,10$); pero no deja de ser relevante dejar claro que más tiempo en redes más problemas de salud mental. En sí misma, la conexión a redes no aparece como el principal determinante del malestar (aunque lo es); su efecto es mucho más débil que el de la abstinencia sexual o el de la soledad involuntaria. Esto sugiere que las redes deben leerse más como parte de la ecología temporal de la soledad que como causa aislada: en los segmentos donde la vida cotidiana ofrece menos espacios de sociabilidad encarnada, las pantallas tienden a ocupar el centro de la escena, pero no logran revertir el déficit de vínculos significativos. La alienación con el trabajo también contribuye al deterioro psicosocial ($\beta = 0,046$; $p < 0,05$), aunque con un efecto más moderado: quienes perciben su trabajo como distante, sin sentido o meramente instrumental tienen algo más de probabilidad de ubicarse en categorías altas de malestar. Aquí aparecen ecos de las críticas clásicas al trabajo alienado y a la aceleración del tiempo social: la jornada que

“devora” el tiempo propio deja menos margen para vínculos, autocuidado y participación, y esa expropiación de tiempo se experimenta como malestar (Rosa, 2013).

Las variables sociodemográficas refuerzan la lectura estructural. La edad presenta un coeficiente negativo y muy significativo ($\beta = -0,034$; $p < 0,001$): con cada año adicional disminuye la probabilidad de ubicarse en los niveles más altos de malestar. Este resultado es coherente con lo ya observado en la sección de desagregación por edades: las juventudes concentran la mayor carga de síntomas, mientras que los grupos de mayor edad muestran menores prevalencias, posiblemente por trayectorias vitales más estabilizadas o por estrategias de afrontamiento acumuladas. El género también resulta significativo ($\beta = 0,38$; $p < 0,05$): las mujeres tienen una mayor probabilidad de reportar malestar psicosocial, lo que dialoga con la literatura que vincula la mayor carga de cuidados, la violencia de género y la precariedad laboral con niveles más altos de ansiedad y depresión entre ellas. En cambio, educación e ingreso tienen coeficientes negativos pero de baja significancia estadística: una vez que se incorporan variables de tiempo, soledad y alienación, las diferencias puramente económicas pierden fuerza explicativa en este modelo específico, lo que no significa que dejen de importar, sino que operan mediadas por la organización del tiempo y de los vínculos. No obstante, es importante reforzar la dirección del impacto de estas variables estructurales: los coeficientes negativos de educación e ingreso indican, en términos sustantivos, que quienes tienen menos años de estudio y menores ingresos son quienes concentran más problemas de salud mental. Es decir, el malestar psicosocial se distribuye de forma clasista: los sectores más pobres y con menor escolaridad tienden a ubicarse con mayor probabilidad en los niveles altos de deterioro.

En conjunto, el modelo ordinal permite extraer tres conclusiones principales. Primero, que el malestar psicosocial en la Ciudad de México no puede entenderse como un problema individual: está fuertemente asociado a formas de organización del tiempo y de la vida relacional que son estructurales —la soledad no elegida, la erosión de la sociabilidad y la experiencia de trabajos alienados— más que a rasgos puramente idiosincrásicos. Segundo, que la magnitud de los coeficientes muestra una jerarquía clara: la ausencia de vínculos sexo-afectivos y la soledad involuntaria pesan más en la probabilidad de deterioro que el tiempo en redes, confirmando que el núcleo del problema no son las tecnologías per se, sino la desestructuración de los lazos sociales en un sistema que devora la posibilidad de control del tiempo de la vida. Tercero, que estas dinámicas afectan de forma desigual a los grupos sociales: las mujeres y las personas jóvenes aparecen sobrerrepresentadas en los niveles más altos de malestar, lo que refuerza la necesidad de pensar políticas de salud mental que articulen tiempo, vínculos y justicia social, más que intervenciones centradas exclusivamente en el individuo.

6. Relaciones simultáneas entre malestar psicosocial e ideología de derecha autodeclarada

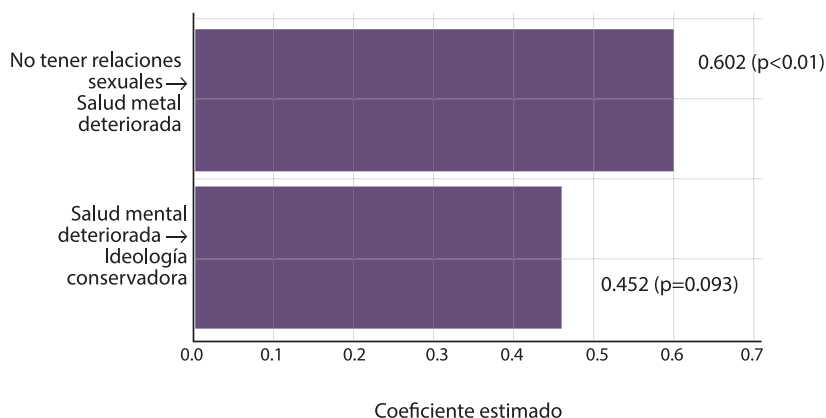
Los resultados del modelo ordinal de salud mental mostraron que el malestar psicosocial no es un rasgo individual aislado, sino la expresión subjetiva de una ecología social hecha de tiempos expropiados, soledad no deseada, vínculos sexo-afectivos erosionados y posiciones de clase desventajosas. El paso siguiente consiste en preguntarse cómo se inserta ese malestar en los circuitos de la ideología y del conflicto político. Para ello, en lugar de tratar la salud mental como simple variable explicativa o de control, se recurre a modelos de ecuaciones simultáneas, que permiten captarla como dimensión endógena y analizar sus relaciones encadenadas con la abstinencia sexual, la auto-ubicación izquierda-derecha y la adhesión o distancia frente a agendas igualitarias y democratizadoras.

Para leer los resultados del modelo 3SLS conviene partir de la lógica metodológica que lo organiza. El dispositivo de ecuaciones simultáneas parte de la idea de que la salud mental y la ideología política no son variables exógenas una respecto de la otra, sino dimensiones que se influyen reciprocamente: determinadas configuraciones ideológicas pueden moldear la forma en que se vivencian las tensiones de la vida cotidiana y, al mismo tiempo, ciertos perfiles de malestar psicosocial pueden hacer más verosímiles determinadas narrativas políticas. Al incorporar esta endogeneidad —y estimar las ecuaciones de manera encadenada mediante mínimos cuadrados en tres etapas (3SLS)— el modelo busca ir más allá de una simple regresión donde la ideología aparecería como “respuesta” pasiva a factores individuales. Se trata, en cambio, de captar un entramado de codeterminaciones entre sufrimiento psicosocial y orientación ideológica, manteniendo bajo control un conjunto de variables socioeconómicas cuya discusión detallada se desarrolla en otros capítulos del libro.

En la ecuación de ideología autodeclarada (escala izquierda-derecha), el resultado más relevante es el coeficiente positivo de la salud mental deteriorada. Aun cuando la significancia es estadísticamente confiable al 90 % ($p \approx 0,09$), la dirección permite concluir que a mayor deterioro del índice de salud mental, mayor auto-ubicación hacia la derecha, una vez controladas variables como educación, ingreso, género, edad y zona de residencia. Es decir, quienes acumulan más síntomas de estrés, ansiedad, insomnio, tristeza, depresión y vacío existencial tienden, en promedio, a declararse algo más conservadores. El modelo no autoriza una lectura causal fuerte, pero sí sugiere que el malestar psicosocial

puede “inclinarse la balanza” ideológica en el sentido que plantea la teoría de la justificación del sistema: bajo condiciones de amenaza e incertidumbre, parte del sufrimiento no se traduce en demandas de igualdad, sino en búsquedas de orden, seguridad y continuidad del marco conocido (Jost & Banaji, 1994; Jost et al., 2004; Jost, 2019).

Gráfico 3. Relaciones encadenadas entre sexualidad, salud mental e ideología derecha autodeclarada



- (1) No tener relaciones sexuales → Salud mental deteriorada
- (2) Salud mental deteriorada → Ideología de derecha (autodeclarada)

La edad introduce un matiz adicional. El coeficiente es positivo y cercano al umbral convencional de significancia, lo que indica que, a medida que se avanza en el ciclo vital, aumenta ligeramente la propensión a situarse hacia la derecha. Este resultado dialoga con una literatura que describe procesos de “conservadurización” gradual asociados a la acumulación de patrimonio, responsabilidades familiares y trayectorias laborales más estabilizadas, aunque el efecto encontrado aquí es moderado y debe leerse con cautela. El resto de variables socioeconómicas incluidas en el modelo (tipo de institución educativa, nivel de ingresos, género, territorio) se utilizan como controles en esta ecuación, pero su análisis sustantivo se desarrolla con mayor profundidad en secciones específicas del libro.

La segunda ecuación del sistema modela el malestar psicosocial como función de la abstinencia sexual y la edad. Aquí el resultado es más robusto: el coeficiente de no tener relaciones sexuales sobre el índice de salud mental deteriorada es positivo y estadísticamente muy significativo. En términos sustantivos, esto indica que quienes declaran no haber tenido relaciones sexuales en el período considerado presentan, en promedio, mayores niveles de síntomas (estrés, ansiedad, insomnio, tristeza, depresión, sensación de vacío) que quienes sí han tenido relaciones, controlando por la edad. El modelo no permite distinguir entre abstinencia electiva y abstinencia vivida como carencia, ni autoriza a

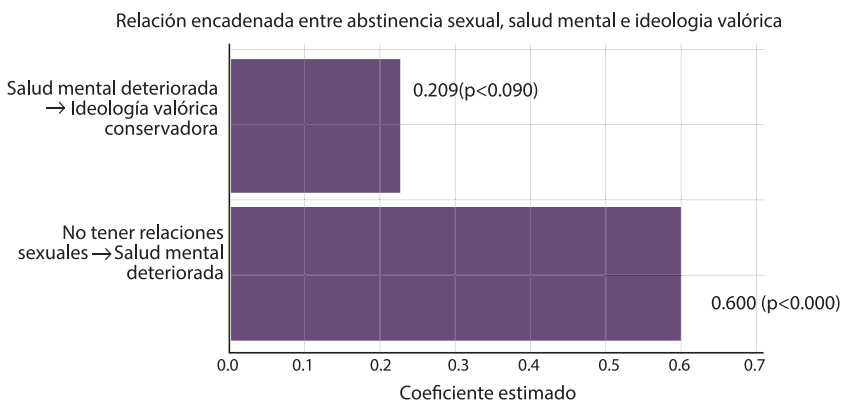
“moralizar” la falta de actividad sexual; lo que capta es que, en el contexto concreto de la Ciudad de México, la ausencia de vínculos sexo-afectivos suele ir asociada a una ecología más amplia de soledad, aislamiento y baja densidad relacional, coherente con la literatura que vincula calidad de los vínculos íntimos y bienestar psíquico. La edad aparece nuevamente con un efecto negativo: las generaciones mayores tienden a reportar un malestar algo menor, lo que sugiere que la combinación de abstinencia, precariedad y soledad golpea con especial fuerza a los segmentos más jóvenes.

En conjunto, el sistema de ecuaciones simultáneas permite sostener, con todos los recaudos, que la ideología autodeclarada y la salud mental forman parte de un mismo circuito: la abstinencia sexual y la soledad contribuyen al deterioro psicosocial, y este malestar, a su vez, se vincula con una mayor auto-ubicación hacia la derecha, todo ello enmarcado en trayectorias generacionales diferenciadas y en estructuras de desigualdad que son analizadas en detalle en otros capítulos.

En el segundo modelo de ecuaciones simultáneas cambiamos la forma de captar la orientación política: en lugar de la auto-ubicación en la escala izquierda-derecha, utilizamos un índice de ideología valórica conservadora/neoliberal. Este índice se construye a partir de ítems que captan actitudes anti-igualitarias, antifeministas, antiecológicas, punitivas y poco comprometidas con los derechos humanos y la democracia, de modo que valores altos indican un mayor alejamiento de las agendas defendidas por movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo, los movimientos por la diversidad sexual o las organizaciones de derechos humanos. Lo que se analiza, por tanto, ya no es cómo se nombra ideológicamente el sujeto, sino qué posición adopta frente a conflictos concretos de igualdad y derechos.

En este marco, el coeficiente de salud mental deteriorada sobre el índice valórico es nuevamente positivo y cercano al umbral de significancia (0,209; $p \approx 0,09$). La dirección vuelve a ser consistente con la hipótesis general del capítulo: quienes acumulan más síntomas de estrés, ansiedad, insomnio, tristeza, depresión y vacío vital tienden, en promedio, a ubicarse en posiciones más conservadoras en términos de valores; es decir, se alejan de la defensa de la igualdad de género, los derechos de las disidencias sexuales, la protección ambiental o la profundización democrática. De nuevo, no se trata de una prueba causal concluyente, pero sí de un indicio fuerte de que el malestar psicosocial no sólo se relaciona con cómo las personas se auto-definen en la escala izquierda-derecha, sino también con cómo procesan normativamente los conflictos distributivos y de reconocimiento. Las teorías de la justificación del sistema y de la dominancia social ayudan a leer este resultado: bajo condiciones de amenaza y desasosiego, parte de la población puede encontrar más tranquilizador reafirmar jerarquías de género, clase o raza que cuestionarlas.

Gráfico 4. Relaciones encadenadas entre sexualidad, salud mental e ideología conservadora/neoliberal



- (1) No tener relaciones sexuales → Salud mental deteriorada
- (2) Salud mental deteriorada → Ideología conservadora/antidemocrática

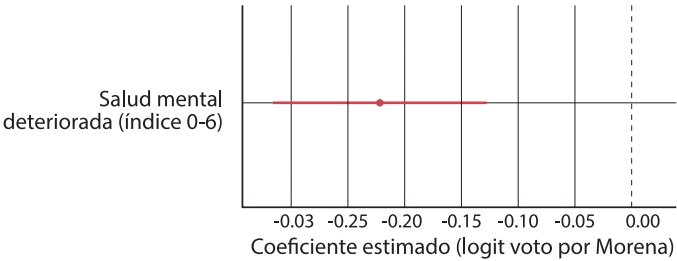
La ecuación de salud mental del sistema se mantiene inalterada: no tener relaciones sexuales aparece asociado de manera fuerte y significativa con un mayor deterioro del índice de salud mental, y la edad con menores niveles de malestar en los grupos mayores. Al encadenar ambas ecuaciones, el modelo sugiere —con todos los recaudos— una trayectoria posible: la abstinencia sexual, en un contexto de soledad y precariedad relacional, contribuye al malestar psicosocial; y este malestar, a su vez, se vincula con una mayor adhesión a valores conservadores y antidemocráticos, que se distancian de las agendas feministas, ecologistas o de derechos humanos. No es que “la falta de sexo produzca conservadurismo”, sino que determinados arreglos de vínculos, soledad y sufrimiento psíquico terminan expresándose en disposiciones normativas menos favorables a la igualdad y a la ampliación de derechos.

En términos interpretativos, la principal aportación de este segundo modelo frente al de ideología autodeclarada es que desplaza la mirada del rótulo ideológico al contenido de las posiciones morales y políticas, mostrando que el malestar psicosocial se conecta no sólo con “sentirse” de izquierda o derecha, sino con aceptar o resistir las agendas igualitarias y democratizadoras en campos clave (género, sexualidad, ecología, derechos humanos). Esto permite matizar la lectura del vínculo entre salud mental e ideología: no todas las personas que se declaran de derecha sostienen valores fuertemente antidemocráticos, ni todas las que se dicen de izquierda apoyan de manera coherente las luchas feministas o ecologistas; sin embargo, el deterioro de la salud mental sí parece empujar, en promedio, hacia configuraciones de valores que naturalizan más las jerarquías y son menos receptivas a los movimientos sociales, especialmente en ciertos segmentos generacionales y territoriales que el resto del libro analiza con mayor detalle.

6.1. Malestar psicosocial y voto por Morena en la elección presidenciales de 2024 (CDMX)

Diversos estudios de psicología moral han mostrado que las orientaciones ideológicas no sólo ordenan preferencias económicas, sino también la amplitud del círculo moral: quién es considerado “digno” de cuidado, protección y derechos. Waytz, Iyer, Young, Haidt y Graham (2019) muestran que, en promedio, las posiciones progresistas tienden a expandir ese círculo hacia colectivos más amplios —pobres, migrantes, minorías sexuales, no humanos— mientras que las posiciones conservadoras tienden a contraerlo hacia núcleos más estrechos y jerarquizados (familia, nación, “gente como uno”). Este marco resulta especialmente sugerente para leer la disputa electoral en la Ciudad de México: el voto por Morena no remite sólo a una evaluación instrumental de políticas públicas, sino también a la adhesión (o no) a un proyecto nacional–popular que busca ampliar el campo de los sujetos considerados parte legítima del “pueblo” y beneficiarios de la redistribución. Analizar el vínculo entre malestar psicosocial y voto oficialista implica entonces preguntar no sólo quién está más cansado o más ansioso, sino cómo ese cansancio se traduce en apoyos diferenciales a proyectos que pretenden expandir o, por el contrario, restringir el círculo de los incluidos en la comunidad política.

Gráfico 5. Efecto de la salud mental deteriorada sobre la probabilidad de votar por Morena, CDMX-2025



Para responder a esta pregunta, se estimó un modelo probabilístico donde la variable dependiente es el voto por Claudia Sheinbaum/Morena en la elección presidencial de 2024. El predictor central es el índice ordinal de salud mental deteriorada (0–6), que mide la acumulación de síntomas de ansiedad, estrés, insomnio, tristeza, depresión y sensación de que la vida no tiene sentido. El modelo incorpora como controles un conjunto de variables socioeconómicas (género, ingreso, edad y educación); su comportamiento detallado se analiza en otros capítulos, de modo que aquí el foco se coloca en el impacto del malestar psicosocial sobre la votación.

El resultado central es nítido. El coeficiente de la variable de salud mental es negativo, de magnitud apreciable y estadísticamente muy significativo ($\beta = -0,216$; $p < 0,001$). En términos de odds, cada punto adicional en el índice de

malestar —es decir, cada síntoma extra entre los seis considerados— reduce aproximadamente en un 20 % la probabilidad relativa de votar por Morena, manteniendo constantes género, edad, ingreso y educación. Dicho de otro modo: entre dos personas con características socioeconómicas similares, aquella que acumula más síntomas de ansiedad, estrés, tristeza, insomnio, depresión o vacío vital tiene menos probabilidad de haber apoyado al oficialismo. El malestar psicosocial aparece, así, como un factor que erosiona el voto a la continuidad del proyecto nacional-popular.

En términos teóricos, estos resultados pueden leerse como una forma de traducción política del malestar psicosocial. A medida que las personas acumulan ansiedad, estrés y sensación de incertidumbre prolongada, aumenta la necesidad de encontrar marcos ideológicos que ofrezcan orden, sentido y explicaciones estables de la experiencia cotidiana. La literatura de psicología política señala que, bajo amenaza, una parte de ese malestar se canaliza hacia proyectos que prometen restablecer el control mediante jerarquías más claras, nacionalismos excluyentes o discursos de “ley y orden”, mientras que otra parte puede orientarse hacia demandas de solidaridad y protección colectiva cuando la injusticia se vuelve el eje de interpretación dominante (Jost et al., 2017). Nuestros datos sugieren que, en el caso de la Ciudad de México, el malestar psicosocial tiende más bien a debilitar el apoyo al proyecto nacional-popular de Morena y a hacer más verosímiles posiciones conservadoras, sin que ello implique una conversión automática al autoritarismo. Lo que se observa es un terreno subjetivo más fértil para discursos que prometen certezas rápidas frente al desasosiego, en tensión con las promesas igualitarias y redistributivas del oficialismo. El mismo malestar que podría alimentar indignación igualitaria puede, si no encuentra organización y horizonte, volverse desconfianza hacia la política y apertura a soluciones de “orden” frente a la fatiga y el cansancio vital.

7. Malestar psicosocial y crisis estructural: disputas por el tiempo, el futuro y la democracia

Leído en una perspectiva de larga duración, el mapa de malestar psicosocial reconstruido en este capítulo no es un accidente coyuntural, sino el síntoma subjetivo de una crisis estructural que se arrastra al menos desde la ruptura de 1973. La combinación de estancamiento, financiarización y reestructuración neoliberal que siguió a la crisis del petróleo inauguró una onda larga marcada por la flexibilización del trabajo, la desprotección social y la mercantilización de la vida cotidiana. A ello se sumó, desde 2008, una secuencia de crisis cortas pero recurrentes —financiera, sanitaria, de seguridad— y un progresivo desgaste de la hegemonía global que ha dejado a buena parte de las sociedades atrapadas en un régimen de “estabilidad inestable”: sin promesas creíbles de movilidad social ascendente, pero con una intensa presión a la competitividad individual.

A diferencia de la crisis de entreguerras, que pudo procesarse —en el Norte global— mediante pactos redistributivos keynesianos y la ampliación del Estado social, la constelación actual está atravesada por una crisis civilizatoria que pone en cuestión los propios límites biofísicos del capitalismo. El agotamiento de recursos, el cambio climático y la destrucción de territorios imponen restricciones materiales que vuelven cada vez menos verosímil la promesa moderna de crecimiento ilimitado y bienestar expansivo. No solo se agotan las bases materiales del compromiso fordista, sino que se erosiona el núcleo mismo de la interpelación al sujeto moderno: la idea de que “si te esfuerzas, tendrás un futuro mejor”. En ese marco, el malestar psicosocial que registramos en la Ciudad de México puede leerse como la forma íntima que adopta esta crisis de expectativas: una experiencia extendida de tiempo bloqueado, de futuro hipotecado y de vidas que sienten que avanzan sin horizonte.

Este capítulo se sitúa precisamente en ese cruce entre crisis de acumulación, crisis de reproducción social y crisis ecológica. Muestra cómo, en una gran metrópoli latinoamericana, esa triple fractura se condensa en cuerpos y subjetividades: jornadas extensas y fragmentadas, soledad no elegida, vínculos sexo-afectivos erosionados, precariedad laboral, miedo en el espacio público y territorios atravesados por la desigualdad y la violencia. La salud mental aparece así no como un problema individual, sino como un lenguaje privilegiado de la crisis civilizatoria: ansiedad, insomnio, tristeza, depresión y sensación de vida sin sentido como modos de nombrar, desde la experiencia cotidiana, un orden que ha dejado de ofrecer garantías mínimas de seguridad material, reconocimiento y tiempo propio.

En conjunto, los resultados empíricos y el marco teórico permiten sostener que la salud mental, lejos de ser un epifenómeno privado, se ha convertido en uno de los lenguajes centrales a través de los cuales se experimenta y se disputa la crisis de la democracia en la Ciudad de México. El mapa del malestar psicosocial que aquí se ha reconstruido es nítido: una “juventud cansada” y saturada de síntomas, un rostro marcadamente femenino del sufrimiento, una profunda estratificación de clase e ingresos y una fuerte concentración territorial del malestar en las zonas más pobres y precarizadas. La evidencia muestra que este malestar no se explica principalmente por rasgos individuales, sino por la organización social del tiempo y de los vínculos: soledad involuntaria, erosión de la sociabilidad densa, trabajos vividos como alienados y ausencia de vínculos sexo-afectivos significativos pesan más que las simples diferencias de ingreso. En otras palabras, la salud mental aparece como un índice condensado de una estructura del tiempo que expone capacidad de vida buena.

Los modelos de ecuaciones simultáneas añaden una capa decisiva a esta lectura. Al tratar la salud mental y la ideología como dimensiones mutuamente influyentes, permiten ver que el malestar psicosocial no se limita a acompañar pasivamente las orientaciones políticas, sino que entra en su propia textura. La asociación entre abstinencia sexual y deterioro psíquico, y de éste con mayor auto-ubicación a la derecha y con valores más conservadores y antidemocráticos, sugiere la existencia de circuitos en los que la soledad, el aislamiento y la fatiga vital se traducen en disposiciones más receptivas a narrativas de orden, jerarquía y castigo. Esto no quiere decir que “la falta de sexo produzca conservadurismo”, ni que las personas con peor salud mental estén condenadas a abrazar proyectos autoritarios, sino que determinados arreglos de tiempo, vínculos y clase hacen más verosímil el cierre del círculo moral: se restringe quién cuenta como “nosotros”, quién merece cuidado, derechos y redistribución, y se vuelve más aceptable la idea de que ciertos grupos pueden ser sacrificables o desechables.

El análisis del voto por Morena muestra que estos procesos no se agotan en el plano de las actitudes, sino que tocan el corazón de la disputa electoral. El hallazgo de que cada síntoma adicional de malestar reduce de manera apreciable la probabilidad de votar por el oficialismo indica que una parte del desasosiego social se traduce en distanciamiento respecto de un proyecto nacional-popular que busca ampliar la comunidad política y el campo de los sujetos con derecho a la redistribución. El mismo malestar que podría alimentar indignación igualitaria y demandas de profundización democrática puede también devenir desconfianza hacia la continuidad, fatiga con “la política” y apertura a soluciones que prometen orden rápido frente al cansancio y la incertidumbre. Desde esta perspectiva, la Cuarta Transformación aparece situada en una tensión estructural: se propone ensanchar el círculo moral —reconocer como “pueblo” a quienes antes fueron tratados como sobrantes— en un contexto donde amplios sectores viven la política desde la ansiedad, la sobrecarga y la sensación de futuro bloqueado.

Si se toma en serio esta lectura, las implicancias de política pública desbordan el campo sanitario. No basta con aumentar la oferta de servicios clínicos o con campañas de sensibilización sobre la depresión: se trata de intervenir sobre las gramáticas del tiempo y de los vínculos que producen malestar. Ello implica, entre otras cosas, políticas de reducción de jornadas y tiempos de traslado; una reorganización social de los cuidados que descargue a las mujeres; estrategias urbanas que reconstruyan espacios de encuentro seguros y accesibles, sobre todo para juventudes populares; y dispositivos de salud mental comunitaria que trabajen el sufrimiento como experiencia compartida, no como falla individual. Significa también pensar la disputa por la igualdad —salarial, de cuidados, de reconocimiento de identidades subalternas— como disputa por ampliar el círculo moral en condiciones de miedo y agotamiento, reconociendo que, si ese malestar no encuentra cauces igualitarios, puede ser capitalizado por proyectos que prometen seguridad a costa de derechos.

Este capítulo ha buscado, en suma, mostrar que la salud mental es hoy un terreno privilegiado para leer las tensiones entre neoliberalismo, proyectos nacional-populares y derechas recargadas. El malestar psicosocial funciona a la vez como síntoma de un orden que expropia tiempo y vínculos, como recurso para justificar jerarquías bajo amenaza y como variable que incide en el apoyo o distancia hacia proyectos igualitarios. Escuchar ese malestar —sin patologizarlo ni romantizarlo— es condición para cualquier política progresista que aspire a ser algo más que administración de la crisis: supone hacer del tiempo, de la soledad y de la densidad de los vínculos no un daño colateral del desarrollo, sino un eje explícito de la democratización. Solo así la promesa de ampliar quién cuenta como pueblo y quién merece vivir bien podrá sostenerse frente a la fatiga, el miedo y la tentación de cerrar, una vez más, el círculo de los incluidos.

Apartado III

Conclusiones y nueva agenda de investigación



A manera de cierre

Disputar el mapa: dilemas para el proyecto de transformación

1. Agenda pendiente: redistribución, orden y tiempo

Los resultados presentados a lo largo de este libro permiten afirmar que el proyecto político encabezado por Morena en la Ciudad de México se asienta sobre una base social amplia, pero profundamente heterogénea, atravesada por tensiones que no se expresan necesariamente como oposición frontal, sino como ambivalencias, desplazamientos parciales y reconfiguraciones silenciosas de la subjetividad política.

Lejos de un escenario de polarización dura, lo que emerge es un mapa de apoyos selectivos, consensos fragmentados y lealtades contingentes que plantean un desafío central: la sostenibilidad del proceso político no depende únicamente de su capacidad electoral inmediata, sino de su aptitud para reorganizar las condiciones materiales y simbólicas que estructuran la experiencia cotidiana de amplios sectores sociales.

Esta preocupación no surge en el vacío. La historia reciente de América Latina ofrece una advertencia clara: varios gobiernos progresistas que alcanzaron niveles muy altos de legitimidad social y respaldo electoral terminaron enfrentando, pocos años después, un giro político adverso y el ascenso de fuerzas conservadoras o reaccionarias.

Casos como el de Rafael Correa en Ecuador en 2013, el kirchnerismo en Argentina tras su ciclo de mayor expansión redistributiva, el PT en Brasil antes del triunfo de Bolsonaro o el MAS en Bolivia luego de casi dos décadas de hegemonía muestran que la cúspide de popularidad no garantiza, por sí misma, la sostenibilidad del proyecto. Morena atraviesa hoy una fase comparable a aquella que vivieron estos procesos en su momento de mayor fortaleza: un punto de consolidación material que convive, de manera latente, con fisuras subjetivas e ideológicas que no siempre son visibles en la superficie electoral.

El progresismo capitalino ha logrado avances sustantivos en materia de redistribución del ingreso, ampliación de derechos y reducción de la pobreza. Sin embargo, como muestran los capítulos precedentes, estos avances no se traducen de manera automática en una consolidación equivalente de adhesiones ideológicas ni en una internalización estable del sentido igualitario del cambio social. Por el contrario, una parte significativa de la ciudadanía —en particular la clase media urbana— experimenta simultáneamente mejoras objetivas y malestar subjetivo, apoyo a principios igualitarios y distanciamiento político, adhesión normativa y rechazo a instrumentos concretos de intervención estatal.

Este desfase no puede ser leído como un problema de comunicación, de pedagogía política o de “falta de conciencia”. Tampoco puede ser reducido a un asunto psicológico o clínico, desligado de las condiciones sociales. El análisis empírico sugiere que se trata de una tensión estructural, vinculada a la forma específica que adopta la redistribución y a los tipos de experiencia social que esta produce. No es lo mismo redistribuir ingresos que redistribuir poder; no es lo mismo recibir recursos que ganar autonomía; no es lo mismo ampliar derechos que transformar las relaciones materiales que organizan la seguridad económica, el tiempo disponible, la estabilidad vital y el reconocimiento social. Allí donde la mejora material no se traduce en mayores márgenes de control sobre la propia vida, el bienestar puede convivir con el malestar y la igualdad puede ser vivida como frágil, reversible o incluso amenazante.

En este punto, el libro muestra con claridad que el malestar psicosocial constituye una agenda política central. No se trata de un problema de subjetividad individual ni de un fenómeno explicable en clave terapéutica, sino de un malestar socialmente producido, anclado en condiciones materiales específicas: precariedad persistente, presión temporal, inseguridad económica, soledad relacional y desgaste cotidiano. La alienación y los problemas de salud mental evidencian que este malestar tiene efectos ideológicos concretos, moldeando percepciones del presente, evaluaciones retrospectivas y disposiciones políticas. Ignorar esta dimensión implica dejar intacto uno de los principales vectores contemporáneos de desplazamiento ideológico.

Un elemento adicional que atraviesa de manera transversal los resultados del libro es la forma en que ciertas agendas de igualdad, aun gozando de amplios consensos normativos, producen adhesiones políticas desiguales cuando se traducen en instrumentos concretos de intervención estatal. Las evidencias muestran que es posible sostener principios igualitarios en abstracto —en materia de derechos, reconocimiento o justicia— y, al mismo tiempo, manifestar resistencias frente a mecanismos que redistribuyen poder, visibilizan asimetrías o alteran gramáticas meritocráticas profundamente arraigadas.

Esta tensión no remite a un rechazo frontal de la igualdad, sino a una disputa más sutil sobre cómo se construye la justicia, quién la encarna y bajo qué condiciones es percibida como legítima. En ese sentido, por ejemplo, las agendas de

género funcionan como un espejo ampliado de los dilemas del progresismo: revelan que la sostenibilidad política de los procesos transformadores no depende solo de ampliar derechos, sino de articularlos con experiencias materiales de autonomía, reconocimiento y estabilidad que eviten que la igualdad sea vivida como imposición, privilegio ajeno o amenaza simbólica.

En este marco, el libro identifica al menos tres nudos estratégicos que el progresismo enfrenta si aspira a sostener y ampliar su base social en el mediano plazo. El primero remite a la redistribución. Los datos muestran una aceptación mayoritaria de la igualdad como principio, combinada con resistencias persistentes frente a mecanismos que hacen visible la redistribución del poder, como las transferencias monetarias o las políticas de acción afirmativa. Este patrón sugiere que una parte del malestar no se dirige contra la igualdad en abstracto, sino contra modalidades de redistribución que no rompen relaciones estructurales de dependencia y que, al mismo tiempo, no producen experiencias duraderas de autonomía material.

El segundo nudo se vincula con el orden y la seguridad. El libro muestra que las demandas de orden no constituyen, en sí mismas, un giro conservador, sino una respuesta a experiencias cotidianas de desprotección, saturación institucional y desgaste vital. En ausencia de una gramática progresista propia sobre el orden, estas demandas tienden a ser capturadas por discursos punitivos o autoritarios, incluso entre sectores que no rechazan el ideario igualitario. Disputar el orden desde una perspectiva democrática aparece así como una condición necesaria para evitar que el malestar social derive en soluciones reaccionarias.

El tercer nudo —y quizás el más decisivo— remite al tiempo y a la fractura generacional. El análisis revela un quiebre intergeneracional profundo en la forma de habitar el tiempo social. La juventud urbana aparece como un grupo particularmente atravesado por condiciones materiales precarizadas: trayectorias laborales inestables, ingresos insuficientes, sobreconexión digital, debilitamiento de los vínculos presenciales, soledad, mayores niveles de ansiedad y malestar psicosocial.

Se trata de generaciones que viven conectadas pero aisladas, activas pero exhaustas, formadas pero sin horizonte claro de estabilidad. Este régimen temporal precarizado discrimina el posicionamiento ideológico y tensiona la relación entre expectativas, presente y futuro, configurando subjetividades más volátiles y menos ancladas en lealtades políticas duraderas.

Plantear estos dilemas no implica desconocer los logros del proceso político, sino asumir que su continuidad depende de una segunda fase de transformación. Una fase en la que la agenda progresista no se limite a ampliar derechos o recursos, sino que avance sobre las condiciones materiales que producen inseguridad, dependencia y fragilidad subjetiva. La pregunta que queda abierta no es si el proyecto cuenta con legitimidad social —los datos muestran que la tiene—, sino qué tipo de agenda permitirá convertir esa legitimidad en una

base política más estable, capaz de resistir el desgaste, las narrativas reaccionarias y las tensiones propias de un proceso de cambio prolongado.

Desde esta perspectiva, el epílogo no propone respuestas cerradas, sino que busca abrir un debate estratégico. Los resultados del libro no deben leerse como un reproche cultural a la ciudadanía ni como un llamado a corregir subjetividades “equivocadas”, sino como una invitación a repensar las formas en que la redistribución, el orden, el tiempo y el cuidado del malestar social son gobernados. La sostenibilidad del proyecto progresista no depende de convencer a una sociedad errada, sino de transformar las condiciones materiales que hoy hacen posible que el bienestar conviva con el malestar y que la igualdad se experimente, al mismo tiempo, como promesa y como riesgo.

2. Lecciones para la militancia

Uno de los aprendizajes centrales que se desprenden de este libro es que las categorías clásicas con las que la militancia suele leer el campo social —clase media, sectores populares, juventud, progresistas, conservadores— resultan cada vez menos eficaces para comprender la dinámica real de las adhesiones, los desplazamientos y las fracturas del apoyo político. El escenario que emerge de la evidencia empírica no es el de identidades sólidas y coherentes, sino el de trayectorias sociales atravesadas por tensiones materiales y simbólicas que producen posicionamientos ambivalentes, a menudo contradictorios, y altamente sensibles a las experiencias cotidianas.

La primera lección para la militancia es, por tanto, abandonar la idea de que el apoyo político se organiza en bloques estables. Votar por un proyecto progresista no implica necesariamente compartir su horizonte ideológico de manera plena, del mismo modo que expresar valores igualitarios no garantiza una adhesión sostenida a las políticas que buscan materializarlos.

El libro muestra con claridad que una parte significativa de la ciudadanía combina apoyo electoral con malestar subjetivo, adhesión normativa con rechazo a instrumentos redistributivos, identificación parcial con el proyecto y distancia simbólica frente al Estado. Leer estas posiciones como incoherencias morales o como “falta de conciencia” conduce a errores estratégicos que debilitan la construcción de mayorías duraderas.

Una segunda lección es que el malestar no debe ser interpretado automáticamente como rechazación. En muchos casos, las demandas de orden, seguridad o estabilidad expresan experiencias reales de vulnerabilidad, saturación institucional y fragilidad material.

Cuando estas demandas no encuentran una respuesta progresista clara, tienden a ser capturadas por discursos punitivos o autoritarios que ofrecen soluciones simples a problemas complejos. La militancia pierde capacidad de intervención cuando reduce estas demandas a expresiones ideológicas conservadoras, en lugar de reconocerlas como síntomas de fallas estructurales en la provisión de bienestar, protección y previsibilidad.

El libro también advierte sobre un error recurrente: suponer que la ampliación de derechos genera, por sí misma, lealtad política. La evidencia muestra que los derechos pueden ser ampliamente aceptados en el plano normativo y, al mismo tiempo, vividos como frágiles, reversibles o ajenos cuando no se traducen en experiencias concretas de autonomía y reconocimiento. Para la militancia, esto

implica comprender que defender derechos no es solo garantizar su existencia formal, sino asegurar que su ejercicio sea materialmente accesible, estable y socialmente legitimado.

Otra lección clave se relaciona con la redistribución. Los datos sugieren que no toda redistribución produce el mismo efecto subjetivo. Allí donde la redistribución es percibida como externa, transitoria o dependiente, puede generar mejoras objetivas sin consolidar adhesiones políticas. En cambio, cuando las políticas públicas amplían la capacidad efectiva de las personas para controlar su tiempo, su trabajo y su reproducción cotidiana, tienden a fortalecer vínculos de pertenencia y confianza. Para la militancia, esto supone desplazar el foco desde la defensa abstracta de la redistribución hacia la discusión concreta sobre qué tipo de redistribución se implementa y qué relaciones sociales reproduce o transforma.

Asimismo, el libro muestra que el feminismo, lejos de funcionar como una identidad homogénea, opera como un conjunto de vectores que atraviesan de manera desigual a distintos grupos sociales. Existen consensos amplios en torno a ciertas agendas —como la corresponsabilidad en los cuidados o la condena de los feminicidios—, junto con resistencias persistentes frente a mecanismos que redistribuyen poder institucionalmente, como las cuotas. Para la militancia, esto implica evitar lecturas simplistas que equiparen feminismo con progresismo o que supongan alineamientos automáticos entre género, ideología y voto. Intervenir políticamente en este campo requiere reconocer la heterogeneidad de las apropiaciones feministas y disputar su sentido desde experiencias concretas de justicia y autonomía.

Finalmente, una de las lecciones más relevantes que deja este trabajo es la centralidad del tiempo como dimensión política. El desgaste cotidiano producido por los traslados, los cuidados no reconocidos, la burocracia y la precariedad del descanso emerge como un factor clave del malestar subjetivo. La militancia suele concentrarse en grandes consignas o debates programáticos, pero pierde capacidad de interpelación cuando no conecta esos horizontes con la organización concreta del tiempo de vida. Politizar el tiempo —hacer visible quién lo pierde, quién lo gana y bajo qué condiciones— aparece como una de las tareas estratégicas más importantes para reconstruir vínculos entre bienestar material y adhesión política.

En síntesis, las lecciones que se desprenden de este libro no apuntan a corregir a la ciudadanía, sino a afinar la lectura política del campo social. Gobernar y militar en contextos de transformación implica aprender a leer vectores más que identidades, procesos más que posiciones fijas, experiencias más que discursos. La construcción de mayorías duraderas no se juega en la pureza ideológica ni en la coherencia moral, sino en la capacidad de intervenir sobre las condiciones materiales que estructuran el malestar, el orden y la vida cotidiana. Desde esa perspectiva, la militancia no es solo transmisión de ideas, sino trabajo permanente de traducción entre proyectos políticos y experiencias sociales concretas.

3. Nueva agenda de investigación: lo que este estudio habilita.

Este libro no solo describe un estado de cosas: produce un conjunto de instrumentos —conceptuales, empíricos y estratégicos— que antes no estaban disponibles para leer la disputa política en la Ciudad de México con el nivel de precisión que exige el ciclo actual.

La agenda que se abre, por tanto, no es un apéndice externo, sino la prolongación natural de un hallazgo mayor: la redistribución material, por sí sola, no garantiza adhesión sostenida si no se convierte en experiencia pública vivible —tiempo recuperado, seguridad no punitiva, vínculos recomponibles, reconocimiento no jerárquico— y si no se enfrenta, en el terreno cotidiano, la producción de sentido común que organiza el miedo, el mérito y la autoridad.

La consecuencia inmediata de ese hallazgo es doble. En el plano analítico, obliga a abandonar las explicaciones totales —“la gente se derechizó”, “se impuso la guerra cultural”, “falló la redistribución”— y a sustituirlas por una pregunta más exigente: ¿qué mediaciones concretas convierten condiciones materiales y experiencias urbanas en orientaciones políticas, y bajo qué combinaciones esas mediaciones se vuelven estables?

En el plano estratégico, desplaza el centro de gravedad: ya no basta con inventariar políticas o medir preferencias; es necesario reconstruir los circuitos por los que se produce legitimidad, se erosiona lo público y se reorganiza el sentido común, porque es allí donde se decide si el malestar deriva en retirada, en punitivismo o en recomposición democrática.

Con ese propósito, la nueva agenda de investigación se ordena en torno a un principio simple: pasar de categorías generales a mecanismos identificables, de agregados a territorios, de declaraciones a disposiciones prácticas, y de fotografías transversales a trayectorias. A continuación se enumeran líneas de profundización que este estudio vuelve pensables y medibles, precisamente porque ya fijó un mapa inicial de la disputa:

1. Desagregar la “derechización” en mecanismos concretos y medibles

La investigación permite abandonar la explicación genérica del giro a la derecha como “cambio ideológico” y formular, en su lugar, una agenda de mecanismos: securitización afectiva (miedo y promesa de orden), meritocracia como moral social (justificación de jerarquías), privatización de la vida (salida individual frente a lo público erosionado), y resentimiento de estatus (pérdida de

distinciones). El siguiente paso es construir indicadores específicos para cada mecanismo —en lugar de una etiqueta totalizante— y mapear sus combinaciones por territorio, edad, clase y trayectorias educativas. Esto no fragmenta el diagnóstico: lo hace operable.

2. Pasar de “voto” a “participación y preferencia”: dos rutas distintas de la desafección

El ciclo 2018-2024 sugiere que una parte de la derrota política no llega como conversión al adversario, sino como retirada del espacio público: abstención, indiferencia, desgaste, y desmovilización selectiva ante convocatorias específicas. Una nueva agenda consiste en separar sistemáticamente dos dimensiones que suelen confundirse: (a) la propensión a participar (quién logra ser convocado y bajo qué condiciones) y (b) la preferencia partidaria cuando se participa. Esta distinción habilita diagnósticos más finos sobre “antipolítica”, y permite identificar si la principal amenaza es la fuga hacia la derecha o el vaciamiento de lo común.

3. Reescalar la mirada: de la capital “en general” a la ciudad fragmentada (alcaldías, corredores, periferias)

Si CDMX es, como sugiere el estudio, un laboratorio de la disputa por lo público, entonces la unidad real de la política no es la ciudad agregada, sino sus fracturas: territorios con regímenes distintos de movilidad, seguridad, renta, cuidado, acceso a servicios y redes comunitarias. El horizonte inmediato es articular una cartografía sociopolítica por alcaldía y, más aún, por zonas intralcaldía (corredores de gentrificación, periferias expulsivas, enclaves de empleo terciario, cinturones de cuidados), integrando datos urbanos y lectura territorial de la ideología vivida. La hegemonía se instala por microinfraestructuras; por eso, la investigación futura debe volverse explícitamente geopolítica.

4. Complejizar el concepto “seguridad”: distinguir miedo, punitivismo, confianza y experiencia del delito

El estudio muestra la centralidad de la seguridad en los reordenamientos ideológicos; el paso siguiente es no tratarla como bloque. La agenda que se abre consiste en descomponer la variable securitaria en componentes: experiencias directas de victimización, percepción de amenaza, confianza institucional, tolerancia a la excepcionalidad, y adhesión a políticas específicas (prevención social, policía de proximidad, militarización, encarcelamiento). Solo esta desagregación permite diferenciar, por ejemplo, el miedo que demanda cuidado colectivo del punitivismo que demanda castigo, y ubicar con precisión el punto donde la promesa de orden se vuelve un dispositivo de derechización.

5. Blindar la medición en los “temas normativos”: feminismos, migración, ecología y democracia

El libro abre un frente decisivo: la disputa por derechos y valores no se juega solo en declaraciones, sino en disposiciones prácticas y en costos percibidos. La agenda futura debe incorporar diseños que capten con mayor fidelidad actitudes en temas cargados normativamente: viñetas, formulaciones indirectas, medidas situacionales y contrastes entre principios abstractos y decisiones concretas (por ejemplo: derechos en general vs políticas específicas; condena del feminicidio vs. redistribución del cuidado; ecología abstracta vs. restricciones efectivas). Esto no es un ajuste “técnico”: es una apuesta política por medir sin autoengaño, allí donde el sentido común tiende a enmascararse con respuestas socialmente deseables.

6. Convertir la “alienación temporal” en política pública y en organización social: del indicador a la intervención

La investigación instala el tiempo como campo material de desigualdad: no como metáfora, sino como infraestructura del bienestar. La nueva agenda consiste en dar el paso de la medición a la intervención: identificar qué porciones de la alienación temporal son reducibles por política urbana (movilidad, proximidad, servicios), cuáles por política de cuidados (infraestructura comunitaria y estatal), y cuáles por transformación del trabajo (horarios, estabilidad, informalidad). En paralelo, abrir una línea de investigación-acción con organizaciones territoriales: cómo se recupera tiempo común a través de redes de cuidado, economías solidarias, espacios culturales barriales y dispositivos de seguridad comunitaria no punitiva.

7. Integrar la dimensión mediática y digital como infraestructura de sentido común

Si la disputa es por la traducción de malestares en interpretaciones, entonces los circuitos de comunicación no son un “contexto”, sino un mecanismo. La investigación futura debe medir y describir ecosistemas de información: fuentes, rutinas, plataformas, figuras de autoridad cotidiana, y gramáticas afectivas (indignación, miedo, cinismo). No para atribuir “manipulación”, sino para comprender cómo se produce plausibilidad: por qué ciertas narrativas encajan con experiencias reales (inseguridad, precariedad, soledad) y cómo disputar esas narrativas con evidencias, organización y pedagogía política situada.

8. Hacer longitudinal lo que hoy es transversal: trayectorias, puntos de quiebre y efectos de coyuntura

El libro sugiere movimientos y tensiones a lo largo del sexenio; el siguiente paso es construir diseños longitudinales: paneles, recontacto de entrevistados, o mediciones repetidas por cohorte. Esto permitiría identificar puntos

de quiebre (pandemia, crisis de seguridad, shocks económicos, eventos de alta polarización), medir la direccionalidad entre malestar e ideología, y distinguir cambios duraderos de oscilaciones coyunturales. La ventaja política de este paso es evidente: permite anticipar fracturas y diseñar estrategias de recomposición antes de que se consoliden como resentimiento o retirada.

9. Articular un programa comparativo: CDMX frente a otras metrópolis latinoamericanas

Finalmente, el caso CDMX abre una agenda comparativa indispensable. No para diluir el análisis, sino para identificar qué es específico del laboratorio capitalino y qué es tendencia regional: securitización como respuesta al crimen organizado, privatización de lo público urbano, gentrificación y expulsión, crisis de cuidados, y fatiga cívica. Un programa comparativo con otras capitales permitiría separar mecanismos universales de condiciones locales, y construir un repertorio latinoamericano de intervención política: qué experiencias han logrado recomponer lo común, dónde fallaron, y bajo qué arreglos institucionales y territoriales.

* * *

En conjunto, esta agenda despliega y vuelve acumulativas los principales hallazgos de la investigación. Si el estudio ya ofreció un mapa inicial —de vectores, mediaciones y zonas de disputa—, lo que sigue es convertir ese mapa en un programa sostenido de verificación, refinamiento y acción para la militancia: identificar con mayor precisión qué mecanismos pesan más, en qué territorios se activan, qué combinaciones producen desafección, y bajo qué condiciones es posible reanudar la adhesión sin ceder al chantaje securitario ni a la privatización de la vida.

En otras palabras, la agenda abre la posibilidad de pasar del diagnóstico a la ingeniería política de lo común: del reconocimiento abstracto de la desigualdad a la intervención concreta sobre sus infraestructuras cotidianas —tiempo, cuidados, movilidad, escuela, redes de sociabilidad, circuitos mediáticos— donde se decide si la ciudad se organiza por miedo y jerarquía o por cooperación y derechos.

Lo que se abre aquí es, por tanto, un horizonte de investigación militante en el sentido más exigente del término: no propaganda, sino producción de instrumentos comparables, replicables y territorialmente situados para entender al adversario sin caricatura, reconocer tensiones internas del propio campo sin moralismo, y diseñar formas de organización y pedagogía política capaces de traducir políticas públicas en experiencia pública, y experiencia pública en sentido común democrático.

La apuesta final es explícita: convertir la experiencia fragmentada de la ciudad —sus tiempos expropiados, sus trayectos agotadores, sus inseguridades y soledades— en un proyecto colectivo de igualdad material, seguridad no punitiva y vida buena; y hacerlo con la única fuerza que puede sostenerlo en el tiempo: una ciudadanía organizada que impulse la Transformación en la vida cotidiana —en los cuidados, en el barrio, en la escuela, en la calle—, hasta que la democracia deje de ser horizonte y vuelva a ser hábito compartido.

Referencias

Introducción

Deville, J.-C., Särndal, C.-E. & Sautory, O. (1993). *Generalized Raking Procedures in Survey Sampling*. Journal of the American Statistical Association, 88(423), 1013-1020.

Deville, J.-C. & Särndal, C.-E. (1992). *Calibration Estimators in Survey Sampling*. JASA, 87(418), 376-382.

R Core Team. (2024). *sampling: Survey sampling* (R package documentation). The R Foundation for Statistical Computing. <https://cran.r-project.org/package=sampling>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>

Instituto Nacional Electoral (INE). (2024). *Resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024*. INE.

Capítulo II

Abundis Luna, F., & León Robles, L. (2022). La clase media como identidad política en México: análisis de las elecciones de 2021. *Revista Mexicana de Opinión Pública*, 32, 33–55. DOI: 10.22201/fcpys.24484911e.2022.32.80697.

Baker, A., & Dorr, D. (2022). Labor informality and the vote in Latin America: A meta-analysis. *Latin American Politics and Society*, 64(2), 21–44. <https://doi.org/10.1017/lap.2022.4>

Barrera, F., et al. (2021). *Determinantes sociales del voto ideológico en América Latina*. [Informe académico citado en el texto].

Bejarano, C. E., Manzano, S., & Montoya, C. (2011). Tracking the Latino Gender Gap: Gender Attitudes across Sex, Borders, and Generations. *Politics & Gender*, 7(4), 521–549. <https://doi.org/10.1017/S1743923X11000341>

Bénabou, R., & Tirole, J. (2006). Belief in a just world and redistributive politics. *The Quarterly Journal of Economics*, 121(2), 699–746. <https://doi.org/10.1093/qje/121.2.699>

Biekart, K. (2015). The Choice of the New Latin American Middle Classes: Sharing or Self-Caring. *European Journal of Development Research*, 27(2), 238–245.

Bonomi, A., et al. (2021). *Ideología y distribución del bienestar en América Latina*. [Documento citado en el texto].

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bročić, Z., & Miles, A. (2021). Education, intersectionality, and political values: The hetero-geneous impact of college in Latin America. *World Development*, 146, 105593.

Carothers, T., & Feldmann, A. E. (2021). *Divisive Politics and Democratic Dangers in Latin America*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Casasola, M., et al. (2024). *Educación superior y posturas ideológicas en América Latina*. [Fuente académica citada en el texto].

Cavaillé, C., & Trump, K.-S. (2015). The two facets of social policy preferences. *The Journal of Politics*, 77(1), 146–160.

Clément, M., Fauré, Y. A., Berrou, J. P., Combarrous, F., Darbon, D., & Rougier, É. (2020). Anatomy of the Brazilian middle class: Identification, behaviours and expectations. *CEPAL Review*, 130, 129–147.

CONEVAL (2024). *Informe de pobreza 2018–2024*. Ciudad de México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Evans, G., & Neundorff, A. (2020). Core political values and the long-term shaping of partisanship. *British Journal of Political Science*, 50(4), 1263–1281. <https://doi.org/10.1017/S0007123418000339>

Feldman, S., & Johnston, C. (2014). Understanding the determinants of political ideology: Implications of structural complexity. *Political Psychology*, 35(3), 337–358.

García Linera, Á. (2025). “Pavor moral” y desencanto antiigualitario en Bolivia. Columna en *La Jornada*, 5 mayo 2025.

Gethin, A., Martínez-Toledano, C., & Piketty, T. (2022). Brahmin Left versus Merchant Right: Inequality and the Changing Structure of Political Cleavages in 21 Western Democracies. *World Politics*, 74(1), 5–50. <https://doi.org/10.1017/S0043887121000101>

Gidron, N., & Hall, P. A. (2017). The politics of social status: Economic and cultural roots of the populist right. *The British Journal of Sociology*, 68(S1), S57–S84. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12319>

Graham, C., & Pettinato, S. (2001). Happiness, Markets, and Democracy: Latin America in Comparative Perspective. *Journal of Happiness Studies*, 2(3), 237–268.

Graham, C., & Pettinato, S. (2002). *Happiness and Hardship: Opportunity and Insecurity in New Market Economies*. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.

Hunter, W., & Power, T. J. (2019). Bolsonaro and Brazil's illiberal backlash. *Journal of Democracy*, 30(1), 68–82.

INEGI (2025). *Indicadores socioeconómicos de México, 2018–2024*. Ciudad de México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (boletín de prensa, enero 2025).

Irigoyen, S. (2024). *Educación elitista y orientaciones conservadoras en México*. [Fuente inedita citada en el texto].

Jost, J. T. (2019). A quarter century of system justification theory: Questions, answers, criticisms, and societal applications. *British Journal of Social Psychology*, 58(2), 263–314. <https://doi.org/10.1111/bjso.12297>

Junge, B., Mitchell, S. T., Klein, C. H., & Spearly, M. (2023). Mobility Interrupted: A New Framework for Understanding Anti-Left Sentiment Among Brazil's "Once-Rising Poor". *Latin American Politics and Society*, 64(4), 1–30. <https://doi.org/10.1017/lap.2022.46>

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.

Kurer, T. (2020). The declining middle: Occupational change, social status, and the populist right. *Comparative Political Studies*, 53(10–11), 1798–1835. <https://doi.org/10.1177/0010414020912283>

Lamont, M. (1992). *Money, Morals, and Manners: The Culture of the French and the American Upper-Middle Class*. Chicago: University of Chicago Press.

Madalozzo, R., & Chebib, F. (2017). Higher education and political orientation in Brazil: An empirical assessment. *Revista de Ciencias Sociales*, 27(2), 45–66.

Mendelberg, T., McCabe, K. T., & Thal, A. (2017). College socialization and the economic views of affluent Americans. *American Journal of Political Science*, 61(3), 606–623.

Mijs, J. J. B. (2021). The paradox of inequality: Income inequality and belief in meritocracy go hand in hand. *Socio-Economic Review*, 19(1), 7–35. <https://doi.org/10.1093/ser/mwaa019>

Montero, A. P. (2024). Right-Wing Populism in Latin America and Beyond. *ReVista: Harvard Review of Latin America*, 24(1), 1–6.

Mutz, D. C. (2018). Status threat, not economic hardship, explains the 2016 presidential vote. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(19), E4330–E4339. <https://doi.org/10.1073/pnas.1718155115>

Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Piurko, Y., Schwartz, S. H., & Davidov, E. (2011). Basic personal values and the meaning of left–right political orientations in 20 countries. *Political Psychology*, 32(4), 537–561.

Piketty, T. (2019). *Capital et idéologie*. Paris: Éditions du Seuil.

Ramírez Gallegos, R. (2016). La paradoja del bienestar objetivo y el malestar subjetivo. [Documento inédito citado en el texto].

Ramírez Gallegos, R. (2017). La paradoja del bienestar objetivo y el malestar subjetivo. *En La gran transición en busca de nuevos sentidos comunes* (Cap. 2, pp. 117–150). Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Ramírez Gallegos, R. (2024). “El síndrome de Estocolmo ideológico-electoral.” [Documento de opinión en prensa].

Ramírez Gallegos, R. & Irigoyen. Stockholm Syndrome? Ideology, Middle Class, and Higher Education in Mexico (con R. Ramírez), in *Quality of Life in Mexico: Description, State of the Art, and Future Developments*, Springer. [Artículo en prensa].

Ramírez Gallegos, R., & Minteguiaga, A. (2020). Ecuador insurrecto y lucha de clases: la dialéctica entre materialidad y subjetividad. En D. Andrade (Ed.), *Octubre y el derecho a la resistencia: Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador* (pp. 367–392). Quito: CLACSO.

Ramírez Gallegos, R., Irigoyen, S., & Zaruma Flores, J. (2025). Universidad periférica, de-mocracia y movilizaciones estudiantiles en el capitalismo cognitivo. *Ciencia Política*, 20(39), e.p. [Artículo en prensa].

Saravia, A., & Marroquín, A. (2021). Is college education associated with left-leaning eco-nomic views? Evidence from Latin America. *The Social Science Journal*, 58(4), 486–501. <https://doi.org/10.1080/03623319.2021.1910773>

Saravia, A. (2022). Does college make you “progre”? Evidence from Bolivia. *Estudios de Economía*, 49(2), 5–32. <https://doi.org/10.4067/S0718-52862022000200005>

Standing, G. (2018). The precariat: Today’s transformative class? *Development*, 61(1), 115–121.

Treier, S., & Hillygus, D. S. (2009). The nature of political ideology in the contemporary electorate. *Public Opinion Quarterly*, 73(4), 679–703.

Villanueva Rance, A. (2020). Bolivia: la clase media imaginada. *Nueva Sociedad*, (285), 122–138.

Watson, J., van der Linden, S., Watson, M., & Stillwell, D. (2024). Negative on-line news articles are shared more to social media. *Scientific Reports*, 14, 21592. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-71263-z>

Wiesehomeier, N., & Doyle, D. (2012). Attitudes, ideological associations and the left–right divide in Latin America. *Journal of Politics in Latin America*, 4(1), 3–34.

Wolf, A. B., Coelho-Lima, F., dos Santos Keppler, I. L., de Souza Ferreira, M., Dall’Asta, C., Rodríguez Florez, M. E., & Figueroa, M. (2025). “Be Your Own Boss?” Explaining var-iation in worker response to the gig economy’s ideology in the Global North and South. *Brit-ish Journal of Industrial Relations*, 63(4), 631–645. <https://doi.org/10.1111/bjir.12887>

Zhirnov, A., Antonucci, L., Thomeczek, J. P., Horváth, L., D’Ippoliti, C., Mongeau Ospina, C. A., Krouwel, A., & Kersting, N. (2024). Precarity and populism: Explaining populist out-look and populist voting in Europe through subjective insecurity. *European Sociological Re-view*, 40(4), 704–720. <https://doi.org/10.1093/esr/jcad052>

Capítulo III

Althusser, L. (2005). *La filosofía como arma de la revolución* (25.ª ed.). Siglo XXI Editores.

Apple, M. W. (1991). *Ideología y currículo* (R. Lassaletta, Trad.). Akal.

Ball, S. J., & Junemann, C. (2012). *Networks, new governance and education*. Policy Press.

Ball, S. J., & Youdell, D. (2008). La privatización encubierta en la educación pública. *Education International*.

Berardi, F. (2012). *El alma y el trabajo*. Elefanta Editorial.

Bonal, X., & Tarabini, A. (2006). Globalización y política educativa: Cambios de escala y consecuencias metodológicas. En P. Dávila & L. M. Naya (Eds.), *El derecho a la educación en un mundo globalizado* (pp. 125–137). Erein.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (2009). *Los herederos: Los estudiantes y la cultura* (2.ª ed., rev.; M. Mayer, Trad.). Siglo XXI Editores Argentina.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1996). *La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza* (2.ª ed.). Distribuciones Fontamara.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). *Reproduction in education, society and culture* (2nd ed.; R. Nice, Trans.). SAGE.

Crary, J. (2015). *24/7: El capitalismo al asalto del sueño* (P. Cortés-Rocca, Trad.). Ariel.

Dardot, P., & Laval, C. (2015). *Común: Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI*. Gedisa.

Eagleton, T. (1997). *Ideología: Una introducción* (J. Vigil Rubio, Trad.). Paidós.

Echeverría, B. (1998). *La modernidad de lo barroco*. Ediciones Era.

Elacqua, G. (2012). The impact of school choice and public policy on segregation: *Evidence from Chile*. *International Journal of Educational Development*, 32(3), 444–453. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2011.08.003>

Feldman, S., & Stenner, K. (1997). Perceived threat and authoritarianism. *Political Psychology*, 18(4), 741–770.

Gramsci, A. (1999). *Cuadernos de la cárcel* (V. Gerratana, Ed.; A. M. Palos, Trad.;

J. L. González, Rev.; Vol. 1). Ediciones Era; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Hsieh, C.-T., & Urquiola, M. (2006). The effects of generalized school choice on achievement and stratification: Evidence from Chile's voucher program. *Journal of Public Economics*, 90(8–9), 1477–1503.

Jarillo, B., Magaloni, B., Franco, E., & Robles, G. (2016). How the Mexican drug war affects kids and schools? Evidence on effects and mechanisms. *International Journal of Educational Development*, 51, 135–146.

Marx, K. (1976). *Capital: A critique of political economy* (Vol. 1; B. Fowkes, Trans.). Penguin Books.

Marx, K., & Engels, F. (1974). *La ideología alemana: Crítica de la novísima filosofía alemana en las personas de sus representantes Feuerbach, B. Bauer y Stirner, y del socialismo alemán en las de sus diferentes profetas* (5.ª ed.; W. Roces, Trad.). Ediciones Pueblos Unidos; Ediciones Grijalbo.

Michaelsen, M. M., & Salardi, P. (2020). Violence, psychological stress and educational performance during the “war on drugs” in Mexico. *Journal of Development Economics*, 143, 102387. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102387>

Minteguiaga, A. (2008). Lo público en el campo de la educación: Transformaciones recientes en la Argentina transicional y reformista. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, (32), 89–101.

O'Donnell, G. (1993). On the state, democratization and some conceptual problems: A Latin American view with glances at some postcommunist countries. *World Development*, 21(8), 1355–1369.

Perrotta, C., Gulson, K. N., Williamson, B., & Witzemberger, K. (2021). Automation, APIs and the distributed labour of platform pedagogies in Google Classroom. *Critical Studies in Education*, 62(1), 97–113. <https://doi.org/10.1080/17508487.2020.1855597>

Rabotnikof, N. (2008). Lo público hoy: Lugares, lógicas y expectativas. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, (32), 37–48.

Reckhow, S. (2013). Follow the money: How foundation dollars change public school politics. Oxford University Press.

Secretaría de Educación Pública. (2024). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2023–2024* (Edición de bolsillo). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa.

Saltman, K. J. (2010). *The gift of education: Public education and venture philanthropy*. Palgrave Macmillan.

Srnciek, N. (2018). *Capitalismo de plataformas* (A. Giacometti, Trad.). Caja Negra Editora.

Verger, A., Fontdevila, C., & Zancajo, A. (2016). *The privatization of education: A political economy of global education reform*. Teachers College Press.

Whitty, G., Power, S., & Halpin, D. (1998). *Devolution and choice in education: The school, the state and the market*. Open University Press.

Wiggins, R. D. (2023). Are right-wing attitudes and voting associated with having attended private school? An investigation using the 1970 British Cohort Study. *Sociology*, 57(6), 1280–1301. <https://doi.org/10.1177/00380385221141386>

Williamson, B. (2017). Big data in education: The digital future of learning, policy and practice. SAGE.

Williamson, B., & Hogan, A. (2020). Comercialización y privatización en/de la educación en el contexto de la COVID-19. *Education International*.

Zuboff, S. (2020). *La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder* (A. Santos Mosquera, Trad.). Ediciones Paidós.

Žižek, S. (2025). *El sublime objeto de la ideología* (I. Vericat Núñez, Trad.). Siglo XXI de España Editores.

Capítulo IV

Bedin, P. (2025): “El concepto de backlash antifeminista y sus límites para comprender el presente: un análisis de los discursos de las líderes de derecha” *¿Qué hacen las mujeres en las nuevas derechas? Activismos, roles y agendas*. Núm. 23. Revista Ensamblés. <https://revistas.ungs.edu.ar/index.php/ensambles/article/view/1166>

Bonet-Martí, J. (2021). “Los antifeminismos como contramovimiento: una revisión bibliográfica de las principales perspectivas teóricas y de los debates actuales”, Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales, 18(1): 61-7

Brown, W. (2019). In the ruins of neoliberalism: *The rise of antidemocratic politics in the West*. Columbia University Press.

Connell, R. (2009). *Gender*. Cambridge: Polity Press.

Dahlerup, D. (2006). *Women, quotas and politics*. London, UK: Routledge.

Federici, S. (2013). *Revolución en punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Traficantes de Sueños.

Federici, S. (2013). *Revolución en punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Franceschet, S., Krook, M. L., & Piscopo, J. M. (Eds.). (2012). *The impact of gender quotas*. Oxford University Press.

Fraser, N. (2013). *Fortunes of feminism: From state-managed capitalism to neoliberal crisis*. Verso.

Fraser, N. (2016). Contradicciones del capital y cuidados sociales. *New Left Review*, 100, 99–117.

Gago, V. (2019). *La potencia feminista: O el deseo de cambiarlo todo*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Güemes, C. (2023). Nuevas derechas y feminismo: De su combate a su resignificación. En J. A. Sanahuja & P. Stefanoni, *Extremas derechas y democracia: Perspectivas iberoamericanas*. Fundación Carolina.

Galindo, M. (2013). *No se puede descolonizar sin despatriarcalizar*. La Paz: Mujeres Creando.

Haraway, Donna J. (1995). “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX” en *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza*. Ediciones Cátedra.

Hochschild, A. R. (1989). *The second shift: Working parents and the revolution at home*. New York, NY: Viking

Kessler, G., y Vommaro, G. A. (2025). *La era del hartazgo: Líderes disruptivos, polarización y antipolítica en América Latina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.

Kováts, E., & Pöim, M. (Eds.). (2015). *Gender as symbolic glue: The position and role of conservative and far right parties in the anti-gender mobilizations in Europe*. FEPS.

Lagarde y de los Ríos, M. (2006). *Del femicidio al feminicidio*. UNAM.

Lamas, M. (2009). *La despenalización del aborto en México*. Nueva Sociedad, (220). Recuperado de <https://nuso.org/articulo/la-despenalizacion-del-aborto-en-mexico/>

McRobbie, A. (2009). *The aftermath of feminism: Gender, culture and social change*. Sage.

Pateman, C. (1995). *El contrato sexual* (Trad. María Luisa Femenías). Barcelona, España: Anthropos.

Paz Frontera, A. (2025). *¿Demasiado feminismo?: La política feminista entre el Estado, el activismo y la batalla cultural de la derecha radical*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.

Pecheny, M. (2018). Derechos sexuales y reproductivos en América Latina: avances y resistencias. *Revista SAAP*, 12(2), 221–246.

Rich, A. (1996). *Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución* (Trad. Ana Becciu). Madrid, España: Cátedra.

Ruiz, B. (2018, agosto). México: ¿la “Cuarta Transformación” será feminista? Nueva Sociedad. <https://nuso.org/articulo/mexico-la-cuarta-transformacion-sera-feminista/>

Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de Sueños.

Semán, P. (coord.). (2023). *Está entre nosotros: ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?* Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.

Shoshan, N. y Gutiérrez Martínez, A (2025); “Un líder altamente polarizador en una sociedad escasamente polarizada: México durante el gobierno de López Obrador” en Kessler, G y vommaro, G (comp.) *La era del hartazgo. Líderes disruptivos, polarización y antipolítica en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Vaggione, J. M. (2005). Reactive politicization and religious dissidence: The political mutations of the religious. *Social Theory and Practice*, 31(2), 233–255.

Vaggione, J. M. (2017). La politización de la sexualidad y los derechos sexuales en América Latina. En CLACSO (Ed.), *Derechos sexuales y reproductivos en disputa*. CLACSO.

Vázquez, S., & Spataro, C. (2025). *Sin padre, sin marido, sin Estado*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Capítulo V

Auyero, J. (2012). *Patients of the State: The Politics of Waiting in Argentina*. Duke University Press.

De Sousa Santos, B. (2009). *Una epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social*. Siglo XXI Editores.

Echeverría, B. (2006). *Modernidad y blanquitud*. Ediciones Era.

Fraser, N. (2003). La justicia social en la era de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y participación. *Revista de Trabajo*, (5), 83–100.

Fraser, N., & Honneth, A. (2006). *¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico*. Morata.

Marx, K. (2009). *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*. Espasa-Calpe. (Obra original publicada en 1844).

Povinelli, E. A. (2011). *Economies of Abandonment: Social Belonging and Endurance in Late Liberalism*. Duke University Press.

Rivera Cusicanqui, S. (2018). *Un mundo ch'ixi es posible: Ensayos desde un presente en crisis*. Tinta Limón Ediciones.

Rosa, H. (2016). *Alienación y aceleración: Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía*. Katz Editores.

Zavaleta Mercado, R. (1986). *Lo nacional-popular en Bolivia*. Siglo XXI Editores.

Capítulo VI

Abarca Brown, G. A., & Ortega, F. (2024). A historical perspective on structural-based men-tal health approaches in Latin America: The Chilean and Brazilian cases. *Critical Public Health*, 34(1), 2297918. <https://doi.org/10.1080/09581596.2023.2297918>

Ahmed, O., et al. (2024). Social media use, mental health and sleep: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 361, 77–91. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.01.001>

Cabello-Rangel, H., Márquez-Caraveo, M. E., & Díaz-Castro, L. (2020). Suicide rate, de-pression and the Human Development Index: An ecological study from Mexico. *Frontiers in Public Health*, 8, 561966. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.561966>

Carcedo, R. J., Fernández-Rouco, N., Fernández-Fuertes, A. A., & Martínez-Álvarez, J. L. (2020). Association between sexual satisfaction and depression and anxiety in adolescents and young adults. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3), 841. <https://doi.org/10.3390/ijerph17030841>

Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a need for self-esteem: A terror management theory. En R. F. Baumeister (Ed.), *Public self and private self* (pp. 189–212). Springer.

Harvey, M., Piñones-Rivera, C., & Holmes, S. M. (2023). Structural competency, Latin American social medicine, and collective health: Exploring shared lessons through the work of Jaime Breilh. *Global Public Health*, 18(1), 2220023. <https://doi.org/10.1080/17441692.2023.2220023>

Jing, Z., Yang, W., Lei, Z., Wu, J., Li, H., & Zhu, T. (2025). Correlations between social media addiction and anxiety, depression, FoMO, loneliness and self-esteem among students: A systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE*, 20(9), e0329466. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0329466>

Jost, G. M., Hang, S., Wysocki, A. C., Rhemtulla, M., Robins, R. W., & Hostinar, C. E. (2025). Time spent alone and loneliness in Mexican-origin youth: The role of social relationships and personality. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1548(1), 163–180. <https://doi.org/10.1111/nyas.15348>

Jost, J. T. (2019). *A theory of system justification*. Harvard University Press.

Jost, J. T., & Banaji, M. R. (1994). The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness. *British Journal of Social Psychology*, 33(1), 1–27.

Jost, J. T., Banaji, M. R., & Nosek, B. A. (2004). A decade of system justification theory: Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo. *Political Psychology*, 25(6), 881–919. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2004.00402.x>

Jost, J. T., Becker, J., Osborne, D., & Badaan, V. (2017). Missing in (collective) action: Ideology, system justification, and the motivational antecedents of two types of protest behavior. *Current Directions in Psychological Science*, 26(2), 99–108. <https://doi.org/10.1177/0963721417690633>

Maciel-Saldierna, M., Elizondo-Hernández, E., Fuentes-Orozco, C., González-Ojeda, A., Ramírez-Ochoa, S., Cervantes-Pérez, E., et al. (2024). Social media use and fear of missing out: An exploratory cross-sectional study in junior high students from western Mexico. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(12), 6890. <https://doi.org/10.3390/ijerph21126890>

Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism*. Cambridge University Press.

Plackett, R., Blyth, A., & Schartau, P. (2023). The impact of social media use interventions on mental well-being: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e44922.

Pyszczynski, T., Solomon, S., & Greenberg, J. (2015). Thirty years of terror management theory: From genesis to revelation. En M. Zanna & J. Olson (Eds.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 52, pp. 1–70). Academic Press.

Quijano, A. (2000). Coloniality of power and Eurocentrism in Latin America. *International Sociology*, 15(2), 215–232.

Rosa, H. (2013). *Social acceleration: A new theory of modernity* (J. Trejo-Mathys, Trans.). Columbia University Press.

Sanchez, E., Nicolini, H., Villatoro, J., Bustos, M., Medina-Mora, M. E., Mejía-Ortiz, P., Robles, B., Mondragón, D., Ibarra, G., Meza, D., & Genis-Mendoza, A. D. (2025). Current status of mental health in Mexico City. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22(8), 1217. <https://doi.org/10.3390/ijerph22081217>

Segato, R. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de Sueños.

Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). *Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression*. Cambridge University Press.

Smith, A. P. (2023). The internet and loneliness. *AMA Journal of Ethics*, 25(11), E899–905. <https://doi.org/10.1001/amajethics.2023.899>

Vasilenko, S. A. (2016). Age-varying associations between nonmarital sexual behavior and depressive symptoms across adolescence and young adulthood. *Journal of Adolescent Health*, 58(2), 182–187. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2015.10.002>

Waytz, A., Iyer, R., Young, L., Haidt, J., & Graham, J. (2019). Ideological differences in the expanse of the moral circle. *Nature Communications*, 10, 4389. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-12227-0>

World Health Organization. (1946). *Constitution of the World Health Organization*. En *Basic documents* (pp. 1–18). WHO.

World Health Organization. (1986). *Ottawa Charter for Health Promotion*. WHO Regional Office for Europe.

World Health Organization. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. WHO.

World Health Organization. (2025). [Referencia pendiente sobre salud mental citada como “OMS, 2025” en el texto. [Detalles por completar.]

World Internet Project / USC Annenberg & Common Sense Media. (2019). *The new normal: Parents, teens and mobile devices in Mexico*. USC Annenberg School for Communication and Journalism.

Índice analítico

Introducción. ¿Qué redistribución y para qué ideología?	15
Crisis epocal: se parece a entreguerras, pero sin las mismas salidas	15
La 4T en un tiempo adverso	16
El punto de partida de esta investigación	17
Ciudad de México: laboratorio y frente estratégico	18
 1. Metodología: Diseño del estudio y levantamiento de información	25
Post-estratificación y ponderación muestral	26
Conceptualización y medición de la ideología	28
Construcción del score de ideología valórica	29
1.1. Familias ideológicas (tipologías)	32
Sobre las zonas geográficas (Ciudad de México)	34
Nota metodológica final	34
1.2. Arquitectura del libro: cinco hipótesis para leer la CDMX	34
Hipótesis 1 — La paradoja del bienestar y el malestar subjetivo como fractura del bloque histórico (capítulo II)	115
Hipótesis 2 — Educación y seguridad como aparatos ideológicos en disputa: lo público asediado (Capítulo III)	116
Hipótesis 3 — Feminismos, igualdad y la disputa por el sentido transformador (Capítulo IV)	117
Hipótesis 4 — Alienación, precariedad temporal y disputa política (Capítulo V)	117
Hipótesis 5 — Malestares psicosociales, soledad estructural e ideología (Capítulo VI)	118
 Capítulo I	39
Mapear para no perder la base: desplazamientos ideológico-materiales en la CDMX	39
1. Introducción	39
No hay “una izquierda”: hay vectores ideológico-materiales	40
Por qué importa el mapa de familias vectoriales	41
Cómo leer este capítulo en el marco del libro	42
 2. Melodrama latinoamericano: gobiernos progresistas que incuban su oposición	44
1.1. Desplazamientos hacia la derecha bajo gobiernos de izquierda	44
1.2. A la inversa: desplazamientos hacia la izquierda bajo gobiernos de derecha	46

3. Estampas mexicanas: hegemonía de cambio, grietas y recomposición	47
4. Vectores ideológico-materiales con tres anclajes: voto, autoubicación, posiciones	52
4.1. La ideología no funciona como etiqueta fija	52
4.2. Posiciones frente a conflictos clave	55
Redistribución	55
Migración	55
Democracia	56
Ecología	56
Feminismo	57
4.3. Nueve familias vectoriales	58
El mapa de familias vectoriales como clave estratégica	62
5. Las familias ideológico-materiales	63
5.1. Las familias morenistas	65
5.1.1. Familia morenista convergente	66
Lectura política	70
5.1.2. Familia morenista divergente en autoidentificación	71
Lectura política	75
5.1.3. Familia morenista divergente en valores	76
Lectura política	80
5.1.4. Familia morenista divergente en autoubicación y valores	81
Lectura política	84
5.2. Las familias antimorenistas	85
5.2.1. Familia antimorenista convergente	85
Lectura política	90
5.2.2. Familia antimorenista divergente en autoubicación	90
Lectura política	94
5.2.3. Familia antimorenista divergente en valores	95
Lectura política	98
5.2.4. Familia antimorenista divergente en autoubicación y valores	99
Lectura política	103
5.3. Familia antipolítica	103
Lectura política	107
6. Entre la lealtad, la distancia y la disputa: cartografías de intensidades	109
4.1. La huella temporal del apoyo	110
4.2. Una lectura desde las nueve tipologías	113
4.3. El voto como trayectoria	114
Capítulo II	123
La paradoja del bienestar objetivo/malestar subjetivo y el síndrome de Estocolmo en la Ciudad de México	123
1. Introducción	123

2. Revisión de la literatura	127
2.1 Determinantes ideológicos: ideología subjetiva, votación e ideología valorativa	127
2.1.1. Ideología subjetiva	127
2.1.2. Ideología objetiva (votación)	128
2.1.3. Ideología valorativa	129
Hipótesis 1	130
2.2. Límites de la redistribución: paradoja del bienestar objetivo y malestar subjetivo	130
Hipótesis 2	131
2.3. Precariedad contemporánea, plataformas digitales y reconfiguración política	132
Hipótesis 3	133
2.4. “Síndrome de Estocolmo” político y fractura simbólica del bloque histórico	133
Hipótesis 4	135
3. Estrategia metodológica	136
3.1. Variable dependiente (1): Autoubicación ideológica	136
3.2. Variable dependiente (2): Ideología objetiva (comportamiento electoral)	137
3.3. Variable dependiente (3): Ideología valórica	137
3.4. Variable explicativa central: Paradoja del bienestar objetivo y malestar subjetivo	138
4. Resultados	140
4.1. Ideología autopercebida de derecha	140
4.2. Ideología Objetiva: voto hacia la izquierda	144
4.3. Determinantes de la ideología valórica (conservadora)	147
4.4. Determinantes de malestar subjetivo: ideología, clase media y disidencia simbólica	154
5. Conclusiones y reflexiones finales	155
Capítulo III	159
Escuela e ideología: entre la fábrica de derechas y la posibilidad de lo común	159
1. Introducción	159
2. Aproximación teórica: ideología y escuela	162
Ideología como materialidad práctica	162
Aparatos ideológicos, interpelación y formación de sujetos en el campo escolar	163
Ideología como estructura multidimensional	164
Lo público, lo privado y lo común: de la propiedad a los regímenes de gobierno de la vida escolar	165

Regímenes de financiamiento y producción de subjetividades: valor de uso y valor de cambio	166
3. Triple privatización del espacio escolar en Ciudad de México	168
Privatización visible	168
Privatización político-institucional	169
Privatización furtiva territorial: zonas marrones, violencia y escuela	170
Privatización furtiva digital: soledad acompañada	171
4. Metodología	173
5. Resultados y discusión: clivaje público-privado, privatizaciones múltiples y horizonte político de la escuela	174
Autoubicación izquierda-derecha según tipo de educación	174
Migración y ciudadanía: derecho como bien escaso	175
Género y derechos	176
Redistribución: valor de cambio y legitimación de la desigualdad	177
Tradicición y meritocracia dispositivos individualizantes	178
Transferencias y conducta electoral	179
Seguridad: evidencia de privatización furtiva territorial	180
Autoritarismo y “líder fuerte”	182
6. Modelos probabilísticos: Educación, seguridad e ideología	184
7. Reconstruir lo público como experiencia y lo común como horizonte	188
8. Conclusiones	191
Capítulo IV	193
Las agendas feministas en CDMX: entre la masificación y la diversificación	193
1. Introducción	193
2. Primera parte. Resultados e interpretaciones de las preguntas sobre feminismos	195
2.1. El feminismo es un ideología que busca someter a los hombres	195
Balance general	198
2.2. Es justo que existan políticas de cuotas para mujeres no para hombres	199
Balance general	208
2.3. Los hombres y las mujeres deben compartir por igual las tareas domésticas y de cuidado	202

Balance general	203
2.4. Las mujeres tienen derecho a decidir libremente sobre su propio cuerpo y maternidad	204
Balance general	206
2.5. La legalización del aborto es necesaria para garantizar la igualdad de derechos	207
Balance general	209
2.6. Los feminicidios son un problema grave que requiere políticas específicas para ser enfrentado	211
Balance general	214
A modo de síntesis de la primera parte	215
3. Segunda Parte. Modelo Ideológico	218
3.1. Modelo 1 (Feminismo e ideología electoral a favor de CS)	218
3.2. Modelo 2 (Feminismo y Género sobre Ideología autodeclarada)	221
3.3. Modelo 3. Feminismo e ideología valórica	222
A modo de síntesis de la segunda parte	223
4. Conclusiones generales y guía para la militancia	224
Sobre la relación del movimiento feminista con la representación partidaria y/o estatal de sus agendas	224
La relación entre feminismo y progresismo no es lineal.	225
La oficialización de la agenda feminista en el Estado genera tensiones.	226
¿Es posible un feminismo de Estado?	227
Anexo	229
Construcción de la variable de apoyo a la agenda feminista	228
Modelo 1: Probabilidad de votar por Claudia Sheinbaum	228
Modelo 2: Intensidad feminista e ideología política	229
Modelo 3: Determinantes del posicionamiento en valores ideológicos	229
Capítulo V	231
Tiempo y espacio: entre la alienación (del tiempo perdido) y la ideología	231
1. Introducción	231
2. Ideología y alienación temporal: una aproximación teórica	232
3. Metodología: medición de la alienación desde una perspectiva temporal	235
4. La distribución del tiempo en la vida cotidiana en la Ciudad de México	237

4.1. La desigualdad distribución del tiempo según género	240
4.2. Juventud urbana: entre la hiperconexión, la soledad y la precariedad laboral	241
4.3. Tiempo, clase social y desigualdad cotidiana: una mirada desde la Ciudad de México	242
5. La alienación temporal en CDMX: entre el tiempo impuesto y el tiempo deseado	245
5.1. Desigualdades en la distribución del tiempo alienado	246
5.2. Alienación temporal por género: las brechas invisibles del tiempo	247
5.3. Alienación temporal por grupo etario: trayectorias del tiempo forzado	247
5.4. Desigualdades de alienación temporal según estrato socioeconómico	248
6. Desigualdades territoriales en la distribución del tiempo cotidiano	251
6.1. La ciudad fragmentada en el tiempo: desigualdades territoriales en la alienación temporal	252
1. Dormir: un privilegio territorial	253
2. Trabajo y sobrecarga: el peso del modelo productivo	253
3. Cuidados y movilidad: doble carga estructural	254
4. Lo emocional también es desigual: soledad, ocio y redes	254
5. Una cartografía del tiempo desigual	255
7. Efectos de la alienación temporal en la probabilidad de voto.	256
7.1. Formas de alineación temporal y malestar político: desagregando la alienación cotidiana	257
Cuidado: resignación conservadora ante la sobrecarga	261
Participación: exceso forzado y conservadurismo como refugio	262
Movilidad: conciencia progresista desde el malestar espacial	263
8. Conclusiones: redimir el tiempo, politizar la espera	265
Anexo	267
Capítulo VI	269
Malestar psicosocial, deseo e ideología en la Ciudad de México	269
1. Introducción	269
2. Salud mental como síntoma de un orden desigual	271
2.1. Soledad, vínculos y territorios: De la ciudad al espacio virtual	272
2.2. Salud mental, ideología y justificación del orden	274
3. Metodología	278
Fase 1: Construcción de variables dependientes	278

Fase 2: Expansión del modelo de salud mental	278
Fase 3: Modelos de ecuaciones simultáneas	279
Fase 4: Modelo de votación	280
4. Resultados: mapas del malestar y sus traducciones políticas	281
4.1 Generaciones en desasosiego: desigualdades sociales y salud mental	281
Juventud: una generación saturada de síntomas	282
Desigualdades sociales del malestar: género, clase, ingresos, territorio	283
Juventud en las intersecciones de la desigualdad	284
5. Tiempo, soledad, vínculos sexoafectivos y clase: determinantes estructurales del malestar psicosocial	285
6. Relaciones simultáneas entre malestar psicosocial e ideología de derecha autodeclarada	288
7. Malestar psicosocial y crisis estructural: disputas por el tiempo, el futuro y la democracia	294
Balance y perspectivas	299
Disputar el mapa: dilemas para el proyecto de transformación	299
1. Agenda pendiente: redistribución, orden y tiempo	299
2. Lecciones para la militancia	303
Referencias	311
Introducción	311
Capítulo II	311
Capítulo III	316
Capítulo IV	318
Capítulo V	321
Capítulo VI	321

Equipo de investigación

Coordinador, investigador principal Dr. René Ramírez Gallegos

Economista del desarrollo, (Institute of Social Studies/Erasmus University of Rotterdam, Holanda), Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, (Flacso-México) y Doctor en sociología de la desigualdad (Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra, Portugal). Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, UNAM-México. Investigador visitante, Matters of Activity, Humboldt-Universität de Berlín; Global Encounters scholarship en la University of Tübingen, Alemania. Docente invitado de la Universidad de Buenos Aires, UBA; de la Universidad Nacional de las Artes, Argentina; e, investigador de la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Investigador invitado Seminario Universitario de estudios del tiempo (SUETIS), UNAM-México. Coordinador Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), eje “Ciencia, Tecnología e Innovación” (2018 y 2024). Coordinador Grupo de Trabajo sobre Estudios del tiempo y las temporalidades, CLACSO. Ministro de Planificación y Desarrollo (2008-2011) y Ministro de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador (2011-2017). Presidente del Consejo de Estado de Educación Superior del Ecuador (2011-2017). Áreas de investigación: desigualdad, buen vivir, estudios del tiempo, economía social de los conocimientos, educación superior, democracia y desarrollo. Libros recientes: Ramírez, R. (2022) La vida y el tiempo. Apuntes para una teoría ucrónica de la vida buena. Buenos Aires: CLACSO; Ramírez, R. (Coordinador) (2023) Tomar partido. Trayectos, aprendizajes y desafíos para los partidos progresistas en América Latina y el Caribe, CLACSO: Buenos Aires; García Linera, A., Ramírez, R. Sader, E. y Pochmann. M., (2023). Historia contemporánea de América Latina y el Caribe, Akal: Madrid; Ramírez, R. y Guijarro (2024) Ecuador: más allá de la ira y la esperanza, Planeta: Colombia; Ramírez, R., Gallardo, G. y Guijarro, J. (2024) Del laberinto de la soledad a los senderos de la compañía, Buenos Aires: CLACSO; Ramírez, R. (2024). Estado de situación de la democracia en América Latina y el Caribe. Narconeoliberalismo autoritario o democracia con demos, CLACSO: Buenos Aires; Ramírez, R. (2024) Quien parte y reparte, ¿se queda con la mejor parte? Las derechas y las izquierdas en la distribución del pastel en América Latina, 2000-2020, Marmol izquierdo: Madrid/Buenos Aires (2024); Ramírez, R. (2025) Universidad y democracia en América Latina, UNA: Buenos Aires. Investigadores asociados

Dra. Lucía Pedraza

Doctora en Ciencias Físicas (INFINA-UBA/CONICET, 2023; directores: Pablo Balenzuela y Juan Pablo Pinasco) y Licenciada en Ciencias Matemáticas (FCEyN-UBA, 2018; director: Juan Pablo Pinasco). Su trabajo articula modelos matemáticos y físicos con problemas sociales, en particular la dinámica de opiniones, el análisis de redes y, más recientemente, la medición de brechas de sustentabilidad en sistemas agropecuarios. Desde 2024 realiza un posdoctorado en IFEVA/ICC (UBA-CONICET) en el proyecto “Cuantificación de brechas de sustentabilidad en sistemas agrícolas extensivos”, bajo la dirección de Diego Ferraro y la codirección de Rodrigo Castro. Cuenta con amplia experiencia docente: coordina y dicta la Diplomatura “Introducción a la programación y análisis de datos” (FCEyN, 2023–2025); se desempeña como docente auxiliar en el Departamento de Matemática de FCEyN (2018; 2021–2025) y fue ayudante de segunda en FCEyN (2013–2017) y en el CBC (2014–2021). Ha publicado en PNAS Nexus (2024), Chaos, Solitons & Fractals (2023) y Mathematical Models and Methods in Applied Sciences (2020). También realizó tareas de divulgación en Revista Crisis y Minuto Uno. Participa activamente en extensión universitaria y formación científica, y mantiene un perfil actualizado en Google Scholar.

Dr. Leonardo Magalhães Firmino

Investigador brasileño especializado en comunicación política y análisis de datos aplicados a la opinión pública y a las campañas electorales. Doctor en Comunicación por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio, 2022), con una tesis sobre la cobertura discursiva de la Covid-19 en Brasil en Twitter mediante métodos computacionales y análisis de encuadres. Cuenta con un máster en Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid y una maestría profesional en Comunicación Política e Institucional por el Instituto Ortega y Gasset. Su formación de base incluye licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y en Ciencias y Tecnologías de la Comunicación cursadas en Italia. Es fundador y director de IPSE Global Research, empresa de investigación social, política y de mercado con presencia en más de 15 países. Ha liderado proyectos para gobiernos, ONG y partidos políticos. En 2023–2024 coordinó el diseño del programa de Comunicación y Humanidades Digitales de la Universidad La Salle (Guayaquil, Ecuador). Ha colaborado con Atlas Político, la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales (Fundação Casa de Rui Barbosa) y la Fundação Getulio Vargas. Sus líneas de trabajo abarcan comunicación política comparada, opinión pública, agenda setting, encuadres, big data, redes sociales y humanidades digitales. Habla italiano, español, inglés y portugués.

Dra. Melina Vázquez

Posdoctora en Investigación en Ciencias Sociales, niñez y juventud (CLACSO/CINDE/COLEF/FLACSO/PUCSP), Doctora y Magíster en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora independiente del CONICET con sede en el IIGG (UBA). Codirige el Grupo de Estudios en Políticas y Juventudes, es Profesora de Sociología y de posgrado y coordina el Diploma Superior en Juventudes (CLACSO). Publicó artículos en revistas científicas y escribió *Juventudes*, políticas públicas y participación (2015), compiló con Pablo Vommaro, Pedro Núñez y Rafael Blanco *Militancias juveniles en la Argentina democrática* (2017) y con Pablo Vommaro y Dolores Rocca *Rivarola Juventudes militantes desde la recuperación democrática* (2024). Es autora en el libro coordinado por Pablo Seman *Está entre nosotros* (2023).

Dra. Carolina Spataro

Doctora en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura, Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Investigadora Adjunta del CONICET con sede en el Instituto Gino Germani (UBA) donde coordina equipos de investigación. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y coordinó el posgrado en Comunicación, Géneros y Sexualidades de la misma facultad. Publicó artículos en revistas científicas y medios de comunicación sobre mujeres y fenómenos masivos, música, literatura y televisión, y sobre políticas de género en instituciones de educación superior. Coordinó, junto a Rafael Blanco (2023) *Del margen a la institucionalización. Feminismos*, estudios sobre sexualidades y políticas de género en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA (1988-2022).

Dr. (c) Juan Guijarro

Doctorando en Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito), orienta su investigación a la intersección entre violencia, instituciones jurídicas y desigualdad en América Latina. Cursó la maestría en Ciencia Política en FLACSO-Ecuador y la licenciatura en Comunicación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su investigación se sitúa en la intersección entre violencia, instituciones jurídicas, desigualdad y la reciente irrupción de nuevas derechos en América Latina; combina análisis estadístico, etnografía y revisión de archivos para explicar cómo los conflictos armados, el crimen organizado y los ciclos de materias primas reconfiguran economías, territorios y marcos normativos, y cómo las derechas capitalizan estas tensiones para redistribuir poder y recursos. Entre sus publicaciones recientes, es autor del capítulo “Los alimentos terrestre: narcolonialismo, guerra contra las drogas y democracias violentas en América Latina” en *Estado de situación de las democracias en América Latina y el Caribe* (CLACSO, 2025); coautor, junto a René Ramírez, del libro *Ecuador: más allá de la ira y la esperanza* (Ariel, 2024) y del capítulo

«De la esperanza a la ira... historia y repetición del neoliberalismo en Ecuador» en *Historia contemporánea de América Latina y el Caribe* (Akal, 2023); y autor de «Organización y estrategia política de los partidos de nueva izquierda en América Latina» en *Tomar partido* (CLACSO, 2023). Ha colaborado como investigador independiente en organismos como UNESCO, CLACSO, y universidades como la UNAM (México) y el IAEN (Ecuador), así como con instituciones estatales ecuatorianas como Senplades y Senescyt. Actualmente desarrolla un índice comparativo de fragilidad institucional en la región para orientar reformas que fortalezcan la democracia con justicia social.

Dr. Sebastián Irigoyen Ibarra

Profesor-Investigador Asociado en ESSCA School of Management (Angers, Francia) y en Audencia Business School (Nantes, Francia). Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con Maestría y Doctorado en Economía por la Université de Rennes. Sus campos de investigación incluyen política ambiental, economía del comportamiento, bienestar subjetivo, ideología, estudios del tiempo y educación. Es miembro de la Earth Chair, del Centre Jean-Bodin y del Centre for Legal and Political Research en Francia, y forma parte del equipo de expertos de la Unión Europea en la European Education and Culture Executive Agency. Ha colaborado como consultor con la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Dra. Sandra Emilia Hoffman Martins

Doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y Licenciada en Psicología por la Universidad de la Cuenca del Plata. Su trayectoria se ha centrado en la docencia universitaria, la investigación y la coordinación de espacios académicos, entre ellos la Red Latinoamericana de Psicología Rural (2019-2022). Se desempeña como Profesora Adjunta en la Universidad de la Cuenca del Plata desde 2019, con experiencia en Psicología Evolutiva (Adolescencia), Psicología Social, Psicología Comunitaria, Familia y Sistemas, y Teoría y Técnica de Grupos. Ha dictado docencia en la Diplomatura en Neurociencias y Educación de la Universidad Nacional de Misiones y formó parte del equipo docente del Proyecto PICT de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (2020). Cuenta con publicaciones en revistas especializadas de Argentina, Brasil y Chile sobre educación rural, género, extensión y salud en comunidades agrícolas. Actualmente ejerce la Dirección Ejecutiva del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina.

Dr. Jorge Zaruma

Doctor en Estudios del Desarrollo (Universidad Autónoma de Zacatecas, 2025), con Mención Honorífica. Máster en Políticas Sociales (Universidad de Salamanca) y politólogo por la Universidad de las Américas. Becario de posgrado de CONAHCYT. Investiga economía política del conocimiento, políticas y sistemas educativos y estudios de ciencia, tecnología y sociedad, con énfasis en educación superior latinoamericana, universidad periférica, ideología, desigualdad y pobreza. Desde 2019 se desempeña como profesor en la Universidad Técnica Particular de Loja y ha dictado cursos de metodologías mixtas en la Universidad Nacional de Loja. Ha colaborado en investigación aplicada, consultorías de pertinencia universitaria y actualmente trabaja en la Subsecretaría de Educación Media Superior de México, participando en el diseño y evaluación del nuevo modelo de asignación a la EMS.

morena
La esperanza de México

cdmx
morena